3
colección biblos

Mariano García Ruipérez
M^{te} del Carmen Fernández Hidalgo

Los Archivos Municipales en España durante el Antiguo Régimen

Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha

Digitized by Google

LOS ARCHIVOS MUNICIPALES EN ESPAÑA DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN

**Regulación, conservación, organización
y difusión**

LOS ARCHIVOS MUNICIPALES EN ESPAÑA DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN

**Regulación, conservación, organización
y difusión**

**Mariano García Ruipérez
María del Carmen Fernández Hidalgo**

**Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha**

Cuenca, 1999

GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano

Los archivos municipales en España durante el Antiguo Régimen : Regulación, conservación, organización y difusión / Mariano García Ruipérez, María del Carmen Fernández Hidalgo. — Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999

304 p. ; 22cm. — (Biblos ; 3)

ISBN 84-89958-98-X

1. Archivos municipales - España - Historia 2. España - Historia - S.XVI-XIX I. García Ruipérez, Mariano II. Fernández Hidalgo, María del Carmen III. Universidad de Castilla-La Mancha, ed. IV. Título V. Serie

930.253:352(460)

Esta edición es propiedad de EDICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA y no se puede copiar, fotocopiar, reproducir, traducir o convertir a cualquier medio impreso, electrónico o legible por máquina, enteramente o en parte, sin su previo consentimiento.

© de los textos: sus autores.

© de la edición: Universidad de Castilla-La Mancha.

EDITA: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Director: Pedro C. Cerrillo.

Colección: BIBLOS nº 3

1ª edición: diciembre de 1999. Tirada: 500 ejemplares.

Diseño de la colección y de la cubierta: C.I.D.I. (Universidad de Castilla-La Mancha)

Fotocomposición, Impresión, Encuadernación:

Gráficas Cuenca, S.A., Avda. Juan Carlos I, 34 - 16004

I.S.B.N. 84-89958-98-X

D.L.: CU - 348- 1999

Impreso en España - Printed in Spain

ÍNDICE

	Pág.
PRESENTACIÓN.....	11
INTRODUCCIÓN.....	15
1.- LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. ORIGEN Y FUNCIONES.....	19
1.- La creación de los archivos municipales.....	19
2.- Fines y funciones de los archivos municipales.....	20
3.- El patrimonio documental municipal.....	25
2.- LA REGULACIÓN DE LOS ARCHIVOS MUNICIPALES.....	35
1.- Legislación general.....	35
2.- Disposiciones específicas.....	38
2.1.- Provisiones y órdenes reales.....	38
2.2.- Ordenanzas y acuerdos municipales.....	43
A) Corona de Castilla.....	45
B) Corona de Aragón.....	52
2.3.- Los reglamentos de archivo.....	57
2.4.- Otras normas.....	59
3.- LOS RESPONSABLES DE LOS ARCHIVOS MUNICIPALES.....	63
1.- Las autoridades locales.....	67
1.1.- El corregidor.....	67
1.2.- Los alcaldes o justicias.....	69
1.3.- Los regidores archivistas.....	70
A) Número y denominación.....	73
B) Nombramiento.....	74
C) Duración en el cargo.....	74
D) Cualidades.....	74
E) Juramento.....	75
F) Funciones.....	75
G) Salario.....	76

1.4.- Los jurados.....	77
1.5.- Los procuradores.....	78
2.- Los oficiales municipales.....	81
2.1.- Los escribanos.....	81
A) Conservación documental.....	81
B) Organización y descripción.....	85
C) Consulta y acceso.....	88
2.2.- Los archiveros.....	90
A) Número y denominación.....	93
B) Nombramiento.....	94
C) Duración en el oficio.....	95
D) Cualidades.....	95
E) Juramento.....	97
F) Funciones.....	97
G) Salario y horario.....	98
2.3.- Los mayordomos y contadores.....	101
4.- LA CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL.....	103
1.- La instalación.....	105
1.1.- Los depósitos documentales y su dispersión.....	105
1.2.- La ubicación del archivo del común.....	108
A) Casas particulares.....	109
B) Iglesias parroquiales.....	110
C) Conventos.....	113
D) Casas consistoriales.....	114
E) Otros edificios.....	118
1.3.- Los continentes de la documentación.....	119
A) Arca.....	121
B) Armario.....	125
C) Habitación-archivo.....	131
1.4.- La agrupación física de los documentos.....	135
2.- Causas del deterioro de la documentación.....	139
2.1.- El hombre.....	139
2.2.- Los animales.....	149
2.3.- El clima.....	150
3.- La preservación de los documentos.....	151
3.1.- La encuadernación.....	151
3.2.- Las copias o traslados.....	158
3.3.- Los libros copiadores.....	163

**5.- LA ORGANIZACIÓN Y LA DESCRIPCIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL.....175**

- 1.- El «arreglo y ordenación» de la documentación.....180
 - 1.1.- El ingreso de los documentos: las remisiones.....180
 - 1.2.- La clasificación y ordenación: las agrupaciones documentales.....185
- 2.- La descripción: los inventarios y sus características.....212
- 3.- El control.....239
 - 3.1.- Las actas de entrega.....240
 - 3.2.- Las visitas.....242
 - 3.3.- Las memorias.....244

**6.- LA CONSULTA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
MUNICIPAL.....247**

- 1.- Los usuarios de los documentos.....249
 - 1.1.- Las autoridades municipales y los oficiales concejiles.....249
 - 1.2.- Otras instituciones.....251
 - 1.3.- Los particulares.....252
- 2.- Las aperturas del archivo.....258
 - 2.1.- La autorización previa.....258
 - 2.2.- La entrega de los documentos.....262
 - A) Reunión de los custodios de las llaves.....263
 - B) Recepción de los documentos: los recibos.....264
 - C) Registro de las salidas: los libros de conocimientos.....268
- 3.- El descontrol: la recuperación de los documentos.....274
 - 3.1.- La custodia de las llaves y sus irregularidades.....275
 - 3.2.- La penalización de las aperturas fraudulentas.....278
 - 3.3.- La recuperación de los documentos.....280

BIBLIOGRAFÍA.....285

FUENTES.....297

PRESENTACIÓN

Los ayuntamientos españoles han conservado un patrimonio documental de excepcional valor por su cantidad, por su amplitud cronológica y por su variedad temática. Los archivos municipales son los archivos públicos más numerosos y los que están teniendo un desarrollo más significativo en las últimas décadas, merced al marco político-administrativo establecido tras la aprobación de la Constitución de 1978.

El incremento del número de archiveros en las plantillas municipales, las mejoras introducidas en muchos de sus archivos tanto en su instalación (nuevos edificios) como en la conservación documental o el auge de las actividades relacionadas con su función cultural son algunos indicadores de esta nueva situación. Las autoridades locales han contribuido a su realización apoyando presupuestariamente estas iniciativas. Los ciudadanos se acercan cada vez en mayor número a unos centros que consideran muy próximos y en donde pueden resolver algunos de sus problemas o encontrar respuestas a temas de su interés.

El patrimonio documental municipal se ha venido formando desde la creación de los ayuntamientos, en su mayoría en la Edad Media. Hasta hace unos años no existía en el panorama bibliográfico español ninguna obra de conjunto que se detuviera en la historia de estos centros. El esfuerzo realizado por Julio Cerdá Díaz con su estudio sobre *Los archivos municipales en la España contemporánea* no tiene parangón. El archivero de Arganda del Rey y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares nos ha sorprendido a todos con una obra fundamental para el conocimiento de los archivos municipales en los siglos XIX y XX. Su rigor y exhaustividad y su amena redacción han convertido a este libro editado en 1997 en todo un clásico de la Archivística española.

No existe para el amplio período que va desde la Edad Media hasta fines de la Edad Moderna un trabajo similar. Y tampoco ha sido nuestra pretensión con esta publicación llenar ese vacío, dado que su contenido es bien distinto aunque se encuentren similitudes en el título. Con la obra *Los archivos municipales en España durante el Antiguo Régimen* hemos querido abarcar la evolución de los criterios de conservación, organización, descripción y difusión seguidos en estos archivos durante esos siglos. Hemos intentado completar la normativa que ha regulado estos centros y discernir las responsabilidades documentales que asumieron las autoridades locales y los oficiales concejiles.

Este objetivo no habría podido cumplirse, si es que lo hemos logrado, sin el trabajo de todos y cada uno de los archiveros, historiadores y diplomatas que aparecen recogidos en la bibliografía consultada y en las fuentes utilizadas. Es por lo tanto una obra colectiva en el más amplio sentido del término, y no sólo porque sean dos sus autores directos. Las continuas referencias bibliográficas que aparecen en el texto intentan saldar la deuda que hemos contraído con todos ellos. Si esta obra tiene algún acierto se debe a sus aportaciones, por el contrario los errores son achacables directamente a sus autores. Entre las primeras nos han sido de más utilidad las realizadas por C. Cayetano Martín, M. Fernández Gómez, O. Gallego Domínguez y M. Vaquerizo Gil, dentro de la Corona de Castilla, y por R. Alberch i Fugueras, M. Casademont i Donay, J. Massip i Fonollosa y R. Planes i Albets para el ámbito de Cataluña.

Todos y cada uno de los miembros del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid y los integrantes de la Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local, directa o indirectamente, nos han ayudado a culminar esta tarea. Resaltar las ayudas recibidas no es fácil. Nuestra amistad viene de lejos, pero por encima de las deudas intelectuales contraídas no podemos obviar el cariño que sentimos hacia C. Cayetano Martín, S. Izquierdo González y otros compañeros de aquel Grupo, tan decisivo en el desarrollo de los archivos municipales en estas dos últimas décadas.

Nuestra formación archivística está basada en el aprendizaje teórico y práctico recibido de A. Heredia Herrera, V. Cortés Alonso y R. García Aser, a quienes nunca agradeceremos suficientemente sus consejos, su amistad y su docencia.

Este libro está también dedicado especialmente a algunas personas. En Sevilla no sólo está la Giralda, también allí trabaja Marcos Fernández Gómez. El tamaño de Arganda del Rey, pequeño municipio madrileño, es inversamente proporcional a la categoría de su archivero Julio Cerdá Díaz. Getafe tiene en su plantilla a una de las archiveras, Isabel Seco Campos, con la formación más completa y con las ideas más claras de cuantos trabajamos en este campo en España. Ramón Martín Suquía, del Centro del Patrimonio Documental de Euzkadi, y Jesús Cuadros Callava, archivero municipal de Priego, han confiado repetidamente en nosotros y su amistad es tan antigua como nuestra vinculación con los archivos. Joan Boadas i Raset nos ha demostrado siempre que la cultura es la mejor herramienta para unir a las personas y a los pueblos. El arquitecto y humanista Ignacio Mendaro Corsini, autor del proyecto del nuevo archivo municipal de Toledo, ha demostrado que la buena arquitectura puede convivir con la funcionalidad y con la belleza.

Por último, manifestar nuestra admiración por Juan Carlos Galende Díaz, profesor de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad Complutense, con el que compartimos estudios universitarios y vinculaciones familiares. Aún así esta obra tiene dos dedicatorias muy especiales.

*A José Ramón Rodríguez Clavel,
por todo lo que él sabe.*

*A nuestro querido sobrino
Alberto Galende Fernández,
y a su abuelo Antonio,
a quien no llegó a conocer.*

INTRODUCCIÓN

La historia de los archivos en España es una parcela olvidada de la Archivística. Prueba de ello es la escasa atención que recibe en los manuales y estudios específicos [Burón Castro, 1993, p. 7]. Los trabajos realizados hasta ahora se han centrado casi exclusivamente en la evolución de los archivos dependientes de la Administración Central, y dentro de éstos en aquellos que conservaban y conservan la documentación que carecía de vigencia administrativa. Si nos detenemos en algunas publicaciones que han prestado atención a este tema nos daremos cuenta de esta realidad.

Hace tiempo E. Sarrablo Agualeles se basaba en el Archivo de la Corona de Aragón para analizar la situación de los archiveros españoles hasta mediados del siglo XIX [Sarrablo Agualeles, 1958, p. 19].

El papel ejercido por ese gran archivo para los archiveros del ámbito aragonés, se suple en el castellano con el estudio del archivo de Simancas, y del de Indias. M. Romero Tallafigo al referirse a la historia de los archivos en el Antiguo Régimen destaca la evolución del archivo vallisoletano creado por Carlos V, siguiendo fundamentalmente a José Luis Rodríguez de Diego [Romero Tallafigo, 1994, p. 49-50]. Apenas unas escuetas líneas le bastan para mencionar la existencia de archivos en los municipios. Poco más podemos encontrar en el trabajo de C. Mendo Carmona que salda la contribución de estos archivos mencionando la creación del de la ciudad de Palma de Mallorca, convertido con el paso del tiempo en Archivo del Reino de Mallorca [Mendo Carmona, 1995, p. 26].

Si examinamos la bibliografía aportada por ambos autores comprendemos claramente que la historia de los archivos municipales pase casi desapercibida en sus estudios, lo que debe llamarnos la atención teniendo en cuenta que se incluyen en obras publicadas muy recientemente que pretenden ser manuales de Archivística.

Es evidente que todavía existe una visión incompleta del devenir de los archivos públicos españoles, dado que se ha obviado analizar las vicisitudes por las que atravesaron los más numerosos de ellos. Nos referimos como es lógico a los municipales. La reciente publicación de una *Historia de los Ar-*

chivos y de la Archivística en España no ha hecho sino acrecentar aún más esta imagen de desconocimiento, a veces intencionado.

Como señala R. Planes i Albets llegar a profundizar en la historia de un archivo es un requisito imprescindible a la hora de afrontar su clasificación y descripción [Planes i Albets, 1992, p. 12]. También lo es el estudio de la organización y funciones de la institución productora de esa documentación. Los historiadores vienen aportando en las últimas décadas numerosos trabajos sobre la historia de los municipios españoles, en los que no faltan visiones de conjunto. Pero no ocurre lo mismo con los archivos municipales. Tan sólo es reseñable en este sentido la labor de C. Cayetano, aunque en lo publicado hasta ahora como ella misma afirma no haya abordado la reunión de todas las noticias sobre creación y desarrollo de estos archivos [Cayetano Martín, 1989, p. 4].

Mientras tanto debemos reseñar que todos aquellos que han intentado una labor de síntesis se han limitado a repetir hasta la saciedad la normativa general relacionada con los archivos municipales recogida en la *Novísima Recopilación*, sin ni siquiera indagar en la búsqueda de otras disposiciones que completaran esa visión estrictamente jurídica.

En parte, esta situación se debe a que la información que permitiría realizar esa síntesis, si la elaboramos basándonos solamente en el material impreso, se encuentra dispersa en un número considerable de publicaciones, no siempre accesibles, en algunas introducciones de instrumentos descriptivos, en revistas locales... [Bautier, 1968, p. 140].

Es cierto que existen obras de referencia obligada para completar las búsquedas bibliográficas sobre archivos municipales, pues a los clásicos trabajos de A. Millares Carlo aparecidos en 1952 y 1957, debemos unir el de F. Fernández Izquierdo de 1985, el *Ensayo de bibliografía....* de C. Cayetano publicado en 1990 y la bibliografía monográfica sobre archivos municipales catalanes de R. Planes Albets aparecida en sus trabajos de 1992 y 1993. En 1999 se ha publicado la obra de J. Cerdá Díaz, *Archivos Municipales españoles Guía Bibliográfica*, que por su exhaustividad y rigor completa el panorama bibliográfico sobre archivos municipales. Del examen de estas publicaciones podemos deducir que son relativamente escasos los estudios sobre la historia de archivos concretos, y además reflejan un tratamiento desigual, al ser obra de archiveros, historiadores y diplomatas.

Al trazar la biografía del concepto de archivo, C. Pescador del Hoyo llegaba a afirmar que el período que abarca la Edad Moderna y buena parte del siglo XIX es la época peor, en la que faltan criterios de conservación y de organización [Pescador del Hoyo, 1955, p. 15]. Mientras que años antes A. Sierra Corella destacaba que el siglo XIX era fatal para la existencia de los tesoros escritos [Sierra Corella, 1931, p. 8].

Los archivos municipales españoles en esos largos siglos fueron asentando y desarrollando los principios que regulan hoy su organización, descripción y conservación. Fue una etapa fructífera sobre la que descansa nuestro quehacer archivístico actual, no exenta de períodos convulsos y de actuaciones desacertadas. A los que tampoco ha sido ajeno el siglo XX. Con R. H. Bautier estamos convencidos de que en el período comprendido *«entre le milieu du XVIe siècle et le milieu du XIXe siècle s'est élaborée obscurément une large partie de nos principes, de nos méthodes, de nos pratiques»* [Bautier, 1968, p. 149; Casademont i Donay, 1991, p. 89], aunque en el conjunto de los reinos hispánicos sus raíces se hundan en los últimos siglos de la Edad Media.

1. LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. ORIGEN Y FUNCIONES

1. La creación de los archivos municipales

Desde que existen sociedades organizadas existen los archivos [Gallego Domínguez, 1981, p. 177]. Por lo tanto la creación y desarrollo de los archivos municipales va a ir ligada íntimamente a la aparición de los concejos, en su mayoría en la Edad Media, como consecuencia del proceso de repoblación y reconquista iniciado tras la invasión musulmana. Los archivos nacerán con sus concejos y, en un principio, se irán formando por la acumulación de documentos recibidos de las autoridades laicas y eclesiásticas a las que están sometidos o de las que dependen.

La existencia de una incipiente organización municipal explicará la necesidad de conservar los testimonios jurídicos que fundamentan su origen. La organización del archivo municipal de Huesca se perfila a partir de finales del siglo XII, época en la que se articula la organización municipal oscense [Balaguer, 1986, p. 71]. Lo mismo ocurre en Gerona. El archivo de Igualada *«té el seu inici al segle XIV, moment en què la vila compta ja amb una organització municipal»* [Llacuna i Ortinez, 1982, p. 61]. De Barcelona cuyo archivo *«va néixer, com el municipi barceloni, a mitjan segle XIII»* [Riera y Rovira, 1989, p. 12]. O de Orense cuyo archivo *«es tan antiguo como su concejo»* [Gallego Domínguez, 1985, p. 186].

Las autoridades concejiles de Sevilla se persuadieron de la necesidad de custodiar y conservar los testimonios escritos que fundamentaban los títulos de propiedad de la ciudad. En esta función específica se ha visto el origen de su archivo municipal [Fernández Gómez, 1995 (c), p. 62].

La creación de los archivos municipales españoles coincide con la formación y consolidación de los concejos medievales, en un amplio período que iría del siglo IX al XIII [Castillo Gómez, 1992, p. 103]. Nacieron *«espontáneamente»* cuando las autoridades locales vieron la necesidad de preservar los documentos que justificaban los derechos y dominios de sus municipios [Alberch i Fugueras, 1994, p. 521; Pastor Abaigar, 1993, p. 195]. En ese proceso jugaron un papel nada desdeñable, pero de difícil constatación documen-

tal, las instituciones eclesiásticas asentadas en ellos, fundamentalmente las órdenes religiosas (conventos y monasterios), que contaban con una cierta tradición archivística, que se remonta en algunos casos a la Alta Edad Media, como los estudios de T. Burón están dando a conocer. Esa influencia sí fue reconocida en el origen y desarrollo del archivo municipal de Vich [Serra i Campdelacreu, 1879, p. 16].

La presencia de oficiales concejiles que bajo distintos nombres (escribanos, notarios, fieles de fechos) tuvieran la obligación de la redacción y custodia de la documentación municipal, unido al interés ya señalado de las autoridades locales, y a las prontas disposiciones de los monarcas, incidirán en la salvaguardia de esos primeros documentos (cartas puebla, fueros, privilegios, códigos de los repartimientos de tierra entre los nuevos pobladores), recibidos conforme van surgiendo los municipios, y que los sucesivos reyes tendrán que confirmar, incrementándose progresivamente la masa documental fundacional.

La periodización de la historia de los archivos realizada por R.H. Bautier, que ha sido seguida por algunos archiveros españoles, parte de distinguir la época de los archivos de palacio, que se corresponde con la antigüedad, la de los tesoros de escrituras («*trésors des chartes*») que iría de los siglos XII al XVI, la que identifica a los archivos como arsenal de la autoridad (siglos XVI al XIX), y por último la que abarca desde principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, en la que los archivos son laboratorio de la historia [Bautier, 1968, p. 140]. Esta clasificación tal vez válida para los grandes archivos históricos nacionales puede no serlo tanto para los archivos municipales en su conjunto, al menos para los españoles. Matizarlo implica un conocimiento mayor de los fines y funciones de estos archivos en el Antiguo Régimen.

2. Fines y funciones de los archivos municipales

La conservación de los documentos municipales desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVIII ha pretendido ser justificada basándose casi exclusivamente en razones jurídicas. La existencia de los archivos procedía de «*la necesidad de defender los privilegios concedidos a la villa por los reyes, el mantener a buen recaudo las decisiones de la Justicia sobre bienes patrimoniales del municipio o los derechos provenientes de obligaciones contractuales y otras determinaciones similares... Era una cuestión práctica: la probanza jurídica*» [Pastor Abaigar, 1993, p. 195]. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII «*l'arxiu ja no definirà solament un espai físic destinat a la conservació dels documents per a usos únicament jurídics*» [Casademont i Donay, 1991, p. 58] sino que los documentos se utilizarán como testimonios para elaborar la historia.

Los archivos municipales en el Antiguo Régimen han sido descritos como «*arsenal de armas jurídicas necesarias para reivindicar un derecho o defender unos intereses*» [Gallego Domínguez, 1981, p. 177], o como «*auxiliar del gobierno municipal conservando los títulos jurídicos sobre los que se fundamentaba la ciudad*» [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 10]. Como tal sólo cabe entender, en sentido estricto, el archivo de privilegios constituido en la Edad Media, y no la totalidad de la documentación conservada en un período tan amplio como el que nos ocupa.

Es cierto que los documentos conservados de la Plena y Baja Edad Media son en su casi totalidad testimonios escritos que permitían asegurar jurídicamente los privilegios, derechos, propiedades y términos territoriales del municipio, constituyendo en muchos casos lo que se denomina como archivo matriz, secreto o de privilegios [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 11-12]. Y que la necesidad de asegurar sus derechos, privilegios y términos fue el motivo que impulsó a los pueblos, desde su fundación, a conservar los documentos recibidos de las autoridades civiles y religiosas [Cayetano Martín, 1989, p. 6]. Pero es muy posible que ni siquiera en el archivo de privilegios se conservara exclusivamente documentación con valor jurídico. Y esto es aún más claro, como luego veremos, en los archivos de los escribanos municipales y de los contadores o mayordomos, que en algunos casos se remontan a los últimos siglos de la Edad Media.

Existían, pues, otras motivaciones que incidían en que las autoridades locales desearan conservar determinados documentos, y no sólo el ser prueba jurídica irrefutable de una serie de donaciones de bienes y derechos. En Sevilla la constitución del archivo de privilegios estuvo condicionada también por la necesidad de conservar los documentos que eran «*testimonio solemne de la vinculación de los reyes con la ciudad*» [Fernández Gómez, 1995 (c), p. 62]. Es decir, cabría referirnos también a razones de prestigio, de preeminencia, que podían solapar o no un posible aprovechamiento jurídico. Así lo ve también R. Alberch cuando afirma que la necesidad de conservar esos primeros documentos se debe a su condición de garantía de derechos, generalmente de propiedad, y como instrumentos de prueba y ostentación de la autoridad [Alberch i Fugueras, 1994, p. 521]. La existencia de libros de ceremonial en diversas ciudades como Valencia o Toledo, redactados por regidores o escribanos, inciden en esa línea.

En la *Política para Corregidores...* de J. Castillo de Bovadilla (Tomo II, 1750, p. 110), cuya primera edición apareció en 1597, se encarga al corregidor que vele por la conservación de las escrituras y privilegios del pueblo que «*hazen fé y prueba en muchas cosas*». Los documentos son por lo tanto también testimonio de hechos, de actuaciones y de decisiones de las autoridades locales en ámbitos tan variados como lo son sus competencias. Y además

reflejan la situación y condición de los moradores de la ciudad a través de padrones de población, repartimientos fiscales, expedientes de levass, etc. En esta línea se manifiesta J. Cerdá al expresar que los documentos son conservados en los archivos municipales durante el Antiguo Régimen por su valor como *«testimonio de las actuaciones y derechos de los ayuntamientos»* [Cerdá Díaz, 1997, p. 17].

Difícilmente podemos entender que la validez jurídica de una libranza cualquiera, con sus justificantes, presentada por el mayordomo en su cuenta anual, pudiera permanecer hasta bien entrado el siglo XIX. Un expediente de concesión de carta de vecindad afectaba a una única persona, y, sin embargo, también se incorporaba al archivo. Las cartas de creencia remitidas por los monarcas poseían en origen un valor exclusivamente informativo, dado que servían para presentar a un emisario encargado de dar cuenta de su parecer en un hecho concreto. Estas cartas también pasaban a formar parte del patrimonio documental de la ciudad. Unos y otros son ejemplos de documentos, existentes ya en el siglo XV, que podemos encontrar hoy en los más ricos de los archivos municipales españoles, con una validez jurídica, muy limitada en el tiempo, que apenas sobrepasaría los umbrales de su recepción o redacción. Por lo tanto, muy pronto, sin duda antes de finalizar la Edad Media, los archivos municipales de las principales ciudades empezaron a conservar documentos por su valor informativo, en la medida en la que en ellos se reflejaban los antecedentes de la gestión municipal y cuyo conocimiento y difusión podía afectar al conjunto de los vecinos, tuvieran o no responsabilidades en el gobierno y administración local.

Los documentos se guardaban por lo tanto, también, como *«ejemplos»* en los que apoyarse para dirimir una cuestión [Pescador del Hoyo, 1955, p. 10], o si queremos como *«memoria»*, en expresión de M. Duchein, recogida con bastante anterioridad en algunas ordenanzas municipales [Señorío de AGUILAR, 1519]. Y esos documentos serían, sin duda alguna, los más numerosos, aunque los privilegios, con una validez jurídica contrastada, pero siempre pendiente de la confirmación por el nuevo monarca, constituían *«el alma de la ciudad»* [Batlle i Prats, 1951, p. 181].

Durante los siglos XVI al XVIII el volumen de la documentación conservada creció notablemente, convirtiéndose los archivos en *«arsenales de información fácilmente instrumentalizable. Como tales los entenderá el poder, y como tales los reclamarán los ciudadanos, las élites cultivadas y eruditas»* [Aguinagalde, 1988, p. 86]. Esta apreciación es aplicable perfectamente a los archivos municipales españoles. De ahí que más que arsenales de la autoridad haya que entenderlos como arsenales de información, utilizados fundamentalmente por las clases dirigentes, tuvieran o no responsabilidades gubernativas y administrativas en los ayuntamientos. Un determinado nivel eco-

nómico y cultural señalaba el perfil del posible usuario de esa documentación. Y esta situación, patente ya en la Edad Media no ha cambiado sustancialmente en la actualidad.

No olvidemos que el archivo municipal era uno de los símbolos de la ciudad, al igual que el pendón y el rollo [Bayle, 1950, p. 25]. Los documentos más solemnes eran valorados como un verdadero tesoro (término muy utilizado en Francia) o joya (como se conocen en Cataluña) [Alberch i Fugueras, 1994, p. 526]. Y a principios del siglo XVIII se llega a afirmar que el archivo de Villa es la «*primera alhaja de la grandeza de Madrid*» [Cayetano Martín, 1986, p. 553] o la «*alhaja más preciosa*» de su ayuntamiento [Gómez Iglesias, 1974, p. 34]. En 1730 se definía el archivo municipal de Zaragoza como «*la oficina de quien pende la honra y hacienda*» de esa ciudad [González Miranda, 1981, p. 82].

Si nos detenemos en las fuentes documentales podremos comprender mejor alguno de nuestros comentarios. La utilización de la documentación para justificar derechos adquiridos generalmente ante los tribunales fue una constante durante todo el Antiguo Régimen. Su valor probatorio quedará recogido en los numerosos pleitos que mantendrán los municipios en ese amplio período. Casi siempre que se abre el archivo es para sacar o hacer traslados de los documentos con ese fin. Baste como ejemplo lo publicado para el caso de Orense [Gallego Domínguez, 1981, p. 187], de Sevilla [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 14] o de Toledo [Sierra Corella, 1931, p. 14]. Los procesos organizativos que se sucedieron en muchos archivos fueron consecuencia de la necesidad de aportar pruebas para defender derechos. Así se manifestaba en 1782, en Gerona, ya que «*l'Ajuntament ha estat a punt de perdre diversos plets a causa de no trobar a l'arxiu els papers que avalaven els seus drets*» [Alberch i Fugueras, 1987, p. 231].

Los gobernantes locales fueron conscientes de «*quantas cosas tienen perdidas por falta de Escrituras*» [VALLADOLID, 1549]. De los archivos dependía «*la conservación del patrimonio y preeminencias*» de la ciudad [HUESCA, 1551; JACA, 1694]. El ayuntamiento de Madrid reconocía en 1613 que la mala organización de su archivo provocaba la pérdida por la villa de «*muchas preeminencias y privilegios*» [Gómez Iglesias, 1986, p. 552]. Y que un archivo organizado garantizaba que la ciudad pudiera mantener «*su auctoridad y jurisdiziones*», como se expresaba en Burgos en 1698 [Díez Sanz, 1984, p. 48]. La salida de documentos del archivo de Toledo se realizaba para «*sus pleytos y negocios, y para otras cosas urgentes y necessarias al bien de la república*» [TOLEDO, 1545].

Esas referencias a la ciudad implican al conjunto de ciudadanos, es decir potencialmente a todas las personas que residen en los municipios. Los privilegios y escrituras conservados en el archivo de Ciudad Real debían ser-

vir, al menos así se expresaba en 1595, para el *«aprovechamiento dellos en el beneficio común de esta ciudad»*, no sólo en defensa de su hacienda y propios sino también en la de las *«libertades y franquezas»* de sus vecinos y moradores [Bernabeu Novalbos, 1952, p. 9-10]. Los inventarios anuales de documentación, que debían realizar los alcaldes y regidores de Itero de la Vega, tenían como objetivo según sus ordenanzas que ellos y los *«vezinos de la dicha villa sepan y entiendan los privilegios y escripturas que a y tiene e tuviera la dicha villa»* [ITERO DE LA VEGA, 1573]. La organización del archivo de Castellón en 1761 fue justificada ante el Consejo Real porque los gestores municipales creían que los castellonenses debían conocer *«las franquezas y privilegios que su población había recibido de los monarcas»* [Roca Travar, 1951, p. 211].

Por ello no nos debe extrañar que en algunas ordenanzas municipales se contemple la posibilidad de permitir la salida de documentación del archivo *«cuando algún vecino necesitare para su defensa contra el forastero alguna escriptura»* [ENTERRIAS, VADA Y DOBARGANES, 1744]. Y que se encargara a los ayuntamientos asturianos que cuidaran de la conservación en sus archivos de todos los documentos que *«en qualquiera forma tocaren, o fueren de interés alguno del conçejo»* [Principado de ASTURIAS, 1659].

Los responsables municipales debían examinar la documentación existente antes de acordar ninguna medida. Y aunque generalmente esa búsqueda de antecedentes solía recaer en el escribano o en la persona que realizaba sus funciones, no faltan recomendaciones en las que se les anima a que lo hagan directamente. En San Sebastián, con el nombramiento anual de un archivero, de entre los matriculados, se pretendía conseguir por ese medio que *«todos estén instruidos de lo que contiene el Archivo, y en los Ayuntamientos propongan, y decidan con perfecto conocimiento los asuntos»* [SAN SEBASTIAN, 1758]. Lo mismo podemos decir del Plan aprobado para mejorar la organización de la escribanía de Tolosa, que afectaba fundamentalmente a su documentación. Con su aplicación cualquier capitular y el escribano hallarían *«las luces y noticias convenientes de los tiempos remotos, y no tendrán necesidad los representantes de la villa de que les suministren los antecedentes para dictar sus determinaciones con el acierto, conocimiento y justificaciones que desean»* [TOLOSA, 1819].

Los archivos municipales en el Antiguo Régimen son fuente de información imprescindible para el gobierno y administración de los concejos y ayuntamientos. Constituyen una herramienta fundamental al servicio de sus oligarquías en la medida en que reflejan sus decisiones y el cumplimiento de las leyes de la Monarquía. La conservación de la documentación se convertía así en una necesidad al ser el elemento fundamental utilizado, junto con las declaraciones de los vecinos, si se producía una pesquisa o un juicio de resi-

dencia. Salvado este trance, no faltarían razones de prestigio, de honor, para garantizar su custodia en el archivo, y legitimar así sus actuaciones ante las generaciones venideras. Es obvio que no toda la documentación ingresaba en los depósitos definitivos, pero también lo es que en las publicaciones analizadas no se recogen referencias a acuerdos sobre eliminación de documentos, salvo casos muy concretos. La distinta valoración de unos y otros incidiría en las medidas a adoptar en su salvaguardia, y, tal vez, la negligencia en algunos casos haría el resto.

Por lo que ahora cabría preguntarnos qué documentación se guardaba en los archivos municipales y si los criterios evolucionaron a lo largo de esos siglos.

3. El patrimonio documental municipal

Lo primero que no debemos olvidar es «*la permanente falta de definición de lo que hoy denominamos Patrimonio Documental del municipio*» [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 10], señalado así para la ciudad de Sevilla pero aplicable también a los demás municipios españoles. Esto, sin duda, habrá provocado la pérdida de documentación durante el Antiguo Régimen. El archivo municipal, tal y como hoy lo entendemos, surge en el siglo XIX como consecuencia de la unión de los fondos documentales que conservaba el escribano del concejo, de los procedentes de la contaduría o mayordomía, o de otros organismos de carácter económico, benéfico-asistencial y judicial, y del denominado archivo de la ciudad, claramente identificado en la época medieval con el archivo de los privilegios. En Murcia, Sevilla, Córdoba y Toledo se añade además el archivo del Cabildo de Jurados. Esta situación, válida a grosso modo para las grandes ciudades, se simplifica para los municipios más pequeños, y aún así permite explicar por qué determinada documentación que debería conservarse en los archivos locales se encuentra actualmente formando parte de los protocolos de un determinado escribano, o incluso permanece en el archivo de una familia o casa nobiliaria. Los documentos municipales generados en algunas de las islas Canarias «*anduvieron siempre confundidos con los particulares de sus señores, y sus restos aparecen hoy en manos privadas*» [Millares Carlo, 1952, p. 47].

Plantearse qué documentación debía ingresar en el archivo de la ciudad o cuál debía ser custodiada por el escribano o por cualquier otro oficial del concejo podía tener consecuencias evidentes en su conservación definitiva. Y no parece que existiera una norma clara en ello, pues cada municipio pudo adoptar criterios diferentes. No son muy abundantes los instrumentos descriptivos de la época conservados en la actualidad, y muy pocos de ellos han sido publicados. Aún así podemos afirmar que casi en su totalidad se limitan a

describir sólo la documentación que formaba el archivo de la ciudad, por lo que no suele haber referencias a los archivos de escribanía o de contaduría. Debe llamarnos la atención que en muy pocos de ellos se señala la existencia de libros de actas o de acuerdos, que es la serie documental más emblemática, por la sencilla razón de que dependían directamente del escribano. Ocurre lo mismo con los procesos judiciales, conservados con bastante frecuencia con los protocolos notariales, por poner otros ejemplos. La ausencia de documentación de control económico, muy numerosa, es todavía más llamativa.

Lo comentado explicaría que el inventario del arca del concejo de Astorga redactado en 1447 no fuera exhaustivo *«puesto que no figuran en él ciertos documentos de la época o anteriores conservados en la actualidad»* [Martín Fuertes, 1980, p. 18].

Estas reflexiones inciden además en todo el proceso archivístico (organización, descripción, conservación, acceso).

El archivo de la ciudad o del común de vecinos y moradores, como también se le denomina, con el origen ya comentado, empezó a constituirse merced a los documentos más solemnes, con un valor jurídico contrastado. En Manresa, se custodiaba en 1333 en una caja *«alguns documents principals i els privilegis de la Ciutat»* [Gasol, 1990, p. 7]. Y en Los Arcos, en un armario, estaban depositados *«los privilegios et otras cartas»* del concejo [LOS ARCOS, 1355].

A lo largo del siglo XV la tipología documental a conservar se amplía, aunque los privilegios sigan constituyendo el armazón del archivo. En algunos casos se verán incrementados con copias de otros no dirigidos a esas poblaciones, pero que podían resultarles de interés en un futuro. El consejo de Castellón así lo acordará en 1416, y en 1451 [Roca Travar, 1951, p. 208].

Referencias documentales como las recogidas para la ciudad de Vich no son muy corrientes en ese siglo. En un privilegio concedido por Alfonso IV en 1450 se establece que se conserven en su archivo *«totes les scriptures fahents e tocants a la dita Ciutat axi como son privilegis, provisions, cartes, letres e altres qualsevol scriptures e encare les comptes libres e acorts e altres coses. E no resmenys les cartes e titols de les almoynes, bants e altres qualsevol causes pies o profanes, en les quals la dita Ciutat ha administracio»* [VICH, 1450; Serra i Campdelacreu, 1879, p. 20]. El archivo de esta localidad catalana ya a mediados del siglo XV podía incluir todas las escrituras relacionadas con la ciudad, los libros de acuerdos, las cuentas, y la documentación producida por la administración de determinadas fundaciones. Los inventarios gerundenses de ese período se refieren también a los privilegios, las cartas reales y la correspondencia en general, los libros de cuentas del clavario y de otros ramos de la administración, los manuales *«negotiorum juratorum»* y los cartularios copiadores de privilegios [Batlle i Prats, 1951, p. 181; Alberch i Fugueras, 1987, p. 230].

En el arca de la villa de Madrid se conservaban en el año 1454 fundamentalmente «*pribilegios, ordenanzas, fueros y otras escripturas*» [Domingo Palacio, 1875, p. 21; Gómez Iglesias, 1974, p. 30; Cayetano Martín, 1992, p. 27]. Las ordenanzas del concejo de Valencia de Alcántara de 1489 obligan a meter en su arca «*todos los previllejos, ordenanças e provisiones e escripturas de qualquier calidad que sean*» [VALENCIA DE ALCANTARA, 1489]. Menos explícito es el acuerdo del ayuntamiento de Valladolid de 4 de septiembre de 1499. En parte de su arca debían incluirse «*los Libros de Previlejos e Cartas e Cédulas de Sus Altezas*» [Pino Rebolledo, 1991, p. 9]. El escribano mayor de Burgos debía recibir y poner en el arca «*todas las escrituras, privilegios, sentencias y cartas de qualquier calydad que sean tocantes al dicho concejo*» [BURGOS, 1497]. En Barcelona, el arca de la ciudad situado en el convento de San Francisco contenía en el siglo XV sobre todo privilegios y cartas reales, además de algunas bulas papales [Arxiu, 1995, p. 26].

Estos ejemplos, relativos al siglo XV, describen en buena medida la documentación conservada por los concejos y ayuntamientos en sus archivos del común, conocidos también con el nombre de archivo matriz, secreto o de privilegios, y que contenían, además de éstos, provisiones, reales cédulas, pragmáticas, ordenamientos, junto con sentencias, autos y ejecutorias [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 12]. Así se señala para Sevilla, pero lo mismo debía ocurrir en otras ciudades importantes. El patrimonio documental municipal estaba constituido en ese período casi exclusivamente por documentación recibida por los concejos y ayuntamientos, procedente de las cancellerías reales, cuando no de las autoridades señoriales, o de los órganos judiciales.

Pero qué ocurría con la documentación custodiada directamente por el escribano del concejo, por los arrendadores de sus propios y arbitrios, o por el mayordomo. Todo indica que era conservada por ellos directamente, y que por lo tanto no se incluía en el archivo de los privilegios, al menos en la Edad Media. A medida que vayan mejorando las condiciones de instalación de la documentación, apareciendo los armarios y las habitaciones para archivo, y la producción documental vaya creciendo en cantidad año tras año, se verá la necesidad de conservar en el archivo del común una documentación sin un claro valor jurídico, pero sí informativo. Este proceso será lento, dándose en cada municipio una evolución distinta. Pero lo señalado explica que en los protocolos notariales se conserven no ya causas o pleitos, sino también padrones e incluso libros de acuerdos, pues no en vano en muchas poblaciones la documentación en poder del escribano municipal, que a su vez solía ser escribano público o del número, no ingresará en sus archivos hasta el final del Antiguo Régimen, bien entrado el siglo XIX.

Algunas normas especificaban el lugar concreto de conservación de esta documentación que siglos más tarde quedará integrada en los archivos muni-

cipales. Los procesos criminales y los pleitos civiles seguidos ante la justicia cordobesa, por ordenanzas reales del año 1491, debían guardarse en un arca o cámara situada en la propia cárcel, sin que de allí se pudieran sacar [CÓRDOBA, 1491]. Los procesos de Tenerife que estuvieran finalizados debían conservarse en un archivo propio situado en las casas del cabildo, cerrado con cuatro llaves [TENERIFE, 1540].

Se ha dicho que *«sólo lo más valioso, lo imprescindible, se ponía por escrito»* [Cayetano Martín, 1989, p. 8]. Esto con ser cierto conviene matizarlo. Si examináramos un arancel de escribanos nos sorprenderíamos de la variedad de la tipología descrita que, sin embargo, en buena medida no logramos encontrar entre los fondos documentales municipales medievales. Por ello creemos que *«sólo lo más valioso, lo imprescindible»* se guardaba en el arca de los privilegios, permaneciendo el resto de la documentación en manos de sus productores o receptores, con desigual fortuna. La inexistencia de casas consistoriales en la Edad Media, salvo significativas excepciones, no ayudaría a preservar esta documentación mayoritariamente redactada sobre un soporte, como es el papel, mucho más frágil y alterable que el pergamino o la vitela. En este sentido no faltan peticiones de algunas poblaciones reclamando que un determinado documento redactado originalmente en papel fuera de nuevo expedido en pergamino por la cancillería real para evitar su pérdida. Un ejemplo lo representa la solicitud que realiza Toledo a Sancho IV en 1291. Y razón tenía la ciudad pues el documento en papel no se ha conservado pero si su confirmación en pergamino.

El destino de los protocolos notariales generados en la Corona de Castilla con anterioridad a 1503 por ser de sobra conocido puede ayudarnos a comprender mejor lo expuesto anteriormente.

En el siglo XVI, gracias a las medidas aprobadas por los Reyes Católicos en 1500 y 1501, y a la construcción de las casas consistoriales en muchas poblaciones, mejorarán las condiciones de conservación de la documentación municipal. No obstante el archivo del común o de los privilegios mantuvo sus características medievales. Y por lo tanto en él tenían cabida fundamentalmente *«todas las escrituras, sentencias, mercedes e privilegios»* [Señorío de AGUILAR, 1519]. El cap. XIX de las instrucciones dadas a los Corregidores en 1500 (pragmática de 9 de junio de ese año) les hacía a éstos responsables de recoger y reunir los privilegios, sentencias y disposiciones presentadas a los cabildos.

Esta normativa repercutirá de forma muy positiva en la conservación del legado documental medieval y del que entonces se estaba produciendo cuyo destino final era el archivo de los privilegios. Las ordenanzas de Tenerife recuerdan que en el arca se conserven *«todos los privilegios, provisiones, i escrituras tocantes al concejo»*, y los libros de actas [TENERIFE, 1540]. En

el armario construido para archivo en Reus, en 1557, se debían guardar «*los privilegis y actes*» [Vilaseca Borrás, 1947, p. 66]. En el arca del concejo de Armellada se pondrían según sus ordenanzas de 1548 «*todas las escrituras de conçejo*» [ARMELLADA, 1548]. Y en las de Itero de la Vega del año 1573 se especifica que el inventario anual de la documentación debía incluir «*todos los privilegios y cartas executoriales y compromisos y contratos censuales e de todas las otras escrituras que el dicho conçejo tiene o tuviere de aqui adelante*» [ITERO DE LA VEGA, 1573].

Una vez más debe llamarnos la atención que no existan referencias concretas a series de gran importancia como los libros de acuerdos, las cuentas municipales, los padrones de población, o los repartimientos con fines fiscales. La respuesta es sencilla, simplemente se conservaban fuera del archivo del común o de los privilegios. El caso de Huesca es esclarecedor. En su archivo, según las ordenaciones establecidas en 1551 por Juan de Torrellas, en nombre del emperador Carlos V, debían guardarse todos los «*actos, escripturas, y privilegios*» de la ciudad. Como los «*libros del regimiento*» eran necesarios a cualquier hora, estarían «*en el retrete, que nuevamente se ha hecho*», cerrados con su llave pero fuera del archivo. En otro armario diferente dentro del ayuntamiento se guardarían los procesos seguidos ante el Justicia, y que hasta entonces conservaban los notarios en sus casas [HUESCA, 1551]. Esta dispersión de la documentación, aún dentro de las mismas casas consistoriales, implicaba un diferente control, dado que las llaves estaban en manos de distintas personas, y así mientras que la del armario en el que se conservaban los procesos era controlada exclusivamente por un notario, hasta cuatro personas, incluida el propio Justicia, se necesitaban para abrir el «*archiu*» de la ciudad. Una situación parecida describen las ordenaciones de Daroca o Jaca.

En Alicante, una Real Orden de 13 de julio de 1571, especificaba la obligación de guardar los libros del tribunal del Gobernador, Justicia y Bayle en un local habilitado por la ciudad [Paternina Bono, 1992, p. 51], lo que ya determina una cierta responsabilidad de ésta en la conservación de la documentación judicial.

En Huesca, además se produjo el ingreso en el archivo de fondos no muy voluminosos de instituciones en las que el consejo ejercía funciones de patronazgo y ayuda, tales como la Caridad y el Hospital de San Lázaro. Al menos ya en el siglo XVI se citan documentos y cartularios en su archivo procedentes del priorato de San Pedro el Viejo [Balaguer, 1986, p. 71]. El hecho denota un temprano interés por la preservación del patrimonio documental oscense, entendiéndolo en un sentido amplio, aunque no nos permita conocer si esta documentación quedó incorporada al archivo de la ciudad, o permaneció como un fondo independiente, como sería lo más lógico.

Los inventarios realizados por esos años nunca son completos, limitándose en la mayoría de los casos a relacionar los documentos que forman parte del archivo de la ciudad o de los privilegios. Pero parece evidente que poco a poco, y con claros precedentes como hemos visto en el siglo XV (caso de Vich), las autoridades municipales entendieron la necesidad de ampliar el concepto de patrimonio documental de la ciudad, incluyendo en su archivo no sólo los documentos con un valor jurídico evidente, como ocurría con las escrituras, sentencias y privilegios.

En el siglo XVII las ordenanzas empiezan a referirse ya expresamente a la conservación en los archivos de libros y registros. Por su claridad destacamos las dadas por Santos de San Pedro al Principado de Asturias en 1659. En ellas se especifica que en el archivo ubicado en las casas consistoriales se debían guardar «*los papeles, que pertenecen a cada conçejo en común como son privilegios, executorias de pleytos, libros de acuerdos del ayuntamiento, y elecciones de officios, repartimientos de tributos y serviçios Reales, apeos de comunes y otros semejantes*»[Principado de ASTURIAS, 1659].

En las ordenaciones dadas a la ciudad y aldeas de Albarracín en 1630 se establece que en su archivo se conserven no sólo los «*actos, procesos, escrituras y libros de la Audiencia, y de las cartas de dicha Ciudad, y tierra*» sino también «*todos los procesos, y actos judiciales de la dicha Audiencia*» [ALBARRACÍN, 1630]. El archivero de la Comunidad de Daroca, según las ordenaciones reales aprobadas en 1686, debía guardar fielmente en el archivo ubicado en la villa de Cariñena todos los «*privilegios, processos, libros, registros, actos, escrituras...*» [Comunidad de DAROCA, 1686]. En el arca de la ciudad de Jaca debían conservarse según las ordenaciones reales de 1694 «*las escrituras, privilegios, libros, y otros encartamientos*» [JACA, 1694].

Las ordenanzas de la villa de Potes del año 1619 permiten incluso que sus vecinos y residentes puedan depositar su documentación personal, como las escrituras de vínculos, testamentos o cualquier otra, en el archivo de la villa, para su mejor conservación, eso sí previo pago de doscientos maravedíes [POTES, 1619]. Esto evidencia, aunque sea un ejemplo singular, el cambio que se va produciendo en el concepto de patrimonio documental a lo largo de esos siglos.

Este proceso, lento y desigual, iniciado sin obedecer a ninguna normativa general concreta, se verá acelerado en el transcurso del siglo XVIII. Las referencias a la necesidad de conservar los libros de acuerdos, los padrones o las cuentas en el archivo del común son ahora más abundantes. En un inventario de bienes de la localidad menorquina de Alayor del año 1705, se señala que en un armario había «*differentes Llibres vells de Consells, Comptas de Clavaris, de arxivers, de Privilegis Rls. et. als.*» [Hernández Sanz, 1917, p. XI]. En 1706, las autoridades municipales de Sitges acuerdan guardar algunos

«llibres del consell» en el archivo de la villa [Panyella, 1982, p. 90]. En las ordenanzas municipales de la localidad aragonesa de Fuentespalda del año 1725 se establece que en el arcón grande se guarden «los libros, las escrituras, privilegios, procesos y registros» [Serrano González, 1995, p. 201].

La misma situación se produce en otras poblaciones de la Corona de Castilla. Cuando en 1740 el ayuntamiento de San Sebastián encarga a Martín de Uribe la realización de un inventario de su archivo, le señala expresamente que incluya en él «*todos los Privilegios, Rexistros de Acuerdos, Executorias, Zédulas Reales, Sentencias, hordenanzas y demás papeles*» [Banus Aguirre, 1986, p. 130]. En Orense, en 1756, se conservaban «*los libros de acuerdos y otros papeles tocantes a la ciudad*» en un armario empotrado en la pared, mientras que las «*hijuelas, repartos, pleitos y otros papeles*» se guardaban en un «*arcotón*» [Gallego Domínguez, 1981, p. 188]. La decisión del ayuntamiento de Torrelavega de construir un nuevo archivo en 1763 fue justificada por la necesidad de custodiar en él «*los papeles, Padrones y demás instrumentos que le competen*» [Gutiérrez Alonso, 1995, p. 17]. Por último en la Orden aprobada por el Consejo Real en 1797 por la que se establecen las obligaciones del contador y archivero de Santander se especifica claramente que en el archivo de la ciudad debían ingresar todos los «*Privilegios, Cédulas y Reales Órdenes, Cuentas o documentos pertenecientes a la ciudad, su gobierno político y el de los propios*» [SANTANDER, 1797].

Parece ser que en Madrid con la apertura del archivo de villa como oficina pública ya a finales del siglo XVIII las secretarías no tuvieron empeño en conservar los «*documentos viejos*» y la misma contaduría pidió que fueran trasladados al archivo «*títulos de propiedad y papeles de crédito que en ella existían*» [Domingo Palacio, 1875, p. 48].

De esta manera el archivo municipal iba consolidándose como el depositario de toda la documentación, generalmente una vez que había perdido su vigencia administrativa, producida y recibida no sólo por las autoridades municipales, sino también por sus oficinas y oficiales. Aunque no sin antes hacer frente a duras reticencias. En Sevilla la documentación tramitada por las escribanías capitulares y los propios libros de actas eran retenidos en sus casas por los escribanos, sin que el Consejo de Castilla, en 1781, adoptara una decisión, a instancias de la ciudad, por el escollo jurídico de determinar a quién pertenecía su propiedad. Por fin en 1812 los escribanos mayores de Sevilla fueron obligados por el ayuntamiento constitucional a depositar en las casas capitulares los libros y legajos de sus oficios [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 16].

Si esto ocurría en una ciudad como Sevilla podemos imaginarnos los avatares que pudo sufrir la documentación de localidades pequeñas, siempre pendiente del celo del escribano del lugar, que solía ser el de su ayuntamiento.

La aparición de los secretarios municipales ya entrado el siglo XIX con atribuciones bien diferentes de los notarios, aunque sin perder por ello su condición de depositarios de la fe pública, eliminará de raíz ese concepto patrimonial de la documentación que tuvieron muchos escribanos de ayuntamiento durante el Antiguo Régimen.

Por lo tanto, el régimen liberal decimonónico y su normativa centralizadora logrará imponer la uniformidad entre los municipios españoles. El patrimonio documental municipal se incrementará con la integración en los archivos locales de los fondos de instituciones desaparecidas con la legislación aprobada en esos años. Los archivos de los cabildos de Jurados conservados separadamente hasta entonces pasaron a engrosar la documentación municipal. Las funciones benéfico-asistenciales que mantuvieron los ayuntamientos hasta bien entrado el siglo XIX explican la conservación actual en sus archivos de fondos procedentes de antiguas cofradías y hermandades creadas con ese fin y desaparecidas con las leyes desamortizadoras.

Es muy posible que este proceso se iniciara bastante antes. El ejemplo de Talavera de la Reina es significativo, dado que tras la expulsión de los jesuitas, la documentación de su colegio quedó incorporada como fondo independiente en el archivo municipal. Así se recoge ya en su *«Índice General de los papeles... del año 1817»* [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 99]. Pocos años después, en 1837, ingresaba en su archivo municipal la documentación de la Santa Hermandad de Talavera de la Reina, extinguida dos años antes.

El archivo de los privilegios había desembocado, en esta larga evolución que abarca todo el Antiguo Régimen, en el archivo municipal depositario del patrimonio documental de la localidad, incluyendo en él no ya toda la documentación producida o recibida por un ayuntamiento en la gestión de sus múltiples atribuciones, sino también la de otras instituciones locales desaparecidas, tuvieran o no relación con los órganos de gobierno y administración municipal.

Con el Real Decreto de 23 de julio de 1835 para el arreglo provisional de los ayuntamientos del Reino, con precedentes de escasa vigencia y dudosa aplicabilidad, se ponía fin a la variada normativa que había regulado los municipios españoles en el Antiguo Régimen. El concepto de patrimonio documental que por esos años se define va a permanecer hasta la actualidad sin cambios importantes. Se había logrado la unidad del fondo documental municipal pero a costa de una disminución notable en su control al diluirse las responsabilidades de unos y otros, muy claras y compartidas hasta entonces. El secretario municipal poco podrá hacer para organizar y describir esa documentación, aunque teóricamente sea una de sus competencias, dado que ni tiene la preparación adecuada, ni le reporta ningún beneficio económico. Sólo

aquellos ayuntamientos, muy pocos, que apuesten por un técnico especialista al frente de sus archivos lograrán organizar, conservar y difundir su patrimonio documental, al menos con los criterios imperantes en ese siglo.

2. LA REGULACIÓN DE LOS ARCHIVOS MUNICIPALES

1. Legislación general

A priori llama la atención la escasa regulación de los archivos municipales en el Antiguo Régimen, de tal forma que se ha llegado a escribir que *«es un poco desolador que la temática general de los Archivos locales, esté marcada por una casi total ausencia de normas legales de tipo general, que regulen su actuación»* [Orduña Rebollo, 1973 (a), p. 331]. Los antecedentes más lejanos se han remontado a Las Partidas, por recogerse en ellas la obligación que tenían los escribanos de concejo de llevar registro de los documentos emanados y de las cuentas [Cayetano Martín, 1989, p. 6; Castillo Gómez, 1992, p. 104].

Es posible que un examen detenido de los cuadernos de Cortes pudiera permitir localizar referencias normativas aplicables a los archivos municipales en la Edad Media, como el realizado por J.L. Rodríguez de Diego para el siglo XVI [Rodríguez de Diego, 1998 (a), p. 47-50], dado que las disposiciones aprobadas por los Reyes Católicos no son novedosas, al limitarse a regular una situación que de hecho se venía produciendo en las principales poblaciones. No obstante, su famosa pragmática de 9 de junio de 1500, conocida también como capítulo 19 de la Instrucción de Corregidores de ese año [González Alonso, 1970, p. 303-304], va a ser la norma más importante aprobada en todo el Antiguo Régimen sobre archivos municipales. Por ella, como tantas veces se ha escrito, mandan a los asistentes, gobernadores, corregidores y jueces de residencia que hagan arca para guardar los privilegios y escrituras del concejo, con tres llaves repartidas entre la justicia, uno de los regidores y el escribano. Establecen, además, los requisitos necesarios para poder sacar la documentación del arca durante tiempo limitado y dejando *«conocimiento»* de ello, encomendando al escribano el encargo de solicitar su devolución. Además promueven el inicio de lo que con el tiempo llegará a ser la biblioteca auxiliar al obligar a conservar en el arca un ejemplar de las Partidas y de las Leyes del Fuero [Cayetano Martín, 1989, p. 6].

La pragmática de 3 de septiembre de 1501 obliga a los escribanos de los concejos a llevar un registro en papel de las cartas y ordenanzas enviadas por los reyes, y otro en pergamino de todos los privilegios y sentencias que la población hubiera recibido. Con este último los Reyes Católicos están obligando a los escribanos a reproducir en un libro los principales documentos que por entonces formaban el archivo del común o de los privilegios. El cumplimiento de esta medida implicará la realización de bastantes libros copiadores de privilegios, como más adelante veremos. Muchos de ellos son el resultado de procesos organizativos y descriptivos verificados en los archivos municipales españoles.

Estas dos disposiciones han sido ampliamente comentadas y transcritas en diferentes ocasiones [Orduña Rebollo, 1973 (a), p. 332; Orduña Rebollo, 1973 (b), p. 309-310; Gallego Domínguez, 1988, p. 32; Contel, 1988, p. 75-77; Cayetano Martín, 1986, p. 550; Cayetano Martín, 1989, p. 6-7; Castillo Gómez, 1992, p. 104-105; etc.]. Por ellas se ponen las bases jurídicas que obligan a la conservación de parte de la documentación municipal y se regula su uso.

Algunos años después, en 1597, y ya reinando Felipe II, aparecía la obra de J. Castillo de Bovadilla, *Política para Corregidores y Señores de Vassallos...*, que tendrá una gran influencia en toda la Edad Moderna entre los gobernantes locales, sobre todo en el ámbito castellano. En esta publicación, además de recordar a los corregidores el cumplimiento de la pragmática de 1500, se les señala que debían tener a buen recaudo las escrituras y privilegios del pueblo, teniendo «*libro de registro dellas por su abecedario, y con distinción y curiosidad, para hallarlas fácilmente*» [Castillo de Bovadilla, 1750, Tomo II, pág. 110]. Con esta formulación se aparta de los libros copiadores de privilegios y sentencias, acercándose propiamente a la elaboración de instrumentos descriptivos. Es decir se refiere a la necesidad de describir la documentación conservada, y esto sólo se puede hacer con método si previamente se ha seguido algún criterio organizativo. La obra de J. Castillo de Bovadilla será reimpresa varias veces. Una de ellas en Amberes en el año 1750. Lo que demuestra su enorme influencia en siglos posteriores.

En la primera mitad del siglo XVI están ya asentadas las bases normativas que regularán el funcionamiento de los archivos municipales durante toda la Edad Moderna. No será necesario modificarlas. Las pragmáticas comentadas serán recogidas nuevamente en la *Recopilación de las Leyes destos Reynos hecha por mandado... del Rey don Felipe Segundo...* En su edición del año 1640 se reproducirán como Ley XV, Título VI, Libro III (la de 1500) y Ley XXV, Título XXV, Libro IV (la de 1501). Pero en esa obra se incluirán también otras disposiciones de interés.

Como Ley XXXIII, Título XXV, Libro IV se recoge una pragmática de Felipe II, dada en las Cortes de Madrid de 1593, por la que manda que de todas las escrituras, pasadas ante los escribanos reales y públicos del número de los pueblos, se ponga y deposite un traslado auténtico en los archivos de cada ciudad, villa o lugar, siempre que lo pida alguna de las partes, y así se hiciera constar en ella. Esta medida podría explicar la existencia en los archivos locales de copias o traslados de escrituras notariales sin ninguna relación aparente con el municipio. La Ley XXVIII, Título XXII, Libro II, al menos de la edición que manejamos, se refiere escuetamente a la prohibición que tenían los receptores de sacar de los archivos, incluidos los municipales, las escrituras y papeles originales para pruebas de hábitos. Así fue establecido por Felipe II en las Cortes de Madrid del año 1586. En la *Recopilación...* también se señala que por Real Cédula de 18 de mayo de 1619, Felipe III mandó que «*quando para algún pleito de hidalguía se traxeren los padrones de algún Concejo originalmente, quede un traslado auténtico en el mismo Concejo, con relación de quién llevó el original*».

En el siglo XVIII, y esta vez apoyándonos en las disposiciones aparecidas en la *Novísima Recopilación de las Leyes de España* (Madrid, 1805-1807) se van a recordar algunas de las normas anteriores. Felipe V lo hará en 20 de noviembre de 1703 de la pragmática de 1586, cuyo texto quedará recogido íntegramente en esta recopilación como Ley XV, Título X, Libro XI. Es decir se volvió a recordar que los receptores no sacaran de los archivos de las ciudades, villas y lugares, para pruebas de hábitos, los padrones y papeles originales. La facultad de poder depositar en los archivos locales copia de las escrituras notariales si así lo pedían las partes, aprobada en 1593, queda recogida como Ley IX, Título XXIII, Libro X. Felipe V también ordenó por decreto de 23 de julio de 1701 que fueran recogidos los protocolos notariales en las casas consistoriales de las ciudades más importantes de España, aunque la situación política no favoreció su cumplimiento, y esta norma no fue incluida en la *Novísima* [Cayetano Martín, 1990 (a), p. 617].

La pragmática de 9 de junio de 1500 aparece en esa recopilación como Ley II, Título II, Libro VII, y la de 3 de septiembre de 1501 como Ley III, Título II, Libro VII.

Una Orden del Consejo de 6 de junio de 1759 mandó que todos los ayuntamientos tuvieran especial cuidado en que se asentaran en sus libros todas las reales cédulas, ejecutorias y otras resoluciones. Por el capítulo 18 de la Instrucción de Corregidores de 15 de mayo de 1788 se les previno que cuidaran de que los escribanos «*tengan con buen orden y custodia los papeles de su cargo*». Y por el 67 se les recordó el cumplimiento de la Orden señalada de 1759. Estas disposiciones fueron recogidas en la *Novísima Recopilación...* como notas al texto de la pragmática de 1501.

La aplicación de esta normativa general dependerá de cada municipio, aunque creemos que el grado de cumplimiento fue alto en la Corona de Castilla, y seguramente también en la Corona de Aragón, tras los decretos de Nueva Planta. No obstante se ha señalado que el grado de efectividad de las directrices estatales borbónicas en esta materia es difícil de medir, pero todo indica que en los municipios catalanes fue escasa [Planes i Albets, 1992, p. 21].

Sea como fuere, es evidente que la tradición archivística medieval, asentada y normalizada en las disposiciones aprobadas por los Reyes Católicos, fue continuada durante la Edad Moderna en los municipios españoles, sin necesidad de nuevas normas que desarrollaran o modificaran su contenido de manera sustancial.

No ocurre lo mismo en Indias. Las poblaciones que van a ir surgiendo desde finales del siglo XV en la América española recibirán sucesivas disposiciones generales, más precisas, para regular sus archivos municipales, y que serán recogidas en la *Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias* (Madrid, 1791). Una Real Cédula del emperador Carlos V de 24 de julio de 1530, y otra del príncipe D. Felipe de 1 de septiembre de 1548, incluidas ambas como Ley XXXI, Título I del Libro II, se refieren a la obligación que tenían los cabildos y regimientos de recoger la documentación referente a sus comunidades, y realizado inventario de ella, ingresarla en un archivo o arca de tres llaves, en manos éstas del alcalde ordinario, de un regidor y del escribano del ayuntamiento. Un traslado del inventario debía estar fuera del arca para facilitar su consulta. Otra Real Cédula de 13 de febrero de 1541 obliga a las Audiencias a hacer copias signadas de todas las cédulas y provisiones reales con el fin de que fueran entregadas a las ciudades, villas y lugares que las solicitaran para guardarlas en sus archivos o copiarlas en sus libros [Bayle, 1950, p. 3-4]. Otras normas que afectan sobre todo a la tipología documental municipal fueron recogidas también en esa recopilación [Cayetano Martín, 1989, p. 9-12].

Como vemos sí se recoge en ella la necesidad que tenían las autoridades locales de controlar la documentación municipal por inventario, tal y como señalaba J. Castillo de Bovadilla, aunque esto no aparecía en las pragmáticas de 1500 y 1501, ni en las disposiciones posteriores que afectaban a los municipios españoles, al menos con un carácter general.

2. Disposiciones específicas

2.1. Provisiones y órdenes reales

Junto a la normativa general ya examinada y muy conocida, debemos referirnos a un buen número de disposiciones aprobadas por los monarcas

españoles para regular diferentes aspectos del funcionamiento de determinados archivos municipales. Responden, por lo tanto, a casos concretos sobre los que el Consejo de Castilla, y el de Aragón, o el Consejo Real ya en el siglo XVIII, tuvieron que deliberar antes de que se aprobara una determinada medida. Y por lo tanto complementan las normas publicadas en la *Nueva* o en la *Novísima Recopilación*...

La existencia de estas disposiciones específicas se remonta a la Edad Media. Del siglo XV sirvan como ejemplos las aprobadas para Vich, Madrid y Alicante. En el privilegio concedido por Alfonso IV el Sabio, en 1450, a la ciudad de Vich se determina la creación del archivo de la ciudad dentro de las casas consistoriales, se señala la documentación que debe conservarse y se le coloca bajo la responsabilidad del escribano [Serra i Campdelacreu, 1879, p. 19; VICH, 1450].

Una Real Provisión de 27 de junio de 1454 determina que se devuelva al arca de la villa de Madrid la documentación que de ella se hubiera sacado ilegalmente, sin permiso municipal, bajo severas penas [Cayetano Martín, 1992, p. 27].

Por un mandato de Juan II, fechado el 13 de abril de 1459, se ordena que las llaves del archivo de Alicante las tenga el escribano de la Sala [Paternina Bono, 1992, p. 51].

Los ejemplos para los siglos siguientes son más numerosos. Una Real Provisión de 7 de junio de 1511 recuerda a Tenerife el cumplimiento del cap. 19 de la pragmática de Corregidores [TENERIFE, 1540]. Otra de 10 de mayo de 1525 ordena a los escribanos madrileños que no saquen del archivo de villa los originales de escrituras y causas para realizar sus copias [Domingo Palacio, 1875, p. 21]. En 1526 se data otra Real Provisión por la que se manda al escribano mayor de Burgos que ingrese en el archivo todos los libros e instrumentos del concejo que tuviera en su poder, bajo multa de 10.000 maravedíes [Moratinos, 1985, p. 186-187]. Otra de 26 de julio de 1529 recuerda lo mismo a los regidores burgaleses y a varias personas afectas al municipio [Díez Sanz, 1984, p. 20]. Ese mismo año Carlos V ordenó al escribano capitular de Sevilla que utilizara un libro para asentar los acuerdos de su ayuntamiento y evitar así su pérdida [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 12]. Dos Reales Órdenes de 13 de julio de 1571 establecen que se habilite un archivo en la sala capitular del ayuntamiento de Alicante, y que se recoja por la ciudad la documentación del Tribunal del Gobernador, Justicia y Bayle, si estas instituciones carecían de archivo [Paternina Bono, 1992, p. 51]. El 20 de octubre de 1584 la corporación municipal de Valladolid obtiene autorización real para pagar durante seis años el salario de un archivero [Pino Rebolledo, 1991, p. 28]. Por Real Provisión de 29 de abril de 1589 se ordena al asistente de Sevilla que proceda al arreglo de su archivo [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 14].

Todas estas disposiciones complementan la normativa general y demuestran la preocupación de la administración central por los archivos municipales a lo largo del siglo XVI, si bien es cierto que la casi totalidad de ellas fueron aprobadas por iniciativa de las propias autoridades locales. Así ocurrió con Vallecas en el siglo XVII. Una Real Provisión de 5 de diciembre de 1674 autorizaba a su concejo a nombrar archivero, con su correspondiente salario [Mateu Llopis, 1945, p. 79-80].

El intervencionismo borbónico en el ámbito local, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, y la lejanía en el tiempo de las aún entonces vigentes pragmáticas de 1500 y 1501, junto con el incremento de la producción documental, incidirán en la aprobación de nuevas disposiciones relacionadas con algunos de los archivos municipales. Un ejemplo del reinado de Felipe V es la Real Provisión de 13 de abril de 1729 dirigida al ayuntamiento de Zaragoza por la que se regula el uso de la documentación depositada en su archivo [ZARAGOZA, 1730]. Otro aún más interesante es el Real Despacho aprobado el 24 de diciembre de 1728 para el gobierno y administración de Vallecas. En él se contempla la existencia de un «*archivista*», nombrado por el ayuntamiento, con su correspondiente salario y sirviendo este oficio por el tiempo que fuera su voluntad, y con los mismos honores en las funciones públicas que los propios concejales. Además se regulan sus funciones de manera precisa [Mateu Llopis, 1945, p. 86-87]. En 1739, Felipe V autorizó, tras petición de su ayuntamiento, el empleo de quinientas libras de los caudales públicos para el arreglo y composición del archivo municipal de Vich [Serra i Campdelacreu, 1879, p. 23-24].

El proceso que culminará con la transformación del archivo de villa de Madrid en oficina pública tuvo su inicio en el reinado de Fernando VI. Por Decreto de 26 de septiembre de 1746 había comunicado al conde de Maceda, a través del marqués de Madarias, la necesidad de poner remedio a la confusión que padecía el archivo de villa, para lo que le pedía que se informase sobre determinados extremos. A saber: su estado material, si existía o no archivero con dotación señalada, cuantas llaves tenía y en manos de quienes estaban, si tenía índices y donde se encontraban, si había libros para asentar la salida de documentos, y si los había fuera del archivo por qué razón aún no habían sido devueltos [Domingo Palacio, 1875, p. 31-32]. Desde esta disposición hasta la aprobación en 1784 del «*Reglamento que deberán observar el Archivero y Oficiales del Archivo público... de Madrid*», deberíamos detenernos en las Reales Órdenes de 6 de diciembre de 1769, de 7 de septiembre de 1773, y de 12 de mayo de 1774; y en la Real Resolución de 20 de octubre de 1777. Por esta última, entre otras cosas, era declarado el archivo de Madrid como oficina pública, y se encargaba a su archivero que diera todas las certificaciones que le pidieran de los docu-

mentos que en ese archivo se guardaban, perdiendo esta atribución los secretarios del ayuntamiento.

No menos interesante es la resolución del Consejo Real de 16 de septiembre de 1773 en la que, además de establecer los libros inventarios y de regular el procedimiento de salida de los documentos, claramente se recoge la obligación que tenían las oficinas productoras de entregar la documentación en el archivo de villa junto con una relación formal de lo enviado firmada por su responsable, a la que el archivero, una vez comprobada, debía añadir su recibí [Domingo Palacio, 1875, p. 41]. Otro auto del Consejo, esta vez de 12 de marzo de 1774 se refiere a la adquisición para el archivo de libros y manuscritos sobre la historia de Madrid, y de comunicar anualmente al Consejo una certificación de lo realizado [Domingo Palacio, 1875, p. 44]. En estas dos disposiciones vemos recogido la redacción de las actas de entrega, la constitución de la biblioteca auxiliar y la elaboración de las memorias anuales. Por Real Provisión de 6 de febrero de 1781 se completaba la resolución de 20 de octubre de 1777. Se aprobaba con ella el «*Arancel de los derechos que ha de llevar el Archivero de Madrid a todas las personas que pidieren se busquen documentos, cotejos, revisiones y certificaciones de los existentes en el Archivo*» [MADRID, 1781]. Todo este proceso culminará, como ya hemos señalado, con la aprobación del reglamento del archivo en el año 1784.

Pero no sólo el archivo de Madrid será objeto de atención por las instituciones de la administración central durante los reinados de Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. La defensa del patronato real implicó la necesidad de buscar documentación en los más variados archivos, no sólo en los eclesiásticos, a mediados del siglo XVIII. La fructífera estancia del padre Burriel en los archivos toledanos, debemos ponerla en relación con las de otros comisionados regios que visitaron, y describieron parte de la documentación conservada en los archivos de otras localidades. Una Real Orden de 6 de abril de 1753 permitió al abogado Ascensio de Morales inspeccionar los archivos de Badajoz. Ya había realizado esta misma tarea en los de Cuenca, Murcia, Cartagena, etc. En su informe describe parcialmente los fondos documentales del archivo municipal de esa ciudad extremeña [Rodríguez Amaya, 1952, p. 482-492]. Disposiciones parecidas por las que los distintos monarcas autorizaban el acceso de particulares a los archivos locales no faltan en este siglo y en los precedentes. Por ejemplo, una Real Orden de 4 de mayo de 1799 ordenó al ayuntamiento de Zaragoza que permitiera el acceso a su archivo al insigne economista Ignacio de Asso, que buscaba información para su obra *Historia de la Economía Política de Aragón* [González Miranda, 1981, p. 83].

Todavía en el reinado de Fernando VI, una Orden-Circular dictada en 1753 por José de Carvajal y Lancaster, Secretario de Estado, obligó a realizar el inventario de la documentación del archivo municipal de Cullera

[Villalmanzo Cameno y Giner Pereperez, 1978, p. 28-29]. Al parecer de septiembre de 1753 es una Real Orden «*que demana una protecció especial per a l'arxiu*» de Igualada [Llacuna i Ortinez, 1982, p. 62]. Aunque ninguna de las fuentes utilizadas precise el contenido y la data de estas disposiciones. En el archivo de la localidad valenciana de Villamarchante existía una Real Orden de 1756 sobre que «*no se nieguen los archiveros a dexas de buscar papeles para buscar la parentela de los que pretenden algún hábito de Santiago, etc.*» [Mateu Llopis, 1969, p. 89].

La Real Provisión de 1 de diciembre de 1766 por la que se establece el «*Método que se deberá practicar desde aquí en adelante en orden a los libros de Ayuntamientos, sus borradores, modos de enlegajar, custodia de ellos, así en el Archivo como en la Escribanía...*» de la ciudad de Burgos [BURGOS, 1766] refleja claramente el apoyo del Consejo Real a las medidas aprobadas para paliar las deficiencias detectadas, que no eran nuevas, en el funcionamiento de la escribanía del ayuntamiento de esa población castellana. Su denso contenido nos recuerda al de determinadas ordenanzas municipales en su capítulo relativo al escribano del concejo. Al regularse por ella la tipología documental que debía producir el escribano burgalés, y los criterios de ordenación de determinadas series documentales, se demuestra un notable interés por conservar debidamente organizada la documentación más reciente, no incorporada todavía al archivo de la ciudad. Un problema similar se pretenderá solucionar ya entrado el siglo XIX con el «*Plan en que se proponen los medios de evitar las faltas experimentadas hasta el presente y servirse la escribanía de Ayuntamiento*» de Tolosa [TOLOSA, 1819], y que también suscitó la atención del Consejo Real.

El establecimiento de la Contaduría General de Propios y Arbitrios y la creación subsiguiente de Juntas de Propios y Arbitrios en las principales localidades llevó aparejado un mayor control sobre las haciendas locales por parte de la administración central. Cualquier gasto no contemplado en los reglamentos de propios y arbitrios que por esos años se aprueban necesitará la autorización del Consejo Real. Los intentos de organización de los archivos municipales que se producen de tarde en tarde no podrán ser desarrollados si previamente no han sido aprobados por ese Consejo. Y éste lo hará en determinadas ocasiones, siempre que el estado de la hacienda local solicitante lo permita. Una Real Provisión de 4 de mayo de 1767 autorizaba al ayuntamiento de Castellón el pago a José Mariano Ortiz por su trabajo en el arreglo del archivo de la ciudad [Roca Travar, 1951, p. 214-216].

De nuevo una Orden del Consejo Real, esta vez de 1769, obligó al fiel de fechos de Villamarchante a realizar el «*Libro índice de todos los papeles de este Archivo...*» [Mateu Llopis, 1969, p. 66 y 81]. Una Real Provisión de ese mismo Consejo de 16 de agosto de 1770 por la que se mandaba «*el arreglo de*

los archivos» fue comunicada al ayuntamiento de Cullera por el Intendente del Reino de Valencia el 10 de enero de 1771 [Villalmanzo Cameno y Giner Perepérez, 1978, p. 29]. Esta disposición pudo ser circulada a otros archivos valencianos. Mayor indecisión demostró, en 1781, este supremo órgano colegiado de gobierno de los Borbones españoles a la hora de resolver la petición del ayuntamiento de Sevilla, sobre la propiedad de la documentación custodiada por las escribanías capitulares [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 16]. Sin embargo por un auto de 20 de septiembre de 1796 volvió a recordar, esta vez a petición del ayuntamiento de Valladolid, que no se franqueara ni permitiera extraer del archivo y contaduría de esa ciudad ningún documento original, ni siquiera a petición de los tribunales [Pino Rebolledo, 1991, p. 24].

Por último, el ejemplo de Santander viene a simbolizar el respaldo del Consejo Real a aquellas iniciativas municipales que pretendían mejorar la situación de sus archivos locales, siempre que su situación hacendística lo permitiera. En el Reglamento de Propios y Arbitrios de Santander, aprobado por el Consejo el 24 de abril de 1797, se establece que el contador municipal tenga a su cargo los papeles del archivo. Su nombramiento lo realizó el propio Consejo, por Orden de 17 de julio de 1797, de entre dieciocho aspirantes presentados a cubrir la plaza de contador archivero. Y también estableció las competencias y obligaciones de este nuevo oficial por otra Orden leída en su ayuntamiento el 23 de diciembre de ese mismo año. En ella se establece brevemente la forma de organizar, instalar y describir la documentación, las características que debía reunir su inventario, la manera de permitir la salida de aquella del archivo, y la necesidad de dar cuenta anualmente a la corporación de los documentos sacados y todavía no devueltos [Vaquerizo Gil, 1984, p. 8-9; SANTANDER, 1797].

2.2. Ordenanzas y acuerdos municipales

Los municipios españoles, prácticamente desde su constitución, pudieron adoptar medidas sobre la conservación y organización de sus fondos documentales. Los monarcas a través de las disposiciones comentadas les señalaron claramente cuáles eran sus atribuciones y obligaciones con respecto a sus archivos. Los libros de actas de los cabildos o consejos municipales contienen numerosas referencias a los acuerdos adoptados por los gobernantes locales sobre su documentación. En ellos se plasman los sucesivos intentos de *«arreglo y coordinación de sus papeles»*, las autorizaciones dadas para la consulta de los documentos y en qué condiciones, los problemas de instalación y conservación con los que se tuvieron que enfrentar, etc. Las posibilidades que ofrecen esos libros para reconstruir la historia de los archivos municipales fueron puestas de manifiesto por F. Pino Rebolledo cuando analizó la evolu-

ción del de la ciudad de Valladolid. El archivo de la ciudad de Gerona fue a menudo objeto de discusión en las reuniones de su consejo *«per la manca d'ordenació i l'estat d'abandó en què es troba. Se'n parla diverses vegades al llarg dels segles XV, XVII i sobretot del XVIII»* [Alberch i Fugueras, 1994, p. 527]. Valladolid y Gerona reflejan una situación que se repitió en todas las localidades españolas.

Para reconstruir la historia de cualquiera de los archivos municipales, junto con las disposiciones regias aparecidas en las recopilaciones publicadas, que establecieron el marco jurídico general, se deben tener en cuenta los acuerdos municipales, que nunca faltan, relacionados con sus archivos o su documentación, incluidos en los libros de actas. No en vano *«un rastreo profundo de los archivos históricos municipales tendría que dar como fruto la exhumación de otras directrices que debieron darse a nivel local»* para el gobierno de los archivos [Ortiz García-Bustelo, 1992, p. 23]. Las provisiones y órdenes reales específicas están motivadas muchas veces por las peticiones de los propios ayuntamientos o consejos.

Sin olvidarnos, pues, de la necesidad de examinar esa fuente documental, es preciso prestar especial atención a las ordenanzas municipales que regularon los archivos locales, de contenido más generalista y de proyección temporal más duradera. Las compilaciones de ordenanzas realizadas por los gobernantes locales para su posterior aprobación regia o señorial se basan muchas veces en acuerdos anteriores desperdigados por los señalados libros de actas.

Con carácter general se ha manifestado que las funciones del archivero y las normas que regulan la producción de documentos suelen recogerse en las ordenanzas o estatutos de las cancellerías y otros grandes departamentos administrativos [Aguinagalde, 1988, p. 76]. Un repaso de las numerosas publicaciones aparecidas en las últimas décadas en donde se transcriben ordenanzas de diferentes municipios nos permite contemplar que su presencia es testimonial. La mayoría de las ordenanzas se refieren a la policía urbana y rural, a los abastos, a la actividad económica y a otros aspectos de la vida local, siendo relativamente escasas las que recogen la organización municipal, en donde se incluirían las relativas a sus archivos. Pero el hecho de que no figuren en las recopilaciones no supone su inexistencia.

Esta situación se ha pretendido justificar expresando que *«las disposiciones dadas a escribanos para el correcto mantenimiento de sus protocolos, eran válidas y suplían, mutatis mutandis, las que podrían darse para el cuidado de la documentación municipal, máxime siendo uno de ellos escribano titular del Ayuntamiento... De ahí deducimos la escasez de ordenanzas sobre archivos municipales»* [Pastor Abaigar, 1993, p. 202]. Sin embargo, la casi totalidad de los municipios españoles en algún momento de su historia adop-

taron normas específicas para regular el funcionamiento de sus archivos, plasmadas en sus libros de actas, que pudieron o no ser recogidas en las compilaciones de ordenanzas realizadas con posterioridad, muchas de ellas todavía inéditas. Además el contenido de éstas varía notablemente de unas poblaciones a otras. Y sólo las grandes ciudades llegaron a editar estas recopilaciones durante el Antiguo Régimen. La reciente publicación íntegra, por R. Pérez Bustamante y J. Baro Pazos, de las ordenanzas de los municipios cántabros demuestra la presencia de artículos relativos a sus archivos en las de localidades de apenas unos cientos de vecinos. Y esta situación fue más normal de lo que V. Pastor Abaigar supone.

Esteban Corral García, en su estudio sobre las *Ordenanzas de los concejos castellanos...*, señalaba que los propios textos locales contienen normas sobre la organización y funcionamiento de los archivos locales, indicando el lugar donde deben estar ubicados, quiénes deben ser los custodios de las llaves, cómo deben trasladarse los papeles a ellos y las garantías con las que deben ser sacados. Pero los ejemplos que cita se limitan a Cuéllar, Valladolid y Salamanca [Corral García, 1988, p. 63-64].

A) CORONA DE CASTILLA

El infante D. Luis, hermano del rey Carlos II de Navarra, dio unas ordenanzas a la localidad de Los Arcos, en 1355, reproducidas por V. Pastor Abaigar, por las que sabemos que la documentación, los privilegios, se guardaban en un armario en la iglesia de Santa Eulalia. En ellas se establece que tres hombres buenos sean los custodios de sus llaves [LOS ARCOS, 1355].

Esta temprana referencia por la que se regula el control de la documentación de un archivo local nos refleja una situación que no debió ser única. La conservación del patrimonio documental municipal medieval nos hace suponer que medidas parecidas se adoptaron en otras muchas poblaciones, recogidas o no en sus ordenanzas.

Las aprobadas en San Sebastián, en 1489, encargan a los jurados la custodia de los privilegios, libros, registros y sellos, y su conservación en un arca, a la vez que regulan las normas para su consulta [Banus Aguirre, 1986, p. 7].

Las ordenanzas concedidas a la ciudad de Córdoba para su buen gobierno por los Reyes Católicos, en 1491, determinan la custodia de los procesos criminales, en un arca o armario dentro de la propia cárcel de la ciudad, sin que de allí se pudieran sacar [CÓRDOBA, 1491]. En las que otorgaron a la ciudad de Burgos, en 1497, hay un capítulo dedicado al escribano mayor por el que le encargan que guarde en el arca del concejo todas las escrituras, privilegios, sentencias y cartas. Ese arca tendría cuatro cerraduras, cuyas llaves

estarían en manos de dos regidores, el corregidor y ese escribano [BURGOS, 1497].

Estas ordenanzas aprobadas por los Reyes Católicos tendrán su continuación en las conocidas pragmáticas de 1500 y 1501. Los municipios pertenecientes a las Órdenes Militares, o a señoríos nobiliarios o eclesiásticos también se dotarán de normas para regular sus archivos. En las ordenanzas aprobadas por Juan de Zúñiga, maestre de la Orden de Alcántara, en 1489, para el concejo extremeño de Valencia de Alcántara, y que han sido publicadas por D. Bohorquez Jiménez, podemos encontrar ya referencias directas a la construcción e instalación del arca de los privilegios y escrituras, a los custodios de las tres llaves, al inventario de la documentación y al procedimiento seguido para sacar del arca cualquier documento. No existían todavía casas consistoriales por lo que el arca quedaría depositada en la casa de uno de los vecinos [VALENCIA DE ALCÁNTARA, 1489].

Los herederos del marquesado de Priego otorgaron a su estado de Aguilar, constituido por esa población, Montilla, Puente Genil, Monturque y Montalbán, unas ordenanzas en el año 1519 que se conservan originales en el Archivo Ducal de Medinaceli y que han sido analizadas por J.L. Pino García. Por ellas se establecía que el concejo de cada una de las villas y lugares tuviera un arca para conservar las escrituras y privilegios, reflejados en un inventario, al cuidado del mayordomo. Además todos los años se debían ver esas escrituras para tener memoria de ellas [Señorío de AGUILAR, 1519]. Por lo tanto se establece ya la visita anual, que vamos encontrar recogida en otras ordenanzas.

Este ejemplo de poblaciones de señorío nobiliario podemos completarlo con el de Piedrahita, localidad abulense perteneciente desde el año 1369 a los condes, y luego duques, de Alba. En 1530, el duque don Fadrique Álvarez de Toledo dispuso que todas las villas de sus estados debían tener un arca para archivo con tres llaves, repartidas entre la justicia, un regidor y el escribano del concejo [Santos Canalejo, 1988, p. 13]. Se limitaba, como vemos, a reproducir parcialmente la pragmática real del año 1500.

Evidentemente la influencia de la normativa aprobada por los Reyes Católicos se va a dejar notar en las ordenanzas dadas por los monarcas españoles que les sucedieron. No siempre se limitarán a recordar las disposiciones de 1500 y 1501, pues, en algunos casos, deberán ampliarlas en aspectos no suficientemente aclarados. En el año de 1524, Carlos V, tras las modificaciones introducidas por el Consejo de Castilla, aprueba unas ordenanzas para la villa de Baeza. En ellas después de referirse a los custodios de las tres llaves, se detiene en el procedimiento de salida de la documentación del arca, determinando que un auto del escribano recoja qué escritura sale, quién lo manda y por qué causa. El monarca determina además que el mandamiento de salida de

cualquier documento fuera firmado por la justicia y cinco regidores. De ese documento se debería realizar un inmediato traslado para devolver la escritura original al archivo [BAEZA, 1524].

El 27 de enero de 1528, el ayuntamiento de Toledo acordó unas normas muy precisas, confirmadas posteriormente por Carlos V y recogidas en la recopilación de ordenanzas publicada en 1858 por A. Martín Gamero, sobre la custodia de las llaves del arca de las escrituras de la ciudad por los regidores archiveros. Cada uno debía prestar juramento, pleito y homenaje ante el escribano mayor de cumplir determinadas obligaciones. Entre ellas estaba la de no dar las llaves a nadie, estar presentes en la saca de escrituras sin delegar en tercero, ni abandonar el lugar hasta que el arca estuviera de nuevo cerrada, no tener más de dos llaves del arca y por un tiempo no superior a un año, etc. En esa reunión se determinó también la manera de actuar en el caso de que alguno de ellos tuviera que abandonar la ciudad, o cayera enfermo. Sobre esto último se introdujeron modificaciones en 1539 y 1545 [TOLEDO, 1528].

En las ordenanzas aprobadas en 1536 para la villa burgalesa de Santo Domingo de Silos, publicadas por A. Franco Silva, se contempla la ubicación concreta del arca, la distribución de sus llaves, la realización por el escribano del inventario de las escrituras y su plasmación en un libro, la redacción de traslados de los documentos para facilitar su utilización, la manera de autorizar su salida del arca y su control, la obligación de elaborar actas de entrega de la documentación al producirse la renovación anual de los oficiales públicos, y las penas en que incurrirían éstos si no lo cumplían [SANTO DOMINGO DE SILOS, 1536].

En 1540 se recopilaron las ordenanzas de Tenerife, publicadas, en 1976, por J. Peraza de Ayala. En ellas se especifica que en el arca del concejo se guarden los privilegios, provisiones y escrituras, cerrada con tres llaves, conforme al capítulo 19 de la Instrucción de Corregidores. O lo que es lo mismo a la pragmática del año 1500. También establece que los traslados se conserven fuera del arca. Y que en las casas del cabildo se ubique también el archivo de los procesos fenecidos, cerrado con cuatro llaves. Además regula que a finales de cada año se incluya en el arca del cabildo el libro de actas, o como en ellas se denomina «*libro donde se asienten los negocios ordinarios, i extra ordinarios, i ordenanças*» [TENERIFE, 1540].

La localidad vasca de Hernani se dotó de ordenanzas en el año 1542, publicadas y analizadas por R. Ayerbe Iribar. El arca de su archivo sólo tenía dos llaves en manos de dos regidores de renovación anual. Por lo tanto cada año se producía la entrega de la documentación, por inventario, de los salientes a los nuevos responsables de su custodia y control. En el arca también se guardaría el sello [HERNANI, 1542]. En Armellada, población leonesa, el arca tenía también dos llaves, en manos del procurador y del merino, y en vez

del sello lo que sí se conservaba con la documentación era el dinero de los propios [ARMELLADA, 1548]. Al menos así se regula en sus ordenanzas del año 1548, publicadas por J.M. Fernández del Pozo. En las de Villalba del año 1549, editadas por I.M. Pérez González, el arca, de nuevo de dos llaves, custodiaría los libros y escrituras, reflejados en el correspondiente inventario [VILLALBA, 1549].

La ciudad de Valladolid vio aprobadas sus ordenanzas en 1549. En 1737 serían de nuevo impresas. En esta recopilación no existe ninguna referida expresamente a su archivo, lo que explica que no fueran utilizadas por F. Pino Rebolledo. No obstante, por la ordenanza número LXI se obliga a los escribanos mayores del ayuntamiento a realizar el inventario de las escrituras y títulos de sus bienes de propios. Y lo mismo se determina con respecto al mayordomo y al contador. Pero sí se señala en ellas, en su ordenanza LXII, que la entrada de documentación en el archivo existente en San Miguel se realizaría en presencia de la Justicia, de dos regidores llaveros y de uno de los escribanos mayores del ayuntamiento [VALLADOLID, 1549].

El arzobispo de Sevilla confirmó en 1550 las ordenanzas municipales de Cantillana, localidad perteneciente a su señorío. En ellas se determina que el escribano del concejo, de nombramiento anual, debía recibir la documentación de su archivo por inventario. Las tres llaves del arca de las escrituras estarían en poder del alcalde y regidor más antiguos y del propio escribano. Para sacar cualquier documento de ella se requería autorización del arzobispo o de su provisor, quedando registrado en el libro de conocimientos [CANTILLANA, 1550].

La influencia del capítulo 19 de la Instrucción de Corregidores, reflejada expresamente en las Ordenanzas de Tenerife, se repite de nuevo en las aprobadas para la localidad sevillana de Ecija en 1564, publicadas por M. Martín Ojeda. Las autoridades municipales incluyeron además que no se pudiera sacar documentación del archivo por persona alguna, sin autorización previa de la ciudad, reunida en cabildo, bajo severas penas si esto se incumplía [ECIJA, 1564].

La localidad palentina de Itero de la Vega, que nunca ha superado los 500 habitantes, dispone de ordenanzas aprobadas en 1573, publicadas por P. Luzán González. En una de ellas se establece la obligación que tenían los alcaldes y regidores de realizar todos los años el inventario de los privilegios, cartas y escrituras que la villa tuviera [ITERO DE LA VEGA, 1573].

En la ordenanza aprobada por la ciudad de Salamanca, en 1583, sobre los comisarios de Archivo y la guarda de escrituras en él, incluida en la recopilación impresa en el año 1658, se menciona expresamente la pragmática del año 1500. Ahora bien, en ella se especifica que hubiera dos libros de recibo y saca de papeles, uno dentro y otro fuera del archivo, que estaba cerrado con

cuatro llaves. En el último ayuntamiento de cada mes se debía leer su contenido para conocer la documentación que había sido sacada o metida en el archivo. El escribano tenía además que trasladar todos los papeles de la ciudad en un libro [SALAMANCA, 1583].

En el capítulo 13 de las ordenanzas de Lon y Brez del año 1594, publicadas por R. Pérez Bustamante y J. Baro Pazos, se establece que en el arca, de nuevo de dos llaves en manos de un regidor y del procurador, se custodiaría la documentación debidamente inventariada por el escribano, que llevaría cuenta y razón de ella, bajo pena de 600 maravedíes [LON Y BREZ, 1594].

Las de la localidad cántabra de Frama del año 1614 contemplan la existencia de un arca de dos llaves, una de las cuales estaría en manos de un vecino nombrado por el concejo y la otra en poder de un regidor o del procurador, dentro de la cual estaría la documentación debidamente inventariada, bajo pena de cien maravedíes si no se cumplía [FRAMA, 1614]. En las de 1617 de esta misma población se establece que el arca tenga tres llaves; se regula de nuevo la realización del inventario de la documentación; y se establece la obligación de llevar un libro para anotar las salidas de documentos. Todo ello bajo pena de mil maravedíes para garantizar su cumplimiento [FRAMA, 1617].

Las ordenanzas de Potes del año 1619 dedican al archivo sus capítulos 35 y 100. Por el primero se regula la posibilidad de que los vecinos de la villa pudieran depositar sus propios archivos en el de la localidad, una vez inventariados. Por el segundo se establece la creación de un archivo en la casa del ayuntamiento; se obliga a la justicia a visitarlo todos los años y se establecen las responsabilidades por las pérdidas que pudieran ocasionarse si los documentos sacados no se devolvían [POTES, 1619].

Sin salir de Cantabria, en las ordenanzas de Baro, de 1620, se obliga a los regidores a conservar debidamente el arca de dos llaves, y a entregar la documentación inventariada a sus sucesores, bajo pena de 200 maravedíes [BARO, 1620]. Y en las de Valderredible, de 1646, se establece, por su capítulo 13, que en la primera junta después de San Sebastián los alcaldes y regidores salientes entreguen las llaves del archivo a los entrantes, poniendo testimonio de ello el escribano en el libro inventario de documentación. En la saca de ésta debían estar presentes los dos alcaldes, los dos regidores y el escribano, custodios cada uno de una de las cinco llaves del archivo [VALDERREDIBLE, 1646].

Los ejemplos señalados reflejan la preocupación de las autoridades locales por regular sus archivos municipales. A veces se establecieron normas que afectaban a todas las poblaciones de un determinado corregimiento. La Ordenanza general dada al Principado de Asturias por su corregidor Lorenzo Santos de San Pedro en el año 1659 incluye doce títulos, de los que el noveno

trata «*De la guarda de los papeles que tocan al Principado en común y de los que tocan a la ciudad de Obiedo, y en particular a cada conçejo*». Los preceptos contemplados en esa ordenanza tendrán una gran incidencia en el archivo de la ciudad de Oviedo. En ella, y para la capital del Principado, se establece la distribución de las tres llaves del archivo, en manos del corregidor, caballero regidor y escribano; se destaca la obligación que tenía el segundo de recibir por inventario la documentación, de encargarse de recuperar los que salieren, y de dar cuenta de los que hubieren bajo fianza, por lo que percibiría de salario cada año diez mil maravedíes. Los escribanos del ayuntamiento y el procurador general velarían porque en el archivo se metieran todos los documentos, o sus traslados, de interés para la ciudad, añadiendo en el inventario las nuevas incorporaciones, y si no lo cumplían no se les abonaría su salario. En esta ordenanza, al referirse a los restantes concejos asturianos, tras destacar la documentación que debe guardarse en el archivo, como ya vimos, ordena la distribución de las tres llaves en manos del juez hidalgo, de un regidor archivero y del escribano más antiguo del ayuntamiento. Al segundo le correspondían las mismas funciones que al caballero regidor de Oviedo. Y en ella se añade además que cualquier ayuntamiento podía enviar alguno de sus documentos «*para más guarda, o seguridad*» al que el Principado tenía en la ciudad de Oviedo [Principado de ASTURIAS, 1659].

Esta ordenanza general dada al Principado de Asturias no es la única norma que pretenda regular los archivos de un amplio territorio. Otro ejemplo, aunque sólo sea una propuesta, se contempla en el impreso de Antonio Pardiñas Villardefrancos, aparecido hacia 1695, titulado *Propuesta séptima, para que se manden hacer y nombrar Archivos y Archiveros en las cabeças de las siete Provincias, para la custodia de los papeles, y Protocolos de los Escribanos muertos, de las Jurisdicciones y Partidos*, folleto que se encuentra cosido al Libro de acuerdos y cartas órdenes de Tuy del año 1695, y que ha sido visto como el inicio de las aspiraciones gallegas por crear un Archivo General de Galicia [Gallego Domínguez, 1981, p. 177]. De sobra son conocidas las numerosas medidas aprobadas por las Juntas Generales del Señorío de Vizcaya para la conservación de su archivo, publicadas por G. Monreal Cía. Las Juntas Generales de Guipúzcoa, en sus reuniones de Hernani, en 1623, y de Mondragón, en 1734, tomaron acuerdos relativos a la conservación del patrimonio documental municipal [Anguera, Juana y Orube, 1987, p. 349].

Pero volviendo a la situación de los municipios y en concreto deteniéndonos en el análisis de algunas ordenanzas aprobadas ya en el siglo XVIII, la presencia de artículos relacionados con sus archivos sigue siendo dispar. En las de las localidades cántabras de Enterrías, Vada y Dobarganes, se establece, en 1744, la construcción de un archivo de madera de nogal para guardar en él, debidamente inventariados, todos los documentos pertenecientes al concejo,

con dos cerraduras, cuyas llaves estarían en poder de dos regidores. Cualquier vecino que necesitara un documento del archivo podía recibirlo obligándose a su devolución por recibo bajo pena de doscientos maravedíes [ENTERRÍAS, VADA Y DOBARGANES, 1744].

Las ordenanzas de la ciudad de Burgos, publicadas en 1747, recogen artículos sobre el nombramiento de dos caballeros archivistas con un salario de 3.000 maravedíes anuales, que estarían obligados a jurar el cumplimiento de sus obligaciones como tales. Cada uno de ellos tendría una llave del archivo. Velarían porque la documentación se conservara en el orden que entonces estaba. No permitirían la salida de ésta sin previo acuerdo de la ciudad, mediando la entrega del oportuno recibo por el solicitante y anotando la salida en el libro correspondiente. Y se encargarían de incorporar al archivo todos los documentos que en él se debían conservar [BURGOS, 1747].

Este cometido que en Burgos recae en los dos caballeros archivistas era desempeñado en la localidad cántabra de Armaño por todos los regidores. A ellos les competía cada año dar cuenta, los salientes a los entrantes, de los papeles del concejo, y además debían reincorporar al archivo todos los que se hubieran sacado, una vez comprobado el inventario. Si no lo hacían así podían ser castigados con una multa de cien maravedíes [ARMAÑO, 1751].

Más interesantes son por su prolijidad las ordenanzas de la ciudad de San Sebastián aprobadas en 1758, y publicadas dos años después. Contemplan la existencia de un archivero nombrado cada año por el ayuntamiento, que debía reunir determinadas aptitudes, con un salario de 200 reales, completado con los derechos que llevaría a los particulares por la realización de copias o compulsas. El archivo tendría tres llaves en manos de éste, del alcalde más antiguo y del primer regidor. Cada año, al producirse la renovación, el archivero saliente entregaría la documentación al entrante por inventario. Entre sus obligaciones estaría la de completar el índice formado años antes o la de no permitir la salida de documentos sin previa orden de la ciudad y siempre que lo anotara en el libro de conocimientos, persiguiendo luego su devolución. Además debía velar por recoger todas las cédulas y gracias reales que anduviesen originales en autos, y faltasen en el archivo. En estas ordenanzas se establece también la manera de organizar los libros registros de acuerdos, órdenes reales y cartas, y las cuentas [SAN SEBASTIÁN, 1758].

Un ejemplo de ordenanzas de archivo, tardías e inéditas porque no llegaron a entrar en vigor, son las elaboradas en 1820 para la localidad sevillana de Écija. Dentro del proyecto de ordenanzas generales, al archivo se dedica el capítulo segundo del título cuarto. Tras especificar la documentación que debía ingresar en él, se establece la necesidad de que esté organizada «*por materias y años*» con el correspondiente «*protocolo y abecedario*» para facilitar su búsqueda. También se regula la salida de la documentación, previo acuerdo

municipal y por «*tiempo precisísimo*» y la realización de copias y certificaciones [ÉCIJA, 1820].

Los municipios de la Corona de Castilla durante todo el Antiguo Régimen pudieron regular sus archivos, completando las disposiciones generales aprobadas por los monarcas españoles. Los ejemplos comentados no dejan de reflejar la influencia de la pragmática del año 1500 y su adecuación a cada localidad. La insistencia en tener la documentación debidamente inventariada, o lo que es lo mismo organizada, las penas por el incumplimiento de sus obligaciones con las que pueden ser castigados los responsables de los archivos, o la realización de las visitas anuales son algunas de las normas que más se repiten en estas ordenanzas analizadas, y que se echan de menos en las pragmáticas de los Reyes Católicos.

B) CORONA DE ARAGÓN

En las localidades de la Corona de Aragón durante el período que nos ocupa también hubo interés por regular los archivos municipales, complementando el marco general implantado con éxito por los Reyes Católicos. También de una manera desigual se constata la presencia de artículos relacionados con los archivos y la documentación en las ordenanzas municipales y ordenaciones reales de algunas poblaciones de la corona aragonesa. De entre los territorios que la forman sobresale la extensa y exhaustiva regulación de los archivos de las principales ciudades del Reino de Aragón, sobre todo en los siglos XVI y XVII. Los capítulos dedicados en las ordenaciones reales aprobadas para esas poblaciones constituyen verdaderos reglamentos muy homogéneos en cuanto a su contenido, sin parangón en esos siglos con el resto de ciudades españolas, incluyendo las de Cataluña o Valencia. No obstante un estudio más detenido de los «*Llibres d'Ordinacions i Crides*» como el existente en Tárrega, de los «*Llibres de Consells o Llibres d'acords del Consell*», de Acuerdos Municipales o del Regimiento como también se les denomina, o como en el caso de Culla del «*Llibre dels capitols d'herbatges...*» nos permitiría conocer en su verdadera dimensión la actividad normativa de los municipios de la Corona de Aragón en relación con sus archivos. Una idea general podemos obtener a través de algunos ejemplos.

Las primeras noticias sobre el archivo municipal de Tárrega se recogen en unas «*Ordinacions*» dadas por Pedro III en el siglo XIV a su universidad, por las que entre otras cosas encarga a su escribano que tenga «*cura de les escriptures de la Paeria*» [Gonzalvo i Bou, 1989, p. 163]. Las ordenaciones aprobadas en 1445 para Gerona incluyen un capítulo que «*conté un conjunt de disposicions que donen carta de naturalesa a l'arxiu en tant que realitat física indiscutible*» [Alberch i Fugueras, 1994, p. 523]. Un acuerdo de 13 de

mayo de 1455, incluido en el Libro del consejo de Castellón establece que los jurados, el síndico y el escribano saliente y entrante, dentro de los ocho días siguientes después de la elección, debían hacer el inventario de todos los privilegios y provisiones que la villa tuviera en su poder, bajo pena de pérdida de sus salarios [Roca Travar, 1951, p. 209; CASTELLÓN, 1455].

Estas tempranas referencias del siglo XV se continuarán en el siglo XVI, tras la unión de las dos Coronas. Las diferencias en la composición y en los sistemas de elección y de gobierno de los municipios de Castilla y Aragón quedarán reflejadas en los textos normativos aprobados para sus archivos.

La localidad tarraconense de Tortosa aprobó en 1579, tras deliberación de los procuradores y del consejo de la veintena, los capítulos que debían jurar los archiveros el día de la Ascensión de cada año. En ellos se especifica claramente los días y horas que debían dedicar a poner en buen orden la documentación del archivo, cómo podían permitir la salida de ésta o la obtención de copias, lo que debían hacer con sus llaves en caso de ausencia o enfermedad, y la obligación de guardar secreto de lo actuado [Massip i Fonollosa, 1987, p. 9-10, nota 2; TORTOSA, 1579].

Las ordenaciones del regimiento de la ciudad de Huesca, publicadas en 1587, fueron establecidas por Juan de Torrellas, comisionado de los príncipes Maximiliano y María, en nombre del emperador Carlos V, en el año 1551. El capítulo «*Del Archiu, arca de officios y custodia de llaves*» es muy denso y prolijo. En él se especifica la ubicación del archivo. Dentro de las propias casas comunes de la ciudad se conservaban en lugares separados el archivo de los privilegios y escrituras, el de los libros de regimiento, y el de los procesos del Justicia. La distribución de sus llaves era diferente a la que predominaba en los municipios de la Corona de Castilla. Las cuatro llaves del archivo de las escrituras y privilegios estaban en manos del justicia, del notario, del prior de jurados y del jurado tercero. Estas ordenaciones especifican, además, el procedimiento que se debía seguir para sacar del archivo cualquier documento, las penas en que incurrirían los infractores, la visita anual para reconocer su estado y verificar la devolución de los documentos sacados, y la conservación dentro de él del arca de los oficios utilizado en las insaculaciones [HUESCA, 1551]. Ligeras modificaciones se introducirían en el siglo XVII, al publicarse unas nuevas ordenaciones del regimiento de Huesca en el año 1641.

La ciudad de Calatayud recibió ordenaciones en el año 1611 por Juan Fernández de Heredia, gobernador del Reino de Aragón, con motivo de su visita a la localidad durante la insaculación de los oficios de ese año. Esas ordenaciones aparecerían publicadas en 1625. En ellas de nuevo hay un capítulo titulado «*Del arca de las Bolsas de los Officios, y Archivo de la Ciudad, y de los Clavarios de dicho Archivo y Arca*». El archivo de la ciudad vuelve a guardar el arca de los oficios utilizado en las insaculaciones. Las llaves que

abrían su puerta estaban en manos de cuatro ciudadanos de los insaculados en bolsa de jurados nombrados cada año por el consejo de la ciudad, y que antes de tomar posesión de ellas debían prestar juramento. Las ordenaciones se detienen después en los problemas que podrían darse al intentar abrir el archivo si faltaba alguno de los clavarios, y qué soluciones podían adoptarse [CALATAYUD, 1611]

En 1630, Matías de Bayetola y Cavanillas, miembro del Consejo de Aragón y por orden de Felipe IV, dio nuevas ordenaciones a Albarracín y sus aldeas. Entre ellas hay una relativa a que haya archivo común para procesos y cartas, en la que se especifica que en el archivo existente en las casas de la ciudad se debían guardar también los procesos de la Audiencia, debidamente inventariados por el escribano [ALBARRACÍN, 1630].

Los ejemplos comentados de Huesca y Calatayud tienen su continuación en otras localidades del reino de Aragón como Daroca, Jaca, Barbastro, Alcañiz y Tarazona que recibieron ordenaciones relacionadas con sus archivos a lo largo del siglo XVII. Las de Daroca están datadas en 1647, al menos ese es el año de su impresión. El arca con las bolsas de los redolinos de los oficios se guardaba, cómo no, en el archivo, cuyas cuatro llaves estaban en manos del justicia, el juez, el almotacén, y el jurado primero, en calidad de clavarios. Como tales debían prestar juramento comprometiéndose a guardar las llaves, a no abrir el archivo secretamente, y a acudir prestos siempre que fueren requeridos por el consejo. Su incumplimiento podía acarrearles la *«pena capital por turbadores del regimiento y estado público»*. Más adelante, en estas ordenaciones se establece la existencia de un libro para asentar la salida de los documentos del archivo al cuidado del secretario. Sólo podía sacarse documentación con la autorización previa del justicia, oficiales y consejo, o de la mayor parte de ellos, y entregando la persona que recibía el documento una prenda de plata de diez escudos para arriba, a juicios de los clavarios y según la calidad de la escritura [DAROCA, 1647].

Entre las ordenaciones reales dadas a la ciudad de Barbastro por Pedro Cabero, del Consejo de Aragón, en el año 1657, se encuentra una, la 186, relativa a *«Que se visite el Archivo, y lo que se puede gastar el día del inventario»*. Por ella además de establecer el sueldo que cobrarían los que intervinieran en la redacción del inventario de la documentación, que debía realizarse en los días siguientes a la extracción anual de oficios, se determina que la llave del arca de las escrituras estaría en poder del prior de jurados. Al día siguiente de San Juan los cuatro jurados, los seis consejeros y el secretario tendrían la obligación de visitar el archivo de la ciudad [BARBASTRO, 1657]. En las aprobadas para la ciudad de Alcañiz de 1658 se señala que el notario no podía mostrar las escrituras del archivo sin licencia de los jurados y consejo, salvo mandamiento de juez [ALCAÑIZ, 1658].

Las ordenaciones reales de la ciudad de Tarazona del año 1685 fueron dadas por el doctor José Ozcariz y Vélez, del Consejo de Aragón. En ellas se establece la obligación de los justicia, jurados y lugarteniente de registrar y hacer inventario de los documentos del archivo, y de añadir en él los que cada año se incorporaran, bajo pena de cien sueldos. El secretario debía registrar todos los documentos que se sacaran del archivo en un libro, encargándose de su restitución el jurado preeminente. A éste le correspondía informar, el mismo día que el mayordomo daba su cuenta, de todos los documentos sacados en ese año, para a su costa proceder a su recuperación, salvo si habían salido por asuntos de la ciudad. Todo ello bajo pena de privación de oficios si así no lo hacían. El arca con las bolsas de los oficios se conservaba dentro del archivo. Las llaves de éste, cuatro, estaban en manos del justicia, dos, y de los jurados preeminente y segundo, las otras dos. El jurado segundo custodiaba, además, las llaves del «*varroncillo, armarios, y retretes*». Unos y otros debían prestar juramento al recibirlas de que las custodiarían, no entregarían a terceros y acudirían prestos a abrir el archivo siempre que les fuera solicitado, bajo pena de privación de oficios, o si se daban las circunstancias podían «*ser castigados a pena capital*». También en estas ordenaciones, como ocurría en las ordenanzas municipales de Toledo, se determina pormenorizadamente lo que debían hacer los custodios de las llaves cuando tuvieran que ausentarse de la ciudad [TARAZONA, 1685].

En 1686 fueron impresas las ordenaciones reales que Martín de Altarriba y Torrellas, del Consejo de Aragón, dio a la comunidad de Daroca. Esta comunidad tenía su archivo en la villa de Cariñena, a cuyo frente estaba un archivero, cargo que recaía todos los años en la persona que resultara insaculada, tras la extracción del redolino de la «*bolsa del archivero*». La puerta del archivo tenía dos llaves, una en manos de éste y la otra en poder del asistente de la comunidad. Continúan las ordenaciones recogiendo el texto del juramento del archivero, y las obligaciones de su oficio, especificando la manera de permitir la salida de la documentación del archivo [Comunidad de DAROCA, 1686].

Sin salir del Reino de Aragón, todavía en el siglo XVII, destacan por su prolijidad las ordenaciones dadas a la ciudad de Jaca. Las publicadas en el año 1656 se refieren por extenso al archivo en varios de sus capítulos. Y lo mismo ocurrirá en las impresas en el año 1695. Los privilegios, encartamientos y otras escrituras debían guardarse en un arca dentro del archivo. También en el archivo se conservaba otro arca con las bolsas de los oficios insaculados. Las cuatro llaves de una y otra estaban en poder del justicia, del prior de jurados, del jurado de hidalgos y del prior de veinticuatro. Para sacar documentos de ese arca se requería la presencia de los cuatro oficiales, junto con el notario del regimiento, y dos testigos. Su salida se debía anotar detalladamente en el «*Libro de la Ciudad*». Sus receptores estaban obligados a devolverlos en un

tiempo limitado. Y si así no lo hacían, los oficiales serían castigados con una pena de cien ducados de oro, además de resarcir a la ciudad por todo el daño provocado. En otra ordenación se especifica el método que deberían seguir los oficiales, después de su designación por insaculación, para recuperar los documentos no devueltos. Y además se regula que debían prestar especial cuidado, al introducir las escrituras de nuevo en el archivo, en «*bolverlas a la misma ligarza de donde fueren sacadas*». Incluso se determina que además de anotar su salida en el Libro de la Ciudad, cualquier documento «*se aya de entregar con apoca, como al que las recibiere, y entregare*».

La misma atención prestan estas ordenaciones de Jaca a los procesos y escrituras del Justicia que debían conservarse en un lugar dentro de las casas de la ciudad. Todos los años el notario del justiciado debía ingresar en él por inventario todos los procesos fenecidos. La llave que abría el archivo del justicia estaba en manos únicamente de ese notario. Por esta ordenación sabemos que un día al año se reconocían los documentos del arca de las escrituras y privilegios. Los libros del regimiento estaban fuera del archivo pero dentro de las casas de la ciudad, en un arca cuya llave tenía el prior de jurados, al ser «*necessarios toda hora, y se han de reconocer muchas vezes*» [JACA, 1694].

Del Reino de Valencia en el siglo XVII conocemos las ordenaciones de Albaida y Culla. La primera localidad era un lugar de señorío perteneciente a los marqueses de Albaida, con una población que en ese período no superó los 200 vecinos. Sus ordenanzas de 1685 establecen la obligación de archivar los libros y recibos de la contaduría comunal; impiden la salida de documentos originales del archivo, por lo que determinan que el escribano entregue copias; y señalan que el escribano de los jurados tenga llave de aquél y no permita copiar ni ver ningún papel si no estaba presente [ALBAIDA, 1685].

En el «*Llibre dels capitols d'herbatges de la Tinença de Culla (1345-1805)*» se incluye un capítulo del año 1687 con el título de «*En quant a la clau de.l Archiu que l.a de tindre*» [Rabassa Vaquer, Barrera Aymerich y Pérez Lobo, 1990, p. 16].

Las ordenaciones del Valle de Arán (Lérida), aprobadas en el año 1616, fueron reimpresas a instancia de su gobernador el brigadier Pedro de Santamaría en el año 1752. De los archivos trata en los capítulos relativos a «*De la Conservación y Comission de Notas*» y a la «*Forma de despachar Cartas y de la custodia del sello*». Aunque en ellos se presta atención casi exclusivamente a la documentación notarial y judicial. Los protocolos notariales debían conservarse en un arca o archivo dentro de las iglesias parroquiales de cada lugar de los que formaban el valle, debidamente inventariados. Los procesos de la Curia Regia se debían conservar en el castillo de León en Viella, teniendo sus dos llaves, una el gobernador y otra el notario. El arca de los privilegios del valle de Arán estaba cerrada con seis llaves, repartidas en otros tantos consejeros [VALLE DE ARÁN, 1616].

En el siglo XVIII se debieron aprobar otras muchas ordenaciones y ordenanzas en poblaciones de la Corona de Aragón que incluyeran algún artículo referente a su archivo, o a las obligaciones documentales de sus escribanos o notarios. A priori ejemplos como los comentados de Tarazona y Jaca demuestran un gran interés en las localidades aragonesas por la conservación de su patrimonio documental durante el Antiguo Régimen. Las ordenanzas de Fuentespalda, localidad zaragozana, de 1725, contemplan la necesidad de construir un armario de madera para archivo en la sala del ayuntamiento y un arcón grande con este mismo fin [Serrano González, 1995, p. 201].

Ese interés, al menos en cuanto a su regulación, fue bastante menor en el reino de Valencia y en el principado de Cataluña. Es muy posible que los comisionados reales no tuvieran que reformar la situación de los archivos en las visitas a sus poblaciones y de ahí que no incluyeran ningún capítulo relativo a ellos en las ordenaciones resultantes. Al menos esto parece deducirse de la escasa utilización de las ordenaciones en los trabajos sobre historia de los archivos en Cataluña, Valencia y Mallorca. Puede ser, también, que los acuerdos de sus consejos municipales sean tan suficientemente explícitos en todo lo relacionado con la conservación y acceso de la documentación que no fuera necesario su inclusión de nuevo en las ordenaciones. Las disposiciones generales aprobadas por los monarcas españoles fueron completadas en las ordenaciones, ordenanzas y acuerdos municipales, en el ámbito de la Corona de Aragón, en idéntico sentido que el trazado para la Corona de Castilla. Únicamente la existencia de otros oficiales públicos, como consecuencia de las características del régimen local catalano-aragonés, con atribuciones en la conservación y acceso a la documentación, o la presencia constante del arca con las bolsas de los oficios insaculados dentro del archivo, introduce alguna modificación a lo ya señalado para Castilla de la necesidad de visitar los archivos todos los años, de inventariar los fondos documentales, o de establecer las penas (incluida la de muerte) por el incumplimiento de lo regulado en esos textos normativos.

Algunos de ellos por su prolijidad y exhaustividad podemos llegar a considerarlos como verdaderos reglamentos de archivo.

2.3. Los reglamentos de archivo

Junto con las disposiciones aprobadas por los monarcas españoles, los textos recogidos en las ordenanzas y ordenaciones, o los acuerdos municipales, cabe mencionar la existencia de memoriales, instrucciones y reglamentos de archivo, en las grandes ciudades, que por lo general complementan, profundizan y aclaran los contenidos de las normas anteriores.

En esta línea cabe mencionar el «*Memorial de los Consellers de Barcelona del año 1371 recordando a sus sucesores una serie de medidas que han*

de tener en cuenta para poner en orden la documentación» [Vinyoles, 1994-1995, p. 1.514-1.516], o el *«Memorial de los Consellers de Barcelona del año 1392 recordando a sus sucesores que debían poner títulos y rúbricas en los privilegios de la ciudad...»* [Vinyoles, 1994-1995, p. 1.517-1.518]. Por éste último se establece cómo se debe organizar la documentación, en concreto los privilegios y provisiones, y lo que se debe hacer para acabar con las ratas que la dañaban.

Aunque es Madrid la ciudad española que llegó a disponer de una regulación más completa en relación con su archivo municipal. En este proceso, muy bien estudiado por C. Cayetano y antes por T. Domingo Palacio, debemos recoger las bases elaboradas por Cristóbal del Barco, comisario del archivo, en el año 1717, en las que se señala la necesidad de realizar un inventario general, bajo normas precisas, y se destacan las cualidades que debía reunir la persona designada como archivero [Domingo Palacio, 1875, p. 26-27]. En 1753, otro comisario, Francisco Milla, presentó a Fernando VI una instrucción sobre lo que se debería hacer en el archivo. En ella establece las aptitudes que debía reunir el archivero y su auxiliar; el control de la documentación solicitando su devolución gracias a los recibos de préstamos; los requisitos previos que se debían dar para difundir la información; el método para su organización y descripción; la transcripción de los documentos antiguos; la realización de índices de los libros de acuerdos; la visita anual; las condiciones para certificar sobre la documentación; etc [Domingo Palacio, 1875, p. 34-36]. Esta instrucción, calificada por C. Cayetano como *«anteproyecto de reglamento»*, fue aprobada el 11 de abril de 1753 [Cayetano Martín, 1992, p. 28].

Treinta años después, el 24 de enero de 1783, el ayuntamiento de Madrid hacia lo propio con el *«Reglamento que deberán observar el Archivero y Oficiales del Archivo público de la M.N. y M.L. Coronada villa de Madrid...»*, que fue parcialmente modificado el 31 de mayo de 1784. En diecinueve artículos se especifican las obligaciones del archivero madrileño, desde su horario hasta la forma de organizar la documentación y de realizar el inventario general y los índices. Pocos textos son tan claros como éste en lo relativo a la redacción, por las distintas oficinas municipales, de las actas de entrega de la documentación para su ingreso en el archivo. También se refleja en él el control riguroso de la salida de la documentación (autorización previa del ayuntamiento o corregidor, recibo, asiento en el libro de conocimientos, tiempo limitado fuera del archivo), la realización de copias, traslados o certificados, la elaboración de la memoria anual, las cualidades y aptitudes que debía reunir el archivero, sus derechos y obligaciones. Las tareas de los dos oficiales y del portero del archivo quedan especificadas, también, en este reglamento, así como las funciones de los regidores comisarios [Cayetano Martín, 1992, p. 29; MADRID, 1784].

Este primer reglamento madrileño, el más completo de los redactados para los archivos municipales en el Antiguo Régimen, estuvo en vigor hasta bien entrado el siglo XIX. El 2 de noviembre de 1820 el ayuntamiento de Madrid aprobó una propuesta de los procuradores síndicos por la que en ocho artículos se simplificaba el anterior reglamento, que ha sido considerada como unas «*verdaderas ordenanzas del archivo de Villa*». En ese texto, bastante más breve que el anterior, se especificaba la obligación del archivero de coordinar e inventariar la documentación, y de formar un índice general, de buscar los documentos que hubiera fuera del archivo, de redactar la memoria anual, etc, ateniéndose en lo demás a lo establecido en la instrucción del Consejo Real de 1777, seguramente refiriéndose a la norma por la que el archivo de villa se convirtió en oficina pública [Gómez Iglesias, 1974, p. 38-39]. En 1867 se aprobaría un nuevo Reglamento del Archivo General de Madrid [Cayetano Martín, 1986, p. 565-566].

Junto con Madrid, tal vez sólo la ciudad de Zaragoza llegó a disponer en este amplio período de un reglamento específico para su archivo [González Miranda, 1981, p. 82]. Desconocemos la vigencia y aplicación de la instrucción redactada en 1730 por el conde de Torres Secas para el archivo zaragozano. Lo cierto es que en ella se establece el control de acceso al archivo, y el procedimiento para difundir la información y permitir la salida de la documentación; se regula además el envío periódico de los documentos tramitados, y el horario de trabajo en el archivo [ZARAGOZA, 1730].

Este tipo de normas, incluidas o no en las ordenanzas generales, fueron aprobadas también por otras instituciones. La Diputación General del Señorío de Vizcaya estableció en 1744 «*una especie de reglamento para la organización*» del archivo [Gómez Rodrigo, 1974, p. 72]. Aunque por lo general, como ocurrió en Madrid, sólo bien avanzado el siglo XIX empezaron a aprobarse reglamentos u ordenanzas específicos para los archivos municipales españoles. La ciudad de Burgos vio aprobado el suyo en 1859 [Díez Sanz, 1984, p. 69-71].

2.4. Otras normas

Junto con las disposiciones generales y específicas dadas por las autoridades reales, las ordenanzas, ordenaciones y los acuerdos municipales, los memoriales, las instrucciones y los reglamentos de archivo, cabe referirnos a otras normas que tendrán incidencia en la regulación de los archivos municipales en el Antiguo Régimen. El envío de jueces de comisión, visitadores reales o jueces de residencia a determinados municipios pudo motivar la adopción de medidas que incidieran en la conservación y organización de su documentación, y que en determinados casos suplen o complementan a las ya comentadas. Los ejemplos son numerosos.

Una sentencia dada en 1454 por el licenciado Alfonso Díaz de Montalvo, juez pesquisidor nombrado por Juan II, ordenaba a todas las personas que hubieran tomado documentos del arca de la villa de Madrid, su inmediata devolución bajo pena de perdimiento o confiscación de sus bienes [Gómez Iglesias, 1974, p. 30-31; Cayetano Martín, 1992, p. 27; Domingo Palacio, 1875, p. 20-21].

En 1525, el juez de residencia Pedro Díaz dictó unas normas de buen gobierno con motivo de su visita a Gata, por las que establece, entre otras cosas, que en el arca de tres llaves se deposite la documentación bajo inventario, y siempre que de ella se sacare un documento esté presente el escribano, dando recibo la persona a la que se entregare [GATA, 1525].

También los oidores enviados por la Real Audiencia de Galicia a Orense, en 1562, establecieron unas ordenanzas para acabar con el «*desorden y descontrol del concejo en asuntos documentales*» [Gallego Domínguez, 1981, p. 180].

En 1570 fue trasladada la documentación municipal de la localidad navarra de Los Arcos a un espacio propio en la parroquia de Santa María para su buena guardia y custodia, por orden del doctor Valencia, corregidor de Logroño, encargado de tomar residencia a la justicia de la villa.

El acuerdo adoptado por el ayuntamiento de Vallecas en 1674 de nombrar un archivero vino motivado por la residencia tomada a su justicia por Juan Lucas Cortés [Mateu Llopis, 1945, p. 80].

El reglamento de propios y arbitrios aprobado por el Consejo Real para la ciudad de Salamanca, el 25 de noviembre de 1763, y que ha sido publicado por J. Infante Miguel-Motta, encarga al regidor archivero y al procurador síndico la vigilancia del trabajo desarrollado por el «*archivero menor*», de tal forma que se les haría «*cargo en la residencia de cualquier defecto u omisión que ubiere en este punto*».

El temor a un juicio de residencia fue también expuesto por un regidor ovetense cuando, en la sesión de su ayuntamiento de 24 de diciembre de 1800, daba cuenta de la facilidad y falta de solemnidad con la que se extraía la documentación de su archivo [Villa González-Río, 1978, p. XXIV].

Es evidente, por lo tanto, que como resultado de las residencias a las que fueron sometidas las autoridades locales castellanas se pudieron adoptar normas que incidieran en la regulación del patrimonio documental local. Lo mismo pudo ocurrir como consecuencia de las visitas periódicas que debían realizar los corregidores a los archivos. Así se les recordó en las Cortes celebradas en Madrid en el año 1551, como señala Benjamín González Alonso.

Los cuadernos de residencias de las justicias locales pueden aportar amplia información sobre los archivos municipales, y su regulación. Y no faltan tampoco cuadernos de visitas de escribanos, que incluyen capítulos, en las

instrucciones recibidas por sus jueces, de gran interés para conocer a través de sus respuestas la práctica archivística.

La ubicación de muchos archivos locales en dependencias eclesiásticas (parroquias, ermitas o conventos) motiva que existan disposiciones, aprobadas por religiosos en sus visitas, que están relacionadas con la instalación de la documentación. Así, en 1746, el obispo Miranda y Argaiz durante su visita a la iglesia parroquial de Los Arcos, determinó, por el capítulo doce de sus mandatos generales, que fueran ampliadas las dependencias del archivo municipal que allí existían [Pastor Abaigar, 1993, p. 199].

Las ordenaciones aprobadas en las localidades de la Corona de Aragón, como hemos visto, fueron elaboradas muchas de ellas por visitantes reales, generalmente miembros del Consejo de Aragón. Pero su actividad no se limitó solamente a estas normas.

El Duque de Maqueda, capitán general del Principado de Cataluña, ordenó, por un privilegio datado en 1595, la creación de un archivo, cerrado con cuatro llaves, en la casa la universidad de Olot para evitar la pérdida de los documentos por estar hasta entonces en manos de los «*Consols*» [Mayans i Pluja, 1987 (b), p. 220].

Pedro Borrull, miembro del Consejo de Aragón, y comisionado regio para la reconstrucción de Alicante, por el bombardeo y posterior incendio sufrido en la ciudad, en 1691, tras realizar una visita a su archivo, ordenó la formación de un inventario, que todavía hoy se conserva [Martínez Morella, 1955, p. 46; Paternina Bono, 1992, p. 52].

En 1765, el secretario del ayuntamiento de Castellón de Ampurias, inventarió el archivo municipal «*després d'haver-ne rebuda ordre arran d'una visita d'inspecció*» [Planes i Albets, 1992, p. 21]. Ese mismo año el escribano «*actuari de l'Audiència de Barcelona*» realizó una visita de inspección a la localidad de Sitges deteniéndose en el estado de la documentación municipal [Panyella, 1982, p. 91]. Otra inspección, esta vez ordenada por el Consejo Real, y realizada en 1774 en Igualada, tuvo como resultado la encuadernación de los libros de acuerdos municipales, y la aprobación de diversas normas para la redacción de los libros de actas [Llacuna i Ortinez, 1982, p. 62].

Por todo lo que acabamos de ver podemos comprender la diversidad de fuentes normativas existentes sobre los archivos municipales españoles en el Antiguo Régimen, lo que contrasta con la parquedad de las referencias aparecidas hasta ahora en las obras que tratan sobre la historia de los archivos en nuestro país. Muchos de los instrumentos descriptivos elaborados en ese amplio período pueden completar esta visión en aspectos tan interesantes como la instalación y la organización de la documentación municipal. Y a ello nos referiremos más adelante.

3. LOS RESPONSABLES DE LOS ARCHIVOS MUNICIPALES

Los concejos y ayuntamientos establecieron los capítulos de las ordenanzas relacionados con los archivos, aprobaron todos sus gastos incluidos en las cuentas de propios y arbitrios, vigilaron su organización y la realización de los instrumentos descriptivos, y acordaron las medidas tendentes a mejorar su instalación y conservación. Todo ello se refleja en los libros de actas capitulares.

La existencia de comisiones especiales para los archivos municipales está constatada en el caso de Sevilla, donde ya en 1822 estaba constituida una «*Comisión de arreglo del archivo y custodia de sus llaves*», que tuvo cierta actividad durante buena parte de ese siglo [Fernández Gómez, 1989, p. 426; Fernández Gómez, 1995 (b), p. 17].

En muchas ocasiones las competencias de los ayuntamientos y concejos fueron ejercidas de forma delegada por diferentes autoridades locales o por oficiales públicos. Unos y otros intervenían en las aperturas y cierres de los archivos municipales como custodios de sus llaves.

La pragmática de 9 de junio de 1500 había establecido que las tres llaves que abrían y cerraban el arca de los privilegios estuvieran en manos de la justicia, de uno de los regidores y del escribano del concejo. Esta disposición con validez en el ámbito de la Corona de Castilla no siempre fue aplicada. El número de llaves podía variar así como su distribución. Es más, dada la dispersión ya comentada de la documentación municipal, era corriente que las responsabilidades en la conservación de las llaves estuvieran compartidas por diferentes autoridades y oficiales. Algunos ejemplos de la Corona de Aragón nos reflejan esta situación.

En las ordenaciones de Huesca del año 1551 se establece que las cuatro llaves de la puerta principal del archivo estén en poder del justicia, y en su ausencia del lugarteniente, del prior de jurados, del jurado tercero, y del notario del regimiento. Las tres llaves de los cajones del archivo debía tenerlas el prior de jurados. Y el notario del Justicia poseería la llave del armario donde se guardaban sus procesos.

Una situación parecida se recoge en las ordenaciones de Jaca de 1694. El arca de los privilegios, situada dentro del archivo, estaba protegida con

cuatro cerrajas, cuyas llaves recaían en el justicia, en el prior de jurados, en el jurado de hidalgos y en el prior de veinticuatro. El notario del justicia tenía en su poder la llave que abría el archivo del justiciado, ubicado en las mismas casas consistoriales. Por último, los libros del regimiento, conservados en su propia arca pero fuera del archivo, estaban bajo la custodia del prior de jurados, que tenía su única llave.

La pragmática de 1500 se refería exclusivamente al arca de los privilegios, no a la puerta del archivo del común, aunque por extensión pudiera aplicársele esta norma. Las llaves del archivo de la escribanía, de la contaduría, de la mayordomía, del cabildo de jurados, etc no tenían por qué tener esa distribución. Incluso a veces el arca sólo tenía una cerradura. En las ordenaciones de Barbastro de 1657 se señala que la llave del arca de las escrituras recaiga en poder del prior de jurados. El «*scriva de consell*» de Vich tenía en 1450 la llave del archivo de las escrituras de la ciudad. Una única llave parece tener también el archivo de Culla. Todas las llaves del archivo de Alicante estaban en manos, ya en 1459, del «*escribano de la sala*» [Paternina Bono, 1992, p. 51]. Esta situación se repetiría en Santander, en 1797, cuando el Consejo Real ordenó que todas las llaves del archivo fueran entregadas al archivero-contador [Vaquerizo Gil, 1984, p. 8]. En 1835, el secretario del ayuntamiento de Sevilla recibió las tres llaves del archivo de los privilegios de la ciudad, como heredero natural de los antiguos escribanos [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 17].

Por lo tanto una sola persona podía ser la única responsable de la apertura y cierre del arca-archivo, bien porque solo existiera una cerradura o bien porque tuviera en su poder todas las llaves.

Más numerosos son los ejemplos de arcas con dos llaves. El archivo de la localidad riojana de Aldenueva del Ebro estaba cerrado con dos llaves en manos del «*alcalde de los buenos hombres y un regidor de los hijosdalgo*» [Prado Martínez, 1995, p. 308]. En la localidad palentina de Itero de la Vega poseían «*la una uno de los dos alcaldes ordinarios y la otra tenga el regidor que fuere diputado para las cuentas del dicho concejo*». Así se recoge en sus ordenanzas de 1573. Lo mismo había ocurrido en Burgos en el siglo XV. Su arca mayor tenía en 1433 dos cerraduras, cuyas llaves poseían dos regidores [Moratinos, 1985, p. 186]. Idéntica situación se produce en Hernani, tal y como reflejan sus ordenanzas municipales de 1542. Y en Enterrías, Vada y Dobarganes en 1744.

En la localidad leonesa de Armellada, por sus ordenanzas de 1548, las dos llaves del archivo se las repartían el merino y los procuradores. Y en la población extremeña de Villalba estaban en manos de uno de los alcaldes y del escribano del cabildo. En Lon y Brez, pueblo de Cantabria, las dos llaves eran custodiadas por un regidor y por el procurador del concejo. En Frama, en

1614, las dos llaves de su arca las poseían un regidor del concejo, o el procurador, y un vecino. También dos llaves abrían el arca del municipio de Ribadavia, repartidas entre «*diferentes oficiales del concejo*» [Gallego Domínguez, 1988, p. 32].

El archivo del Valle de Arán, ubicado ya entrado el siglo XVII en el castillo de León, tenía dos cerraduras con dos llaves, una en poder del gobernador y otra del notario. Las del archivo de la Comunidad de Daroca, también con dos llaves, estaban en manos del asistente de esa comunidad y del archivero, según sus ordenaciones de 1686.

Constituido el archivo de Madrid como oficina pública, tanto el archivero como sus dos oficiales poseían una de las llaves de la puerta de entrada, pero las que abrían el archivo o alacena secreta seguían repartidas entre los diferentes clavarios [MADRID, 1784].

Todos estos ejemplos de arcas-archivos con dos cerraduras y la diferente distribución de sus llaves (alcalde, regidor, merino, procurador, escribano, vecino, notario, archivero, etc) muestran una realidad mucho más variada que la que podría derivarse de la aplicación estricta de la pragmática del año 1500. Aún así parece ser que lo habitual era que el arca-archivo estuviera cerrado con tres llaves. Al menos esta situación se repite más frecuentemente. Su reparto entre la justicia, generalmente un alcalde o el corregidor, un regidor, casi siempre el decano o el designado como archivista, y el escribano del concejo se refleja ya en Baeza en 1524, en Gata en 1525, en Piedrahita en 1530, en Santo Domingo de Silos en 1536, en Oviedo en 1543, en Lima en 1549, en Orense en 1574, en Astorga en 1607, en Madrid en 1746, en Cullera en 1770, en Jerez de la Frontera, etc.

Sin embargo, en otros archivos, con tres cerraduras, pudo darse otra distribución. Esto parece lógico en las localidades de la Corona de Aragón con un régimen municipal bien diferente del castellano, hasta la aprobación de los decretos de Nueva Planta a principios del siglo XVIII. En 1459, los privilegios y cartas reales de Gerona se conservaban en un arca de tres llaves repartidas en otros tantos jurados [Alberch i Fugueras, 1994, p. 525; Batlle i Prats, 1951, p. 181]. En Vich, su libro de inventarios de 1590 refleja la existencia de un «*armari dels privilegis*», con tres puertas, y cada una de ellas con tres cerraduras, cuyas llaves estaban en poder «*una lo conseller en cap, altre lo conseller ters y altre lo scriva del consell*» [Serra i Campdelacreu, 1879, p. 90].

También en las poblaciones de la corona de Castilla se dieron situaciones diferentes de las establecidas por la pragmática de 1500. Esto parece evidente en épocas anteriores a su aprobación. En Orense, en 1434, las tres llaves del arca estaban repartidas en poder de dos regidores y del procurador del concejo [Gallego Domínguez, 1985, p. 190]. En Madrid las poseían, en 1481,

dos regidores, alcaldes de alzas, y el escribano del concejo [Gómez Iglesias, 1974, p. 29]. Mientras que en Valencia de Alcántara, en 1489, se distribuían entre un regidor, el procurador de la villa, y el vecino en cuyo poder permanecía el arca [VALENCIA DE ALCÁNTARA, 1489].

Todavía son anteriores las ordenanzas dadas por el Infante don Luis a la población navarra de Los Arcos, por las que en 1355 se establecía que las tres llaves del armario-archivo estuvieran en manos de «*tres homes bonos et fieles*» [LOS ARCOS, 1355].

Durante la Edad Moderna algunas localidades castellanas con arcas-archivos de tres cerraduras siguieron manteniendo ciertas singularidades en la distribución de sus llaves. En Orense, en 1555, las tres llaves se las repartían el regidor más antiguo, el procurador general de la ciudad y el escribano [Gallego Domínguez, 1985, p. 192]. En Fuenterrabía, en el siglo XVI, las poseían el alcalde y dos regidores [Vignau Ballester, 1871, p. 258]. En Sevilla en ese periodo solían estar en poder del asistente, o su lugarteniente, del procurador mayor y de los contadores mayores [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 14]. En Vallecas, en 1728, recaían en manos de la justicia, del escribano del ayuntamiento y del archivero [Mateu Llopis, 1945, p. 87]. El archivo de San Sebastián estaba cerrado con tres llaves que tenían el alcalde más antiguo, el primer regidor, y el archivero [SAN SEBASTIÁN, 1758]. Por último, en Tolosa, en 1819, se estableció que las llaves que abrían los armarios de su archivo fueran custodiadas por el alcalde, el fiel y el escribano [TOLOSA, 1819].

Los ejemplos de archivos cerrados con cuatro o más llaves son escasos. En la Corona de Castilla, las ciudades de Burgos, Valladolid y Salamanca dispusieron de arcas de los privilegios con cuatro cerraduras, cuyas llaves recaían en el corregidor, o su alcalde, dos regidores y el escribano del ayuntamiento. Así lo establecen las ordenanzas de Burgos de 1497, de Valladolid de 1549 y las de Salamanca de 1583. El cofre que existía en Segovia en 1546 también disponía de cuatro cerraduras [Cantalejo San Frutos, 1994, p. 836]. En 1761, en Jerez de la Frontera se acordó que la puerta de su archivo tuviera cuatro llaves, entregando una de ellas al diputado del común [Orellana González, 1992, p. 92].

En el Reino de Aragón a los ejemplos ya comentados de Jaca y Huesca debemos unir los de Calatayud, Daroca y Tarazona. Las ordenaciones de Calatayud de 1611 establecen que las llaves del archivo estén en poder de cuatro ciudadanos de los insaculados en la bolsa de jurados primero y segundo. Las de Daroca de 1647 distribuyen sus llaves entre el justicia, el juez, el almotacén y el jurado primero. Y las de Tarazona de 1685 hacen lo propio, de la siguiente manera, «*las dos de las puertas primera, y última del Iusticia, y las otras dos de la puerta de enmedio, de los Iurados preheminentes, y segun-*

do; y las otras llaves del varroncillo, armarios, y retretes, estén en custodia del Jurado segundo» [TARAZONA, 1685].

En Cataluña contaron con cuatro cerrojos, entre otros, los archivos de Manresa y Olot. En la primera de estas localidades ya en 1333 se distribuyeron las cuatro llaves entre otros tantos consejeros [Gasol, 1990, p. 7]. El archivo de Olot estaba cerrado en 1595 «*amb quatre claus diverses de tancaduras de les quals ne tinga una quiscun consol y la quarta lo notari dels negocis de dita universitat*» [Mayans i Pluja, 1987 (a), p. 220].

El archivo del municipio cántabro del Valle de Valderredible disponía, en 1646, de cinco llaves para su apertura y cierre, repartidas de la siguiente manera, «*los dichos alcaldes las dos y los regidores generales las otras dos y el escribano del ayuntamiento la otra*» [VALDERREDIBLE, 1646]. El armario reservado de la ciudad de Lérida contaba también con cinco cerraduras [Gras de Esteva, 1897, p. III]. Y otras tantas el armario de los privilegios de Manresa, construido en 1603 [Gasol, 1990, p. 8].

El armario-archivo existente en las casas consistoriales de Toledo estaba dotado de seis cerrojos. Sus seis llaves parece que estaban en poder del corregidor, de tres regidores archiveros, de un jurado y del escribano mayor del ayuntamiento. El arca de los privilegios del Valle de Arán estaba cerrada, según sus ordenaciones de 1616, con seis llaves. Todavía el archivo de la Junta del Reino de Galicia, en realidad un gran armario, dispondrá a finales del siglo XVII de ocho cerraduras y otras tantas llaves, seguramente repartidas entre los siete representantes de las distintas ciudades y el escribano de la Junta [Artaza Montero, 1994, p. 12].

Todas estas variaciones implican diferencias en la responsabilidad de la conservación, y de la organización del patrimonio documental. Entre los custodios de las llaves figuran autoridades locales y oficiales municipales, que desplegarán además diferentes cometidos en relación con ese patrimonio. Y a esto vamos a referirnos ahora.

De entre las primeras destaca la figura del corregidor.

1. Las autoridades locales

1.1. El corregidor

El capítulo 19 de la pragmática comentada de 9 de junio de 1500 les hizo responsables de «*recoger y reunir los privilegios, sentencias y disposiciones presentadas al Cabildo*». En las reuniones de Cortes se solicita que visiten los archivos. Y en el siglo XVIII se les encomienda «*la conservación de los documentos que contienen el régimen jurídico de la ciudad o villa en cuestión*» [González Alonso, 1970, p. 106, 217 y 277].

Estas referencias obtenidas de fuentes normativas y expuestas en su clásico estudio por B. González Alonso no reflejan en su verdadera dimensión el papel desarrollado por los corregidores en la conservación, organización y difusión del patrimonio documental municipal. Mucho más preciso se mostró ya en el siglo XVI J. Castillo de Bovadilla [Castillo de Bovadilla, 1750, Tomo II, p. 110 y 123].

Para C. Cayetano la responsabilidad de la custodia de la documentación del archivo de villa hasta el siglo XVIII recaía en el corregidor, mientras que la de ordenación, elaboración de índices y búsqueda documental estaba a cargo del escribano municipal [Cayetano Martín, 1985, p. 235].

La responsabilidad de la custodia era compartida por todos los llaveros. En las capitales de corregimiento casi siempre una de las llaves está en manos del corregidor, existiendo más variaciones entre los poseedores de las restantes, como ya hemos visto. Esto le permite participar en las aperturas del archivo. Los llaveros se reúnen por acuerdo de la ciudad [Pino Rebolledo, 1991, p. 36] o bien, más raramente, por orden directa del corregidor [Martín Fuertes, 1980, p. 13]. En algunos casos su presencia le lleva aparejado el cobro de determinados derechos, como se estableció en Ecija en 1765.

Además suele inspeccionar los locales destinados para nuevo archivo. Así lo hizo por orden de la ciudad de Madrid en 1513 [Gómez Iglesias, 1974, p. 30]. Y si no reúnen las condiciones adecuadas puede encargar al ayuntamiento su traslado a otra sede que garantice su *«buena guardia y custodia»* [Pastor Abaigar, 1993, p. 198]. La obligatoriedad de visitar periódicamente los archivos, recogida en ordenanzas municipales como las de Orense, le permite tener un conocimiento directo del estado de conservación de los locales y de las condiciones de instalación de los documentos.

A veces se le encargó la adquisición del arca para conservar la documentación, como ocurrió en Valladolid en 1499 [Pino Rebolledo, 1991, p. 9].

Los corregidores participan activamente en la recuperación de la documentación que ha salido del archivo y no ha sido devuelta. El de Ciudad Real consiguió, en 1595, cartas de excomunión para conseguir su restitución [Bernabeu Novalbos, 1952, p. 10]. El de Orense comunicaba a su ayuntamiento, en 1698, que había recogido diferentes escrituras para que de ellas dispusiera la ciudad [Gallego Domínguez, 1981, p. 188].

Pero sobre todo su labor destaca por partir de su iniciativa buena parte de los procesos organizativos y descriptivos que afectaron a la documentación municipal. Al conde Montemar, a la sazón corregidor de Zaragoza en 1711, se debe la propuesta de *«coordinar»* los papeles de la ciudad presentada en noviembre de ese año [González Miranda, 1981, p. 82].

En 1481 se data el inventario practicado por el corregidor Rodrigo de Mercado del archivo de Madrid [Domingo Palacio, 1875, p. 21]. El inventario

de los fueros, privilegios y provisiones del archivo de la ciudad de Oviedo de 1536 fue realizado por disposición de su corregidor [Villa González-Río, 1978, p. XVII]. El que se conserva de 1547 sobre la documentación sepulvedana se debe a la iniciativa de Antonio de Vega, corregidor de esa localidad y de Aranda [Sáez Sánchez, 1956, p. XXI]. Lo mismo podemos señalar del de León de 1561 [Martín Fuertes, 1982, p. 20] o del de Ciudad Real de 1595 [Bernabeu Novalbos, 1952, p. 9], por poner otros ejemplos.

Por último, algunos corregidores participaron decisivamente en la redacción de las ordenanzas municipales relativas a sus archivos. El corregidor del Principado de Asturias Lorenzo Santos de San Pedro, en 1659, es el caso más significativo pero otros muchos corregidores, con su participación directa en los asuntos municipales, pudieron intervenir y modificar las normas aprobadas para regular los archivos.

Por lo tanto, esta autoridad local asumirá gracias a las prerrogativas determinadas por la legislación castellana del Antiguo Régimen, notables funciones en relación con la documentación municipal. Se preocupará tanto de la conservación como de la instalación, de la organización, de la descripción, del acceso y de la regulación de los archivos locales.

1.2. Los alcaldes o justicias

En las localidades que no son cabeza de corregimiento, o en su ausencia, sus funciones suelen ser desempeñadas por los alcaldes ordinarios o justicias.

Entre las atribuciones desempeñadas por éstos, en sustitución de los corregidores, destaca la posesión de una de las varias llaves del arca o archivo. Por lo tanto su presencia está garantizada siempre que haya que abrir el archivo y acceder a su documentación por motivos dispares. Así está determinado en Baeza [BAEZA, 1524], Gata [GATA, 1525], Santo Domingo de Silos [SANTO DOMINGO DE SILOS, 1536], Cantillana [CANTILLANA, 1550], Aldeanueva de Ebro [Prado Martínez, 1995] o en San Sebastián [SAN SEBASTIÁN, 1758] por poner ejemplos de los siglos XVI y XVIII.

A veces también participan en la realización de los instrumentos descriptivos junto con otros oficiales públicos. En 1643 el ayuntamiento de Ribadavia acordó que el alcalde ordinario, un regidor y el procurador general hicieran inventario del archivo ante el escribano [Gallego Domínguez, 1988, p. 30]. Incluso llegan a asumir las atribuciones de los propios archiveros municipales como ocurrió en Vallecas en diferentes ocasiones a lo largo del siglo XVIII [Mateu Llopis, 1945, p. 82].

También suelen participar en las visitas de inspección. La modificación de las ordenanzas del archivo de villa de Madrid de 1820 así lo establece [Cayetano Martín, 1992, p. 29].

No obstante todo parece indicar que con respecto a la documentación municipal su participación fue menos decisiva que la desempeñada por los regidores, sobre todo por los regidores archivistas, aunque no lo olvidemos presidían los ayuntamientos y concejos en ausencia del corregidor y por ello participaban decisivamente en las tomas de decisiones del común.

1.3. Los regidores archivistas

Junto con los alcaldes o justicias, los regidores constituyen los ayuntamientos castellanos en aquellos municipios que se gobiernan por régimen de concejo cerrado. Los acuerdos aprobados en relación con la documentación local, recogidos en los libros de actas municipales, reflejan la actitud de los regidores en estos temas. Así se explica que en Valladolid en *«los siglos pasados corría el cuidado del Archivo a cargo de los regidores y de los escribanos»* [Pino Rebolledo, 1991, p. 33]. Pero algunos regidores tuvieron atribuciones específicas, sin necesidad de que fueran nombrados comisarios del archivo o regidores archivistas.

Desde la aprobación de la pragmática de 9 de junio de 1500, uno de los regidores es generalmente el custodio de una de las llaves del archivo. Esta atribución a veces es colectiva. En las ordenanzas de Santo Domingo de Silos de 1536 se señala que una de las llaves la tengan *«los regidores»* [SANTO DOMINGO DE SILOS, 1536]. En otras se especifica cuál de los regidores debe poseerla. En San Sebastián esta obligación recae en *«el primer Regidor»* [SAN SEBASTIÁN, 1758]. En Valencia de Alcántara la llave es conservada por uno de los regidores del estado de los hidalgos y escuderos [VALENCIA DE ALCÁNTARA, 1489]. En Aldeanueva de Ebro, una de las dos llaves, estaba en poder desde 1594 de *«un regidor de los hijosdalgo»* [Prado Martínez, 1995, p. 308]. En Cantillana, la poseía el regidor más viejo [CANTILLANA, 1550]. Aunque muchas veces simplemente se señala que sea *«un regidor»*, sin más aclaración, descansando generalmente su designación en el propio ayuntamiento [GATA, 1525; Gallego Domínguez, 1985, p. 192; Santos Canalejo, 1988, p. 13]. Incluso en la localidad cántabra de Frama la llave del regidor podía tenerla en su lugar el procurador [FRAMA, 1614]. Para J. Castillo de Bovadilla la llave debía recaer en el regidor más antiguo, que tenía el título de alférez mayor [Castillo de Bovadilla, 1750, Tomo II, p. 123].

En algunas ciudades los regidores llegaron a tener dos de las llaves que abrían el archivo. Ya en 1497, dos de las cuatro llaves del arca del concejo de Burgos, estaban en poder de dos regidores, turnándose en este cometi-

do cada año, tal y como fue establecido por los Reyes Católicos [BURGOS, 1497]. En Salamanca, junto con el corregidor y el escribano, poseían otras dos llaves «*dos señores Regidores, que por rueda se nombren, uno de cada linage, el último consistorio de cada año*» [SALAMANCA, 1583]. Lo mismo ocurría en Madrid ya en 1481, al estar las tres llaves del arca en manos de dos regidores y del escribano del concejo [Cayetano Martín, 1992, p. 27]. Esos dos regidores eran a su vez alcaldes de alzadas, y así se mantuvo durante bastante tiempo recayendo este cometido en los que desempeñaban esas atribuciones judiciales [Gómez Iglesias, 1974, p. 29]. En Valladolid también se nombraban «*dos Regidores llaveros*» [VALLADOLID, 1549]. Aún así la posesión de las llaves por más de un regidor nos acerca a la figura de los comisionados de archivo, regidores archivistas, clavaros del archivo, etc. que más adelante analizaremos.

La posesión de una o dos llaves implica la presencia de uno o dos regidores en la apertura del arca, es decir, está garantizada su participación siempre que se meta o se saque documentación o simplemente se consulte sin sacarla fuera del archivo. Era bastante usual que varios regidores, no sólo el que tuviera la llave, intervinieran en ello. Así está comprobado en el caso de Orense en el siglo XV [Gallego Domínguez, 1985, p. 190]. Lo mismo ocurría en Astorga en 1576 [Martín Fuertes, 1980, p. 12]. Los ejemplos son numerosos.

Esta responsabilidad en la entrada y salida de documentos del archivo se amplió en ocasiones a la propia conservación del arca. Junto con cometidos colectivos de que los regidores la tuvieran «*bien aderezada*» [BARO, 1620], no sorprende que en ocasiones el arca se conserve en la casa de uno de ellos. Así ocurrió en Orense en el siglo XV antes de ser construida la casa consistorial [Gallego Domínguez, 1985, p. 189-190]. Lo mismo sucedía en Aldeanueva de Ebro durante buena parte del siglo XVI, al ser custodiada la documentación concejil por los regidores en sus propias casas [Prado Martínez, 1995, p. 307]. Varios siglos después, en 1802, el hundimiento de una pared en la de Zamora ocasionó la distribución temporal de la documentación municipal entre las casas de diferentes regidores, mientras se procedía a arreglar los daños [Pescador del Hoyo, 1948, p. 48].

Los regidores, en el desempeño de diferentes comisiones, necesitaban con asiduidad utilizar precedentes documentales por lo que en bastantes ocasiones sacaban documentación del archivo bajo un relativo control. En Talavera de la Reina, como en otras muchas poblaciones, esta saca debía quedar registrada en los libros de conocimientos o de salida de documentos [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 96]. En Madrid, el Consejo Real estableció en 1773 que no se sacara un documento del archivo de villa sin «*asiento y recibo del Capitular... que los pidiesen*» [Domingo Palacio, 1875, p. 42].

A pesar de estas y otras disposiciones parecidas periódicamente se recoge en las actas municipales acuerdos relativos a la reintegración de documentación sacada del archivo por los regidores. En Talavera de la Reina los más reticentes en su cumplimiento eran los «*regidores de pleitos*» [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 97]. Pero la extracción fraudulenta, la ocultación o simplemente el extravío fue numerosas veces denunciada. Así lo hizo Plasencia y su Tierra ante los Reyes Católicos en 1494, inculpando de ello no sólo a algunos regidores [Santos Canalejo, 1988, p. 13]. Lo mismo sucedió en Orense en 1743 [Gallego Domínguez, 1981, p. 181].

La actividad de los regidores no se limitó a participar en la apertura del archivo y a extraer documentos para sus diferentes comisiones. A veces su interés por la reintegración de la documentación, a instancias de sus ayuntamientos, les llevó a conseguir bulas para castigar con la excomunión a los defraudadores. Es el caso del regidor orensano José López de Agra en 1754 [Gallego Domínguez, 1981, p. 182-183].

Pero sobre todo intervinieron decisivamente en algunos de los muchos procesos organizativos y descriptivos de los archivos municipales que se sucedieron en el Antiguo Régimen con desigual éxito.

El memorial de la documentación conservada en el arca de los privilegios de la villa de Madrid en 1513 fue realizado por regidores [Gómez Iglesias, 1974, p. 30]. Justo un siglo después, en 1613, dos regidores madrileños fueron nombrados para «*poner en orden los papeles*» de su archivo [Cayetano Martín, 1986, p. 552]. En 1555 fueron comisionados dos regidores con la ayuda de un escribiente para organizar el archivo de la ciudad de Burgos, sin ningún éxito. Lo mismo sucedió en 1576 [Díez Sanz, 1984, p. 25-26]. El inventario del archivo municipal de León, datado en 1561, fue realizado por el corregidor y uno de los regidores [Martín Fuertes, 1982, p. 21]. El archivo de la ciudad de Orense fue organizado y descrito en 1692 por dos escribanos del ayuntamiento con la ayuda del regidor Juan Antonio de Soto [Gallego Domínguez, 1981, p. 192]. En 1767, el archivo municipal de Santander fue empezado a organizar por el escribano Lorenzo del Cueto, bajo la asistencia de dos regidores comisionados por su ayuntamiento [Vaquerizo Gil, 1984, p. 7]. El catálogo de la documentación municipal de Selva de Camp fue elaborado en 1801 por el regidor Josep Batlle y Jover [Soronellas i Masdeu, 1993, p. 4]. En 1803 dos regidores zamoranos fueron comisionados para recoger, ordenar e instalar los documentos del archivo [Pescador del Hoyo, 1948, p. 8]. En 1806, un regidor y el síndico personero realizaron el inventario del archivo de la localidad gaditana de San Fernando [López Garrido, 1989, p. 13]. Dos regidores comisarios talaveranos redactaron el «*Índice general*» de su archivo en 1817, aunque la presencia de los capitulares de esta ciudad toledana se constata en los procesos organizativos desarrollados también en 1629 y en 1683 [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 91, 94 y 98].

Más que un cometido propio de los regidores, su designación estaría en relación con sus características personales, su formación y aptitudes, pues para la organización y descripción de la documentación municipal estaban más preparados los escribanos de ayuntamiento.

En aquellas localidades en que los regidores son renovados todos los años no faltan normas que regulan la entrega a sus sucesores de la documentación municipal por inventario y «*tomando recibo de ellos*» [BARO, 1620; ARMAÑO, 1651; Prado Martínez, 1995, p. 307-308].

Menos usual es su participación de manera individual en la elaboración de las ordenanzas de los archivos, como ocurrió con el regidor Fabrique Manrique Portocarrero en las aprobadas en Écija en 1564 [ÉCIJA, 1564]. Si es más frecuente la realización de memorias o informes sobre el estado de la documentación, comisionados por los ayuntamientos. Un ejemplo puede ser la elaborada por el regidor madrileño Juan Isidro Fajardo en 1726 [Domingo Palacio, 1875, p. 29-30].

Las principales poblaciones españolas prefirieron que las responsabilidades de los regidores, en cuanto a la custodia, organización, descripción y difusión de la documentación municipal, fueran asumidas por los comisarios del archivo o regidores archivistas designados de forma periódica, y con unos cometidos más amplios que la simple presencia en la apertura del archivo o la realización esporádica de alguna comisión relacionada con la documentación.

A) NÚMERO Y DENOMINACIÓN

El número de estos regidores nombrados generalmente en la renovación anual de oficios municipales varió de uno a tres por localidad. Se nombra uno en Écija como «*regidor diputado del archivo*». La misma denominación recibe el de Sevilla. En Oviedo se le denomina «*clavero del Archivo*» en clara alusión a una de sus funciones, la de custodiar la llave, y también «*archivero*» en las ordenanzas de 1659 de L. Santos de San Pedro.

En Burgos, los dos capitulares encargados del archivo son los «*caballeros archivistas*». Las ordenanzas de Salamanca de 1583 reflejan el nombramiento de dos regidores como «*comisarios de archivo*». Al igual ocurre en Segovia a lo largo del siglo XVI. También es la denominación más usual con la que se conoce en el siglo XVIII y XIX a los dos regidores madrileños encargados del archivo de villa. En Valladolid también son dos los capitulares con este cometido, conocidos como los «*regidores llaveros*», en las ordenanzas de 1549. Pero que en otros documentos, según F. Pino Rebolledo, se les nombra simplemente «*archiberos*», o «*comisarios de los archivos*». En Astorga las fuentes recogen la presencia de, seguramente dos, «*archivistas regidores*» en 1607, aunque en 1751 prevalece la denominación de «*archiveros maiores*»;

uno de ellos era el regidor decano. En una instrucción de 1730 a los capitulares zaragozanos se les menciona como caballeros diputados del archivo.

La ciudad de Toledo desde al menos el siglo XVI nombra todos los años tres caballeros regidores «*archiveros*». Este alto número está en relación con el de cerrojos, seis, de su mueble-archivo.

B) NOMBRAMIENTO

En la mayoría de estas grandes ciudades eran designados por rueda o turno por el propio ayuntamiento durante la renovación anual de oficios. En Salamanca se nombraba uno de cada linaje (Tovar y Reoyo) en el último consistorio de cada año [Pino Rebolledo, 1991, p. 33-35].

C) DURACIÓN EN EL CARGO

Lo normal es que su duración en el cargo fuera de un año coincidiendo con la de los restantes oficios municipales. No obstante, en Burgos se especifica que ninguno de los dos archivistas desempeñe sus funciones por más de dos años, con la advertencia de que «*con el que entrare haya de quedar otro, que lo haya servido el año antecedente*» [BURGOS, 1747], aunque el ayuntamiento podía reelegir y mantener por más tiempo al regidor que demostrara un buen desempeño de su cargo. Así lo hará en 1698 cuando eligió a un regidor como archivero «*por los días de su vida*» [Díez Sanz, 1984, p. 48; Moratinos, 1985, p. 187].

Una situación parecida pudo darse en Oviedo. El regidor clavario del archivo desempeñaba su cargo durante un año. En 1658, el Gobernador del Principado Lorenzo Santos de San Pedro propuso que se nombrara clavero del archivo de por vida entre los caballeros regidores. La ciudad aprobó que desempeñara estas obligaciones por tres años el regidor Antonio de la Villa. Aunque todo indica que los regidores ovetenses no siempre ocuparon el cargo de archivero durante un trienio, existiendo ejemplos de duración anual [Villa González-Río, 1978, p. XVII].

D) CUALIDADES

Teniendo en cuenta que la mayoría de las veces eran nombrados por rueda o sorteo, en nada se valoraba su preparación y aptitudes. No obstante, en las ordenanzas de Burgos de 1747, se destaca como mérito para su reelección como archivistas su «*particular inteligencia, o inclinación en el manejo de los papeles*».

E) JURAMIENTO

La toma de posesión de sus oficios anuales implicaba generalmente que los designados juraran ejercerlos bien y fielmente, cumpliendo los capítulos que se les pusieren concernientes a ellos [BURGOS, 1747]. El clavero del archivo de Oviedo al recibir su llave prometía «*tener e guardar con toda fedelidad e honra deste Ayuntamiento*» [Villa González-Río, 1978, p. XVI].

F) FUNCIONES

Entre sus funciones estaba obviamente la de custodiar las llaves que recibieran del archivo tras prestar juramento, guardándolas en lugar seguro, generalmente en sus casas, para entregarlas a sus sucesores una vez cumplido su mandato. Vigilaban el mantenimiento del «*buen orden*» de la documentación; controlaban que la salida de documentos se hiciera con autorización previa de la ciudad, dejando recibo el solicitante y registrándolo en el libro correspondiente; reintegraban al archivo los que por diferentes razones se encontraran en otras dependencias; e informaban al ayuntamiento de cualquier contingencia. Estas funciones tomadas en su casi totalidad de las ordenanzas burgalesas de 1747 podemos completarlas con las de otras poblaciones.

En Salamanca intervenían además en el traslado de los documentos a un libro copiator [SALAMANCA, 1583]. A ello se unió desde la aprobación de su Reglamento de Propios y Arbitrios en 1763 la tarea de vigilar que el archivero menor realizara el «*yndice de los papeles*» [Infante Miguel-Motta, 1984, p. 378].

Entre las funciones asignadas a los dos regidores madrileños responsables del Archivo en 1716 se encuentra la de recoger todos los documentos municipales sobre propios y sisas, depositados en manos particulares, y ordenar y clasificar esta documentación y los documentos reales, para lo que se podían ayudar con la contratación de un experto paleógrafo [Cayetano Martín, 1986, p. 553]. En 1746 estos dos regidores asistían diariamente al archivo [Gómez Iglesias, 1974, p. 36]. En la instrucción de 11 de abril de 1753 se determina que sean los comisarios y nunca el archivero «*los responsables de los informes, de la búsqueda de documentos y del buen rendimiento del personal de la dependencia*» [Cayetano Martín, 1992, p. 28]. En su reglamento definitivo aprobado en 1784, los comisarios del archivo de la villa de Madrid examinan la memoria anual redactada por el archivero, antes de su presentación en el Ayuntamiento, vigilan el cumplimiento de las normas establecidas en ese reglamento, mantienen en su poder la llave que les corresponde del archivo o alacena secreta, concurriendo con ella siempre que fuera necesaria su apertura, y toman providencias para evitar las desavenencias entre el archi-

vero y sus oficiales [MADRID, 1784]. Aunque para C. Cayetano su tarea fundamental era la de recuperar los documentos perdidos [Cayetano Martín, 1992, p. 29].

En esta línea debemos incluir la actividad del regidor diputado del archivo de Sevilla J. Rodríguez de Rivera, en 1781 [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 16].

El nombramiento de un archivero profesional y pagado de las arcas del común implicaba, como acabamos de reseñar en Madrid, una disminución de las competencias y funciones de los regidores archiveros. Reservándose éstos, como se propuso en Zaragoza en 1730, la supervisión y vigilancia del cumplimiento por el archivero de las normas aprobadas, dando cuenta a la ciudad de lo que entendieran reparable [ZARAGOZA, 1730].

En Valladolid los regidores archiveros eran llamados cada vez que se tuviera que abrir el archivo, como custodios de dos de sus llaves. Debían reconocer el estado del archivo, realizar el inventario de su documentación, y recoger la que por diferentes motivos estuviera fuera de él, colocándola en «*el sitio correspondiente*» [Pino Rebolledo, 1991, p. 36]. Muy parecidas son las funciones del caballero regidor clavero del archivo de Oviedo [Principado de ASTURIAS, 1659]. Los caballeros regidores archiveros de Toledo participaron decisivamente en la elaboración de los instrumentos descriptivos conservados de ese archivo. Así se refleja, por ejemplo, en el elaborado entre 1732 y 1735 que todavía sigue siendo utilizado [Sierra Corella, 1931, p. 15].

G) SALARIO

Pocos datos ofrecen las fuentes sobre los salarios percibidos por estos regidores archiveros. Lo normal era o que no cobraran ningún derecho por estos cometidos o que percibieran ciertas gratificaciones por trabajos específicos. Sin embargo en Burgos, en 1747, se estableció un salario anual para cada uno de los dos regidores archivistas de tres mil maravedíes, cantidad muy simbólica, pues no llega ni a cien reales.

La propuesta presentada, por el Gobernador del Principado de Asturias al ayuntamiento de Oviedo, en 1658, de nombrar un archivero de por vida entre sus regidores implicaba pagarle diez mil maravedíes de salario anual. Finalmente se aprobó que percibiera 20 ducados anuales, como ocurrió en 1671. Años después se reduciría esta cantidad a la mitad, para a partir de 1721 no recibir nada el regidor clavero por el desempeño de sus obligaciones [Villa González-Río, 1978, p. XVII-XVIII].

Desde 1765, y según M. Martín Ojeda, el regidor diputado del archivo de Ecija percibía treinta reales, por participar en la apertura del archivo.

1.4. Los jurados

El gobierno municipal en la Corona de Aragón hasta las modificaciones introducidas por los decretos de Nueva Planta a principios del siglo XVIII dependía de la renovación anual de oficios por insaculación. Entre las bolsas de oficios se encontraban las de elección de jurados. En Castilla muchas localidades contaban con jurados aunque sus atribuciones y forma de designación eran bien diferentes. No parece que tuvieran una intervención decisiva en los archivos locales, aunque participan en las deliberaciones municipales, y así se refleja en los libros de acuerdos correspondientes. En ciudades como Sevilla, Murcia, Córdoba y Toledo, los jurados cuentan con su propio archivo. Y al menos en ésta última presenciaban la apertura del archivo secreto del regimiento [Sierra Corella, 1931, p. 8], aunque este derecho no está recogido en las ordenanzas toledanas de 1528.

Una situación diferente se refleja en algunas poblaciones del País Vasco. En San Sebastián los jurados eran los encargados de custodiar la documentación local, con arreglo a lo establecido en las ordenanzas municipales de 1489. Como custodios de las llaves del arca de los privilegios controlaban la entrada y salida de documentos, que entregaban a sus sucesores por inventario al cumplir su mandato anual. Uno de ellos, Luis Cruzat, fue el redactor del inventario más antiguo conservado de ese archivo que data de 1581 [Banus Aguirre, 1986, p. 7-8].

Buena parte de las competencias que en Castilla tienen asignadas los regidores, en relación con sus archivos municipales, recaen en la corona aragonesa en sus jurados o consellers. En Gerona, ya en el siglo XV, son los jurados los «*devotos custodios*» de la documentación municipal, obligándose a ello al jurar sus cargos, y recaer en sus manos la posesión de las llaves del arca [Batlle i Prats, 1951, p. 181].

En Castellón, ya en 1455, tras la renovación anual, los jurados nuevamente electos debían realizar el inventario de los privilegios y provisiones con la ayuda del nuevo escribano [CASTELLÓN, 1455].

Las ordenaciones de Huesca de 1551 establecen que las llaves de su archivo estén en poder del justicia, del prior de jurados, el jurado tercero y el notario del regimiento. Para la salida de documentos se requiere obviamente su presencia junto con cuatro vecinos de los insaculados, y todos los jurados de la ciudad o la mayor parte de ellos. Los jurados salientes y entrantes estaban obligados a visitar el archivo un día determinado [HUESCA, 1551].

Los custodios de las llaves de Calatayud, según sus ordenaciones aprobadas en 1611, eran cuatro ciudadanos de los insaculados en bolsa de jurados primero y segundo, designados por su concejo, con un salario anual de ocho sueldos. Estos clavaros debían prestar juramento de «*averse bien y lealmente*

en la guarda y custodia de la dicha Arca y Archiu», y participar obviamente en su apertura [CALATAYUD, 1611]. En las de Daroca, de 1647, se establece que una de las cuatro llaves de su archivo esté en poder del jurado primero. También con los demás clavaros tenía que prestar juramento, e intervenir en su apertura [DAROCA, 1647]. La llave del arca de Barbastro estaba en manos del prior de jurados. Sus cuatro jurados intervenían en la realización del inventario y de la visita anual del archivo, junto con los seis consejeros, el secretario y otros ministros [BARBASTRO, 1657]. En las ordenaciones de Alcañiz de 1658 se señala que el notario no pueda mostrar las escrituras del archivo sin la licencia de los jurados y del consejo municipal [ALCAÑIZ, 1658].

Los jurados de Tarazona, junto con el justicia y lugarteniente, estaban obligados a registrar, componer e inventariar su archivo. Su jurado *«preheminent»* estaba encargado de solicitar la restitución de escrituras sacadas de éste. Ese jurado y el jurado segundo poseían dos de sus cuatro llaves, y las otras dos recaían en el justicia. Todos prestaban el obligado juramento al tomar posesión de éstas [TARAZONA, 1685].

En la localidad catalana de Fatarella, las dos llaves que abrían su archivo las tenían su jurado mayor y el secretario o escribano del consejo [FATARELLA, 1705].

1.5. Los procuradores

El cargo de procurador general llevaba consigo en aquellas poblaciones en donde existía unas funciones más específicas, en relación con los archivos, que las desplegadas por los regidores en Castilla o los jurados y consejeros en Aragón. Como representante de los vecinos y hombre de su confianza se encargaba de velar por la integridad de la documentación custodiada en el arca [Gallego Domínguez, 1988, p. 31]. Así ocurría en Ribadavia en el siglo XVII, y en otros municipios gallegos con bastante anterioridad.

En Orense, en 1435, el procurador poseía una de las tres llaves que abrían el arca, participando por lo tanto en todas sus aperturas. Esta situación se mantuvo hasta bien entrado el siglo XVI. Todavía la poseía en 1555, pero en 1574 su llave está ya en poder del corregidor [Gallego Domínguez, 1985, p. 190-192]. Esto no le impedirá realizar informes sobre la situación del archivo, como el elaborado en 1756 [Gallego Domínguez, 1981, p. 188].

Los procuradores generales de Orense, en la defensa de los intereses del común de vecinos, poseyeron durante buena parte de los siglos XV y XVI una de las llaves del archivo, controlando las entradas y salidas de documentos, e informaron a la ciudad siempre que así lo creyeron conveniente sobre las mejoras susceptibles de introducir en su conservación y organización. Es-

tas funciones se repiten en otras localidades. Posee una de las llaves del archivo el procurador general de Valencia de Alcántara en 1489, y los de la localidad leonesa de Armellada en 1548. El procurador del concejo de la población cántabra de Lon y Brez tiene en su poder una de las dos llaves del arca según las ordenanzas de esta localidad de 1594. Lo mismo ocurre en la de Frama, por las aprobadas en 1614. También así está establecido en las ordenanzas del principado de Asturias de 1659. Y a veces, aunque no disponga de una de las llaves, participa en las aperturas del archivo junto con otras autoridades locales. Esto está constatado en Astorga en 1576 [Martín Fuertes, 1980, p. 12] pero los ejemplos son más numerosos.

El procurador mayor de Sevilla dispuso, durante al menos los siglos XVI y XVII, de una las llaves del archivo de privilegios de la ciudad, siendo normalmente «*el responsable directo de las aperturas*» [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 14]. También acudió al regimiento con extensos informes sobre los deterioros sufridos en su conservación y organización, como el elaborado en 1585. Pero, además, en Sevilla las personas que desempeñaron este cargo intervinieron decisivamente en la realización de algunos inventarios, como el de 1519, o se encargaron de solicitar la reintegración al archivo de documentos sacados con anterioridad, obteniendo para ello «*cartas generales y censuras,... y cartas paulinas del nuncio*» [Fernández Gómez, 1995 (c), p. 63].

Estas otras funciones también serán desempeñadas por otros procuradores en diferentes poblaciones. El de Ribadavia denunció en 1643 la necesidad de realizar un recuento e inventario de la documentación existente en el arca. Así lo aprobó su regimiento, asistiendo a ello el propio procurador [Gallago Domínguez, 1988, p. 30]. El procurador de causas del número de Talavera de la Reina también fue encargado de participar en la realización del inventario de su archivo en 1683 [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 94]. Y en 1806 el ayuntamiento gaditano de San Fernando comisionó a uno de sus regidores y a su procurador síndico personero para inventariar su documentación [López Garrido, 1989, p. 13].

Mucho más general y propia fue su intervención en la recuperación de la documentación sacada del archivo y que por diferentes razones no había sido reintegrada. El ayuntamiento de Oviedo, a petición de su procurador general, obtuvo en 1688 una paulina para que las personas que retenían padrones, filiaciones y otros documentos los restituyesen a su archivo [Villa González-Río, 1978, p. XIX]. Un acuerdo del ayuntamiento de Madrid de 1716 establecía que el procurador general «*previniéndoselo los caballeros capitulares, pida la excomunión o excomuniones que le parecieren*» para recuperar los documentos no devueltos [Domingo Palacio, 1875, p. 25]. En 1756 el ayuntamiento de Talavera de la Reina comisionó a su procurador general para recoger todos los documentos sacados de su archivo por diferentes comisiones [García Ruipérez

y Gómez Díaz, 1995, p. 95]. Y lo mismo hizo el de Torrelavega al dar poder a su procurador, en 1763, para que *«solicite el descubrimiento de mucos [sic] papeles que faltan y estarán dispersos sin duda entre barrios particulares, que no los deben tener»* [Gutiérrez Alonso, 1995, p. 17].

Recuperar documentos no era una tarea fácil como más adelante veremos, y aunque este cometido solía recaer en los procuradores, muchas veces fueron ellos los más remisos a devolver la documentación que habían sacado del archivo para defender los intereses de los ciudadanos. Su actividad pleitista favorecía la utilización y posesión temporal de documentos municipales. La de uso frecuente o en trámite solía estar en poder del escribano, de los procuradores generales o de otras autoridades. Al menos esto ocurría en Tui en el siglo XVI [López Gómez, 1985, p. 208]. Por ello en las ordenanzas del principado de Asturias de 1659 se encarga a los escribanos y procurador general que depositen en su Archivo un traslado o copia de todos los documentos que pasaran ante ellos y fueran de interés para el principado. Lo mismo debían hacer los de la ciudad de Oviedo [Villa González-Río, 1978, p. XVIII].

En 1643 fueron apercibidas, con prisión, algunas autoridades locales salientes de Ribadavia, entre ellas el procurador general, si no devolvían los documentos que tenían en su poder [Gallego Domínguez, 1988, p. 31]. En 1780 se recibieron en el archivo de Sevilla los *«papeles acumulados en su domicilio por el conde de Mejorada, durante muchos años procurador mayor del Cabildo, devueltos tras su muerte a la ciudad por su hijo y sucesor»* [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 16]. Este y otros casos explicarían la presencia de documentación municipal en los archivos personales y familiares.

Entre otros cometidos que podían desarrollar los procuradores caben mencionar sus tareas de inspección del trabajo de los archiveros. Su asistencia a la visita anual al archivo de la villa de Madrid está contemplada en la instrucción de 1753 [Domingo Palacio, 1875, p. 36-37]. El procurador síndico personero de Salamanca, según el reglamento de propios y arbitrios de esa ciudad aprobado en 1763, debía celar porque el archivero menor realizara el índice de los papeles y los tuviera debidamente colocados [Infante Miguel-Motta, 1984, p. 378]. Incluso en ocasiones fue el propio procurador general el que desempeñó el oficio de archivero, como ocurría en Vallecas en 1829 [Mateu Llopis, 1945, p. 105].

Todos los ejemplos señalados se refieren a poblaciones de la corona de Castilla. No parece que en la de Aragón la presencia de los procuradores sea significativa, y además sus funciones difieren de las ya analizadas. Los capítulos que regulan las funciones de los archiveros de Tortosa fueron elaborados por los procuradores y el consejo de la veintena, con autorización previa del consejo general de la ciudad [TORTOSA, 1579]. Las ordenaciones de Tarazona de 1685 atribuyen competencias a su procurador para hacer cumplir las obli-

gaciones establecidas a los clavaros del archivo, estando capacitado para instar y exigir determinadas penas [TARAZONA, 1685].

2. Los oficiales municipales

2.1. Los escribanos

Los regidores, y otras autoridades locales, para cumplir con sus obligaciones documentales se servían en muchas ocasiones de los escribanos del concejo. De ahí que se haya afirmado que *«fueron los notarios del municipio, los escribanos del número de la villa o más recientemente los secretarios del Ayuntamiento quienes, como peritos en el oficio, se ocupaban del correcto mantenimiento de la documentación»* [Pastor Abaigar, 1993, p. 195].

Los escribanos municipales solían tener en su poder una de las llaves del archivo de privilegios, por lo que participaban en todas sus aperturas. Además la mayor parte de los inventarios conservados fueron hechos por ellos o con su participación [Pino Rebolledo, 1991, p. 37-38]. El archivero de la villa de Madrid estaba encargado de la *«ordenación, elaboración de índices y búsqueda documental»* [Cayetano Martín, 1985, p. 235]. Los responsables del archivo de Barcelona eran ya a fines del siglo XIV el notario de la ciudad y el escribano del racional [Vinyoles, 1994-1995, p. 1.510].

Los escribanos o fieles de fechos eran en muchas localidades los principales responsables de la elaboración y conservación de la documentación municipal, sobre todo en las más pequeñas. A los *«libros que han de llevar los Escribanos»* ya se refirió E. Corral García de manera general en su estudio sobre *El Escribano de Concejo en la Corona de Castilla* (Burgos, 1987).

En bastantes ordenanzas municipales, tanto en Castilla como en Aragón, se recogen capítulos referentes a los escribanos, siempre relacionados con sus quehaceres documentales. Así, por ejemplo, las ordenaciones aprobadas por Carlos II, en 1687, para la isla de Ibiza incluyen con detalle los libros que debían llevar los escribanos de su universidad. Esta normativa nos recuerda el método establecido en la escribanía del ayuntamiento de Burgos en 1766, o el plan aprobado en Tolosa en 1819, de los que ya hemos hablado.

Entre las funciones desarrolladas por los escribanos de concejo vamos a prestar atención a las relacionadas con la conservación documental, con su organización y descripción y con su difusión y acceso.

A) CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

Casi siempre los escribanos poseen una de las llaves del archivo de privilegios, del común o de la ciudad. La poseía el escribano mayor de Burgos

según las reales ordenanzas recibidas por la ciudad en 1497; el escribano del concejo de Ecija ya al menos en 1524, el de Gata en 1525, el de Santo Domingo de Silos en 1536, etc. En 1574 la llave del archivo que poseía el escribano de Orense se distinguía de las otras dos por tener la borla de color verde [Gallego Domínguez, 1985, p. 192].

En las localidades de la Corona de Aragón también era habitual que poseyera una de las llaves del archivo. Y a veces parece que esa responsabilidad llegó a ser única, no compartiéndola con otras autoridades locales. Pedro III, en unas ordenaciones dadas a Tárrega en el siglo XIV, encarga al escribano de su universidad el cuidado de las escrituras de la paeria [Gonzalvo i Bou, 1989, p. 163]. Alfonso IV el Sabio en 1450 al crear o reformar el archivo de Vich lo «*coloca bajo la inmediata y única salvaguardia del escribano, o secretario del Concejo*» [Serra i Campdelacreu, 1879, p. 20]. Un acuerdo del Consell de Vich de 1672, recogido por este autor, refleja que el escribano de la corporación tenía en su poder «*las llaves*» del archivo. No obstante dentro del archivo estaba el arca de los privilegios con tres cerraduras cuyas llaves sí estaban en manos de tres personas distintas. Una de ellas era el escribano del Consell [Serra i Campdelacreu, 1879, p. 90].

En Alicante, un mandato de Juan II, datado en 1459, ordena «*que las llaves del Archivo las tuviera el escribano de la Sala*» [Paternina Bono, 1992, p. 51]. El notario del Justicia de Jaca poseía la única llave que permitía abrir su archivo ubicado en un lugar propio en las mismas casas consistoriales [JACA, 1694].

Salvando estos ejemplos significativos, lo normal era, al igual que ocurría en Castilla, que los escribanos compartieran la responsabilidad de la custodia de las llaves con jurados y consejeros. En 1595 al crearse el archivo de la universidad de Olot, el «*notari dels negocis de dita Universitat*» queda encargado de conservar una de las cuatro llaves [Mayans i Pluja, 1987 (a), p. 220]. En la localidad valenciana de Albaida es el escribano de los jurados el custodio de una de las llaves de su archivo [ALBAIDA, 1685]. En Fatarella, el «*secretari o escrivà del dit Consell*» poseía una de las dos llaves del «*arxiu de la vila*» [FATARELLA, 1705].

A esta faceta de custodios de una de las llaves del arca o archivo del concejo, debemos unir sobre todo en la Edad Media la de conservar en sus casas la propia documentación municipal, incluida o no en un arca.

Seguramente durante buena parte del siglo XV, en Alcalá de Henares, «*al no existir una casa consistorial hasta principios del siglo XVI, lo más seguro es que la documentación recibida y producida por el concejo se guardara en la casa de alguno de los componentes del mismo. En este sentido lo que parece más probable... es que fuera el escribano del concejo quien custodiara dichos testimonios escritos*» [Castillo Gómez, 1992, p. 109].

El arca de los privilegios de Oviedo en 1502 *«por acuerdo expreso del Ayuntamiento la tenía el escribano en su casa»* [Villa González-Río, 1978, p. XV].

Lo mismo parece constatarse en Orense, ya que hasta mediados del siglo XVI *«el guardador del archivo será el escribano»* aunque las llaves del arca estén repartidas [Gallego Domínguez, 1985, p. 191].

En Indias, durante la conquista, también fue muy corriente que la *«documentación la guardaba el escribano de cabildo en su casa, que al cesar la entregaba a su sucesor»* [Bayle, 1950, p. 19].

En las casas consistoriales construidas en la mayor parte de los municipios españoles, en iglesias u otros edificios, se conservaría la documentación municipal, y sólo hechos aislados relacionados con guerras o catástrofes naturales provocarían la dispersión de ésta por casas de particulares. Cuando se produzcan estas situaciones se acudirá de nuevo al escribano. Así ocurrirá durante el terremoto sufrido por Santiago de Chile en 1547. Por poner otro ejemplo, en 1820 la documentación del ayuntamiento de Alcalá de Guadaira *«se encontraba entonces en la casa del Escribano del Cabildo, D. Rafael de Lemos, ya que las casas capitulares estaban en ruina»* [Inventario, 1987, p. 11].

Los escribanos hasta principios del siglo XVI pudieron conservar en sus casas el arca del concejo donde se conservaba la documentación de la ciudad, y a partir de entonces con la construcción de las casas consistoriales sólo en circunstancias excepcionales pudieron recoger en sus moradas el archivo de privilegios o del común. La documentación municipal más reciente que afectaba a la escribanía, cumplida su tramitación o todavía pendiente de resolución, era mantenida por éste en su poder. Parte de ella se incorporaría con el tiempo al archivo de la ciudad, como ocurrió en 1553 en Zamora [Pescador del Hoyo, 1948, p. 6]. Otra parte quedaría en poder del escribano y de sus sucesores, pues no olvidemos que muchos de ellos eran escribanos del número. Y una tercera, difícil de cuantificar, se perdería para siempre, vendida como papel viejo o simplemente destruida.

Son muchos los ejemplos que reflejan esta situación. Varios escribanos de Plasencia y su tierra fueron denunciados en 1494 por ocultar documentos y no depositarlos en el arca del común [Santos Canalejo, 1988, p. 13]. En 1549 el notario Miguel Español depositó en el archivo de Zaragoza varias ordenaciones y otros documentos originales que le había entregado un antiguo escribano [González Miranda, 1981, p. 82]. Ese mismo año, el concejo de Orense manda a varios escribanos de la ciudad ante los que habían pasado escrituras tocantes al regimiento que las diesen y entregasen al escribano del concejo, para que las tuviera en su poder y diera cuenta de ellas [Gallego Domínguez, 1985, p. 191]. A partir de 1659 se *«reclama a los escribanos de*

número de la Ciudad la documentación que tienen en sus archivos particulares, pertenecientes al Municipio» de Oviedo. A lo largo del siglo XVIII, el ayuntamiento ovetense recordará repetidamente a sus escribanos esta obligación, lo que refleja su incumplimiento [Villa González-Río, 1978, p. XIX-XX].

La participación de los escribanos en la recuperación de documentación municipal fue testimonial, correspondiendo esta función a las autoridades municipales, regidores archiveros y procuradores, principalmente. En ocasiones se limitaron a poner en conocimiento del regimiento su pérdida, como hizo el notario y escribano de la *paeria* al consejo municipal de Tárrega en 1473, denunciando el robo de varios privilegios [Gonzalvo i Bou, 1989, p. 163]. Y a veces por su mediación se lograron censuras generales contra los que mantenían sin autorización documentación municipal. Es el caso del escribano burgalés Iñigo Zumel en 1554 [Díez Sanz, 1984, p. 23].

Junto con los intereses particulares de carácter económico, que incitaban a algunos escribanos a entender como propia la documentación de origen municipal, pues no en vano podían percibir derechos por sus copias o traslados, el desinterés de algunas autoridades locales, o la simple negligencia podían contribuir a mermar el patrimonio documental local custodiado por los escribanos. La renovación anual del escribano de concejo, práctica seguida en muchas localidades, dispersaba las responsabilidades en la conservación de la documentación y facilitaba las pérdidas al disminuir el control, si no estaba inventariada y no se realizaban las actas de entrega entre los escribanos entrante y saliente. Los problemas ocasionados por la renovación anual, señalados por ejemplo en el Plan de la escribanía de Tolosa del año 1819, podían incrementarse cuando los escribanos de concejo ejercían su cargo de por vida. No son raros los procesos seguidos contra los familiares de escribanos fallecidos por poseer documentación municipal. Varios libros de acuerdos, escrituras de censos, vecindarios y otros documentos estaban en poder de algunos de éstos en Orense en 1754 [Gallego Domínguez, 1981, p. 182-183].

De esta situación no se escapaba ni siquiera la serie documental municipal más emblemática, las actas del concejo, que estaban generalmente en poder del escribano, bien en el archivo de la escribanía existente en las casas consistoriales, en su arca-mesa, o en sus propias moradas, pues raramente se refleja su presencia en el archivo de privilegios o del común. En el siglo XV, el escribano de Castellón entregaba a su sucesor al terminar su gestión anual «*entre otros menesteres de profesión el libro de actas –Llibre de Consell–*» [Roca Travar, 1951, p. 209]. Los escribanos mayores del ayuntamiento de Burgos tenían en su poder, en 1508, diferentes escrituras de la ciudad. Y en 1510 se habilitó un espacio en la torre de Santa María de esta ciudad para custodiar los libros de actas ya que hasta entonces muchos de ellos «*se encon-*

traban en la morada del escribano mayor Gonzalo de Cartagena... e que ha parecido faltar algunos libros e quadernos de algunos años» [Díez Sanz, 1984, p. 19]. También en 1706 se acordó meter en el armario construido para archivo de la villa de Sitges los libros del consejo municipal que tenía el escribano [Panyella, 1982, p. 90]. En Sevilla, como ya vimos, no se consiguió hasta 1812 que los escribanos capitulares depositaran en el archivo de la ciudad los libros y legajos de sus oficios conservados en sus propias casas. Entre ellos estaban los libros de actas [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 16]. La presencia de actas capitulares cosidas dentro de los protocolos notariales de algunas localidades, sobre todo en las más pequeñas, es un hecho constatado que redundaba en lo ya expuesto.

También en relación con la conservación documental debemos referirnos al papel ejercido por los escribanos municipales en la realización de copias y traslados de documentos para preservar los originales o facilitar su utilización ante las dificultades de lectura provocadas por los cambios de escritura, de lengua o el deterioro de los soportes. Dado que éste era un trabajo inhabitual suele producirse por orden de las autoridades municipales, acompañando los sucesivos intentos organizativos de los archivos locales, al menos cuando afecta a un buen número de documentos, generalmente privilegios y escrituras. Las copias puntuales de uno o varios documentos son más frecuentes, vinculadas a su salida del archivo para un asunto concreto. No falta tampoco la participación de los escribanos en la búsqueda en otros archivos de documentos referentes a su localidad.

Los libros copiadores de privilegios, existentes en muchos archivos, antes incluso de las disposiciones de los Reyes Católicos de 1501, son el reflejo más evidente y llamativo de la participación de los escribanos en la conservación documental a través de las copias autenticadas de documentos originales. Su condición de fedatarios públicos facilitaba su participación en estos menesteres.

Los escribanos ejercerían también un papel decisivo en buena parte de los procesos organizativos y descriptivos realizados en los archivos municipales durante el Antiguo Régimen.

B) ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Los escribanos como expertos en la redacción de documentos conocían con suficiencia las características de los distintos tipos documentales diplomáticos. A muchos de ellos les permitía su formación leer con claridad textos redactados utilizando diferentes escrituras. Además durante sus años de prácticas en otros escribanías, requisito imprescindible si querían presentarse al examen para la obtención del título de escribano real, habían comprobado los

criterios seguidos para organizar la documentación por otros escribanos. En las principales localidades los escribanos municipales son escribanos del número, y por lo tanto fedatarios públicos, con suficientes años de experiencia como para detentar estas importantes y por lo general bien remuneradas escribanías mayores.

Todos estos factores les convertían en las personas más preparadas para afrontar con rigor un proceso que podía durar varios años. Nos referimos a la organización y descripción del archivo de privilegios, secreto o del común. En cuanto al archivo de la escribanía, el de la contaduría, o el mantenido por otros oficiales raramente son objeto de atención por el ayuntamiento, y sobre su organización y descripción ofrecen pinceladas someras las actas de entrega cuando existen.

La realización de los inventarios, como se les denomina en la época, se ampara en decisiones de las autoridades locales. Los escribanos se limitan a cumplir los acuerdos de los cabildos, los autos de los corregidores o los capítulos de las ordenanzas, como las de Valladolid del año 1549. Dado el gran trabajo que suponía este proceso, y que debían de realizar además de sus otras ocupaciones diarias, era bastante normal que delegaran en otros escribanos de su confianza, cuando eso era posible. El primer inventario conocido del archivo de Sevilla, de 1519, fue obra de Gonzalo de Baeza, lugarteniente del escribano mayor de la ciudad [Fernández Gómez, 1995 (b), pág. 14]. En ese proceso el escribano suele estar acompañado, o sometido a la inspección de otras personas, generalmente los regidores archiveros u otras autoridades locales.

El inventario de los fueros, privilegios y provisiones de Oviedo fue elaborado en 1536 por el escribano San Juan de Ortiz [Villa González-Río, 1978, p. XVII]. El arreglo del archivo de Vich fue encargado en 1619 a dos notarios [Serra i Campdelacreu, 1879, p. 21]. Los escribanos del ayuntamiento de Talavera de la Reina, bajo la inspección de dos regidores, elaboraron en 1629 uno de los primeros inventarios de su archivo [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 91]. El de Ribadavia, fechado en 1643, fue realizado por el alcalde ordinario, un regidor y el procurador general, ante el escribano de la villa [Gallego Domínguez, 1988, p. 30-31]. Por lo tanto los escribanos pudieron controlar por sí mismos todo el proceso organizativo que culminaría en la redacción del inventario o bien limitarse a anotar, a registrar, las indicaciones de otros comisionados, generalmente autoridades locales. No faltan situaciones intermedias en las que son copartícipes en las responsabilidades derivadas del arreglo del archivo. El inventario redactado del archivo de Oviedo en 1658 fue realizado por el clavero Antonio de la villa, con la asistencia de un cura párroco y del escribano del número del ayuntamiento de la ciudad [Villa González-Río, 1978, p. XIX]. Lo mismo ocurrió en Talavera de la Reina en 1683 al compartir esas tareas uno de los escribanos del ayuntamiento con el

procurador de causas del número [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 94]. Y en Orense en 1692, siendo comisionados de la composición de sus papeles los dos escribanos del ayuntamiento con la ayuda de un regidor.

En una de las bases propuesta por Cristóbal del Barco al ayuntamiento de Madrid, en 1717, para el arreglo del archivo de villa se señala expresamente que se buscase «*persona inteligente y práctica en el conocimiento de letras antiguas, para descifrar las que hubiere procurando que fuese Escribano Real, de número o de provincia, con el objeto de poder autorizar los tantos y copias que se hicieren*» [Domingo Palacio, 1875, p. 27].

Los escribanos con conocimientos paleográficos, que tuvieran el título de maestros revisores de letras antiguas, eran los más preparados para afrontar la realización de traslados y copias de documentos antiguos, y su presencia era necesaria para organizar la documentación más antigua, escrita en una letra muy diferente de la humanística cursiva utilizada en el siglo XVIII. Algunas corporaciones municipales no dudaron en contratar los servicios de escribanos de otras poblaciones que reunían esas características y experiencia suficiente. En 1767 el ayuntamiento de Santander encargó al escribano Lorenzo del Cueto y Zulueta, «*persona inteligente en todo género de letras*», residente en Vitoria, que se trasladara a la ciudad cántabra para organizar su archivo, como así hizo [Vaquerizo Gil, 1984, p. 6]. El primer ordenador del archivo de Castellón fue José Mariano Ortiz en la segunda mitad del siglo XVIII. Este escribano de Valencia fue elegido por estar versado en «*lectura de documentos y manuscritos*» [Roca Travar, 1951, p. 210].

Tanto Santander como Castellón buscaron en el siglo XVIII fuera de sus localidades y al margen de sus propios escribanos, otros que les garantizaran unos resultados óptimos a la hora de afrontar con éxito la organización y descripción de sus archivos. En otras ocasiones se acudió a los servicios de escribanos salientes, que a sus amplios conocimientos de la institución podían unir una mayor dedicación, al disponer de más tiempo. En Cullera fueron comisionados en 1778, para el arreglo y descripción del archivo, Nadal Vilaragut, escribano que había sido de su ayuntamiento durante dieciocho años, y un escribiente-papelista [Villalmanzo Cameno y Giner Perepérez, 1978, p. 29-30]. Aunque lo normal siguió siendo que los escribanos de concejo se encargaran de estas tareas con diferente fortuna.

El escribano mayor de Valencia Andrés Tinajero realizó el inventario del archivo de esta ciudad entre 1729 y 1732 [Mateu Llopis, 1953, p. 12]. El de San Sebastián, redactado en 1740, es obra de Martín de Uribe, escribano real y del número, y vecino de ella [Banus Aguirre, 1986, p. 129]. Entre 1741 y 1771 estuvo trabajando en el archivo de privilegios de Sevilla el escribano real Luis Jacobo Velázquez [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 15]. El inventario de privilegios... y papeles de Cáceres del año 1750 es obra del escribano Juan Antonio Criado

Valera [Floriano Cumbreño, 1934, p. 11]. El escribano de concejo de Sepúlveda Manuel de Ayllón Merino ayudó al padre Velázquez en la elaboración del libro becerro y abecedario de la documentación de la villa de Sepúlveda [Sáez Sánchez, 1956, p. XXVII]. El primer inventario conservado de la localidad mallorquina de Campanet data de 1769 y se debió a su escribano y secretario Mateo Alemany y Rosselló [Segura y Salado, 1985, p. 443]. Pedro Antonio de la Escosura, escribano del número de Oviedo, llevó a cabo entre 1785 y 1790, el inventario del archivo ovetense, años antes de que fuera nombrado escribano del ayuntamiento [Villa González-Río, 1978, p. XXIII]. En 1791, Manuel González Piñuela, escribano del ayuntamiento de Valladolid, está haciendo el «*arreglo de los papeles del archivo*» [Pino Rebolledo, 1991, p. 29]. El inventario de Tolosa del año 1832 es obra de Juan Antonio de Soroeta, escribano del ayuntamiento y abogado de los Reales Consejos [Anguera, Juana y Orube, 1987, p. 350].

Todos estos ejemplos vienen a reflejar la presencia y participación de los escribanos en la organización y descripción de la documentación municipal durante el Antiguo Régimen. En estos cometidos no van a ser los únicos como más adelante veremos.

Los escribanos además de elaborar los inventarios llegaron en ocasiones a redactar índices de los libros de acuerdos para facilitar su utilización. En Vich se conserva el índice de los acuerdos del consejo municipal entre 1524 y 1700. Esta tarea fue iniciada en 1703 por el escribano del ayuntamiento José Lucía [Serra y Campdelacreu, 1879, p. 23]. El catálogo del archivo valenciano redactado por el escribano Andrés Tinajero entre 1729 y 1732 se completa con un «*Índice de los Manuals de Consells...*», que recoge acuerdos desde 1306 hasta 1728, ordenados por materias y dentro de éstas por fechas [Mateu Llopis, 1953, p. 12].

C) CONSULTA Y ACCESO

Los principales usuarios de la documentación municipal durante el Antiguo Régimen son los escribanos de concejo, no ya sólo porque tienen bajo su control la amplia documentación de la escribanía, y series tan importantes como los propios libros de acuerdos, sino porque además disponen generalmente de una de las llaves del archivo del común, cuando no de todas, dada la perniciosa costumbre que tenían algunos llaveros de entregar la suya al escribano para evitar la pérdida de tiempo que les suponía participar en las aperturas del archivo.

Esta situación les permitía un acceso fácil y directo a la mayor parte de la documentación municipal para la búsqueda de antecedentes o para la realización de copias y traslados de documentos originales bien a petición de la ciudad o de cualquier interesado debidamente autorizado.

Ya en la Edad Media participan en las aperturas del arca del común, no en vano ésta se conservaba a menudo en sus casas, y controlan la entrada y salida de documentos. En 1434, el notario de Orense levanta acta de la entrega y puesta en el arca del concejo de siete privilegios [Gallego Domínguez, 1985, p. 189-190]. También se les ordena que no entreguen documentos originales, sino copias. En 1452, el consejo municipal de Castellón aprueba que en lo venidero el escribano del mismo no esté facultado para entregar ningún privilegio original, a petición de parte, sustituyéndolo por traslados o copias [Roca Travar, 1951, p. 207].

El escribano participa en la apertura del archivo con su llave, redacta el acta de entrega (a veces un simple añadido en el inventario existente) cuando se incorpora nueva documentación al archivo, registra la salida de documentos si ésta se produce anotándolo en el libro de conocimientos o redactando el recibo, busca los documentos solicitados y elabora copias simples o traslados de éstos a requerimiento de las autoridades locales o de particulares. En este último caso cobra los correspondientes derechos por su trabajo.

Las ordenanzas de Baeza de 1524 atribuyen al escribano del concejo la obligación de asentar por auto la salida de cualquier escritura del archivo [BAEZA, 1524]. Lo mismo señalan las de Santo Domingo de Silos de 1536. Esto justifica su presencia en las aperturas.

Los ayuntamientos pretendieron siempre controlar la utilización del archivo de la ciudad y evitar posibles pérdidas. Los acuerdos referentes a que no se sacaran documentos originales, sino copias o traslados, son muy frecuentes, aunque esto chocaba con la práctica jurídica de la época. Todavía en el siglo XVIII algunos tribunales requieren el envío de documentos originales, sin que fueran reintegrados al archivo del común una vez resuelto el litigio.

Los escribanos fueron advertidos en bastantes ocasiones sobre que no permitieran la consulta de documentación sin la autorización previa del concejo. Las ordenaciones de Alcañiz de 1658 recuerdan al notario que no podía mostrar las escrituras del archivo sin licencia de los jurados y consejo municipal [ALCAÑIZ, 1658]. En 1598, fue incoado un proceso contra el escribano de Albaida por haber prestado diversas actas de cabrevación a ciertos particulares, que las habían perdido [Ortiz García-Bustelo, 1992, p. 24].

Por lo tanto, en muchas localidades los escribanos de concejo ejercieron las funciones que en muy pocas poblaciones y de manera casi siempre esporádica desempeñaron los archiveros municipales en el Antiguo Régimen. El cargo de archivero municipal lo obtuvieron pocas personas en ese amplio período, y en su casi totalidad reunían además la condición de escribanos. La diferencia estriba en que éstos últimos debieron compaginar sus funciones archivísticas con las propias de la escribanía, lo que no ocurría con los archiveros.

2.2. Los archiveros

Como hemos podido observar tanto los regidores comisarios de archivo como algunos escribanos de concejo pudieron utilizar el título de «*archivero*» o «*archivista*», solapándose sus funciones con las desempeñadas por los archiveros municipales. Algunos regidores desempeñaron de por vida el cargo de regidor archivero, como se acordó en Burgos en 1698, o se intentó en Oviedo en 1658.

El escribano real Luis Jacobo Velázquez, trabajó en el archivo de privilegios de Sevilla durante treinta años (1741-1771), firmando las copias certificadas como «*archivista de la ciudad*» [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 15-16]. Don Juan Yagüe de Salas, en 1519, se intitulaba como «*Ciudadano de la ciudad de Teruel, Notario Apostólico, Público y del Número della, y de su Consejo General y Sala, escrivano, secretario y archivero...*» [Caruana Gómez de Barreda, 1950, p. 7].

Ni Burgos, ni Segovia, ni Oviedo, ni Sevilla, ni Teruel dispusieron de archiveros en sus plantillas municipales durante todo el Antiguo Régimen. Burgos cubriría esa plaza en 1822 al menos con carácter interino [Díez Sanz, 1984, p. 63], Segovia en 1854 [Cantalejo San Frutos, 1994, p. 848], Oviedo lo hará en 1874 [Villa González-Río, 1978, p. XXV], Sevilla en 1858 [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 17], y Teruel en 1944 [Caruana Gómez de Barreda, 1950, p. 12].

Barcelona dispuso ya desde 1359 de un oficial encargado del archivo, pero compartiendo esta tarea con la de validar las cuentas del consejo municipal. No en vano el escribano del racional es a la vez el archivero, sin que esta situación parezca variar a lo largo del Antiguo Régimen [Vinyoles, 1994-1995, p. 1.511]. Esta figura nos acerca a la de los archiveros contadores de los que más adelante hablaremos.

Otras ciudades dispusieron de archiveros municipales durante cortos períodos de tiempo, siempre relacionados con procesos organizativos de su documentación. Valladolid contó con los servicios de un «*archivista*» durante seis años, entre 1584 y 1590; y contrató a personas para componer su archivo en 1601, 1689, 1748, 1854 y 1861 [Pino Rebolledo, 1991, p. 28 y 38]. En Alicante se tiene constancia del nombramiento de archivero en el año 1621, cargo que recayó en el escribano Ginés Miralles, y en 1764 al ser nombrado como tal Vicente Segura [Paternina Bono, 1992, p. 52]. En Igualada se cita la existencia de archivero en una historia de la ciudad, en 1624, sin que se tengan más referencias durante el amplio período analizado [Llacuna i Ortínez, 1982, p. 61]. En Orense, en 1761, «*ya se habla de archiveros, como encargados no sólo de la custodia sino también de su organización*» [Gallego Domínguez, 1981, p. 191].

Las diferencias en cuanto a las funciones desempeñadas por parte de estos archiveros y las de los escribanos con cometidos archivísticos son mínimas, partiendo del hecho de que muchos de ellos eran también escribanos. Una especial preparación (sobre todo por sus conocimientos paleográficos), una cierta experiencia en la organización de archivos y una formación adecuada, como la de los mejores escribanos, podían ser tenidas en cuenta a la hora de contratar a una persona como archivero, cuando la necesidad de organizar la documentación de un determinado ayuntamiento, con suficientes recursos, lo hacía inevitable. Mantener esa plaza en la plantilla municipal sería el siguiente paso, que la mayoría de las corporaciones municipales de las principales ciudades no afrontarán hasta el siglo XIX y XX. Manresa nombrará su primer archivero en 1882 [Gasol, 1990, p. 13]. En Valladolid habrá que esperar hasta 1905 [Pino Rebolledo, 1991, p. 38]. Por lo tanto, antes cabían otras soluciones.

El archivo de Carmona contó a principios del siglo XVI con «*un perito en letra antigua, capaz de atenderlo convenientemente*» [Inventario, 1987, p. 12]. En 1716, al ser nombrados dos regidores madrileños como responsables del archivo, se les autoriza a contratar a un experto paleógrafo que les ayudara en la lectura y transcripción de documentos antiguos [Cayetano Martín, 1986, p. 553; Domingo Palacio, 1875, p. 24]. En 1726, al ser designados dos escribanos del número como comisarios de ese archivo, se les permite que puedan «*nombrar persona que entienda las letras antiguas para la composición del archivo*» [Gómez Iglesias, 1974, p. 33]. En 1772 se inicia un nuevo proceso organizador en el archivo de Burgos designando para ello a dos expertos en «*letras antiguas y latina*» y un amanuense [Diez Sanz, 1984, p. 52].

Por lo tanto aquellos que fueran encargados del arreglo de un archivo, fueran escribanos o regidores, pudieron en determinadas ocasiones servirse de los conocimientos de peritos o maestros revisores de letras antiguas. No era preciso nombrar a ningún archivero. Pero la búsqueda de personas con suficientes conocimientos para leer escrituras góticas (cortesana, procesal o encadenada), y textos en latín no era fácil en el siglo XVIII.

El escribano que elaboró el inventario del archivo de Cáceres en 1750 era un «*hombre laborioso, buen paleógrafo práctico, sin duda y entendido jurista*» [Floriano Cumbreño, 1934, p. 11]. Pero si esta ciudad extremeña lo tuvo fácil, no ocurría lo mismo en Santander, en 1767, cuando su ayuntamiento refleja «*la ninguna intelixencia que hay en esta ciudad para aclarar las letras antiguas y que por estar escriptos con dicha letra los más de los Privilegios y Papeles del Archivo de esta ciudad...*» [Vaquerizo Gil, 1984, p. 6]. Ya conocemos lo decidido por esta corporación para resolver esta situación. La de Sevilla a finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX prefirió contratar esporádicamente los servicios de archiveros profesionales

que trabajaban en el archivo de la catedral o en el Archivo General de Indias, mientras los quehaceres diarios en sus archivos los realizaban oficiales que compaginaban sus destinos con otras ocupaciones en la secretaría, con la ayuda de escribientes ocasionales [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 17].

Contratar archiveros de otras instituciones, ayudarse de los servicios de un experto en letras antiguas, o disponer de un escribano con una formación adecuada podían ser soluciones para afrontar con relativo éxito un proceso organizador y descriptivo en un archivo municipal durante el Antiguo Régimen. Pero este esfuerzo, desarrollado durante unos años concretos, de nada servía si esa labor no era continuada. Lo más eficaz a largo plazo sería la existencia en la plantilla municipal de un archivero, como ya existía en otras instituciones territoriales, caso del señorío de Vizcaya [Gómez Rodrigo, 1974, p. 66], o de la comunidad de Daroca. Así se refleja en las ordenaciones de esta última publicadas en 1686. No obstante pocos ayuntamientos estuvieron dispuestos a dar ese paso.

Las aportaciones bibliográficas sobre historia de los archivos municipales españoles nos permiten asegurar que San Sebastián dispuso de archivero desde al menos el año 1608. A esta ciudad le seguirían Vallecas desde 1674, Zaragoza desde 1730, Madrid desde 1748, Salamanca ya en 1763, Santander desde 1797 y Girona a partir de 1803. En estas dos últimas poblaciones el archivero debió compaginar sus funciones con las de contador municipal.

Más difícil es asegurar esta situación en los casos de Astorga y Tortosa, dado que en ellas las personas que se hicieron llamar archiveros debieron ser más propiamente escribanos, regidores archiveros u otras autoridades municipales con cometidos archivísticos.

En el ayuntamiento de Astorga desde principios del siglo XVII se emplea el término archivista para designar a la persona que custodia los documentos, participa en la apertura del archivo y extiende certificaciones [Burón Castro, 1994, p. 25]. En 1725 su regimiento designó a Juan Gregorio García de Ovalle como archivero de la localidad [Martín Fuertes, 1980, p. 14]. Y parece ser que la existencia constatada de archiveros mayores a lo largo de ese siglo, implica la de oficiales con el cargo de archivero menor, como ocurría en otras ciudades, caso de Salamanca. De todas formas no existe ninguna constancia de que el cargo de archivero como oficial del concejo fuera cubierto tras la etapa en ese empleo del nombrado en 1725.

El ejemplo de Tortosa es aún más llamativo. Parece evidente que entre 1545 y 1546 ocupó el cargo de archivero Cristófol Despuig [Massip i Fonollós, 1987, p. 10]. En 1574 el archivo tortosí fue reorganizado, mencionándose de nuevo la labor del archivero. En 1579 el consejo municipal de la ciudad estableció unas normas de régimen interno específicas para el archivero, que juraba su cargo con los demás oficiales municipales [Planes i Albets, 1992, p. 20].

La vigencia de estas normas a lo largo de los siglos XVII y XVIII es algo que desconocemos, y por lo tanto no podemos asegurar que Tortosa contara con archivero más allá del período señalado del siglo XVI. De todas formas como sea que fuera necesario ser «*conseller*» para poder ser elegido [Massip i Fonollosa, 1989, p. 241], todo indica su similitud con los regidores archiveros castellanos.

Como ya antes realizamos al estudiar a los escribanos con cometidos archivísticos, vamos a detenernos más pormenorizadamente en los archiveros municipales.

A) NÚMERO Y DENOMINACIÓN

La denominación de archivero y archivista se utilizará indistintamente para designar al oficial municipal encargado del archivo. Las ordenanzas de San Sebastián del año 1758 son un claro ejemplo al recoger en el cap. XIX el término «*archivero*» y en el XXI el de «*archivista*». En 1674, en Vallecas, se le denomina archivero, y en 1728 aparece como archivista [Mateu Llopis, 1945, p. 79 y 82]. Aún así, a lo largo del siglo XVIII, el término archivero fue desplazando progresivamente al de archivista, que quedó como un arcaísmo.

Sus obligaciones se ceñían al archivo del común, de la ciudad o de privilegios, de ahí que no falten denominaciones como la utilizada por Miguel de Collantes, en Zaragoza, en 1761. En las fuentes aparece como «*Archivero de los Reales Privilegios, Escrituras, Libros custodiados y reservados*» [González Miranda, 1981, p. 82].

En Salamanca, para distinguirlo de los archiveros mayores, término utilizado para designar a los regidores archiveros, se utiliza al menos en su reglamento de Propios y Arbitrios de 1763 la denominación de «*archivero menor*» [Infante Miguel-Motta, 1984, p. 378].

En Gerona y Santander al compartir sus funciones con las de contador, serán conocidos como «*Arxiver i Comptador de Propis*» [Alberch i Fugueras, 1987, p. 231], y «*Contador y Archivero*» [Vaquerizo Gil, 1984, p. 8], respectivamente.

Entre las pocas poblaciones que dispusieron de archivero durante el Antiguo Régimen sólo Madrid, y en parte Zaragoza, llegó a contar con personal auxiliar y subalterno para ayudar al primero en el cumplimiento de sus funciones. Zaragoza, en 1764, nombró a otra persona para sustituir al archivero en ausencias y enfermedades, y en 1772 ya contaba con un oficial del archivo [González Miranda, 1981, p. 83]. En Madrid, en la instrucción aprobada en 1753, a los pocos años de crearse el empleo, se menciona ya al archivero y a su auxiliar. En su reglamento de 1784, junto al archivero, aparecen dos oficiales del archivo y un portero. En 1820, además del

archivero y de los dos oficiales, figura un escribiente [Gómez Iglesias, 1974, p. 38].

Madrid, una vez más, es la ciudad española con una estructura de archivo más consolidada en lo relativo a su personal al finalizar el Antiguo Régimen.

B) NOMBRAMIENTO

El nombramiento del archivero, al igual que el de la mayor parte de los restantes oficios municipales, correspondía al ayuntamiento. Así sucedió por ejemplo en San Sebastián en 1740 [Banus Aguirre, 1986, p. 130]. En sus ordenanzas de 1758 simplemente se señala que «*se nombrará por la Ciudad*» [SAN SEBASTIÁN, 1758]. Este mismo proceso de designación parece ser el seguido en Gerona en 1803 [Alberch i Fugueras, 1987, p. 231]. Desde 1728 en Vallecas el archivero es nombrado por «*los Alcaldes y Regidores*», aunque en 1674 lo fue por concejo abierto [Mateu Llopis, 1945, p. 79 y 86].

Esta prerrogativa municipal no fue cumplida para los casos de Madrid y Santander.

La creación de la plaza de archivero municipal en la plantilla del ayuntamiento madrileño, en 1746, fue consecuencia de las gestiones del conde de Maceda, gobernador político-militar de la ciudad por nombramiento de Fernando VI. En 1781 se estableció un sistema de acceso por oposición, siendo nombrado el que superó más satisfactoriamente las cuatro pruebas establecidas, de gran similitud con los procesos selectivos actuales. Por lo tanto la discrecionalidad del ayuntamiento quedó supeditada a la idoneidad y profesionalidad de los aspirantes. No obstante, en 1815 Fernando VII hace caso omiso de este procedimiento y nombra directamente como archivero de villa a Basilio Recacha [Cayetano Martín, 1986, p. 555 y 556]. En 1820 se volvió de nuevo al sistema de oposición, pero el ayuntamiento se reservó la decisión de elegir al candidato más idóneo de entre los tres propuestos por el tribunal. El designado sería Facundo Porras Huidobro [Gómez Iglesias, 1974, p. 40-43].

La provisión de las plazas de oficiales del archivo madrileño correspondía a su ayuntamiento, aunque desde 1777 el archivero podía presentar a dos personas idóneas por cada una de las vacantes para que Madrid designara de entre ellas la más apropiada [Domingo Palacio, 1875, p. 46]. Y así se recogerá en el reglamento de 1784.

El caso de Santander es si cabe más llamativo, pues el nombramiento de su primer archivero-contador, en 1797, fue precedido de un «*concurso de méritos*» entre dieciocho aspirantes. Las propuestas recibidas por el ayuntamiento cántabro fueron enviadas al Consejo Real que por Real Orden designó al elegido [Vaquerizo Gil, 1984, p. 7 y 8].

C) DURACIÓN DEL OFICIO

Lo más habitual, entre las poblaciones que dispusieron de archivero municipal en el Antiguo Régimen, fue su nombramiento de por vida. En Madrid, su primer archivero, Alfonso de Castro Villasante, ejerció su oficio entre 1748 y 1769, aunque necesitó ser confirmado en su empleo en 1750. Su sucesor, Diego Sáenz Manso, lo hizo entre 1769 y su muerte acaecida en 1781. Le seguiría Manuel Ramírez de Arellano desde ese año hasta 1812, fecha de su fallecimiento, ya muy anciano.

La misma situación debió darse en San Sebastián. Su primer archivero Domingo de Saldias ocupó el cargo entre 1608 y 1617. Le sucedió Miguel de Aristiguieta... Ya en el siglo XVIII por muerte de su antecesor fue nombrado archivero, en 1740, Martín de Uribe [Banus Aguirre, 1986, p. 8]. Sin embargo, en las ordenanzas de 1758 se establecerá que sea nombrado «*añalmente*», de entre el cuerpo de Matriculados en un intento de que «*todos estén instruidos de lo que contiene el archivo*». El archivero que surge tras la aprobación de este texto normativo se acerca más a la figura del regidor archivero que ya hemos comentado.

En Zaragoza, la persona nombrada como archivero en 1730 lo será como «*archivero perpetuo*». Desde esa fecha desempeñaron este cargo Juan Francisco Escuder, Miguel de Collantes, Pedro Bosque i Dorre, y Agustín Chueca, este último entre 1773 y 1801, año en el que renunció a su empleo [González Miranda, 1981, p. 83].

Por lo tanto, lo más normal fue el desempeño del cargo durante un largo período de tiempo, el que iba desde su nombramiento hasta su muerte, en la mayor parte de los casos, o de su renuncia. En Vallecas, en 1674, se determinó al nombrar a su archivero que lo fuera durante cuatro años, aunque ya en 1728 se determinó que el elegido sirviera ese empleo «*todo el tiempo de su voluntad, sino es en caso de dilatada enfermedad, ausencia, impedimento o culpable desidia*», en los cuales podía nombrarse a otro [Mateu Llopis, 1945, p. 80 y 86].

D) CUALIDADES

El archivero no era uno más de los oficiales municipales. Sus funciones exigían una preparación adecuada y precisa que muy pocas personas poseían. La búsqueda de archiveros no fue fácil. Los escribanos y regidores no siempre estaban preparados para organizar archivos como hemos visto. En el «*Índice*» del Archivo Municipal de Talavera de la Reina de 1817, que describe 69 legajos, se recoge la existencia de cuatro legajos con pliegos sueltos de libros y «*papeles y documentos antiguos que no han podido leerse*» [García Ruipérez

y Gómez Díaz, 1995, p. 100]. Esta situación se reproduce en otros muchos instrumentos descriptivos. Tener, por lo tanto, unos buenos fundamentos paleográficos y lingüísticos era un requisito previo.

La designación de archivero de la villa de Madrid en la segunda mitad del siglo XVIII estuvo condicionada por el cumplimiento de determinados requisitos por parte de los posibles aspirantes. En la Instrucción elaborada en 1753 por Francisco Milla, comisario del archivo, se establece que los empleos de archivero y auxiliar tienen que recaer en «*personas inteligentes en latinidad y paleografía, y si pudiera ser en hijosdalgo y naturales de Madrid*» [Domingo Palacio, 1875, p. 34]. En 1781, las personas presentadas a cubrir la vacante de archivero de villa debían ser españoles, mayores de 21 años, poseer conocimientos de paleografía y de letras antiguas, y tener experiencia previa en la administración, escribanías o archivos privados. Las pruebas que superó el elegido consistían en elaborar una memoria técnica sobre la organización de archivos, traducir textos latinos clásicos, transcribir documentos con dificultades paleográficas, y por último exponer un tema elegido por el tribunal sobre Paleografía, Instituciones Españolas e Historia de España [Cayetano Martín, 1986, p. 555]. En 1820, en las pruebas que superó finalmente Facundo Porras Huidobro, se exigió a los candidatos que supieran latín, leer documentos antiguos, y conocer las teorías sobre el arreglo de archivos y formación de índices [Gómez Iglesias, 1974, p. 40-41].

Examinados estos requisitos no nos debe extrañar que, por ejemplo, Diego Sáenz Manso, archivero de villa desde 1768, lo fuera antes del archivo de la casa ducal de Medinaceli. Facundo Porras Huidobro obtuvo el título de revisor de letras antiguas en 1804 cuando era oficial del archivo de la iglesia metropolitana de Burgos. Manuel Ramírez de Arellano o Basilio Recacha también tuvieron este título. Otros muchos archiveros, sobre todo de casas nobiliarias, y tras el correspondiente examen pudieron recibir del Consejo Real el título de maestros revisores de letras antiguas [Galende Díaz, 1995, p. 178].

Los dos oficiales del archivo de Madrid debían ser, al menos desde el reglamento de 1784, «*latinos e inteligentes en la lectura de letra antigua, así en latín, como en castellano*». El escribiente, mencionado en el informe de 1820, tenía que «*leer bien letras antiguas y esté medianamente instruido en la gramática latina*».

Todo el personal del archivo de Madrid, salvo el portero, debía, por lo tanto, tener conocimientos de paleografía y de latín. Lo mismo debió ocurrir tal vez en Zaragoza, Santander o Gerona. En Vallecas, en 1728, simplemente se señala que el designado «*tenga las calidades convenientes de inteligencia y aplicación*», concediéndosele honores de capitular del ayuntamiento en las funciones públicas y religiosas [Mateu Llopis, 1945, p. 86]. En San Sebastián,

según las ordenanzas de 1758, el archivero debía ser nombrado «*del cuerpo de Matriculados de los más inteligentes*». El primer archivero zaragozano había sido alguacil mayor, y la persona elegida por el Consejo Real para ser el primer archivero contador de Santander poseía el título de abogado de los Reales Consejos.

E) JURAMENTO

Las ordenaciones de la comunidad de Daroca del año 1686 contemplan la obligación que tenía su archivero de «*prestar juramento de fidelidad*» [Comunidad de DAROCA, 1686]. Lo mismo realizaban los de Tortosa desde 1579 [TORTOSA, 1579]. El juramento del archivero de Madrid está recogido en el punto 1º de la instrucción de 1753 [Domingo Palacio, 1875, p. 34]

F) FUNCIONES

Las funciones desempeñadas por los archiveros municipales en el Antiguo Régimen están en relación con las ya analizadas de los regidores archivistas y escribanos con cometidos archivísticos, si cabe aumentando su especialización y dedicación. Su presencia en los ayuntamientos provoca la anulación o al menos una notable disminución de las tareas desempeñadas hasta entonces por los escribanos municipales en cuanto al archivo del común o de la ciudad. Lo más llamativo en este sentido es que pasan a poseer una de las llaves del arca o archivo en detrimento del escribano capitular.

El archivero de Vallecas estaba obligado desde 1676 a realizar un registro de todos los documentos por abecedario o índice, a colocarlos en el arca, y a controlar la salida de documentos. Poseía además una de las tres llaves. Las otras dos se las repartían la justicia y el escribano del ayuntamiento.

El archivero de San Sebastián, tras las ordenanzas de 1758, custodia una de las tres llaves del archivo, actualiza el inventario e índice, controla la entrada y salida de documentación, y otorga las copias y compulsas solicitadas [SAN SEBASTIAN, 1758]. Más parco es el reglamento de propios y arbitrios de Salamanca de 1763 por el que se ordena al archivero menor que haga «*un yndice de los papeles y tenerlos colocados*» [Infante Miguel-Motta, 1984, p. 378].

La principal función de los archiveros era la organización de la documentación, lo que implicaba la elaboración de los correspondientes instrumentos descriptivos (inventarios e índices). El mantenimiento de esa organización suponía tener un estricto control de la salida de aquella del archivo. Así se especifica por el Consejo Real en 1798 al establecer las competencias y obligaciones del archivero de Santander [Vaquerizo Gil, 1984, p. 8].

Las funciones del archivero de la villa de Madrid estarán ya definidas claramente en la instrucción de 1753. Por ella se establece que debe reunir en el archivo toda la documentación municipal, clasificarla y ordenarla, elaborar los índices y catálogos, transcribir los documentos que ofrecieran dificultades de lectura, y controlar su salida del archivo [Cayetano Martín, 1985, p. 237-238]. Por Real Provisión de 6 de febrero de 1781 puede, además, revisar o cotejar documentos solicitados por particulares, expedir certificaciones y elaborar informes [MADRID, 1781]. La realización de certificaciones ya le fue reconocida por el Consejo Real en 1777, al igual que su prerrogativa de presentar dos candidatos por cada una de las vacantes que se pudieran producir en las plazas de oficiales del archivo.

El reglamento del archivo de Madrid de 1784 se detiene pormenorizadamente en las obligaciones del archivero, de sus oficiales y del portero. El archivero debía acudir al archivo los mismos días y horas que el resto de «*dependientes de las Oficinas de Madrid*»; continuaría la formación del inventario y del índice alfabético; recibiría los documentos de las oficinas con relación formal (hojas de remisión), formando libros con esas relaciones; controlaría el acceso a la documentación y su salida del archivo (orden al ayuntamiento o del corregidor o sus tenientes, asiento en el libro de conocimientos, plazo de devolución, etc.); transcribiría los documentos con dificultad de lectura o mala conservación; certificaría sobre el contenido de los documentos bajo determinadas condiciones; elaboraría todos los años una certificación dando cuenta de lo que hubiese trabajado (memoria anual); propondría dos candidatos por cada vacante de oficial del archivo que se produjera; poseería una de las dos llaves del archivo; cuidaría del orden, respeto y decoro que debía existir en él; y distribuiría el trabajo entre su personal.

Los oficiales del archivo de villa, según ese reglamento de 1784, debían asistir a su trabajo los mismos días y horas que el archivero; poseían una de las llaves de la puerta principal; tenían que obedecer al archivero en aquello que les ordenase, poniendo en limpio, corrigiendo y cotejando los documentos que se ofrecieran; y le debían ayudar cuando necesitase alcanzar algún documento de las estanterías.

El portero, por último, estaba encargado de dar los avisos, llevar y traer los documentos solicitados, tener limpio y aseado el archivo, esterarlo en su tiempo, y encender el brasero cuando fuera necesario [MADRID, 1784].

G) SALARIO Y HORARIO

El salario percibido por los archiveros municipales en el Antiguo Régimen dependerá del poder económico de sus respectivos ayuntamientos y del

Consejo Real a quien compete aprobar el gasto, reflejado en la segunda mitad del siglo XVIII en los reglamentos de propios y arbitrios. También incidirá el tiempo dedicado por los archiveros a ejercer sus obligaciones documentales. Comparar unos salarios con otros si no tenemos en cuenta estos condicionantes nos puede llevar a conclusiones erróneas.

Ya hemos visto que el archivero de Madrid y sus oficiales acuden al archivo de villa los mismos días y horas que los restantes dependientes municipales, «*y aviendo urgencia, todos los días, y tiempos que fuere necesario*» [MADRID, 1784]. Desde el 15 de marzo de 1816 el horario quedó especificado de la manera siguiente: desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde en el invierno, y desde las ocho hasta la una y media en el verano. Además debían acudir al archivo siempre que estuviera reunido el ayuntamiento [Gómez Iglesias, 1974, p. 39]. Los archiveros de Tortosa iban al archivo dos días a la semana (lunes y jueves, generalmente) durante una hora para «*redreçar y posar en bon orde dit archiu*» [TORTOSA, 1579]. En la instrucción del Conde de Torres Secas fijando los cometidos del archivero de Zaragoza se especifica que «*una vez concluida la composición de el Archivo*» deberá estar «*en él todos los días que aya Ayuntamiento dos oras por la mañana*» [ZARAGOZA, 1730]. En Gerona el archivero-contador, nombrado en 1803, sólo dedicaba dos horas diarias a la tarea de clasificación de fondos, como señala R. Alberch.

Estas diferencias de horario implican que sólo el archivero de Madrid por su dedicación exclusiva y a tiempo completo pueda servirnos de referencia para conocer la valoración económica real que se hacía de esta actividad en el Antiguo Régimen.

El salario percibido por el archivero de San Sebastián desde 1758, apenas 200 reales anuales, con los que tenía que costearse además «*la resma de Papel, plumas, y tinta*» nos parece una cantidad irrisoria. Esta cifra podía mejorarla con los derechos que percibía de los particulares que acudían al archivo para obtener copias o compulsas de documentos, pues estaba establecido que percibiera quince reales por cada día que emplease en su búsqueda, previa autorización de la Ciudad [SAN SEBASTIÁN, 1758]. Estas tareas realizadas para los particulares eran el verdadero soporte económico del archivero de San Sebastián. Una cifra tan pequeña, 200 reales anuales, se explica en las propias ordenanzas por «*el grave atraso de la Ciudad, y que sus hijos deben coadyubar a sus alivios*». Otra vía de incremento de sus ingresos sería la realización de «*algún trabajo tan irregular, y cansado, que se haga acreedor a mayor recompensa, con acuerdo del Señor Corregidor se arreglará la justa*». El archivero de San Sebastián recibía ingresos por su salario, por los derechos de búsqueda, y por trabajos extraordinarios, si éstos se producían.

El archivero menor de Salamanca, desde la aprobación del reglamento de propios y arbitrios de la ciudad en 1763, percibe de salario anual tan sólo 440 reales de vellón [Infante Miguel-Motta, 1984, p. 378].

En Vallecas, desde 1674 hasta entrado el siglo XVIII, su archivero recibe de salario anual 16 ducados. En 1728 esta cantidad se reduce a 190 reales anuales, que aún percibe en 1759 [Mateu Llopis, 1945, p. 80, 86 y 106]. El archivero de Astorga percibe, desde 1725, 4.000 mrs. anuales, es decir unos 117 reales de vellón [Martín Fuertes, 1980, p. 14].

Estas cantidades son muy pequeñas e implican bien una dependencia casi absoluta de los derechos que pueden cobrar a los particulares o bien una dedicación al archivo escasa y esporádica. En Astorga y Vallecas podía ocurrir esto último.

En San Sebastián, Salamanca o Zaragoza la percepción de derechos por la realización de testimonios, compulsas o búsquedas por encargo de particulares permitiría al archivero completar su reducido salario.

Los archiveros contadores de Santander y Gerona gozaron de mejores emolumentos vía salario. Al menos en la primera de las ciudades percibía, desde 1797, 6.000 reales anuales, cifra nada desdeñable. No obstante, el trabajo en la contaduría absorbería buena parte de su tiempo, como ocurría en Gerona.

Es muy posible que esta cantidad sea parecida a la que cobraba el archivero de la villa de Madrid, aunque carezcamos de información precisa sobre ello. En 1773 se señalaba que jamás se había «*cobrado derechos ni emolumentos estraordinarios, salvo cuando se informaba sobre pruebas de hábitos, en cuyos casos los interesados hacían varios regalos*» [Domingo Palacio, 1875, p. 43]. Transformado el archivo en oficina pública en 1777, por Real Provisión de 6 de febrero de 1781 se aprobó el «*Arancel de los derechos que ha de llevar el Archivero de Madrid a todas las personas que pidieren se busquen documentos, cotejos, revisiones y certificaciones de los existentes en el Archivo*». Los derechos que debía recibir van a variar según la cronología de los documentos. Por cada hoja de medio pliego del siglo diecisiete recibiría tres reales si lo copiaba en papel, y cuatro si lo hacía en pergamino. Si el documento era del siglo XVI, siete reales por hoja en papel, y ocho por hoja en pergamino; si estaba fechada en el siglo XV, esa cantidad se incrementaba en un real tanto en papel como en pergamino, y lo mismo ocurría con el siglo XIV y el siglo XIII. De tal forma que por cada hoja del siglo XIII, percibía diez reales en papel y en pergamino once. De unas u otras «*cada llana tenga veinte renglones, y cada renglón cinco partes*».

Esta tarifa se reducía a una tercera parte si el trabajo del archivero de villa consistía en la revisión o cotejo de cualquier documento. Por las certificaciones de «*goce de Nobles*» llegaba a cobrar 120 ó 200 reales según sus

características. Por los informes de partes que se le pidieren llevaba tres reales de vellón por hoja, más un real por cada año que hubiera transcurrido desde la fecha del antecedente más antiguo. Si en las certificaciones insertaba alguna escritura percibía los mismos derechos que si se tratara de copias, aunque si aquella estaba datada en el siglo XVIII sólo podía cobrar dos reales por hoja. Cuando buscaba antecedentes en el archivo, a petición de parte, los encontraba o no, tenía derecho a exigir cuatro reales si su búsqueda se reducía a los últimos diez años. Si pasaba de esa fecha pero le era dada por los interesados llevaba ocho reales, y si no era así medio real por cada año que tuviera que remontarse. Y por el cotejo de alguna firma aparecida en un documento cobraba un real por cada año. Por último en las certificaciones de pruebas para hábitos percibía 120 reales de vellón por cada una [MADRID, 1781].

Este arancel nos recuerda a los de otros archivos y a las tarifas que solían percibir los maestros revisores de letras antiguas. A la vez nos da una buena idea de los servicios que prestaba el archivero de villa a los madrileños, no muy diferentes de los que prestaban otros archiveros, o en su ausencia los escribanos municipales.

En el reglamento del archivo de Madrid de 1784, en el punto doce y dentro de las obligaciones del archivero, se establece que la percepción de los derechos contemplada en el arancel de 1781 *«debe limitársele a la mitad, y que la otra mitad se reparta entre los dos Oficiales»*. A la vez, en el punto siguiente, se señala que despachará de oficio *«y sin llevar derechos ni emolumentos, o gratificaciones, sean de la clase que fuese, todo lo que el Ayuntamiento, el Corregidor y los Tenientes mandasen dar de oficio, o a instancia de algunos de los Regidores, Diputados y Personero del Común, o como Procurador, Síndico general y Mayordomo de Propios todo respectivo a los intereses, regalías, derechos y preeminencias del Ayuntamiento, y en beneficio de la causa pública»* [MADRID, 1784].

Los ingresos que realmente percibía el archivero de Madrid por su salario y por los derechos autorizados nos son desconocidos. La situación económica de Vicente Lissa y de las Balsas, archivero de Zaragoza en 1804, debía ser buena cuando *«invirtió su salario en obras de arreglo del Archivo»* [González Miranda, 1981, p. 83]

A pesar de los estudios aparecidos en los últimos años todavía existen muchas lagunas en nuestro conocimiento sobre los archiveros municipales en el Antiguo Régimen.

2.3. Los mayordomos y contadores

De entre los restantes oficiales municipales sólo los mayordomos y contadores pudieron tener una relación directa con los archivos municipales. No

olvidemos que, como ha señalado M. Fernández Gómez, en las principales localidades la documentación relacionada con sus funciones permanecía en su poder, o en el de sus sucesores, sin ser incorporada al archivo de privilegios o del común con todo lo que eso llevaba consigo. Este cambio debió producirse generalmente en el siglo XIX.

Por lo tanto los mayordomos y contadores eran productores y organizadores de parte de la documentación municipal, relacionada con la hacienda local, sus ingresos y sus gastos. Tanto en Santander como en Gerona, pero ya en 1797 y en 1803, respectivamente, las funciones que debían desempeñar el archivero municipal y el contador recayeron en una misma persona.

En algunas poblaciones también tuvieron obligaciones relacionadas con el archivo de los privilegios. En Valladolid, según sus ordenanzas de 1549, tanto el mayordomo como el contador están obligados a poseer un «*Inventario de las Escrituras, y Títulos, que esta villa tiene de los bienes de sus propios*», redactado por los escribanos mayores, para que estuvieran bien informados de las posesiones que tenía la ciudad [VALLADOLID, 1549]. Algo parecido ocurría en el Señorío de Aguilar, según sus ordenanzas de 1519. En Madrid, por el auto del Consejo ya mencionado de 1774, se obliga al mayordomo de propios a recuperar los documentos perdidos [Domingo Palacio, 1875, p. 44], función que en otras poblaciones realizaba el procurador síndico.

En la Corona de Aragón la figura del racional, con ciertas similitudes aunque con atribuciones más amplias que las del contador castellano, interviene también en la conservación de la documentación. En Manresa, por ejemplo, el mueble archivo se conservaba en la sala del Racional y sus llaves estaban repartidas entre éste y cuatro consejeros [Gasol, 1990, p. 9]. Los contadores de Huesca, según las ordenaciones de 1551, se encargaban de ejecutar la penas en las que podían caer aquellos jurados encargados del archivo y de la custodia de sus llaves que incumplían sus obligaciones [HUESCA, 1551].

En Sevilla también se constata en el siglo XVI que las llaves del archivo están a veces en poder de los contadores mayores. En 1702 fue realizado un inventario del archivo sevillano por uno de los contadores de la ciudad [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 12 y 15].

4. LA CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL

Uno de los principales cometidos de las autoridades locales y de los oficiales municipales en relación con la documentación era posibilitar su adecuada conservación. La indefinición del concepto de patrimonio documental municipal, y su evolución a lo largo de estos siglos, explica en parte los criterios que se fueron adoptando para lograr este objetivo. Y esto no era nada fácil.

El archivero de Sevilla Marcos Fernández Gómez lo ha señalado con la rotundidad y claridad que le caracteriza. La pérdida de documentos municipales sevillanos se debe entre otras causas al carácter privado que recibieron buena parte de los papeles procedentes de la gestión del cabildo, a la actividad de algunos historiadores que se llevaron muchos que nunca devolvieron, y a la remisión de documentos originales a los tribunales como pruebas de diferentes pleitos, que quedaron incluidos entre las piezas de esos procesos, sin ser devueltos a su lugar de origen [Fernández Gómez (b), 1995, p. 11].

La conservación del patrimonio documental era una de las obligaciones de los corregidores y ayuntamientos. Jerónimo Castillo de Bovadilla en su clásica obra *Política para Corregidores...* (Tomo II, 1750, p. 110), aparecida por primera vez en 1597, les recordaba a éstos la necesidad de que la documentación se conservara «*a mucho recaudo y guarda*». Estas expresiones u otras similares aparecerán recogidas con bastante asiduidad en los acuerdos municipales y en los informes de los responsables de su documentación, incluso antes de la aprobación de esta obra. Las ordenanzas de Valencia de Alcántara de 1489 señalan ya que el arca debía conservarse «*donde mejor e más seguramente pueda estar ... en lugar seguro e limpio y a buen recaudo*». A partir del siglo XIV, según R. Alberch, se empieza a generalizar el uso de arcas o armarios cerrados con llaves para «*garantir-ne la seguretat i confidencialitat*» al menos en algunos municipios catalanes [Alberch i Fugueras, 1994, p. 525].

El arca que debían poseer todos los concejos del Señorío de Aguilar debía estar «*a buen recaudo*» según sus ordenanzas de 1519. Los procesos seguidos ante el Justicia de Huesca, según las ordenaciones de 1551, debían

de «*estar, y estén recónditos y guardados*». Una Real Orden de 13 de julio de 1572 establece la creación del archivo de Alicante, en su sala capitular, para que los libros y papeles de la ciudad «*estén a buen recaudo y resguardo*» [Paternina Bono, 1992, p. 51]. Firmeza y seguridad son los términos empleados en las ordenanzas de Potes de 1619.

El arca de los privilegios y escrituras de Jaca, según sus ordenaciones de 1694, debía estar «*recóndita en el Archivo; y cerrada con quatro llaves*». El Real Despacho de 24 de diciembre de 1728, aprobado para el lugar de Vallecas, recuerda que para el arca de tres llaves «*conviene tanto su recato y seguridad*». Algunas medidas adoptadas por la Diputación General del Señorío de Vizcaya en 1702 pretendían conseguir que «*dichos papeles estén en completa seguridad de conservación*» [Gómez Rodrigo, 1974, p. 64].

Las expresiones se repiten y los objetivos también. El espacio destinado para archivo debía ofrecer las garantías necesarias para conservar adecuadamente el patrimonio documental municipal. Por eso la seguridad no debía estar reñida con la limpieza. Las «*escrituras y papeles*» del concejo de Frama, según sus ordenanzas de 1617, estarían en el arca de tres llaves «*bien puestas y tratadas de modo que no se ensucien ni pierdan*». El concejo de Vallecas acordó, el 16 de diciembre de 1674, nombrar un archivero para que, entre otras cosas, los documentos «*se cuyden y estén con limpieza y aseo*» [Mateu Llopis, 1945, p. 80].

El control en la entrada y salida de documentos, cuando era efectivo, y unas condiciones idóneas en los espacios destinados para su depósito, podían ayudar notablemente a la conservación de la documentación. Las fuentes inciden en los perjuicios ocasionados cuando no se daban estas premisas. En Lima, el virrey del Perú, en 1576, se lamentaba ante los regidores de la «*falta que en esta ciudad ha avido en la guardia y custodia de las çedulas y provisiones*» [Bayle, 1950, p. 17]. El corregidor de Ciudad Real también exponía, en 1595, al referirse al archivo que «*los privilegios y Escrituras que en él ay no thenían la guarda y custodia que convenía*» [Bernabeu Novalbos, 1952, p. 9]. En el Principado de Asturias, también se reconocía, en 1659, que «*de no aberse puesto la guarda conveniente en los papeles, que tocan a este Prinçipado en común se han perdido muchas excurias [sic] y privilegios...*».

Una buena instalación estaba relacionada con la elección del lugar más apropiado, prevaleciendo la seguridad sobre otras necesidades, y éste no siempre estará dentro de las casas consistoriales, como más adelante podremos comprobar. Elegido el emplazamiento más idóneo era necesario custodiar allí los documentos dentro de una o varias arcas, en armarios, o en estanterías abiertas. Todas las soluciones podían adoptarse e incluso combinarse. Los documentos serían agrupados físicamente en legajos, líos, mazos, rollos, talegos, etc. Lo siguiente sería establecer las medidas más convenientes que pa-

liaran las causas que deterioraban los documentos, una vez conocidas éstas, y por último proceder a la restauración, si ello era posible.

1. La instalación

1.1. Los depósitos documentales y su dispersión

Al referirnos a la evolución del patrimonio documental municipal durante el Antiguo Régimen ya dimos cuenta del proceso que partiendo de la Edad Media, con la creación del archivo secreto, matriz o de los privilegios, culminaría en el siglo XIX con la constitución del archivo municipal en el sentido actual del término.

Durante todo ese amplio período, y por los motivos señalados, la nota más característica en relación con la instalación de la documentación municipal es su dispersión. Así se ha señalado explícitamente por algunos archiveros. En lo referente al archivo de la ciudad de Barcelona se detecta que desde finales del siglo XIV una «*certa dispersió documental sembla presidir els temps següents*» [Arxiu, 1995, p. 26]. En Gerona se subraya que la dispersión de los fondos «*es perllongará fins a les darreries del segle XVIII*» [Alberch i Fugueras, 1987, p. 230].

Evidentemente esta situación tiene importantes consecuencias en cuanto a la conservación y a la organización de la documentación municipal. Con el archivo de los privilegios coexisten, en las poblaciones más importantes, el del escribano, fiel de fechos o notario, el del mayordomo, el de la contaduría, el que puedan tener los comisionados, arrendadores y otros oficiales, y el de los jurados (en donde éstos funcionan como cabildo), sin que por lo general compartan una misma ubicación. Y muchas veces ni siquiera se encuentran en las propias casas consistoriales.

La inexistencia de éstas en la Edad Media había provocado que con relativa frecuencia la documentación local estuviera «*desperdigada por casas de ediles y notarios*». Y si esto ocurría en Jaca [Buesa Conde, 1986, p. 87], la falta de control en su salida podía acarrear idéntico destino, como tantas veces se denuncia en Burgos en el siglo XVI [Díez Sanz, 1984, p. 25].

Seguramente el ejemplo de Sevilla en la Edad Media es el más claro en cuanto a la distinta ubicación de la documentación municipal. Las arcas que contenían los privilegios y otros documentos solemnes se localizaban en el Corral de Olmos, lugar donde se reunía el cabildo de regidores sevillano; el cabildo de jurados guardaba su archivo en un arca depositada en el convento de San Francisco de Sevilla; la restante documentación estaba en poder de los escribanos capitulares, de los escribanos de juzgados y comisiones, de los contadores y de los mayordomos, que la guardaban muchas veces en sus propias

casas [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 11-12]. Ya hemos advertido que todavía a finales del siglo XVIII, los libros de acuerdos del cabildo de regidores de esta ciudad andaluza se conservaban en las casas de los escribanos capitulares.

En bastantes poblaciones se optó por mantener la documentación más reciente y de mayor uso en el propio ayuntamiento, en distintas dependencias, y reunir la de más valor en un archivo ubicado generalmente en un establecimiento religioso (iglesia parroquial o convento). A ella habría que unir la que guardaban distintas autoridades locales, por razón de sus cargos, y algunos oficiales concejiles (sobre todo los escribanos) en sus casas, y la que por diferentes motivos (pleitos, o confirmación de derechos) permanecía en los tribunales u otros organismos de la administración central.

La utilización de edificios religiosos para conservar el archivo de los privilegios se explica por haber servido muchos de éstos como sede de las reuniones municipales, antes de la construcción de las casas consistoriales, y por su consideración de lugares sagrados con todo lo que esto llevaba consigo, sobre todo en cuanto a seguridad. Ya en 1269 tenían lugar las deliberaciones de los consejeros barceloneses en el convento dominico de Santa Catalina. Allí permanecería el arca con los privilegios y otros documentos de especial interés hasta el año 1369 en que fue trasladada al convento de San Francisco. Los consejeros se reunían por aquellos años en casa del notario escribano del «*Consell*», en donde se guardaba documentación de uso frecuente. También se conservaba en la casa del racional de la ciudad la propia de su oficio [Arxiu, 1995, p. 25]. A finales del siglo XIV, con la ampliación de la «*casa de la ciudad*», Barcelona ya disponía dentro de ella de un espacio destinado a archivo, sin que por ello nunca consiguiera agrupar allí toda la documentación municipal.

En la ciudad de Zaragoza, a principios del siglo XV, parte de la documentación municipal se encontraba en la sede del concejo, conocida como «*Casas del Puente*», y otra parte, los privilegios reales y otros documentos de gran valor, en unos armarios en la pared de la sacristía de la iglesia de la Seo [González Miranda, 1981, p. 81]. En la localidad segoviana de Sepúlveda, esta última se custodiaba, en 1547, en la iglesia de Santiuste, mientras que la de uso más frecuente se localizaba en Santa Lucía, sede del ayuntamiento [Sáez Sánchez, 1956, p. XXII]. El archivo de Carmona, durante el siglo XVI, fue dividido «*en dos secciones, histórica y administrativa, ... repartidas entre dos edificios: ya entre la capilla del arcediano de la iglesia de Santa María, y las casas consistoriales, ya entre éstas y las de la audiencia*». Esta situación se mantuvo hasta el siglo XVIII [Inventario, 1987, p. 12]. La población burgalesa de Espinosa de los Monteros mantuvo dividida durante siglos la documentación municipal entre las casas consistoriales y la sacristía de la parroquia de Santa Cecilia [Inventario, 1987, p. VI-VII].

Esta práctica que venimos constatando con los ejemplos señalados no era extraña a otras instituciones territoriales. El señorío de Vizcaya en el siglo XVIII tenía su archivo administrativo, conocido como Archivo Manual, en Bilbao, mientras que el histórico, denominado Archivo General, permanecía en Guernica [Gómez Rodrigo, 1974, p. 71].

La ciudad de Valladolid disponía de dos arcas, una para los originales, que solía estar en una iglesia, y otra en la casa consistorial para guardar los traslados y copias, y la documentación más consultada [Pino Rebolledo, 1991, p. 9-10]. En Sitges, en el siglo XVIII, estaba distribuida parte en el archivo de la iglesia parroquial de la villa y parte en un armario y un arca en la sede del ayuntamiento [Panyella, 1982, p. 90-91].

Hubo poblaciones que con el tiempo lograron reunir toda su documentación en la casa consistorial, pero no por ello la mantuvieron en una única dependencia. Los ejemplos ya comentados de Jaca y Huesca son muy claros. El archivo de privilegios, el de procesos seguidos ante el justicia, y los libros del regimiento se conservaban en lugares separados, con independencia de su data de producción. La más reciente y de uso más frecuente estaría bajo la custodia de notarios, contadores y autoridades locales. Si esto ocurría en poblaciones del reino de Aragón, lo mismo parece suceder en otras de la corona de Castilla. En las ordenanzas de Tenerife de 1540 se señala que en las casas del cabildo, además del arca de los privilegios con tres llaves, debía haber un archivo «*en el qual pongan todos los procesos feneçidos*», cerrado con cuatro llaves [TENERIFE, 1540]. En Córdoba, sin embargo, todos los procesos criminales se guardaban en un arca, en la cárcel pública [CÓRDOBA, 1491].

En muy pocas ciudades existió una dependencia propia como archivo en las casas consistoriales, identificando generalmente este término con un armario, empotrado o no, y con una o varias arcas. A veces llegó a existir un archivo-habitación en el que había armarios y arcas, o bien éstas estaban diseminadas por distintas dependencias municipales. Gerona, en la Baja Edad Media, conservaba su documentación en armarios, cajones o cajas «*tots ells ubicats en diferents estances de la Casa de Consell, sense que l'arxiu es destaqués com a lloc físic únic o específic*» [Alberch i Fugueras, 1994, p. 525].

Otras muchas localidades mantuvieron esta situación bien avanzada la Edad Moderna, careciendo de una dependencia propia y específica dentro de las casas consistoriales para conservar toda su documentación, al preferir el uso de arcas o arcones de fácil traslado que podían instalar en cualquier parte. Pero este sistema tenía sus ventajas e inconvenientes, como más adelante veremos. Es más la existencia de un archivo-habitación no suponía que se desterrara el sistema de arcas y armarios, pues solían coexistir.

En el archivo de Vich, en 1590, se describe la existencia de «*una strada llarga ab dos caxons sens tencadures dins les quals ha papers y scriptures velles. Item altre caxa vella... dins la qual ha altres libres de la taula... Item lo armari dels privilegis y libres...*» [Serra i Campdelacreu, 1879, p. 90]. En Fuentespalda, en el siglo XVIII, no existía un archivo como dependencia diferenciada conservándose la documentación en un armario situado en una pared de la sala del ayuntamiento y en un arcón grande [Serrano González, 1995, p. 201]. Lo mismo parece ocurrir en la localidad menorquina de Alayor, en 1705, ya que sus documentos estaban entonces en «*una taula ab tres calaxos*» en la sala donde se reunía el consejo municipal, y en un armario [Hernández Sanz, 1917, p. XI].

La mayoría de estas referencias se ciñen a lo que hemos denominado como archivo de privilegios o del común, manteniéndose aún mayor dispersión entre la documentación de uso más frecuente y de valor administrativo. El escribano de la ciudad, el notario o el fiel de fechos, según cada población, conservaría buena parte de ella en su propia casa o en alguna dependencia municipal próxima a su zona de trabajo, bien en estanterías o en cajones. El ayuntamiento de Orense en 1757 acordó que determinados libros impresos se conservaran en el «*cajón del presente escribano*» [Gallego Domínguez, 1981, p. 183]. En el inventario redactado en 1553 de las escrituras y procesos ingresados en el archivo de la ciudad de Zamora se señala expresamente que hasta entonces estaban «*en los cajones de Francisco de Ledesma, Escribano y Secretario del Consistorio y Ayuntamiento*» [Pescador del Hoyo, 1948, p. 6].

La evolución del concepto de patrimonio documental a lo largo de todo el Antiguo Régimen influyó decisivamente en esta situación generalizada de dispersión de documentación fuera y dentro del ayuntamiento, aunque el proceso de concentración documental iniciado con la construcción de las casas consistoriales avanzó lentamente hasta su culminación en el siglo XIX. En Oviedo, a partir del año 1659, por poner un ejemplo «*se dan órdenes para concentrar toda la documentación en las nuevas Casas Consistoriales ya que el Archivo no había sido trasladado en su totalidad a ellas*» [Villa González-Río, 1978, p. XIX]. En esos largos siglos las autoridades locales buscaron diferentes soluciones para conservar debidamente la documentación local, empezando por una adecuada ubicación.

1.2. La ubicación del archivo del común

Todavía en algunas localidades españolas se conserva como una reliquia del pasado el arca o arcón de madera con varias cerraduras que servía para guardar la documentación más solemne. En la Edad Media la facilidad de su traslado permitía su transporte desde su lugar de conservación hasta el sitio

en donde el concejo realizara sus reuniones, siempre que así se estimase necesario. Este sistema se empleaba también para custodiar el dinero, las matrices de pesos y medidas, las bolsas utilizadas en las insaculaciones, y otros objetos de especial interés para los ayuntamientos, ante la inexistencia casi generalizada de casas consistoriales.

La incipiente organización municipal y la escasa documentación producida y recibida en ese período posibilitaba que, salvo en las grandes poblaciones, un arca de variadas dimensiones sirviera para custodiar todo el archivo del común, secreto o de los privilegios, que solía conservarse o bien en la propia casa del escribano o de algún vecino pudiente, o bien en algún establecimiento religioso.

A) CASAS PARTICULARES

En 1384 se constata ya en Alcalá de Henares que el arca del concejo era custodiada por un vecino de la villa, perteneciente a la oligarquía municipal, en su propia casa, manteniéndose esta situación hasta bien entrado el siglo XVI [Castillo Gómez, 1992, p. 109]. Las ordenanzas de Valencia de Alcántara de 1489 especifican que el arca de los privilegios *«se ponga e deposite en guarda de una buena y honrada persona de los más ricos y abonados de la dicha villa, donde mejor e más seguramente pueda estar»* [VALENCIA DE ALCÁNTARA, 1489].

Buscar las mejores condiciones de instalación y sobre todo la seguridad, a falta de buenos edificios públicos o eclesiásticos, podía conllevar la custodia del arca en las casas de personas con responsabilidad en el gobierno local o en la tramitación de su documentación. Esto se produjo tanto en localidades castellanas como catalano-aragonesas. Y lo mismo sucederá durante la conquista y colonización de las Indias.

En América, durante la primera mitad del siglo XVI fue bastante corriente que la documentación fuera custodiada por *«el escribano del Cabildo, porque éste tenía casa antes que el Cabildo, y porque era más segura»* [Bayle, 1950, p. 22]. La falta además de un edificio público en muchas pequeñas poblaciones provocaba que los documentos estuvieran depositados en casas particulares.

Hasta el año 1595, no hubo en la localidad catalana de Olot un archivo en la casa del Consejo, permaneciendo los documentos en las propias de las autoridades locales, pero *«per tenir los Consols en llur poder les scripturas, privilegis, papers y los segells de dita Universitat se han perdudas molts y se han seguits molts indirectes y danys perque mudantse com se mudan dits Consols quiscun any restan en llurs casas»* [Mayans i Pluja, 1987 (a), p. 220]. En Jaca, hasta que no fue construida la casa consistorial a principios del siglo

XVI, se mantuvo la *«documentación desperdigada por casas de ediles y notarios»* [Buesa Conde, 1986, p. 87].

En algunas localidades gallegas se constata también la permanencia del arca en casas de oficiales concejiles o de autoridades locales hasta bien entrado el siglo XVI. Es el caso de Ribadavia [Gallego Domínguez, 1988, p. 33] y de Orense. En esta ciudad, en 1434, era un regidor, custodio de una de las llaves, el que guardaba en su casa el arca del común. Dado que Orense no tuvo casas consistoriales hasta ese siglo, fue corriente que el arca estuviera a buen recaudo *«en las casas de magistrados que ofrecieran garantías de seguridad contra robos, incendios y otras cualesquiera causas»* [Gallego Domínguez, 1985, p. 191].

En la población riojana de Aldeanueva de Ebro, y hasta la construcción de un archivo en 1594, era común que la documentación del concejo fuera *«custodiada por los regidores del lugar, en sus propias casas»* [Prado Martínez, 1995, p. 307]. El arca de los privilegios de la ciudad de Oviedo se encontraba en 1502 en la casa del escribano de la ciudad [Villa González-Río, 1978, p. XV]. Lo mismo sucedía en ocasiones en Murcia, al menos en el siglo XV [Llanos Martínez, 1991, p. 17].

La utilización de las casas de particulares para conservar el arca del común fue una práctica no inusual seguida en algunas localidades ante la falta de edificios públicos que ofrecieran suficientes garantías. En la casi totalidad de los ejemplos citados la construcción de las casas consistoriales significó el abandono de esta práctica medieval, prolongada a veces hasta bien entrado el siglo XVI. Solamente circunstancias excepcionales provocarían posteriormente la vuelta a este sistema. La ruina de las casas capitulares en Alcalá de Guadaira, en 1820, motivó que toda la documentación pasara a la casa del escribano [Inventario, 1987, p. 11]. Años antes, en 1800, el archivo del común de Zamora fue repartido entre las casas de los regidores, por idéntico motivo [Pescador del Hoyo, 1948, p. 8]. El archivo de Sitges, durante la Guerra de la Independencia, *«fou repartit per a salvar-ne el contingut»* entre sus vecinos, lo que explica que todavía hoy se conserve documentación municipal entre los archivos patrimoniales de familias originarias de esta localidad [Panyella, 1982, p. 92].

B) IGLESIAS PARROQUIALES

El uso de los recintos religiosos, sobre todo de las iglesias parroquiales, para guardar la documentación municipal hay que ponerlo en relación con el hecho de haber utilizado estos edificios como primera sede para celebrar las reuniones del concejo, o con su cercanía, si se desarrollaban en una determinada plaza pública. La consideración de lugares sagrados incrementaba por sí

las condiciones de seguridad adoptadas (rejas, lugares altos, varias cerraduras, etc.), ofreciendo las máximas garantías ante la inexistencia de casas consistoriales. Siempre nos referimos al archivo de privilegios, secreto o del común.

Muchas localidades, especialmente las más pequeñas, utilizaron sus iglesias parroquiales como sede de sus archivos. Esta práctica, común desde la Edad Media, ha pervivido en la actualidad según F. Ballesteros «*y aún hoy parroquias de núcleos pequeños guardan documentación de los Concejos*» [Inventario, 1987, p. VII]. También E. Corral García ha destacado la tendencia a ubicar los archivos en las iglesias, recogiendo los ejemplos de Cuéllar, en la parroquia de Santa Marina, y Valladolid, en la de San Miguel. Todavía en el siglo XIX, Fuenterrabía tenía su archivo en la iglesia parroquial, como ocurría en «*otros pueblos de la provincia de Guipúzcoa*» [Vignau Ballester, 1871, p. 257].

Ciudades importantes como Valladolid utilizaron varias iglesias parroquiales durante la Edad Media para conservar su arca de los privilegios. En esta población castellana, el arca pasó de la iglesia de San Pelayo, sede seguramente de las primeras reuniones del concejo, a la iglesia colegial de Santa María, y de ahí a la iglesia de San Miguel ya en el siglo XV [Pino Rebolledo, 1991, p. 12].

La iglesia de Santa Eulalia o Elalia servía ya en 1355 para guardar el armario con la documentación municipal de la localidad navarra de Los Arcos. De allí fue trasladada, en 1570, a la parroquia de Santa María, en donde permanecería hasta bien entrado el siglo XIX, ocupando dos vanos «*sobre los arcos, puertas y lienzos que miran a dichas capillas de la Concepción y San Juan*» [Pastor Abaigar, 1993, p. 198].

Las asambleas concejiles de Astorga se celebraban en la iglesia de San Bartolomé, permaneciendo el arca de los privilegios «*itinerante*», seguramente en casas particulares, hasta que en 1447 se adoptó el acuerdo de fijar su sede en esta iglesia, lugar en el que permaneció hasta su traslado definitivo a las casas consistoriales en el siglo XVI [Martín Fuertes, 1980, p. 12].

Madrid utilizó dos sedes para guardar su documentación a finales del siglo XV. El arca permanecía en la iglesia del Salvador, pero a veces se utilizaba para su custodia el monasterio de Santo Domingo el Real [Gómez Iglesias, 1974, p. 30]. En 1513, Madrid acordó construir en el coro de la iglesia del Salvador una bóveda de ladrillo, con puertas y reja de hierro, para guardar el arca.

Santo Domingo de Silos guardaba su arca en la sacristía de la iglesia de San Pedro en 1536. La Coruña se servía, a comienzos del siglo XVI, de la torre de la iglesia de Santiago. Sepúlveda utilizaba dos sedes. Los privilegios y provisiones reales se guardaban en la iglesia de Santiuste, mientras que las

escrituras, libros de acuerdos y otros documentos permanecían en la iglesia de Santa Lucía, sede de su ayuntamiento [Sáez Sánchez, 1956, p. XXII].

En el siglo XVI la documentación de San Sebastián se guardaba en la iglesia de Santa María. Debido a la excesiva humedad fue trasladada en 1578 a la sacristía de la iglesia de San Vicente, donde todavía permanecía bien entrado el siglo XVIII [Banus Aguirre, 1986, p. 7 y 11]. Esta ciudad guipuzcoana al igual que ocurría con Fuenterrabía seguía el ejemplo del señorío de Vizcaya, cuyo archivo histórico se encontraba en ese siglo en la sacristía de la iglesia de Nuestra Señora la Antigua de Guernica [Gómez Rodrigo, 1974, p. 64]. El archivo de Tolosa estaba, en 1747, sobre la sacristía de su iglesia parroquial [Anguera, Juana y Orube, 1987, p. 350]. El de Irún estuvo también en la sacristía de la iglesia del Juncal, y más tarde en su torre [Garmendia Estomba, 1989, s/p.].

La localidad riojana de Aldenuva de Ebro mandó guardar el arca con su documentación municipal, en 1594, en la iglesia parroquial de San Bartolomé [Prado Martínez, 1995, p. 308]. Carmona también utilizó, en el siglo XVI, como sede de parte de su archivo la capilla del arcediano de la iglesia de Santa María. Logroño se sirvió de la iglesia de Santiago el Real, utilizando un espacio ubicado sobre la puerta de la sacristía, a la derecha del altar mayor, protegido por una reja, que todavía se conserva, detrás de la cual había una puerta recubierta de una plancha metálica con dos cerrojos. El archivo de Espinosa de los Monteros estaba en el siglo XVII en la iglesia de Santa Cecilia.

En el ámbito catalano-aragonés, cabe mencionar que Zaragoza conservaba, todavía a mediados del siglo XVI, parte de su archivo, especialmente los privilegios reales, en unos armarios sobre el sagrario y la sacristía de la iglesia de la Seo [González Miranda, 1981, p. 81]. Sitges mantenía a finales del siglo XVIII buena parte de su documentación dentro del archivo parroquial de la villa [Panyella, 1982, p. 91].

Las iglesias parroquiales fueron, por lo tanto, utilizadas durante todo el Antiguo Régimen como sede para custodiar la totalidad o parte del archivo de los privilegios o del común, por un buen número de poblaciones castellanas, y en menor medida del Reino de Aragón. Esta situación se mantuvo en Córdoba, Logroño, Fuenterrabía, Irún, Palafrugell, Valdecilla, Arnuero, etc. hasta bien entrado el siglo XIX [Cerdá Díaz, 1997, p. 176-177]. La sacristía, el coro o alguna de las capillas eran un buen lugar para conservar el arca o armario con la documentación municipal de más valor. En ocasiones se optó por utilizar huecos abiertos en la pared a elevada altura, protegidos con rejas y puertas con cerrajas, dentro de los cuales se situaba el arca o diferentes estantes.

A pesar de los ejemplos señalados, parece constatarse que a lo largo de la Edad Moderna, los ayuntamientos fueron reintegrando paulatinamente a sus casas consistoriales el archivo de los privilegios conservado hasta entonces en sus iglesias parroquiales.

C) CONVENTOS

La utilización de conventos como lugar de conservación del arca del común fue menos usual, y los ejemplos conocidos hasta ahora se refieren a varias ciudades castellanas y catalanas, tan importantes como Madrid o Barcelona.

La preferencia por los conventos, en particular por los de la Orden de San Francisco, en estas grandes ciudades puede tal vez estar en relación con la existencia en ellas de varias parroquias, lo que impedía una fácil elección, o con la pretensión de evitar la utilización de una institución demasiado cercana al poder espiritual, fuera obispo o arzobispo. La explicación incluso puede ser más sencilla, esos conventos fueron el primitivo lugar de reunión del gobierno municipal, caso de Barcelona, o simplemente ofrecían más seguridad que las casas consistoriales como se apunta en Córdoba.

El archivo de privilegios de esta última ciudad andaluza muy posiblemente se encontraba ya instalado en el Real Monasterio de San Pablo en el siglo XIII, y con toda seguridad en 1327. Construidas las casas capitulares en la primera mitad del siglo XV se decidió mantener el arca de los privilegios en ese convento. En 1619 los frailes cedieron a la ciudad la sacristía antigua para ubicar allí el archivo del común. El *«estar muy maltratadas las casas del Cavildo de la ciudad y no haver en ellas seguridad para dicho Archivo»* fueron las motivaciones que alentaron al ayuntamiento para mantener su documentación más valiosa en este monasterio. En 1705, el archivo fue trasladado de la sacristía a una de las celdas bajas, es decir al sótano del convento, sufriendo con el tiempo los efectos de una perniciosa humedad. Allí permaneció hasta que en 1837 la documentación ingresó en el ayuntamiento [Nieto Cumplido, 1978, p. 1-3].

Los privilegios de Medina del Campo se guardaban a principios del siglo XVI en el monasterio de San Francisco [Álvarez García, 1980, p. 37].

Los jurados cordobeses mantenían su archivo a principios del siglo XVII en el monasterio de San Pedro el Real. Mientras que los de Sevilla, al menos en la Edad Media, se habían servido del monasterio de San Francisco.

Los consejeros de Barcelona realizaron sus primeras reuniones conocidas en el convento dominico de Santa Catalina ya entrado el siglo XIII. Allí en grandes cajas de madera se conservaban sus privilegios. En 1369, por un conflicto con los frailes, decidieron edificar la casa de la Ciudad y trasladar su archivo al convento de San Francisco. A pesar de deliberar en diferentes ocasiones sobre la conveniencia de que esos documentos (privilegios, cartas reales, bulas papales, etc.) fueran trasladados a la sede municipal, la situación se mantuvo hasta la desamortización eclesiástica, ya avanzado el siglo XIX, pasando a engrosar los fondos del Archivo de la Corona de Aragón, en donde todavía permanecen [Arxiu, 1995, p. 25-26].

Aunque los gobernantes de Manresa, en el siglo XIV, celebraban sus reuniones capitulares en la iglesia de San Miguel, utilizaban como sede del arca de los privilegios el convento del Carmen. Seguramente, al menos desde principios del siglo XVII, su documentación se encontraba ya en la casa del Consejo [Gasol, 1990, p. 7-8]. Algo parecido debió ocurrir con la ciudad de Madrid. El monasterio de Santo Domingo el Real sirvió para guardar parte de la documentación municipal hasta que el ayuntamiento de Madrid, en el siglo XVII, tuvo una sede adecuada [Cerdá Díaz, 1997, p. 24, nota 7].

Según las ordenanzas de la ciudad de Salamanca, publicadas en 1658, su archivo de privilegios estaba ubicado frente a la sacristía, en el monasterio de San Francisco. Valladolid utilizó temporalmente, entre 1502 y 1507, y mientras se reconstruía la iglesia de San Miguel, el monasterio de San Francisco para guardar su archivo. De nuevo fue trasladado allí en 1546, utilizando un espacio en la capilla mayor. Pero a finales de ese siglo toda la documentación se agrupa y de una forma definitiva en las casas consistoriales [Pino Rebolledo, 1991, p. 14-15].

Por lo tanto algunos conventos sirvieron de sede para guardar el arca o archivo de los privilegios, por diferentes motivaciones, aunque como ocurría con las iglesias parroquiales y casas particulares, poco a poco fueron siendo sustituidos por las casas consistoriales.

D) CASAS CONSISTORIALES

El proceso de construcción de las casas consistoriales, acelerado en ambas Coronas con las disposiciones aprobadas por los Reyes Católicos, va a posibilitar que ya en la Baja Edad Media algunas poblaciones conserven su documentación más valiosa en esos edificios. Poco a poco, conforme vayan levantándose las nuevas sedes de los cabildos municipales, las arcas o armarios, hasta entonces ubicados en casas de particulares, iglesias o conventos, irán siendo trasladadas a alguna de sus dependencias, prevaleciendo las salas capitulares.

Bastantes localidades, generalmente las más pequeñas, seguirán conservando sus arcas en edificios religiosos, por ser *«lugares más seguros y fiables»* [Cerdá Díaz, 1997, p. 175]. Otras las mantendrán allí por conservar una vieja tradición, de alto contenido simbólico, pues muchas veces permanecían en el lugar primitivo de reunión de los primeros vecinos.

Las características tipológicas e informativas de la documentación conservada en el archivo de los privilegios o del común no hacía necesario un uso continuo de estos documentos, si existían traslados o libros copiadores debidamente validados en manos del escribano del concejo. Por ello tampoco resultaba excesivamente engorroso su permanencia fuera de las casas consis-

toriales, en donde ya se conservaba la documentación más reciente y de uso administrativo, compartiendo sede con las casas de diferentes oficiales municipales, como ya hemos visto.

La paulatina sustitución del concejo abierto por el regimiento, o concejo cerrado, pudo incidir en Castilla en el traslado de aquella documentación a las casas consistoriales. El gobierno municipal había dejado de ser tarea de todos los vecinos para convertirse en un deber y un derecho de unos pocos, los regidores, y por lo tanto la decisión de que el archivo del común saliera de las iglesias, abiertas a todos los creyentes, y quedara ubicado dentro de las nuevas sedes locales, con un acceso más restringido, puede explicarse como un signo más de ostentación de poder por parte de las autoridades municipales. Además resultaba lógico que los documentos estuvieran prestos para ser utilizados, siempre que las decisiones de los regidores lo requiriesen, y para ello nada mejor que tenerlos en los ayuntamientos.

No cabe duda de que cada localidad fue adoptando los acuerdos que estimó más oportunos en este proceso, aunque parece evidente que la concentración paulatina de toda la documentación municipal en las casas consistoriales no culminaría hasta el siglo XIX, y en algunos casos hasta el siglo XX.

En la Corona de Castilla hay ciudades que ya en el siglo XIII conservaron el archivo del común en la misma sede del cabildo municipal, ajena a cualquier edificio religioso. En Murcia, *«la localización del archivo ha sido secularmente la misma, la Casa de la Corte»*, edificio destinado por Alfonso X, en 1267, como sede del ayuntamiento [Martínez Carrillo, 1991, p. 14]. En 1371 los libros se guardaban allí, en una *«cámara mayor»*, seguramente anexa a la sala en donde se celebraban las reuniones concejiles. En ésta última se situaba el arca de los privilegios.

El ejemplo murciano fue seguido en otras poblaciones castellanas más tardíamente, ya iniciada la Edad Moderna. Ciudades como Burgos, Sevilla, Toledo, Valladolid, Zamora y Orense conservan el archivo del común o de los privilegios dentro del recinto de sus casas consistoriales ya en el siglo XVI, y sólo por situaciones excepcionales cambiarán esta ubicación y siempre por un tiempo limitado. Algunas poblaciones más pequeñas adoptarán la misma decisión, como es el caso del municipio madrileño de Getafe.

Burgos utilizará, desde 1510, la torre de Santa María, cuyo acceso estaba protegido por la histórica, y todavía conservada, puerta de hierro con cuatro cerraduras. En este habitáculo se encontraba también el arca de tres llaves. En 1794 la documentación sería trasladada a la nueva sede del ayuntamiento [Díez Sanz, 1984, p. 14, 26 y 53]. En Sevilla, el archivo estuvo situado en un primer tiempo en el Corral de los Olmos, extenso patio arbolado junto al lado oriental de la antigua mezquita mayor, en donde se producían las reuniones capitulares. Una vez construidas las casas consistoriales en el siglo XVI, la

documentación fue trasladada a esta sede, permaneciendo allí hasta el año 1987. El archivo del cabildo sevillano ocupaba una pequeña dependencia, situada al fondo de una sala de la planta alta, en una capilla protegida por una reja y puertas de hierro, en cuyo interior se encontraban las arcas o cajones de madera, a su vez protegidos con otras tantas cerraduras [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 9 y 14].

Dentro de las casas consistoriales de Segovia, en 1546, existía «*una sala del dicho ayuntamiento donde están los archivos e arcas de los privilegios e escrituras tocantes a la dicha çibdad*» [Cantalejo San Frutos, 1994, p. 836].

En Toledo, durante la segunda mitad del siglo XVI se construyó una dependencia próxima a la sala capitular, y junto al despacho del escribano mayor, en la primera planta de las casas consistoriales, para ubicar allí su archivo del común. Esta pequeña sala estaba protegida por una puerta con tres cerrajas, hoy perdida. En una de las paredes de su interior figuraba ya entonces un armario empotrado, dotado de seis cerraduras, para custodiar el archivo secreto, compartiendo el espacio con estanterías de madera que ocupaban las restantes paredes, en donde se situaban otros documentos enlegajados. Ese armario conservado actualmente, in situ, y en un buen estado, refleja muy claramente los criterios seguidos en esa época para instalar la documentación más valiosa.

En Valladolid la decisión de trasladar definitivamente toda la documentación a la casa consistorial construida en la plaza Mayor no se produce hasta el año 1587 [Pino Rebolledo, 1991, p. 18]. En Zamora, en 1553, se ordenó el envío del arca de los privilegios que estaba en poder del escribano a la casa del ayuntamiento. En 1630 se guardaba la documentación en un «*arcaz que estaba en el corredor del Consistorio*» [Ferrero Ferrero y González Matellán, 1983, p. 139].

En Orense, el arca de los privilegios ya estaba depositada en las casas consistoriales en el siglo XVI. A finales del siglo XVII existía además en ellas un armario o alacena, que en 1751 se ubica en la misma sala donde se celebran los ayuntamientos, en la esquina donde estaba el oratorio, embutido en la pared. La documentación se encontraba además en un arcón y varios cajones dentro de la sala capitular [Gallego Domínguez, 1981, p. 181 y 187-188].

Estas importantes ciudades castellanas, cuyo gobierno recaía en los regidores, con una presencia activa en las Cortes, pudieron servir de modelo a otras localidades de la misma Corona. Lo cierto es que Astorga ya ubica el arca del concejo en la casa consistorial en el año 1576 [Martín Fuertes, 1980, p. 12], en la misma sala en donde se celebran sus reuniones. Un siglo después la documentación se conserva en un arca y varias alacenas. En el siglo XVIII, al construirse una nueva sede municipal, se dota al archivo de un espacio propio dentro de ella.

En las ordenanzas de la localidad cántabra de Frama de 1614 se especifica que el arca debe guardarse en la casa del concejo. Lo mismo se establece en las de Potes del año 1619.

En Jaén está constatado que el archivo del común se conservaba en las casas consistoriales al realizarse el inventario de sus documentos en 1727 [Rodríguez Molina, 1982, p. 87].

No obstante muchas pequeñas localidades castellanas, sobre todo de la meseta del Duero, y las vasco-navarras prefirieron servirse de las iglesias parroquiales para conservar sus arcas del común, manteniendo esta tradición medieval hasta el siglo XIX, y en algunos casos hasta el siglo XX.

Por contra, todo apunta a que en la Corona aragonesa la utilización de edificios religiosos fue algo excepcional, prevaleciendo desde la Baja Edad Media el uso de la sede municipal para ubicar allí su arca de los privilegios. En el Reino de Aragón hemos comprobado como claramente las ordenaciones especifican que toda la documentación se conserve, si bien en distintas dependencias, en sus «casas comunes». En Zaragoza la documentación municipal de uso más frecuente se guardaba en el siglo XV en la sede del concejo, en las «Casas del Puente» [González Miranda, 1981, p. 81]. En Teruel, el archivo estuvo «tradicionalmente instalado en la Casa Consistorial» [Serrano González, 1995, p. 197]. Las ordenaciones de Huesca de 1551 se refieren expresamente al «*archiu de las casas comunes de la dicha ciudad*». Las de Albarracín del año 1630, las de Daroca de 1647 o las de Jaca de 1694 también recogen la existencia del archivo de la ciudad dentro de las casas consistoriales.

Una situación parecida se produce en las poblaciones del Reino de Valencia, al menos en Alicante, Albaida y Cullera. Una disposición del año 1572 había ordenado en la primera ciudad que «*se habilite un archivo en la Sala Capitular para que los libros y papeles de la ciudad estén a buen recaudo y resguardo*» [Paternina Bono, 1992, p. 51]. En Albaida, la «*caixa del conseil*» se guardaba en el año 1598 en la «*sala de juntas conciliares*» [Ortiz García-Bustelo, 1992, p. 24]. En Cullera, al construirse unas nuevas casas consistoriales en 1781, el archivo quedó ubicado en «*una sala de la primera planta del edificio*» [Villalmanzo Cameno y Giner Pereperez, 1978, p. 30].

En Cataluña, parece que en «*el siglo XIV son relativamente abundantes las noticias sobre archivos municipales instalados en la casa del Consell*» [Planes i Albets, 1992, p. 18]. En 1370 se constata la existencia del archivo de Tortosa en la «*sala de la Casa de la Ciutat*» [Massip i Fonollosa, 1989, p. 241]. En 1377 lo mismo ocurre en Cervera. Y otro tanto en Gerona ya que «*sempre es constata l'existència a un racó o altre de la Casa de la Ciutat, d'un estatge o despatx dedicat a l'arxiu*» [Alberch i Fugueras, 1987, p. 230]. El archivo de Igualada, a lo largo de los siglos XV y XVI, «*suposem que es va anar traslladant de la mateixa manera que l'Ajuntament canviava d'edifici*»

[Llacuna i Ortinez, 1982, p. 61]. En 1595 se ordenó la construcción de un archivo en la casa de la universidad de Olot [Mayans i Pluja, 1987 (b), p. 158]. En Tárrega, durante los siglos XVI y XVII, se especifica en distintos documentos que el archivo estaba situado en la «*casa de la Paeria*» [Gonzalvo i Bou, 1989, p. 163]. Una historia manresana del siglo XVII especifica que el armario-archivo se encontraba situado en la casa del Consejo, en la sala del Racional [Gasol, 1990, p. 9].

Por último, en las localidades de las islas Baleares parece que la casa de la universidad fue utilizada mayoritariamente como sede del archivo durante el Antiguo Régimen. En Alayor, en 1705, el archivo se conservaba en la sala donde se celebraba el consejo municipal [Hernández Sanz, 1917, p. XI]. Lo mismo ocurría en Campanet en 1769 [Segura i Salado, 1985, p. 447].

E) OTROS EDIFICIOS

Las corporaciones locales sólo en circunstancias especiales se vieron obligadas a buscar sede para su archivo del común fuera de sus casas consistoriales o de sólidos edificios religiosos, al menos en los últimos siglos del Antiguo Régimen. Una mayor seguridad pudo motivar la utilización de fortalezas o castillos para guardar la documentación más valiosa. La comunidad de Daroca mantenía todavía su archivo, en 1871, cuando fue visitado por Toribio del Campillo, en una estancia «*de la fortísima torre de la villa de Cariñena*» [Campillo, 1871, p. 36]. Sabadell conservó su «*caixa dels privilegis*», desde 1561, en la «*torre del portal de Terrassa*» situada en la muralla de la ciudad [Castells i Peig, 1983, p. 13]. El visitador real que acudió al Valle de Arán a principios del siglo XVII determinó que el archivo custodiado en la iglesia mayor de la villa de Viella fuera trasladado al «*Castillo de León*» [VALLE DE ARÁN, 1616].

Las destrucciones masivas provocadas por la Guerra de Sucesión en Tarrasa motivaron que en 1714 se decidiera guardar la documentación municipal que se había salvado en la torre del «*castell de Terrassa*» [Puig i Ustrell, Sanllehi i Ubach, 1982, p. 136]. A finales del siglo XVIII, el archivo municipal de Santander estaba instalado en el «*oratorio de la cárcel donde oyen misa los presos*» [Vaquerizo Gil, 1984, p. 8]. Un armario en «*el torrachón que está sobre la puerta de Navarra*» le servía a Tolosa como archivo en 1659 [Anguera, Juana y Orube, 1987, p. 350].

Si recordamos, también en Córdoba se guardaba la documentación, pero sólo la judicial, en la cárcel pública, al menos a finales del siglo XV.

Al margen de estos ejemplos, sin duda no corrientes, podríamos subrayar como lugar de instalación de parte de la documentación municipal los archivos de determinados organismos de la Administración Central, sobre todo

de los Consejos, de las Chancillerías y de las Audiencias. A través de los libros de conocimientos existe constancia de muchos documentos originales que fueron remitidos a estas instituciones y nunca fueron devueltos, engrosando hoy sus fondos. Un caso llamativo pero significativo lo representan varios libros de acuerdos municipales de Talavera de la Reina, datados en el siglo XVII, y que se conservan actualmente en una colección facticia del Archivo de la Chancillería de Valladolid. Este tribunal los reclamó como prueba de un determinado proceso. Lo mismo se puede decir de otros tantos privilegios.

De todas formas no debemos olvidar que las ordenanzas del principado de Asturias de 1659 ya establecían que *«si el ayuntamiento de algún conçeço pareciere para más guarda, o seguridad de algún papel traerle a la çiudad de Obiedo a el archivo común del Prinçipado lo pueda haçer y en él se guarde»*.

1.3. Los continentes de la documentación

Una vez encontrado el lugar más adecuado y seguro para guardar los documentos municipales era necesario proceder a su instalación para lo que existían diferentes sistemas, cuya evolución pasaremos a estudiar. No obstante conviene recordar que tanto las arcas, como los armarios o las habitaciones-archivo fueron empleadas también para conservar otros objetos de singular valor o especial significación para las corporaciones locales. Los documentos compartieron así su espacio en esos muebles o estancias. En el Reino de Aragón, las ordenaciones aprobadas para sus principales poblaciones obligan expresamente a conservar el arca con las bolsas de los oficios, utilizadas en las elecciones locales, dentro del archivo. Así se recoge en las de Huesca del año 1551, en las de Calatayud de 1611, en las de Daroca de 1647, en las de Teruel de 1655, en las de Tarazona de 1685, en las de Jaca de 1694, etc.

Fue también bastante común conservar el sello de la ciudad dentro del arca o armario de los privilegios. En 1355, el infante don Luis especifica que se custodie el *«sieillo maor»* dentro del armario de los privilegios de Los Arcos [PastorAbaigar, 1993, p. 197]. El *«segell»* se guarda dentro de la *«caixa»* en la que Manresa custodiaba sus documentos ya en 1333 [Gasol, 1990, p. 7]. En 1451 se constata el ingreso del sello del concejo en el arca de Orense [Gallego Domínguez, 1985, p. 190]. Y todavía, en 1616, el Valle de Arán custodia su sello en el arca de sus privilegios [VALLE DE ARÁN, 1616].

Aún más extendido estuvo el uso de los muebles-archivo para conservar con los documentos los patrones de pesas y medidas, tanto en la Corona de Aragón como en la de Castilla. A finales del siglo XV, el arca madrileña además del estandarte guarda *«las pesas y medidas oficiales»* [Cayetano Martín, 1986, p. 550]. En 1447, en el arca de Astorga se encontraba *«un marco e un*

peso para pesar oro» [Martín Fuertes, 1980, p. 18-19]. En Valladolid, en 1499, también dentro del arca estaban «*cántara e media cántara e açunbres e vara de medir, y ... los patrones de las pesas de carnicería e pescadería*» [Pino Rebolledo, 1991, p. 9]. Las ordenanzas de la localidad toledana de La Torre de Esteban Hambrán recogen que «*la media fanega e medio celemin e quartillo que se truxo de Avila para padrones, se meta en el archivo*» [LA TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN, 1590]. Los patrones originales de los pesos de toda la Corona de Castilla se conservaban y se conservan dentro del archivo municipal de Toledo.

A veces también servían estos singulares espacios como cajas fuerte al conservar el arca o cofre con el dinero de la villa. En el libro de inventarios de Vich del año 1590 se especifica que en el archivo se ubicaba «*una caja gruesa con tres cerraduras para guardar los dineros; un cofre con tres cerraduras para guardar la caja*» [Serra i Campdelacreu, 1879, p. 90]. En el archivo de Burgos se conservó hasta el año 1967 un cofre construido en 1576 para depositar el dinero de la recaudación de arbitrios [Díez Sanz, 1984, p. 26]. En el arca de la localidad leonesa de Armellada además de su documentación podían guardarse los «*marabedís de propios si los hubiere*», al menos así se especifica en sus ordenanzas municipales del año 1548.

Otra de sus funciones fue la de custodiar determinados objetos relacionados con la principal fiesta religiosa. Nos referimos al Corpus Christi. Desde el siglo XVI, en el archivo de Burgos se guardaban varias vinajeras, candelabros, un crucifijo, etc. que se utilizaban el día del Corpus [Díez Sanz, 1984, p. 22]. En Gerona, a finales del siglo XV, se conservaban en él los trajes que se ponían las personas que salían en el cortejo de la procesión del Corpus [Batlle i Prats, 1951, p. 181-182]. En Vich y en Ribadavia también se constata la presencia de elementos relacionados con esa fiesta dentro de sus archivos, como las ropas de los gigantones en la localidad gallega.

En Gerona, a finales del siglo XV, el archivo custodiaba además las banderas y el pendón, y todo lo necesario para construir el túmulo cuando se producía la muerte de miembros de la familia real. A ello se unían las mazas de plata, y las consabidas medidas. En Toledo, junto con los patrones de medidas, existían marcas de hierro utilizadas por el gremio de espaderos y un pequeño cofre de metal que contenía, y contiene, en su interior las llaves que abren unas urnas con las reliquias de dos de sus santos locales. Esto último también ocurría en Talavera donde ya en el siglo XVII se guardaban en su archivo las llaves que permitían examinar las reliquias de sus Santos Mártires, conservadas en su Colegial [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 93].

Los documentos municipales compartieron espacio en muchas localidades con las arcas de los oficios (en las de la Corona de Aragón), con los sellos, los patrones de pesas y medidas, los dineros, los pendones y estandar-

tes, los objetos utilizados en algunas fiestas, y algunos otros especialmente relevantes y de singular valor para las corporaciones locales. A esta otra función se pueden añadir algunas aún más ajenas, como la reflejada en las ordenanzas de Albaida. En ellas se advierte al escribano de los jurados que «*ni deje dormir ni estar preso en aquél*» archivo bajo una determinada multa [Ortiz García-Bustelo, 1992, p. 25].

Pero la principal función de estos muebles-archivo era la de conservar los documentos municipales.

A) ARCA

Una vez elegido el lugar más propicio para guardar la documentación municipal era necesario determinar la manera de instalar en él los documentos. La decisión dependía de las condiciones de ese local, de la cantidad de documentos que se debían custodiar en él y del dinero que pretendiera gastarse cada ayuntamiento en esta tarea. En Cataluña, según R. Planes i Albets, «*els fons documentals eren generalment instal·lats en un o més armaris, els quals constaven d'un nombre considerable de calaixos, cadascun reservat a grups o plecs de documents determinats*». En los archivos eclesiásticos, además del recurso del arca, «*el sistema normal de colocación de los documentos suele ser el de cajonerías*» [Burón Castro, 1993, p. 23].

En el proceso acumulativo de documentación, iniciado por lo general en la Edad Media, el arca fue sustituida por el armario y éste a su vez por la habitación-archivo, conforme uno u otro resultaron insuficientes para contener todos los documentos municipales. Un ejemplo claro en este sentido lo representa la ciudad de Manresa que dispuso de arca propia ya en el año 1316, siendo sustituida en 1603 por un gran armario [Gasol, 1990, p. 7-8]. Ahora bien, hubo localidades que ya en las postrimerías del Antiguo Régimen todavía conservaban sus arcas y armarios, dentro del archivo-habitación. Nos referimos a las más importantes, como Oviedo que además de varios armarios siguió utilizando el arca de los fueros y privilegios, que hoy puede observarse en el archivo ovetense.

Las pequeñas poblaciones tenían suficiente con el tradicional arca, reminiscencia de los concejos abiertos medievales. Y de ello se encuentran ejemplos ya avanzado el siglo XIX. Incluso un arca podía ser innecesaria. No en vano el secretario del Gobierno Civil de la provincia de Gerona escribía en su visita a la pequeña localidad de Salt en 1865 que «*ha observado que el archivo del ayuntamiento se custodia en un cajón de una mesa escritorio*» [Colomer, 1992, p. 3].

En 1498, en el archivo de la ciudad de Gerona, los documentos estaban instalados en lo que las fuentes denominan como «*una caxa gran ab tres panys*

e tres claus..., una caxa ab lo cubertor blanch..., tres caxetes..., una caxa de fust ab un pany e clau» [Batlle i Prats, 1964-1965, p. 377-379]. En 1459 esa misma documentación se conservaba dentro del archivo en «*hun striny entich..., hun caxo..., hun arquibanch..., una caxa larga..., una altra gran caxa..., una caxa...*» [Batlle i Prats, 1951, p. 186]. Esta ciudad catalana refleja claramente la situación que se producía en otras poblaciones. En Gerona, a finales del siglo XV, simplemente se había habilitado un lugar dentro de las casas consistoriales para ubicar las distintas arcas o cajones en los que tradicionalmente se habían guardado los documentos.

En la ciudad de Olot, en 1579, estaban repartidos en «*duas caxas y un coffre cada hu ab tres tancaduras*» [Mayans i Pluja, 1987 (b), p. 159]. En Sevilla, en la Baja Edad Media, también se empleaban varias arcas que las fuentes documentales describen como «*el arca chapada de hierro de tres llaves..., una caxeta de madera redonda, ... el arca que está frontero a la entrada...*» [Fernández Gómez, 1995 (c), p. 64].

Los armarios, divididos en cajones o estantes, también se utilizan en ese mismo período para conservar la documentación municipal aunque en bastante menor medida, y seguramente por influencia de las instituciones eclesiásticas. El archivo episcopal de Tarazona mantenía esta estructura de armarios y cajones todavía en el siglo XX [Jiménez Catalán, 1925, p. 560]. Y lo mismo ocurría en el de la catedral de Segorbe, aunque los armarios estaban divididos por estantes [Andreu Valls, 1965, p. 40].

La identificación del arca o del armario con el archivo aparece de manera reiterada en las fuentes de la época. Las ordenanzas de Enterriás, Vada y Bobarganes del año 1744 ordenan la fabricación de un «*archivo de madera de nogal*». El propio J. Castillo de Bovadilla escribía en su obra clásica que las escrituras debían estar «*en un archivo o arca*».

El uso del arca hay que ponerlo en relación con la inexistencia de casas consistoriales en la mayoría de las poblaciones españolas en la Edad Media lo que motivaba que las reuniones no tuvieran una sede fija, y su utilización garantizaba la presencia de la documentación en el lugar convocado dada su movilidad. A ello se unía la escasez de documentos que formaban por entonces el patrimonio documental municipal lo que permitía este continuo trasiego y la facilidad de su traslado. Y además el arca era el sistema tradicional para guardar todo tipo de objetos y de dinero, como claramente refleja C. Bayle al referirse a las salas capitulares de las ciudades indianas «*con los baúles o arcas a lo largo de las paredes, arca de tres llaves, por antonomasia, para los caudales del Rey; arca de tres llaves para los bienes de difuntos, arca de tres llaves para bienes de propios; arca de tres llaves para los papeles del Cabildo. Y a veces se añadían otras con fines particulares...*» [Bayle, 1950, 20]. La propia cancillería real, mientras la Corte fue itinerante, se sirvió de

estos sencillos y útiles muebles para conservar sus documentos [Pescador del Hoyo, 1955, p. 10-11].

El uso de arcas para guardar los documentos municipales era común en la Edad Media, según O. Gallego, en la mayoría de los archivos gallegos. En esas arcas conservarían sus documentos cada concejo *«más o menos organizados, pues al ser pequeño su volumen era relativamente fácil la localización de cada uno»* [Gallego Domínguez, 1988, p. 32].

La existencia de arcas con estos fines está constatada ya desde principios del siglo XIV tanto en la Corona de Castilla como en la de Aragón. En Manresa, en 1316, se utiliza para guardar sus documentos una *«caixa tancada amb pany i clau»* [Gasol, 1990, p. 7]; en Barcelona se conservan en *«unes grans caixes de fusta»*, ya en el año 1336. En Valladolid se menciona la existencia del arca en un documento del año 1375 [Pino Rebolledo, 1991, p. 8]. El arca del concejo del Alcalá de Henares se cita en otro del año 1384 [Castillo Gómez, 1992, p. 107]. El libro de acuerdos municipales de Burgos de 1398 se refiere también expresamente al arca del concejo [Moratinos, 1985, p. 186]. Muy posiblemente en ese siglo, si no a finales del siglo XIII, debió guardar Sevilla ya sus documentos en este tipo de muebles. Y lo mismo podemos afirmar de Toledo, dada la riqueza de sus fondos documentales medievales y la importancia histórica de esta ciudad en ese período.

No obstante, en el siglo XV y sobre todo en el siglo XVI son más abundantes y continuas las referencias sobre la utilización de arcas para guardar los documentos que por entonces formaban el patrimonio documental municipal. La existencia de arcas está constatada en Talavera de la Reina en el año 1430, en Orense (1434), en Piedrahita (1439), en Madrid (1454), en Astorga (1447), en Valencia de Alcántara y San Sebastián (1489), en Segovia (1492), en Oviedo (1498), etc. Las disposiciones aprobadas por los Reyes Católicos incidirán notablemente en la difusión de la obligación de su uso como sistema para instalar los documentos municipales y así se recogerá en numerosas ordenanzas como las del señorío de Aguilar de 1519, las de Santo Domingo de Silos de 1536, o las de la isla de Tenerife de 1540, por poner algunos ejemplos. Las poblaciones creadas por los conquistadores españoles en Indias fueron dotándose a lo largo del siglo XVI de estas arcas en un proceso muy bien descrito por C. Bayle. Lima y Santiago de Chile las adquirieron en 1549, y La Habana lo hará en 1560.

Las principales ciudades se vieron obligadas a utilizar varias de estas arcas para conservar los documentos que iban recibiendo y produciendo. Al ejemplo de Sevilla, Barcelona o Gerona podemos unir el de Madrid, que mandó comprar un nuevo arca en 1488, por 28 reales [Gómez Iglesias, 1974, p. 30] o el de Orense que en 1596 decidió servirse, además del arca ya depositado en las casas consistoriales, de un gran cajón conocido como el arcón de

los escribanos, con decoración exterior policromada, que todavía hoy se conserva [Gallego Domínguez, 1985, p. 193].

La aparición paulatina de los armarios con mayor capacidad fue desplazando, aunque no siempre sustituyendo, a las arcas de tradición medieval. Todavía en 1764, en Sitges, ciudad que ya entonces disponía de un armario, se decide costear un arca de tres llaves para guardar parte de los documentos ocasionando un gasto de dos libras, un sueldo y seis dineros [Panyella, 1982, p. 90]. Y lo mismo acordó Alcira, en 1784. El 16 de abril de ese año su ayuntamiento decidió adquirir «*una arquilla de madera forrada y con las armas de la villa, capaz para yntroducir dichos papeles cerrados y custodiados con las llaves correspondientes al número de componentes de Ayuntamiento y Junta*» [Lairon Pla, 1995, p. 513].

Estas arcas poco se diferenciarían de las otras descritas por C. Bayle o de las arcas de los oficios utilizadas en la Corona de Aragón para las elecciones, al menos exteriormente. Están construidas en madera, generalmente de nogal, y recubiertas en algunas partes de elementos metálicos. A ellos se unen las distintas cerraduras, en un número variable como hemos visto anteriormente, y las asas para su transporte. Casi en su totalidad tienen forma rectangular, y su tamaño varía notablemente, aunque siempre se suele garantizar su movilidad aún llenas de documentos, por lo que no podían ser excesivamente grandes. Algunas llevan grabadas el escudo de la localidad, inscripciones alusivas a su contenido u otros elementos decorativos. Las fuentes se refieren a ellas generalmente como «*arcas*», aunque no faltan otras denominaciones tales como «*arcaz*» (caso de Zamora), «*arcón*» (Fuentespalda), «*arquetón*» u «*arcatón*» (caso de Orense), «*cofre*» (en Ciudad Real, Segovia, Alayor u Olot), «*cajeta*» (Sevilla), «*cajón*» (Orense), «*caxa*» (Vich), «*caixa*» (Albaida), etc.

Como «*arca grande*» es descrita la utilizada en Sepúlveda en 1547 [Sáez Sánchez, 1956, p. XXII] y en Ciudad Real en 1580 [Bernabeu Novalbos, 1952, p. 95]. En Burgos, en 1433, se la denomina «*arca mayor*» [Bonachía Hernando, 1983, p. 13]. Esto implica no sólo su tamaño sino también la existencia de otras arcas más pequeñas destinadas o no a guardar documentos.

Sobre sus características se destaca por lo general que el arca de las escrituras sea «*buena e bien fecha*» [VALENCIA DE ALCÁNTARA, 1489]. Como «*muy fuerte*» se describe la de Vallecas en 1728. Las de las poblaciones cántabras de Lon y Brez, y Baro, según sus ordenanzas, debían estar «*bien aderezadas*». En su interior los documentos se encontrarían o bien apilados, unos encima de otros, o bien enlegajados. No obstante el arca existente en Burgos, en 1433, estaba dividido en tres partes, y dentro de cada una de ellas se conservaba un arca más pequeña en donde se guardaban los documentos [Bonachía Hernando, 1983, p. 13]. En el año 1499, el ayuntamiento de Valladolid decidió comprar un nuevo arca, «*que tenga tres senos*», dado que sólo

uno de ellos se utilizaría para conservar la documentación [Pino Rebolledo, 1991, p. 9]. Compartir su función con otros menesteres no era nada nuevo. En Oviedo, en 1498, se mandó adquirir por su ayuntamiento un arca-mesa para que el escribano tuviera en su interior los libros de acuerdos y pudiera escribir sobre ella cuando asistía a los consistorios [Villa González-Río, 1978, p. XV].

Las arcas demostraron ser un buen sistema para guardar documentos. Si estaban bien construidas con buena madera podían durar varios siglos sin que los ayuntamientos tuvieran que hacer grandes dispendios en su conservación. Los gastos más usuales estuvieron relacionados con el cambio de cerraduras por la pérdida de algunas de las llaves. Así sucedió en Orense en el año 1555 [Gallego Domínguez, 1985, p. 192]. Pero hay más ejemplos. Dependiendo de su tamaño y de la manera de instalar dentro de ellas la documentación organizada, las búsquedas podían ser precisas y rápidas. Aunque con bastante asiduidad las escrituras y privilegios se encontraban unos sobre otros de tal forma que *«por su confusión nezesitarse el movimiento de todos para qualquier papel que se ofrezca buscar... costando el trabajo de muchos días para hallar razón...»* [Gallego Domínguez, 1981, p. 188].

El uso de los armarios e incluso de las habitaciones-archivo no significó la desaparición de estos útiles muebles, que han conservado documentación hasta fechas muy recientes. En 1871, en Ribadavia, su arca de tres cerraduras, de las que sólo se conservaban dos llaves, custodiaba *«varios planos para la obra de edificios»* [Gallego Domínguez, 1988, p. 36]. En 1944 cuando J. Caruana visitó Albarracín comprobó que en el archivo existía un vetusto arcón de triple cerrojo, del que no se pudieron encontrar sus llaves, y que *«según me dijeron, contenía pergaminos y otros elementos que igualmente formaban parte del archivo pero que no me pudieron mostrar»* [Caruana Gómez de Barreda, 1955, p. 5-6]. Cuatro grandes arcas servían, todavía en 1947, para guardar los pergaminos del archivo municipal de Reus [Vilaseca Borrás, 1947, p. 67]. En 1955, según narra E. Sáez Sánchez, fue abierta el arca que la comunidad de villa y tierra de Sepúlveda mantenía en ese ayuntamiento *«y en ella aparecieron gran número de manuscritos y papeles antiguos en confuso orden»* [Sáez Sánchez, 1956, p. XXXI].

B) ARMARIO

La utilización por los municipios de armarios como espacios diferenciados para guardar los documentos se remonta también, al menos, a la Baja Edad Media. Ante la inexistencia de casas consistoriales, las autoridades locales consiguieron disponer en algunas poblaciones de pequeños habitáculos, generalmente en las paredes de las iglesias que, debidamente protegidos, podían servir para custodiar los privilegios y escrituras que por entonces formaban el archivo

del común. Esta era una práctica bastante habitual en ese período en las instituciones eclesiásticas. La movilidad del arca no era precisa si allí o en sus proximidades se reunía el concejo. Y evidentemente este sistema ofrecía aún más seguridad por las características específicas de la sede elegida.

Un armario, en la ermita de Santa Eulalia, servía para guardar los documentos municipales de Los Arcos en el año 1355 [Pastor Abaigar, 1993, p. 196]. En 1570 fue trasladada la documentación a la parroquia de Santa María, distribuyéndola en dos huecos, uno en cada lienzo del crucero. En el siglo XVIII se hicieron otros dos vanos, en sustitución de los anteriores, sobre los arcos y puertas de dos capillas de esa misma iglesia, que todavía hoy pueden contemplarse. Estos «*armarios empotrados*» como los califica V. Pastor eran relativamente corrientes y en todo caso, al menos en los siglos medievales, su utilización precedió a la de los armarios exentos. En 1370, el clavario de Tortosa recogía en sus cuentas los gastos hechos en madera, clavos, etc. «*per als armaris de l'Arxiu a la sala de la Casa de la Ciutat*» [Massip i Fonollosa, 1989, p. 241]. En 1377 se mandó construir un armario en la localidad catalana de Cervera [Planes i Albets, 1992, p. 18].

Estas únicas referencias relativas a poblaciones de Navarra y Cataluña reflejan la prevalencia del arca en la Baja Edad Media sobre el armario como sistema para conservar los documentos municipales. Pero conforme fueron éstos aumentando, una o varias arcas empezaron a resultar insuficientes, y las principales localidades vieron la conveniencia de construir armarios, empotrados o no, con mayor capacidad de almacenamiento aunque sin la movilidad que ofrecían las arcas. Esto último no era ya tan necesario ni conveniente. La existencia de casas consistoriales en la mayor parte de los municipios y el abandono paulatino del gobierno por concejo abierto aconsejaban este cambio. De todas formas fue un proceso lento, iniciado a principios del siglo XVI y no culminado hasta bien avanzado el siglo siguiente.

En la Corona de Aragón su uso estuvo más generalizado que en la de Castilla. En Cataluña la existencia de armarios en la Edad Moderna está constatada documentalmente en municipios como Vich, Selva de Camp, Lérida, Manresa, Solsona, Reus, Sitges, Balaguer, Tarragona, Fatarella o Tortosa. De todos el más significativo puede ser el que todavía se conserva en esta última localidad [Massip i Fonollosa, 1989, p. 241]. Este armario es descrito de la siguiente manera: «*amb quatre grandes portes pintades interiorment amb l'angel y les armes de la ciutat, i amb la llegenda <En lo any de la nativitat de nostre senyor Deu Jesuxrist MDLXXIIII, essent procuradors... fon edificat y posat en degut orde lo presente Archiu>*» [Massip i Fonollosa, 1987, p. 10]. Cada una de las cuatro puertas tienen tres cerraduras, lo que la convierten en una verdadera caja fuerte. En su interior la documentación estaba agrupada en más de cuarenta cajones (calaixos). Cada cajón a su vez iba exteriormente

decorado con «una orla policroma floral, de vegades amb figures, que fan de la peça un objecte de museu de la més notable factura».

En el año 1557, las autoridades locales de Reus decidieron utilizar un armario ya existente y al que no se le daba uso para hacer de él un archivo [Vilaseca Borrás, 1947, p. 66]. En el libro de inventarios de Vich del año 1590 se describe la existencia del «*armari dels privilegis y libres y altres actes ab tres portes en quiscuna de les quals ha tres tencadures y llurs claus*». En 1672, también en esta población, se acordó construir nuevos armarios, que pudieron ser examinados por J. Serra i Campdelacreu en la segunda mitad del siglo XIX [Serra i Campdelacreu, 1879, p. 22-23].

En 1603 se mandó construir el armario de los privilegios de Manresa, protegido por «*molts ferros i baldes*», y con cinco cerraduras. Una historia manresana del siglo XVII se refiere a él como «*armari y en ell molts differents calaixos y quiscun dells retolat del que en dit calaix hi ha, ahont la Ciutat de Manresa te los Privilegis y escripturas per al bon regiment y govern de la República, molt ben recòndits y guardats*» [Gasol, 1990, p. 9].

El existente en Tarragona, en 1683, estaba constituido por «*trenta-quatre calaixos identificats alfanuméricament*» [Planes i Albets, 1992, p. 20].

En Solsona se construyó hacia 1685 un armario-archivo, con cuatro cerraduras, situado en la primera planta de la casa de la ciudad. Consta, pues todavía se conserva, de tres partes. La superior, que ocupa más de la mitad del mueble, está dividida por cinco estantes, mientras que la inferior sólo tiene uno. Ambas disponen a cada lado de una hoja para facilitar su apertura. La parte situada en el medio tiene una única hoja, abatible verticalmente para servir de escritorio, y está constituida por ocho cajones [Planes i Albets, 1993, p. 54-56]. En su exterior además del año de construcción puede contemplarse el escudo de la ciudad.

Sitges acordó adquirir un armario para el archivo de la villa en el año 1702 [Panyella, 1982, p. 90]. Las ordenanzas de Fatarella del año 1705 recuerdan la obligación de guardar los documentos «*dins algun armari o arxiu de la vila*». En 1706, la ciudad de Sabadell acordó también adquirir unos armarios para el archivo [Castells i Peig, 1983, p. 15]. En Selva del Camp, los libros de actas del común se guardaban en un armario en 1768, tal y como refleja un acuerdo municipal de esa fecha [Soronellas i Masdeu, 1993, p. 4]. También en Lérida existía un armario reservado con cinco llaves [Gras de Esteva, 1897, p. III], y en Balaguer, al menos hasta principios del siglo XX, se conservaba un gran armario con 50 cajones encuadrados en 27 estantes [Farre i Viladrich, 1989, p. 121].

En el reino de Aragón también las principales localidades se sirvieron de armarios para guardar sus documentos, sobre todo a partir del siglo XVI. En Zaragoza ya existían en 1549 en la sede del archivo situada encima del

sagrario y sacristía de la Seo. Allí los documentos estaban guardados en varios armarios cerrados, presididos por los nombres de los reyes de Aragón y dentro de éstos en arquetas también cerradas. En 1761, y dentro del archivo ubicado en la casa consistorial de Zaragoza, había *«un armario grande en la pared interior, en su centro tenía el armario una inscripción con letras doradas grandes que decía <Archivo de los privilegios de la Ciudad de Zaragoza>»* [González Miranda, 1981, p. 82 y 83].

Las ordenaciones dadas a la ciudad de Huesca en 1551 remarcaban la obligación de guardar los procesos seguidos ante el Justicia en un *«almario, o archiu conpetente, y decente»*. En el siglo XVIII se debió construir en Jaca, según D. J. Buesa, *«un monumental armario, de dos puertas y con cuatro llaves, que está provisto de abundantes cajones en los que se guardó la documentación antigua de mayor interés»*. Este armario con cuarenta cajones todavía se conservaba en 1986. Las ordenanzas de Fuestespalda de 1725 contemplan la necesidad de conseguir un *«armario de madera con estantes puesto en la pared de la Sala del Ayuntamiento para custodiar sus papeles»*. En 1871, T. del Campillo pudo contemplar en la torre de la villa de Cariñena el archivo de la comunidad de Daroca, para a continuación escribir que *«llena el fondo de la estancia, en todo el lienzo de la pared principal, un espacioso armario, bien dividido en cajones fuertes, puestos dentro de la general armadura que los resguarda, cerrado por ferradas puertas de construcción firmísima, donde debieron depositarse los privilegios reales y papeles de mayor importancia... Abierto el armario de puertas guarnecidas con planchas de hierro, ha sufrido continuas expoliaciones...»* [Campillo, 1871, p. 37].

Centrándonos ahora en el Reino de Valencia, Cullera mandó construir un armario para guardar la documentación de la villa en el año 1630. En 1753 toda ella ocupaba seis armarios divididos en cajones [Villalmanzo Cameno y Giner Perepérez, 1978, p. 27-28]. Dentro de la sala archivo de la ciudad de Alicante también había varios armarios en 1764 [Paternina Bono, 1992, p. 53]. La documentación de la baronía de Villamarchante se conservaba en 1769 dentro de un armario dividido por cuatro estantes [Mateu Llopis, 1969, p. 66].

En la Corona de Castilla también se utilizaron los armarios para custodiar los documentos municipales supliendo o complementando a las tradicionales arcas. Seguramente con precedentes medievales que desconocemos, todo apunta a que a lo largo del siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII las principales ciudades debieron dotarse de estos muebles para sus archivos. En 1511, según nos narra J.L. Banus *«se hizo una arca o armario para la custodia de los documentos»* de San Sebastián. En 1740, cuando Martín de Uribe organizó este archivo, existían cinco armarios con un buen número de cajones [Banus Aguirre, 1986, p. 11-12]. El archivo de Fuenterrabía tenía tres de sus paredes

cubiertas completamente por doce armarios con su correspondientes estantes. Al menos así lo describió V. Vignau en 1871. El de Tolosa también estaba formado por varios armarios protegidos por tres cerraduras cada uno de ellos [TOLOSA, 1819].

En Galicia, la ciudad de Orense ya debió disponer de un mueble o alacena, con divisiones, en el año 1694, seguramente empotrado en la pared. Los documentos pertenecientes a la provincia se custodiaban en dos arcas que fueron sustituidas en 1760 por un «*alacenón*» cuyo coste ascendió a 792 reales. Este mueble «*tenía 18 cuartas de largo por 12 de alto, 3 puertas, 5 líneas para poner los papeles con 4 divisiones de media vara de ancho, con un hueco de un palmo geométrico para los legajos. Las puertas, enteras y ensambladas como las del archivo, cada una con 3 bisagras de librillo; con tranquilla segura que cerraba las tres puertas y una cerradura de tres llaves*» [Gallego Domínguez, 1981, p. 189]. En 1691, la Junta del Reino de Galicia ordenó la adquisición de un mueble para guardar sus documentos, dentro del archivo del concejo de La Coruña. Ese mueble, con ocho cerraduras, fue descrito a principios del siglo XIX como un «*armario grande y viejo*» [Artaza Montero, 1994, p. 12 y 15].

En Oviedo, el arca había sido sustituida ya en 1659 por un armario con cajones conocido como «*Archivo o cajón del Archivo*». Por esas fechas se mandó construir un segundo armario, cuyo coste ascendió a 490 reales. Esta situación se mantuvo en el siglo siguiente [Villa González-Río, 1978, p. XIX].

En el interior castellano tanto Talavera de la Reina como Toledo se dotan de este tipo de muebles en la segunda mitad del siglo XVI. En Talavera, el arca había sido sustituida por un armario con cajones ya en 1568 [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 90]. En Toledo, años antes, debió construirse, empotrado en la pared, el mueble del archivo secreto con madera de nogal y de pino. Sus dos puertas están protegidas con planchas de hierro y seis cerraduras. Una vez abiertas, en su parte superior, y sobre tres estantes descansan doce cajones de madera fácilmente extraíbles. En la parte inferior se encuentran las dos alacenas, una a cada lado, sin compartimentar su interior, con sus correspondientes puertas. Entre medias se ubica una plancha de madera con asas y soportes, también fácilmente extraíble, que servía y sirve de mesa para consultar o copiar in situ los documentos. Este bello y útil mueble, elegante y a la vez seguro, ha servido para conservar la documentación hasta hace apenas unas décadas.

A través de los ejemplos comentados hemos podido observar como el uso de armarios para custodiar los documentos municipales refleja una clara evolución en cuanto a los sistemas de instalación. Son más propios de la Edad Moderna, frente a las arcas de tradición medieval. Sólo son utilizados por las poblaciones más importantes o las que han podido conservar un mayor patri-

monio documental en ese período. Por lo general están destinados a guardar los documentos más valiosos según los criterios de la época, sustituyendo o complementando a las arcas. Empotrados o no, carecen de la movilidad de aquéllas por su mayor peso, al incrementar notablemente su capacidad de almacenamiento. La existencia de casas consistoriales y el gobierno de las poblaciones por concejos cerrados facilitarán su utilización frente a sus competidoras móviles. Además son muebles cuyo coste está muy por encima del de las arcas, debido a sus características técnicas. Este mayor desembolso de las corporaciones locales al adquirir muebles que mejoran las condiciones de instalación de los documentos debemos ponerlo en relación con los sucesivos intentos organizativos de este patrimonio. Los armarios, formados por lo general por cajones numerados y rotulados, reproducen externamente la organización y la descripción de la documentación que en ellos se conserva. Su estructura, sus divisiones, dejan claros los criterios organizativos, que faltan muchas veces en la documentación apilada en las arcas.

Estos armarios, denominados en algunos casos como alacenas, están contruidos en madera, generalmente de nogal, y a veces llevan recubiertas sus puertas por planchas metálicas, o están protegidas por rejillas. Suelen tener forma rectangular amoldándose al espacio de la pared en donde están ubicados. Los hay empotrados, aprovechando un hueco existente o realizado ex profeso en el muro, otros están adosados a la pared para evitar su posible caída por el excesivo peso, y también los hay totalmente exentos, sin compartir ningún elemento con el muro cercano. Aunque existen armarios con una sola puerta, lo normal es que tengan dos (Jaca o Toledo), si bien no faltan armarios con tres (Vich) o cuatro puertas (Tortosa). El número de cerraduras que existen sobre ellas varía desde tres (Orense), cuatro (Jaca), cinco (Manresa, Lérida), seis (Toledo) u ocho (Reino de Galicia). Una vez abiertos, lo normal es que su espacio interior esté dividido por estantes en un número variable, al menos en los ejemplos analizados, desde los tres (Toledo) hasta los veintisiete (Balaguer).

Sobre estos estantes puede conservarse ya directamente la documentación agrupada en legajos, aunque predomina el uso de cajones, y a veces de arquetas. El cajón está construido teniendo en cuenta su ubicación sobre el estante del armario, por lo que el asa lo llevan en su parte frontal, y obviamente no están tapados en su parte superior. Frente a ellos las arcas o arquetas suelen ser de mayor tamaño, llevan las asas en los laterales y están completamente cerradas, también por su parte superior. Intuimos que así serían las existentes en el armario del archivo municipal de Zaragoza en el siglo XVI. Los cajones suelen tener además en su parte frontal una indicación numérica o alfabética para facilitar su identificación, completada a veces con una breve descripción de su contenido. Su número varía con arreglo al tamaño de los

armarios y a la separación existente entre los diferentes estantes. Si el de Toledo tiene doce cajones, el de Balaguer llega a los cincuenta al igual que Tortosa, cuarenta cabían en el de Jaca frente a los treinta y cuatro de Tarragona, o los veinticuatro de Jerez de la Frontera.

El uso de armarios en la Edad Moderna fue generalizándose entre las grandes poblaciones. A las pequeñas les era suficiente su tradicional arca, teniendo en cuenta lo ya comentado en cuanto a la evolución del concepto del patrimonio documental municipal en este amplio período. El número de armarios fue incrementándose conforme aumentaba ese patrimonio. Alicante, Zaragoza y Tolosa llegaron a tener a principios del siglo XIX varios armarios con este fin. En el archivo de San Sebastián existían cinco armarios en el siglo XVIII, seis en Cullera, y doce, como vimos, en Fuenterrabía ya en el siglo siguiente. Muchos de ellos se conservaban ya dentro de un espacio diferenciado, propio, conocido como archivo.

C) HABITACIÓN-ARCHIVO

Las arcas, al igual que la mayoría de los armarios, habían sido construidas para guardar fundamentalmente el archivo del común o de los privilegios. Las corporaciones locales se vieron en la necesidad de guardar otros muchos documentos relacionados con la gestión de los intereses municipales, sobre todo conforme avanzaba la Edad Moderna. Una primera opción fue la de adquirir más arcas y/o armarios, pero esta decisión pronto resultó insuficiente, y además insegura, al tener que ubicar estos muebles en la sala del ayuntamiento, en los pasillos o en otras dependencias no siempre cercanas y aptas. Al problema de custodiar tantas llaves se unía su excesivo coste. La concentración de toda la documentación municipal en un espacio propio permitía simplificar el sistema de acceso, daba mayor seguridad y abarataba la conservación de la documentación dado que la de menor interés podía conservarse simplemente apilada sobre estantes, sin necesidad de arcas o armarios.

Este proceso ha sido descrito por C. Bayle para las localidades hispano-americanas, señalando que con *«el tiempo creció la mole de papeles: ni un arca ni muchas arcas los cogían; los municipios trocaron sus ruines galpones por fábricas sólidas, algunas elegantes, reliquias hoy veneradas de la arquitectura colonial. Y el Archivo tuvo departamento propio, y estantería más o menos bueno, donde cupiese el orden y la pulcritud...»* [Bayle, 1950, p. 22].

No obstante, durante el Antiguo Régimen, pocas poblaciones españolas acumularon la mayor parte de la documentación municipal en una habitación-archivo, permaneciendo desperdigada, como ya vimos en distintas dependencias, generalmente en arcas o armarios. Solo tardíamente en las casas consistoriales construidas ya a finales de ese amplio período se suele considerar la

posibilidad de dedicar una estancia diferenciada para archivo. Hasta entonces, lo normal fue identificar el archivo con el arca o el armario de los privilegios. Aún así hay tempranas excepciones.

Barcelona dispuso ya de un espacio diferenciado en la casa de la ciudad a finales del siglo XIV, conocido como «*la casa de l'ofici de l'arxiu, o també l'arxiu de la ciutat*» [Vinyoles, 1994-1995, p. 1.510], en donde se guardaba parte de la documentación municipal, sobre todo la más reciente. En las ordenaciones de Vich del año 1450 se obliga a las autoridades locales a dedicar dentro de la casa de la ciudad «*una cambreta o retret apart, qui sia apellade l'arxiu de la Ciutat*». En 1590, dentro del archivo de Vich se conservaban el viejo arca y el armario de los privilegios, reflejando así en esa estancia la evolución de los sistemas de instalación. También parece que en Balaguer, ya al menos en 1564, se dedicaba a archivo una habitación de la casa de la ciudad, lo que podemos deducir del texto de un pergamino sobre insaculaciones que recuerda «*que el día de l'elecció dels càrrecs, els prohoms s'hauran de tancar a l'Arxiu de la Paeria i no podran sortir fins que aquella no s'ha fet*» [Farré i Viladrich, 1989, p. 120-121].

El archivo como espacio diferenciado está muy presente en las principales poblaciones del Reino de Aragón dado que la documentación compartía habitáculo con el arca de los oficios donde se conservaban las bolsas para las insaculaciones. Las ordenaciones de Huesca del año 1551 se refieren al archivo de las casas comunes, constituido por diferentes cajones, y en su interior se conservaba también el arca de los oficios. Menciones parecidas se recogen en las ordenaciones de Tarazona de 1685 y de Jaca de 1694. En 1578, las autoridades locales de Huesca dedicaron a archivo una sala en el segundo piso del ayuntamiento, con estanterías en sus paredes; allí en dos grandes cajones se guardaban los pergaminos [Arco, 1911, p. 456]. En Barbastro, parece ser que ya en el año 1510 se acuerda dedicar una estancia especialmente destinada a guardar la documentación en las casas consistoriales que entonces se estaban construyendo [Salas Ausens, 1986, p. 77]. En Zaragoza, en 1442, ya se construyó un archivo en la sede del ayuntamiento para custodiar varias cajas, entre ellas las de las insaculaciones. Es posible que esa sea la misma estancia descrita en 1761 por Miguel de Collantes. En su fondo como sabemos se conservaba el armario conocido como archivo de los privilegios de la ciudad de Zaragoza [González Miranda, 1981, p. 83].

Estas brevísimas referencias, que poco aportan en cuanto a las condiciones de esos espacios, contrastan con la descripción preciosista que realizó T. del Campillo del archivo de la Comunidad de Daroca. La habitación donde se conservaba la documentación, además del famoso armario, contenía en dos de sus paredes «*una estantería dividida con regularidad en calajes o cajones iguales... Y en el cuarto frontis, salvando el hueco de la ventana que da luz a*

la estancia toda, con claridad no común en tales sitios, continua la calajería» [Campillo, 1871, p. 37].

La ciudad de Alicante, por orden de Felipe II, dedicó en 1590 una sala de sus casas consistoriales, fortificada con rejas y puertas de hierro, para guardar los autos, privilegios y demás papeles que componían su archivo, en expresión del deán Vicente Bendicho [Paternina Bono, 1992, p. 52]. En un inventario de 1692 se recuerda que el archivo *«está e nun quarto de la dita Casa»* [Martínez Morella, 1955, p. 47]. Sin salir del Reino de Valencia, parece que al ser construidas las casas consistoriales de Cullera, hacia 1781, fue destinada una sala de la primera planta del edificio para archivo [Villalmanzo Cameno y Giner Perepérez, 1978, p. 30].

En la Corona de Castilla fueron muy pocas las ciudades que contaron con un espacio diferenciado, a manera de habitación propia, destinado a guardar los documentos fuera o dentro de sus casas consistoriales durante el Antiguo Régimen. Los ejemplos son escasos. En Ciudad Real, en el año 1595, su corregidor decidió visitar el archivo municipal *«y biendo no estar con la dicha decencia mandó se rredificase e hiciesen en el aposento donde estaba el dicho archivo unas cajas y ventanas de yeso y madera poniéndoles sus puertas y cerraduras»* [Bernabeu Novalbos, 1952, p. 9]. Ahora bien no sabemos si ese aposento tenía además otros fines.

En Orense, al proyectarse la construcción de unas nuevas casas consistoriales, en 1697, se pensó dedicar una dependencia para archivo [Gallego Domínguez, 1981, p. 187]. Sin embargo esta medida no se llevó a cabo hasta ya iniciado el siglo XIX [Gallego Domínguez, 1988, p. 32]. En Astorga, a principios del siglo XVIII se documenta la edificación de un local destinado a archivo dentro del nuevo ayuntamiento [Martín Fuertes, 1980, p. 13-14]. Parece que en Talavera de la Reina, su armario-archivo se conservaba en habitación propia ya a principios del siglo XVII, y en Toledo en la segunda mitad del siglo XVI. Los armarios de Oviedo se localizaban en una pequeña dependencia en el hueco de la escalera de la casa consistorial [Villa González-Río, 1978, p. XXI-XXII].

En Sevilla, tras construirse una nueva sede del cabildo entre 1527 y 1574, se dotó en ella al archivo de una pequeña estancia propia, situada al fondo de una sala de la planta alta, en una capilla protegida por una reja y puertas de hierro, cerradas con tres candados, en cuyo interior se encontraban las arcas o cajones de madera. Con el tiempo esas arcas serían sustituidas por cajones y legajos [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 13].

En Fuenterrabía, desde principios del siglo XVI, se utilizaba una antigua sacristía para conservar la documentación municipal. Era una sala cuadrada que tenía tres de sus cuatro paredes recubiertas de armarios, desde el techo al suelo [Vignau Ballester, 1871, p. 257]. En Madrid, en 1513, se acordó cons-

truir una bóveda de ladrillo, con sus puertas y reja de hierro, en el coro de la iglesia del Salvador para guardar una de las arcas [Gómez Iglesias, 1974, p. 30]. Un siglo después se ordenó la realización de los cajones necesarios al no haber ya más documentos en el arca [Domingo Palacio, 1875, p. 21]. En la segunda mitad del siglo XVIII, ya convertido el archivo de Madrid en oficina pública, entendemos que debió disponer de diferentes habitaciones para guardar la documentación, tal vez separadas de la de trabajo y consulta. Al menos esto parece deducirse de la lectura de su reglamento de 1784.

Por lo tanto muy pocas ciudades españolas, más en la Corona de Aragón que en la de Castilla, dispusieron de estancias dedicadas específicamente a archivos fuera o dentro de sus casas consistoriales durante el Antiguo Régimen. Además en las pocas que contaron con este tipo de depósitos, con raras excepciones, no dejaban de parecerse a las alacenas o armarios empotrados, protegidos por rejas y puertas de hierro. Eran casi siempre pequeños espacios en donde las arcas o armarios coexistían o habían sido sustituidos por estantes con cajones y legajos, aunque eso sí, una vez franqueada la puerta era preciso adentrarse en su interior para acceder a la documentación. En ellos no habría mesas ni otros elementos auxiliares que facilitasen la consulta sin abandonar estas estancias. Solamente a finales del siglo XVIII y en las poblaciones que contaban con un archivero, muy pocas como sabemos, los archivos fueron dotados de otros elementos necesarios (escritorio, escalera, papel, plumas, tinta, papelería, etc.). Los estantes y cajones eran por lo general de madera de nogal, como los utilizados en Burgos, en 1794 [Díez Sanz, 1984, p. 55], o de pino, aunque Madrid dotó a su archivo de una anaquelaría de acero, tal y como quedó reflejado por Facundo Porras Huidobro a principios del siglo XIX [Gómez Iglesias, 1974, p. 44].

Los archivos municipales constituidos por una o varias habitaciones-depósito surgen con fuerza ya en el siglo XIX debido a la integración en un mismo espacio del archivo del común, de los de la escribanía, mayordomía y contaduría y los de otros fondos de origen local como consecuencia del nacimiento de los ayuntamientos liberales. Es en ese siglo cuando empiezan a dedicarse zonas específicas de las casas consistoriales para guardar toda la documentación local, frente a la dispersión existente en siglos anteriores. Los precedentes señalados aunque significativos no dejan sino apuntar una tendencia que sólo se verá culminada en la época contemporánea. A ello ayudará también el aumento del número de archiveros municipales, pues no en vano por una Ley de 30 de junio de 1894 y por un Real Decreto de 10 de enero de 1896 fue obligatoria su dotación en todas las ciudades capitales de provincia.

1.4. La agrupación física de los documentos

La documentación en las arcas o sobre los estantes de los armarios o paredes de los depósitos de archivo podía encontrarse simplemente apilada o amontonada sin ningún tipo de ordenación. Pero esto no era lo normal. Los sucesivos intentos organizativos y los criterios mantenidos en ellos permitieron formar diferentes agrupaciones documentales, que recibieron distintas denominaciones a lo largo del Antiguo Régimen.

A finales de la Baja Edad Media empiezan a aparecer en los inventarios estas agrupaciones documentales que en la Corona de Castilla reciben el nombre de envoltorios, sacos o talegos, reflejando la forma de éstas. En el registro del arca del concejo de Astorga, realizado en 1447, se reproducen descripciones del tipo «*Iten un enboltorio de estimacion de cubas. Un enboltorio de escripturas de los judios... Otras escripturas... atadas en un enboltorio*» [Martín Fuertes, 1980, p. 18]. Por lo tanto estamos ante un grupo de documentos con afinidad temática, protegidos exteriormente por un pliego de papel, o tal vez de tela, y dando cuerpo a toda la unidad una cinta o cuerda seguramente de lino o cáñamo que permitiría impedir su disgregación y facilitaría su uso. Es posible además que externamente, sobre el envoltorio, figurara una breve descripción de su contenido, o una clave numérica o alfabética. En 1514, los documentos del arca de los privilegios de Madrid se conservaban en «*envoltorios de papel y taleguillas de piel*» [Cayetano Martín, 1990 (c), p. 29]. También en Zamora, en su inventario de 1553, se refleja la existencia de «*Un envoltorio A. Un envoltorio B... un envoltorio de poderes que otorgó Zamora para pleitos y otras cosas... Otro envoltorio sobre gastos de carnicería y pescadería*» [Pescador del Hoyo, 1948, p. 6].

La agrupación de documentos en sacos o saquetes aparece recogida en el arca de Orense hacia 1451. Los privilegios que tenía la localidad fueron introducidos en el arca dentro de un «*saco de liño*» [Gallego Domínguez, 1985, p. 191]. Es posible que estas bolsas de tela de lino sirvieran para guardar otros documentos. Tendrían forma de pequeños sacos con una apertura superior que se podría cerrar mediante una cinta o cuerda, y en su interior la documentación permanecería plegada o enrollada.

Muy parecidos debían ser los talegos o talegonos descritos ya en el siglo XVI. En 1547, los privilegios y provisiones de la villa de Sepúlveda se encontraban dentro de «*un talego de anglo*» [Sáez Sánchez, 1956, p. XXII]. Ese mismo año, en Burgos «*los previllejos e libertades más ynportantes se ponen en una talega*» [Díez Sanz, 1984, p. 23]. En Jaén todos los privilegios, provisiones y escrituras que formaban su archivo en 1549 se conservaban en once talegonos [Rodríguez Molina, 1982, p. 46]. El inventario del archivo municipal de Talavera de la Reina del año 1629 recoge la existencia de un

buen número de talegones como agrupación básica en la que se subdividían los cajones. En total se describen 149 talegones ordenados numéricamente [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 92]. Por su elevado número no debían ser muy voluminosos. Estas agrupaciones no fueron alteradas hasta finales del Antiguo Régimen.

En Orense, en 1692, la corporación municipal acordó que fueran organizados los documentos del archivo, «*poniéndolos por legajos con sus yndices*». El resultado fue agrupar la documentación en diferentes «*mazos*» numerados. El mazo núm. 12 «*abarcaba recudimientos de rentas reales e hidalguías*» [Gallego Domínguez, 1981, p. 192-193].

En algunos archivos se describen las agrupaciones con el sencillo término de «*atados*». En el inventario del de San Sebastián del año 1740, junto con el más común de legajos, se recoge la existencia de «*un atado de pareceres de abogados de diferentes negocios*» [Banus Aguirre, 1986, p. 265]. A ella le podemos contraponer la de «*suelos*», utilizada por ejemplo en la descripción de algunos documentos del archivo de la catedral de Badajoz [Rodríguez Amaya, 1952, p. 482].

No fue nada habitual la utilización de cajas, más propias del siglo XX, al menos tal y como las conocemos actualmente. Aún así parece que en 1569, el jurado Luis de Cruzat organizó el archivo de San Sebastián «*colocando los documentos en cajas de cartón, debidamente arreglados*» [Banus Aguirre, 1986, p. 7]. Todavía en 1740, al describir Martín de Uribe un documento de este archivo lo hace de la siguiente manera: «*Una caja de hojadelata y en ella una cartera forrada en terciopelo verde con dos escudos de plata... y dentro de ésta una certificación...*» [Banus Aguirre, 1986, p. 131].

La agrupación física básica en los archivos municipales castellanos durante la Edad Moderna fue el legajo. Dos tapas de cartón, o a veces de madera, de diferente tamaño, generalmente algo superior al folio o a la cuartilla, cubiertas o no con pergamino, protegían en su interior la documentación, uniendo el conjunto una cinta de balduque (lino y cañamo). En uno de sus cantos y sujeto también por la cinta solían llevar un cartón más pequeño en donde se recogía su signatura y/o su contenido, aunque a veces sencillamente se hacían estas indicaciones en uno de los dos cartones a manera de portada. Su tamaño estará condicionado por el de la documentación que contienen, sobre todo si está encuadrada, y por el del cajón o estante en donde se conservan. El uso de los legajos se desarrollará a la par que empiezan a difundirse los armarios con estantes y/o cajones. La cinta hacía fácil su manejo, permitiendo introducir y sacar los documentos sin que sufrieran daños. El polvo podía acumularse en las zonas que carecían de los cartones protectores si el legajo no estaba dentro de un cajón o armario, pero sólo afectaba a los bordes de los documentos. Además cada legajo solía disponer en su interior

de un breve índice de todos los documentos que lo formaban para facilitar su consulta.

Es muy posible que ya se mencionen como tales a finales de la Edad Media, aunque hasta ahora la primera referencia documental data del año 1595. Ese año las escrituras y privilegios de Ciudad Real *«se fueron repartiendo en legajos poniendo en cada uno su número»* [Bernabeu Novalbos, 1952, p. 9]. El Índice de documentos de Vallecas de 1676 también se sirve de la división de cajones y legajos. En 1692, en Orense, los papeles de su archivo fueron agrupados *«por legajos con sus yndices»*.

A lo largo del siglo XVIII son muchos los archivos municipales castellanos que describen sus agrupaciones físicas básicas como cajones y legajos, tal es el caso de San Sebastián o Sepúlveda.

El inventario de papeles de la casa de la tierra de Béjar, del siglo XVIII, distingue la existencia de ocho legajos, de los cuales los cuatro últimos son descritos como *«legaxo pequeño»* [Barrios García y Martín Expósito, 1986, p. 250]. Ello da prueba de la variedad en cuanto a la cantidad de documentación que podían conservar. No en vano Facundo Porras Huidobro cuando fue archivero de Madrid, entre 1836 y 1858, se encargó entre otros cometidos de *«convertir en volúmenes de un tamaño regular y manejable los abultados y pesados legajos»* [Domingo Palacio, 1875, p. 56].

A finales del siglo XVIII en algunas disposiciones oficiales se recogen aspectos relativos a estas agrupaciones. En el reglamento del archivo de Madrid de 1784 se obliga a su archivero a poner *«en todos los Legajos que se hallen arreglados unas carteras que expliquen la clase, o calidad de papeles, el año de su origen y el de su fenecimiento»*. Desde 1797, el contador-archivero de Santander tenía que dividir por clases los documentos del archivo de esta ciudad y *«encarpetarlos con sus correspondientes rótulos en legajos proporcionados, con sus números»* [Vaquerizo Gil, 1984, p. 8].

Facundo Porras Huidobro cumplió el reglamento de 1784 y por lo tanto no rotuló los legajos sino que colocó en su frente *«unas pequeñas etiquetas con su número de orden y el de la sección a que pertenecieran»* [Domingo Palacio, 1875, p. 57]. El Índice del archivo municipal de Talavera de la Reina de 1817 describe 69 legajos. Cada uno de ellos llevaba también una *«targeta identificativa»* [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 99].

En las poblaciones de la Corona de Aragón se utilizaron otros términos para describir estas agrupaciones físicas básicas de documentos, que no diferían de los legajos descritos.

En el reino de Aragón lo más usual fue dividir la documentación conservada dentro de los cajones en diferentes *«ligarzas»*. En el archivo municipal de Huesca se encontraban, todavía a principios del siglo XX, casi todos los pergaminos colocados en dos grandes cajones dispuestos en ligarzas [Arco,

1911, p. 456]. La documentación del archivo episcopal de Tarazona, también en este siglo, estaba estructurada en «*armarios, cajones y ligarzas*» [Jiménez Catalán, 1925, p. 560]. En las ordenaciones de la ciudad de Jaca de 1694 se recuerda que se debía tener mucho cuidado en volver las escrituras «*a la misma ligarza de donde fueren sacadas*». El Índice elaborado en el siglo XVIII de la documentación del archivo de Alcañiz refleja una división en «*cajones, ligarzas y números*» [Micolau Adell y Abos Castel, 1986, p. 107]. Menos usual fue la utilización del término «*ligamen*», recogido en las descripciones del archivo de Borja [Jiménez Catalán, 1925, p. 287].

En las localidades del reino de Valencia se utiliza para definir esta agrupación física básica la palabra «*lío*», que podemos identificar con el legajo castellano. En el inventario del archivo de Alicante de 1692 se recoge, como asiento núm. 65, «*Item un lío ab diferentes manifests de aigua*» [Martínez Morella, 1955, p. 49]. El Índice del archivo de Cullera, elaborado en 1753, estructura la documentación en armarios, cajones y líos [Villalmanzo Cameno y Giner Pereperez, 1978, p. 28]. La baronía de Villamarchante, población cercana a Cheste en Valencia, conservaba su documentación en un armario cuyo primer estante contenía ocho líos, el segundo veintidós líos y el cuarto solo uno. El archivo del cabildo de la catedral de Segorbe también estaba estructurado en armarios, estantes y líos. Los armarios se distinguían por su letra y los estantes y líos por su número.

Por lo que respecta a Cataluña y Baleares no tenemos constancia de cuando empieza a utilizarse el término «*l·ligall*», posiblemente ya en la Edad Moderna. Las fuentes nos mencionan además otros términos como «*plecs*», «*fardos*» o «*rollos*». En el inventario de 1799 del archivo de la localidad balear de Alayor se recoge un asiento como «*Item Un plech sens cusir de copias de memorials...*» [Hernández Sanz, 1917, p. 231]. En 1801, Josep Batlle organizó la documentación del archivo de Selva de Camp en nueve cajones, y cada uno de ellos en diez «*plecs*» [Soronellas i Masdeu, 1993, p. 6]. Estos podemos tal vez asimilarlos con el término castellano de carpetas.

En el inventario del archivo municipal de Campanet, realizado en 1769, abundan las descripciones que recogen agrupaciones como «*fardos*», ejemplo sería «*Item, differents fardos de papers volants como son alberans, cartes... Item, un fardo de visindaris...*» [Segura i Salado, 1985, p. 447]. En el archivo municipal de Bagá, cuando fue descrito por J. Serra i Vilaró, a principios del siglo XX, se conservaban «*algunos rollos de pergamino en los que hay de cien a doscientos documentos*» [Millares Carlo, 1952, p. 146]. Lo mismo ocurría en 1890 en el archivo de Solsona [Planes i Albets, 1993, p. 278]. Estos rollos pueden presuponer la agrupación de documentos enrollados, algo más propio de la Edad Media.

Por encima de las diferentes denominaciones utilizadas a lo largo del Antiguo Régimen en distintas zonas de España, lo que es evidente es el triunfo del legajo como agrupación física básica, debido sobre todo a su bajo coste (cartones y cuerda), a su manejabilidad y a su adaptación al tamaño de la documentación y al de los cajones y estantes.

2. Causas del deterioro de la documentación

El patrimonio documental municipal conservado en la actualidad y producido durante el Antiguo Régimen ha sufrido una suerte dispar según cada localidad, incidiendo en su conservación una infinidad de factores que podríamos agrupar en la intervención negativa del hombre, en la de los animales que consumen o utilizan el papel u otros soportes escriturarios presentes en los archivos, y en la del clima, especialmente la excesiva humedad.

2.1. El hombre

Las autoridades locales y algunos oficiales concejiles, especialmente los escribanos, velarán a lo largo de esos siglos por conservar debidamente instalada, organizada y descrita la documentación municipal. Pero esa preocupación e interés no será compartida con igual intensidad por todos ellos, produciéndose períodos adversos que mermarán un patrimonio de singular valor.

Las causas van a ser múltiples. Algunas de ellas ya fueron expuestas por P. Madoz a mediados del siglo XIX al referirse a las pérdidas sufridas por el archivo municipal de Valladolid, explicando que *«la intervención y administración que en distintas épocas tuvieron de los caudales de arbitrios los gremios de esta ciudad por asientos hechos con los capitulares; la creación de la Junta que se establecía en la posada del presidente de la Chancillería, que para el despacho de los negocios de arbitrios extraían del archivo cuantos papeles necesitaban, devolviendo unos y otros no; y sobre todo, el abuso introducido por los Tribunales, autoridades y capitulares de extraer del Archivo toda clase de documentos originales para presentarlos en juicios y otros usos... Hay que añadir a todo lo apuntado los incendios sufridos por la ciudad, los diversos traslados de los fondos documentales, la despreocupación práctica por los diplomas antiguos y los temporales sociales y políticos...»* [Pino Rebolledo, 1991, p. 24-25].

Sin duda serán las guerras y lo que llevan consigo (incendios, destrucciones intencionadas, saqueos) las que provocarán efectos más traumáticos y pérdidas más irreparables, al afectar a todo o a buena parte del fondo documental, y esto ocurrirá tanto en la Península como en los municipios que se

van formando en la América española. Los indígenas quemaron Santiago de Chile en el año 1541, ardiendo el incipiente archivo. El de La Serena sería incendiado por el pirata Sharp cuando tomó la ciudad en 1680 [Bayle, 1950, p. 8 y 12]. Las islas Canarias también sufrieron los ataques de los corsarios, con graves pérdidas en sus archivos. Santa Cruz de la Palma fue saqueada e incendiada por Pie de Palo en 1553. Las Palmas de Gran Canaria tuvo la misma suerte a manos de Van der Doeze en 1559 [Millares Carlo, 1952, p. 47].

La documentación del archivo de Irún fue en parte recuperada en 1648, tras pagar una cierta cantidad, al estar en poder de los franceses que invadieron la ciudad en el año 1638 [Garmendia Estomba, 1989, s/p.].

La Guerra con Portugal, iniciada en 1640, tuvo repercusiones negativas en el patrimonio documental municipal de algunas localidades gallegas. Al menos ocasionó severas pérdidas en el de Tui, en el de La Guardia y en el de El Rosal [López Gómez, 1985, p. 229]. Lo mismo debió suceder durante la revuelta catalana, producida por esos años. El archivo municipal de Montblanc fue incendiado el 27 de septiembre de 1642 [Porta i Balanya, 1987, p. 113]. En Olot estos sucesos provocaron la pérdida de algunos libros [Mayans i Pluja, 1987 (b), p. 159].

Con anterioridad la revuelta comunera provocó la destrucción de archivos municipales castellanos, como el de Medina del Campo [Álvarez García, 1980, p. 36].

El bombardeo de Alicante, en julio de 1691, por una escuadra francesa llevó consigo la destrucción de parte del edificio de la casa de la ciudad y con él de su archivo [Paternina Bono, 1992, p. 52].

La Guerra de Sucesión, en los primeros años del siglo XVIII, tuvo una especial incidencia en Cataluña, Aragón y Valencia. Entre los archivos más afectados se encuentran los de Manresa, Tarrasa y Mazaleón. La casa del consejo municipal de Manresa fue incendiada en 1713 por las tropas borbónicas y con ella ardió su archivo [Gasol, 1990, p. 12]. Lo mismo ocurrió en Tarrasa ese mismo año [Puig i Ustrell, 1982, p. 136]. Los archivos de la comarca donde está enclavada Mazaleón sufrieron «*contratiempos gravísimos*» durante esa guerra.

Más generalizados fueron los daños sufridos por el patrimonio documental municipal durante la Guerra de la Independencia. El ejército francés se va a caracterizar por el saqueo e incendio de los archivos en las poblaciones tomadas por la fuerza. El de la población burgalesa de Espinosa de los Monteros fue saqueado en 1808.

A veces la sola constancia de su próxima llegada podía ocasionar efectos parecidos. En 1808, el archivo de Sitges sufrió la dispersión de su documentación al ser repartido entre los vecinos, ante la llegada de los franceses [Panyella, 1982, p. 92], perdiéndose parte de ella definitivamente.

En 1809, las tropas napoleónicas saquearon el archivo de Besalú [Mayans i Pluja, 1987 (a), p. 203]. El 22 de febrero de ese mismo año quemaron el de Valls [Ibarra i Olle, 1994, p. 38]. Estas acciones, en poblaciones catalanas, tuvieron su continuación en la ciudad de Zaragoza. La casa de la ciudad fue asaltada por el ejército francés en 1809. Una vez abierto el archivo, las tropas *«extrajeran los documentos, libros y expedientes, inutilizaron y arrojaron algunos por las ventanas, y quedaron en el más completo desorden los pocos que se salvaron, Don Agustín Alcalde Ibieca, recogió muchos documentos y los conservó hasta reintegrarlos al municipio...»*; y en 1816 se encargó a Joaquín Gómez la reclamación de los documentos pertenecientes al ayuntamiento que paraban, según las noticias, *«en algunas librerías, droguerías y otras tiendas de la ciudad»* [González Miranda, 1981, p. 83].

En 1810 sufrirían los mismos efectos, entre otros, los archivos de Balaguer y Sevilla. La primera población fue saqueada el 4 de abril de 1810 [Farre i Viladrich, 1989, p. 121]. En Sevilla se produjo un incendio en las proximidades de las casas consistoriales, en noviembre de ese año, lo que obligó a trasladar los documentos, con el consiguiente desorden y extravío [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 11]. En 1811, otro incendio provocado por el ejército francés mermó notablemente la documentación del archivo de Manresa [Gasol, 1990, p. 13].

En 1812 sufrió un grave incendio el archivo municipal de Torrente [Mateu Llopis, 1953, p. 30]. La Guerra de la Independencia afectó negativamente también a los archivos de Olot, Alcañiz, Calatayud, Socuéllamos y Talavera de la Reina. Tampoco Málaga se vio libre de estas consecuencias [Díaz de Noriega, 1970, p. 179], que alcanzaron una magnitud traumática en el caso de San Sebastián, dado que el ejército británico provocó, durante el bombardeo de la ciudad, el día 31 de agosto de 1813, el incendio del archivo municipal, que quedó destruido en su totalidad [Banus Aguirre, 1986, p. 6].

Acabada la contienda otros graves sucesos provocaron daños irreparables y cuantiosos en algunos archivos municipales españoles. El de la población gaditana de San Fernando *«quedó abierto, asaltado y robado»* en 1823, al finalizar el Trienio Liberal [López Garrido, 1989, p. 15].

El 14 de mayo de 1837 las tropas inglesas asaltaron Irún y su archivo terminó esparcido por las calles [Garmendia Estomba, 1989, s/p.]. Lo mismo ocurrió en Hernani. Peor suerte había tenido el archivo de Guetaria, destruido totalmente el 1º de enero de 1836, tras el asalto e incendio de la población. La guerra de 1833-1839 afectó negativamente a varios archivos municipales de Guipúzcoa.

El de Segovia fue saqueado el 4 de agosto de 1837 por los carlistas [Cantalejo San Frutos, 1994, p. 848]. El incendio del Salón de Ciento, provocado en 1842 por el bombardeo que sufrió Barcelona, afectó a las series más

antiguas de la «*Taula de Canvi*», algunas de ellas iniciadas en el siglo XV [Arxiu, 1995, p. 27]. La revolución de 1854 supondrá graves pérdidas para el archivo municipal de Tortosa, «*doncs consta que va ser llançats al carrer els documents de la casa de la ciutat*». Durante esos acontecimientos se perderá definitivamente el libro de la cadena, que recogía «*les Costums de Tortosa*» [Massip i Fonollosa, 1987, p. 11].

Las guerras carlistas y los sucesos que desencadenaron el triunfo de la Primera República ocasionaran también serios quebrantos en el patrimonio documental municipal, sobre todo en poblaciones aragonesas. Las localidades de Alcañiz, Calatayud y Tarazona, y otras de la provincia de Teruel fueron algunas de las afectadas por estos acontecimientos.

Los saqueos e incendios intencionados que acompañan a períodos convulsos caracterizados por la ausencia, o merma notable, de poder en manos de las autoridades locales incidieron en la destrucción de un patrimonio documental que se venía formando desde la Edad Media. No obstante, la posibilidad de que el fuego afectara a los documentos estuvo siempre presente, con independencia de las guerras y las revueltas. En este sentido cabe recordar lo que escribía F. Troche y Zúñiga, en 1835. Para él el «*fuego y la humedad son los mayores enemigos que tienen los papeles*» [Troche y Zúñiga, 1835, p. 76]. Ya a finales del siglo XII, o principios del siglo XIII, San Sebastián sufrió un incendio general que trajo los efectos ya conocidos de destrucción de su documentación [Banus Aguirre, 1986, p. 25]. Lo mismo aconteció en Jaca en el año 1395 [Buesa Conde, 1986, p. 86]. El archivo de Guetaria se quemó en 1597 [Garmendia Estomba, 1989, s/p.]. En 1523, el fuego arrasó el ayuntamiento de Zamora [Ferrero Ferrero y González Matellán, 1983, p. 387]. En 1559 un incendio afectó seriamente al archivo municipal de Santiago de Compostela. El 19 de octubre de 1560 ardieron 180 casas en la localidad de Nieva de Cameros, y con ellas se perdió su archivo municipal. El 15 de febrero de 1585 le tocó el turno al ayuntamiento de Valencia [Mateu Llopis, 1953, p. 7].

El 24 de febrero de 1707 desapareció por la misma causa el «*archivo de tres llaves en donde se contenían y estaban diversas executorias y escripturas, papeles e instrumentos*» de la villa de Pradillo, perteneciente al conde de Nieva. Lo único que se salvaron fueron las cerrajas. También el fuego afectó al archivo municipal de Badajoz en el siglo XVIII [Rodríguez Amaya, 1952, p. 489] y al del concejo de El Ganso [Martín Fuertes, 1980, p. 15], por poner algunos ejemplos, a los que podemos unir el de Archena en 1778 [Cerdá Díaz, 1997, p. 180]. El archivo municipal de Tolosa ardió en el incendio de 9 de octubre de 1781, que afectó a la iglesia parroquial en donde se guardaba [Garmendia Estomba, 1989, s/p.].

Los traslados apresurados de documentación por estas u otras causas pudieron tener efectos no deseados. Los escribanos de las siete ciudades que integraban la junta del Reino de Galicia se repartieron por turno la responsabilidad de dar fe de lo acordado en sus reuniones durante buena parte del siglo XVII, por lo que los documentos del archivo *«se trasladaron a lomos de caballerías a las distintas poblaciones»* [Artaza Montero, 1994, p. 11]. Con un clima como el gallego podemos comprender los resultados que podían ocasionar estos traslados. Durante la Guerra de Sucesión, la documentación del archivo de Alicante fue enviada a Mallorca para evitar posibles destrucciones, pero una vez devuelta se comprobó la pérdida de documentos [Paternina Bono, 1992, p. 52].

El archivo de Irún fue trasladado en 1794 a Hernani, ante la cercanía del ejército francés. Terminada la Guerra de la Convención los documentos fueron devueltos, produciéndose algunas pérdidas [Garmendia Estomba, 1989, s/p.]. Lo mismo ocurrirá ese año en Guetaria.

Idéntica solución fue adoptada por la ciudad de Vich, el 20 de octubre de 1808, ante el temor de la llegada de las tropas francesas. Una vez metidos todos los documentos en cajones fueron remitidos, en mayo de 1810, a la población cercana de *«S. Lorenzo dels Piteus o de Morunys»*. No reingresarían de nuevo en la casa de la ciudad hasta finales de enero de 1811, sin que esta vez se tenga constancia de posibles pérdidas [Serra i Campdelacreu, 1879, p. 26]. Lo que sí ocurrió en Sitges y en Sevilla por esas fechas, como ya vimos. En el verano de 1808, los documentos del archivo de Astorga, temiendo las autoridades municipales la llegada de las tropas francesas, *«fueron reunidos en la Plaza para su transporte en enormes montañas de papeles y legajos»*, y aunque al final no fueron enviados al Bierzo, la documentación quedó muy desorganizada [Martín Fuertes, 1980, p. 15].

También el archivo municipal de Logroño *«ha sufrido numerosos traslados y avatares que han mermado considerablemente el volumen de la documentación conservada»*.

Los saqueos, incendios y traslados incontrolados constituyen sucesos puntuales en los que la actividad humana ha incidido muy negativamente en la conservación del patrimonio documental municipal. Junto a ellos cabría referirnos a la lenta y paulatina dejación que en amplios períodos de tiempo sufrieron algunos de esos archivos, con idénticos resultados a la larga. Las pérdidas intencionadas, en forma de sustracciones o hurtos, la evolución en los criterios de valoración de los documentos, la utilización de espacios insuficientes e inadecuados para su conservación, el uso indebido, y la utilización de soportes documentales de una calidad precaria, sin olvidarnos de las tintas, son otros tantos factores con los que el hombre, por acción u omisión, contribuyó al deterioro de este patrimonio.

La pérdida paulatina de documentos fue una constante en la mayor parte de los archivos municipales. Sólo aquellos que llevaron controles rigurosos, y que no sufrieron los efectos de saqueos o incendios, pudieron llegar al siglo XIX con la casi totalidad de la documentación. Desde muy pronto, incluso en la Edad Media, se detectaron sustracciones de documentos. La existencia de inventarios, más o menos precisos, posibilitaba la realización de cotejos que permitían comprobar cómo determinados documentos descritos en ellos ya no aparecían en el arca o armario que los contenía. Un ejemplo nos lo ofrece la ciudad de San Sebastián. El primer inventario conocido se debe a Luis de Cruzat y fue realizado en 1581, recogiendo un total de 226 documentos. En 1740 redactó uno nuevo Martín de Uribe, describiendo 1.026 documentos. En 159 años, los que separan ambos inventarios, se habían perdido 99 documentos, reflejados por Cruzat pero no por Uribe [Banus Aguirre, 1986, p. 14]. Podemos entender así que en las ordenanzas de 1758 se recoja expresamente, al referirse al sistema establecido para la apertura del archivo, que se pretendía «evitar por este medio sustracción, o pérdida de Cédulas, órdenes Reales, o Papeles importantes» [SAN SEBASTIÁN, 1758].

La no conservación de determinados documentos podía ocasionar graves daños a los municipios, y evidentes beneficios a los infractores. Ya en 1473, el notario de la paeria de Tárrega informó al consejo municipal que «*uns pergamins que contenien diversos privilegis havien estat robats*» [Gonzalvo i Bou, 1989, p. 163]. En Olot, en 1595, se ordenó la construcción de un archivo dado que «*per tenir los Consols en llur poder les scriptures, privilegis, papers y los segells de dita Universitat se han perdudas molts y se han seguit molts indirectes y danys perquè mudantse com se mudan dits Consòls quiscun any restan en llurs casas*» [Mayans i Pluja, 1987 (b), p. 158]. Una resolución del ayuntamiento de Alicante de 10 de marzo de 1727 daba cuenta de que el archivo había sido objeto de saqueos y expolios [Paternina Bono, 1992, p. 52].

Estos ejemplos del ámbito de la Corona de Aragón podemos completarlos con otros de la corona castellana. Los archivos de Burgos, Orense y Sevilla padecieron hurtos y robos a lo largo de la Edad Moderna. En la primera ciudad, a principios del siglo XVI, se notó «*faltar algunos libros e quadernos de algunos años e de algunos meses de los tiempos pasados*», como consecuencia de conservar los escribanos mayores del ayuntamiento buena parte de los documentos en sus propias casas, y esto podía provocar que «*por los criados e criadas e personas de su casa se pudiesen faltar al tomar algunos de ellos e quitar algunas hojas e aubtos dellos, en grand perjuizio de la dicha cibdad e de las personas a quien tocare los dichos abtos e escrituras*» [Díez Sanz, 1984, p. 19]. Si esto se escribía en su libro de acuerdos del año 1510, en 1554 se obtuvieron censuras generales, al exponer el escribano del concejo en

el ayuntamiento que *«han hurtado, tomado, llebado, encobierdo dos libros del Regimiento»*. La medida dio resultado y los libros aparecieron.

En Orense también fueron frecuentes las sustracciones de documentos a lo largo de estos siglos [Gallego Domínguez, 1981, p. 181]. En Sevilla está constatada la existencia de procesos judiciales, ya en el siglo XVII, motivados por la sustracción de documentos. A ello no fueron ajenos ciertos historiadores sevillanos que en ese siglo registraron y revolvieron el archivo, *«llevándose en confianza muchos papeles que jamás fueron devueltos»* [Fernández Gómez, 1989, p. 424]. En 1824, el analista sevillano Justino Matute y Gaviria comunicó al ayuntamiento de esta ciudad andaluza que le habían ofrecido en venta un privilegio original de Felipe II, fechado en 1576, extraído sin duda de su archivo [Fernández Gómez, 1995 (c), p. 64]. Como éstos podíamos poner otros muchos ejemplos, caso de Jerez de la Frontera [Orellana González, 1992, p. 91]. No obstante nos referiremos a este problema de una forma más detallada más adelante.

Si esto sucedía en las grandes ciudades más sometidas al control de los delegados regios, podemos intuir lo que ocurriría en las pequeñas poblaciones. En Aldeanueva de Ebro el continuo trasiego de documentación de casa en casa ante la inexistencia de archivo del común suponía riesgo de pérdidas, que se documentan ya en 1566 [Prado Martínez, 1995, p. 308].

La destrucción intencionada de documentación por motivaciones jurídicas, económicas o políticas está bien documentada para el caso de Murcia en la Baja Edad Media. En 1375 se quemaban por orden del concejo todos los documentos referentes a la recaudación extraordinaria de aduanas, ordenada por Enrique II dos años antes, al haberse detectado fraude en su percepción. Las actas capitulares de los años 1419 y 1421 están incompletas, y las de 1422 y 1423 se han perdido, por decisión de los regidores murcianos en un intento de proteger al adelantado mayor del reino, Alfonso Yañez Fajardo, partidario del infante don Enrique, en su lucha contra el rey Juan II. En 1485 un escribano arrancaba algunas hojas del libro de la cámara, en las que se contenía la probanza del oficio de escribanía de otro de los escribanos de la ciudad. Situaciones parecidas pudieron darse en otras poblaciones [Martínez Carrillo, 1991, p. 27-29].

No es fácil encontrar acuerdos municipales relativos a la destrucción de documentación. En un principio todo lo que se guardaba en el archivo del común debía conservarse indefinidamente. Bien distinta era la situación de los documentos, en poder de los oficiales concejiles, que habían perdido su vigencia administrativa, y sobre los que nada se había decidido en cuanto a su custodia. Sobre ellos recaerían decisiones relativas a su eliminación, sin que por lo general quedara constancia en ningún expediente, o libro de acuerdos. Entre las disposiciones oficiales aparecidas en este amplio período sólo una

Real Cédula de 25 de junio de 1814 tiene una cierta relación con la destrucción de documentos, al establecer que se borrasen de los libros de ayuntamientos las actas de las elecciones constitucionales. Sin embargo, pocas corporaciones cumplieron esta medida.

Evidentemente la documentación municipal fue objeto de valoración por las autoridades locales durante todo el Antiguo Régimen. Como ya sabemos, sólo lo más importante según sus criterios debía formar parte del archivo del común. Pero estos criterios fueron variando conforme pasaban los siglos. Su evolución incidirá de forma notable en la conservación de la documentación, pues los documentos que fueron engrosando el archivo del común estuvieron mejor conservados, organizados y descritos, y sobre todo más controlados, por lo que pudieron afrontar el paso del tiempo con menos riesgos.

Ya en Barcelona, en la segunda mitad del siglo XIV, existió una comisión municipal, integrada por un consejero, un jurista y un notario, para seleccionar de entre los documentos originales aquellos que fueran más relevantes para la ciudad. En la «*caixa*» del convento de San Francisco sólo guardaban «*els documents, que segons el criteri dels experts, la ciutat havia de conservar sempre*» [Vinyoles, 1994-1995, p. 1513]. Los documentos de trámite no se incluían en ella sino que se copiaban en libros de papel y se guardaban en las dependencias municipales. Muchos de ellos posiblemente terminarían perdiéndose.

En los inventarios que se realizan desde la Baja Edad Media se refleja una selección en la descripción. Sólo se registra lo que está incluido en el archivo del común, en el arca de los privilegios, es decir la documentación conservada con arreglo a criterios jurídicos, prácticos o ideológicos [Aguinagalde, 1988, p. 80]. Los documentos son objeto de valoración continua dado que la decisión de ser o no incluidos en el arca suponía un grado diferente de control y por lo tanto de conservación. Incluso con el paso del tiempo podían perder esa condición. Sirva de ejemplo la actividad de Luis Cruzat en San Sebastián, en 1581. Al elaborar el inventario del archivo de esta ciudad manifiesta que «*se han quitado muchos papeles que habia de poca importancia y puesto en legajos aparte por orden e concierto de inventario, por si alguno pidiere cuenta dellos*». Esto explicaría que en el realizado por Martín de Uribe en 1740, sobre ese mismo fondo, aparezcan descripciones relativas a los documentos de cinco cajones bajo la denominación de «*Pleitos viejos y papeles inútiles*» [Banus Aguirre, 1986, p. 11 y 21].

Esta diferenciación entre documentos útiles e inútiles va a estar presente en otros instrumentos descriptivos elaborados en el siglo XVIII. Lo hará Juan Antonio Criado Valera en el inventario del archivo municipal de Cáceres en 1750 [Floriano Cumbreño, 1934, 11]. El ayuntamiento de Talavera de la Reina, por acuerdo de 1766, establecerá que se organice su documentación y

se describa por inventario «*separando lo útil de lo ynutil*» [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 96]. Así también lo efectuará José Romero y Ayala sobre la documentación de Carmona, en 1779. La corporación municipal le encargó «*enlegajar y etiquetar por separado los documentos útiles e inútiles*» [Inventario, 1987, p. 13]

Esta distinción entre la documentación ya incluida en el archivo refleja por un lado la evolución en la valoración de los documentos, conforme perdían vigencia jurídica y administrativa, y por otro, implica un diferente tratamiento archivístico, con consecuencias en la organización, descripción y seguramente en el control. Los legajos con cartelas en las que aparecía la leyenda de documentos inútiles eran candidatos idóneos a ser destruidos o abandonados.

Las pérdidas podían producirse, también, como consecuencia de unas deficientes instalaciones, ya que esta situación incrementaba la vulnerabilidad de los soportes. El consejo municipal de Vich, en 1672, «*viendo que el archivo estaba en tan pésimo estado, que por falta de lugar, armarios, cajones y estantes, los privilegios y escrituras iban consumiéndose y perdiéndose... determinó... hacer lo conveniente para tenerlo en buena custodia*» [Serra i Campdelacreu, 1879, p. 22]. En Madrid, a principios del siglo XIX, la falta de espacio provocaba que bastantes legajos estuvieran «*tirados por el suelo, donde eran pasto de los ratones y victimas de la polilla y de la humedad*» [Domingo Palacio, 1875, p. 48]. También en Santander, en 1810, se señalaba que «*no cogen los papeles en el citado Archivo, y así están todos amontonados y mezclados, perjudicándose notablemente con polbo y ratones*» [Vaque-rizo Gil, 1984, p. 10].

Los espacios insuficientes e inadecuados incidían negativamente en la conservación documental, aunque cuando éstos faltaban la situación podía aún ser peor. No en vano, en Jaca, hasta la aprobación de las ordenaciones de 1694, no existió un archivo común para los procesos seguidos ante el Justicia, en las mismas casas de la ciudad. Hasta entonces estaban en poder de diferentes notarios y de otras personas, por lo que «*las partes... no puedan aver aquellos para seguir su justicia. Y porque por causa de lo susodicho se ha experimentado en tiempo antiguo averse perdido muchos processos*» [JACA, 1694]. La indefinición del concepto de patrimonio documental municipal a lo largo del Antiguo Régimen, y su evolución en esos siglos, explica también notables carencias y lagunas en determinadas series documentales.

A todo ello hay que unir el uso de la documentación de una manera indebida, que facilitara su deterioro y manipulación, a veces fraudulenta. En este último sentido cabe recordar el Decreto dado por Felipe V, el 20 de noviembre de 1703, por el que intentaba poner remedio a la perniciosa costumbre de remitir documentos originales para las pruebas de hábitos en el Conse-

jo de las Órdenes Militares. Hasta entonces era frecuente que por este motivo se enviaran a la Corte los libros parroquiales, padrones, protocolos y otros documentos. De esto había resultado que *«se han perdido algunos, y en otros se han subplantado y enmendado nombres, apellidos, legitimaciones... pudiendo creerse... que ninguno de los que vuelve llega con aquella íntegra pureza que salió de su lugar..., quando sacados una vez de sus archivos los libros e instrumentos, es preciso que antes de reducirse a ellos (a más de los riesgos y contingencias de los caminos) ayan de pasar por muchas manos, en que consiguientemente se franquea la oportunidad para todo género de fraudes y suposiciones»* [Gómez Iglesias, 1974, p. 34].

El manejo frecuente de la documentación contribuye al deterioro de los soportes, aunque éstos sean de calidad. Y parece que este problema ya se detecta en Barcelona en el siglo XIV. Se ha llegado a afirmar que *«A la Barcelona de les darreries del segle XIV sembla que hi ha dos elements qui dificulten la conservació dels documents: l'efecte de la consulta indiscriminada que els deteriora i desordena, i les rates que es mengen els papers»* [Vinyoles, 1994-1995, p. 1.514].

Las fuentes se refieren con bastante asiduidad a la existencia de documentos en mal estado o maltratados, lo que debemos atribuir a una deficiente instalación, a una inadecuada manipulación o a las carencias de los propios soportes. En la segunda mitad del siglo XVIII se señala que algunos privilegios conservados en el archivo municipal de Castellón *«no se podían entender por lo maltratado que estaban»* [Roca Travar, 1951, p. 211]. Como éste hay otros muchos ejemplos. En San Sebastián, en 1740, se describe uno de los privilegios como *«un pergamino de letra muy gastada e ilegible»* [Banus Aguirre, 1986, p. 133].

El hombre por acción u omisión era y es el principal depredador de un patrimonio documental que a lo largo de los siglos se ha encargado de generar y conservar. Algunos animales le ayudarán en su tarea destructiva.

2.2. Los animales

Anteriormente hemos hecho referencia a los daños provocados por los ratones en los archivos municipales de Santander y Madrid, a principios del siglo XIX. Pero estos pequeños mamíferos han convivido con el hombre desde la formación de las primitivas sociedades. Los soportes escriturarios utilizados durante el Antiguo Régimen, en especial el papel, eran muy aptos para la formación de sus nidos. Lo cierto es que ya en la Edad Media se achaca a estos roedores la destrucción de ciertos documentos.

En 1375, el arca de la villa de Valladolid había sido ya objeto del ataque de los ratones [Pino Rebolledo, 1991, p. 9]. En Barcelona eran las ratas las

que ocasionaban graves pérdidas, tal y como señalan los consejeros de la ciudad en un memorial de 1392. En concreto argumentan que «*les comptes, cartes e altres scriptures... per multiplicament de rates... sien del tot destroits e menyats*». La solución se encontraba en el uso de gatos [Vinyoles, 1994-1995, p. 1.517]. En 1433, ya se refleja en el libro sumario del arca del concejo de Burgos que algunas escrituras «*estaban rotas, estropeadas por polilla o ratones*» [Moratinos, 1985, p. 186].

En 1585, el procurador mayor de la ciudad de Sevilla denunciaba el estado del archivo «*cuyos papeles eran destruidos por ratones y otras sabandijas*» [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 14]. En una historia impresa de la ciudad de Astorga, de 1635, se dice que entre los documentos de su archivo los había «*rotos y atonados*» (sic) [Martín Fuertes, 1980, p. 20]. También como rotos y ratonados se describen algunos documentos del concejo de Vallecas en 1674 [Mateu Llopis, 1945, p. 79]. Esta situación era común a la mayor parte de los archivos, incluso allende el Atlántico. En Buenos Aires, en 1699, el escribano concejil expuso ante el cabildo de la ciudad «*el grave daño que hacen los ratones a los papeles del oficio, así en las causas como en los registros de las escripturas y contratos, por ser tantos los ratones que los más de los procesos se han reconocido por mí, y están comidos*». La solución acordada fue levantar los estantes, colocándolos más arriba, de manera que los ratones no pudieran subir hasta ellos [Bayle, 1950, p. 23].

Estos roedores podían provocar mas daños en la documentación enlegajada, situada sobre estantes abiertos, cercanos al suelo. Además de la presencia efectiva de gatos, y de la subida de los estantes a zonas más altas, meter la documentación en cajones dentro de armarios dificultaba la tarea destructora de estos animales, sobre todo si la madera era suficientemente dura como para impedir que llegaran a penetrar en estos pequeños recintos. Su dañina actividad incidía notablemente a la hora de establecer la mejor ubicación para las arcas o armarios, empotradas muchas veces en los muros a determinada altura, como ya vimos.

En 1704, fueron las ratas las que obligaron al consejo municipal de Olot a decidir que la documentación de su archivo fuera guardada en cajones [Mayans i Pluja, 1987 (a), p. 221]. En Gerona, a lo largo del siglo XVIII, la presencia de los «*ratolins*» supuso, entre otras causas, la pérdida constante de documentos [Alberch i Fugueras, 1987, p. 230]. Sus daños quedan muy bien reflejados por Toribio del Campillo al describir el archivo de la comunidad de Daroca, en la segunda mitad del siglo XIX. Este archivero escribía que «*desde que se penetra en aquel polvoroso recinto, lleno de pedazos de papeles viejos por el suelo, con legajos destrozados o deshechos en las estanterías, con menudísimos fragmentos de pergamino y de papel antiguo mezclados entre la basura de inmundos roedores en los calajes...*» [Campillo, 1871, p. 37].

Además de las ratas y ratones, otros animales se servían de la documentación de los archivos para sobrevivir y reproducirse. En especial las fuentes se refieren a la polilla. En un informe del año 1726 elaborado por los comisarios del archivo de Madrid se establece que era necesario liberar a los documentos del «*polvo y la polilla*» [Gómez Iglesias, 1974, p. 34]. No obstante, todavía a principios del siglo XIX la polilla seguía afectando al archivo de villa. En 1433, como ya señalamos, se mencionan sus efectos nocivos en el de Burgos. Y en 1777, en el de Medina del Campo.

El nombre de polilla se utilizaría también en esta época para describir a otros insectos bibliófagos, mejor identificados actualmente, y de cuya existencia durante el Antiguo Régimen quedan muchos ejemplos en los archivos municipales, al examinar documentos horadados con restauraciones de época. Esos insectos o los roedores pudieron ser los causantes del deterioro de documentos a los que las fuentes se refieren como simplemente «*carcomidos*», sin especificar al agente destructor. En el memorial de los libros del ayuntamiento de Ciudad Real, redactado hacia 1580, se recoge «*un legajo de cartas y papeles antiguos tan rrotos y carcomidos que no se pudieron leer*» [Bernabeu Novalbos, 1952, p. 107]. En un recuento de la documentación de Ribadavia, del año 1643, se mencionan «*cinco libros biejos tocantes a dicho ayuntamiento, ya carcomidos*» [Gallego Domínguez, 1988, p. 40]. El libro de acuerdos más antiguo que se conserva de la villa de Tui, se encontraba ya en 1776 «*carcomido con el transcurso de tiempo*» [López Gómez, 1985, p. 207].

Más pintoresca es la acción dañina de otros animales. En Santiago de Chile, a mediados del siglo XVI, ante la falta papel, se escribieron algunos documentos sobre piel de oveja mal preparada, pero «*los perros husmearon la carnaza y se la comieron*» [Bayle, 1950, p. 8].

2.3. El clima

Durante el Antiguo Régimen se fue consciente de que determinadas situaciones atmosféricas podían contribuir al deterioro de los soportes documentales. Los contemporáneos reflejaron en sus escritos sus recelos por el exceso de humedad, propio de climas lluviosos o de espacios poco ventilados y sombríos. La escasez de humedad o las continuas variaciones de temperatura no parece que fueran consideradas como situaciones de riesgo para la conservación de los documentos.

El exceso de humedad motivó, en 1578, que el archivo de San Sebastián fuera trasladado desde la iglesia de Santa María hasta la de San Vicente [Banus Aguirre, 1986, p. 7]. En 1702, el señorío de Vizcaya, ordenó la compra de los corchos necesarios para arreglar su archivo, dado que el clima húmedo originaba estragos entre los documentos allí guardados [Gómez Rodrigo, 1974,

p. 64]. También la humedad se cita entre los agentes destructores de la documentación de Gerona en el siglo XVIII [Alberch i Fugueras, 1987, p. 230]. En 1821, la sala destinada a archivo en el consistorio de Santander es descrita como húmeda [Vaquerizo Gil, 1984, p. 10]. Medio siglo después, buena parte del archivo de Fuenterrabía estaba deshecho por el agua «*que entra en abundancia por la ventana que alumbra aquella estancia, sin puertas ni cristales*» [Vignau Ballester, 1871, p. 258]. Peor suerte tuvo Bilbao, en 1593, cuando un desbordamiento de la ría derribó parte del ayuntamiento, provocando además la pérdida de algunas arcas del archivo seguramente arrastradas por el agua [Basas, 1958, p. 64].

Los ejemplos recogidos abarcan todo el norte peninsular, desde Gerona hasta Santander, aunque posiblemente Asturias o Galicia no se vieron tampoco libres de la excesiva humedad, y de la degradación que llevaba consigo. Al margen de esta amplia zona de España con un clima muy lluvioso, sólo en algunas poblaciones del interior el exceso de humedad se dejó notar por sus efectos negativos sobre los documentos. Y ese exceso estaba motivado por ubicar el archivo en espacios inadecuados y mal ventilados. El archivo municipal de Córdoba sufrió graves daños por «*haber estado muchos años en un sótano del convento de San Pablo donde se pudrieron muchos legajos*» [Nieto Cumplido, 1978, p. 2].

De todas formas, como ya vimos, no fue normal ubicar el archivo en sótanos o plantas bajas, entre otros motivos para impedir los efectos de la humedad y de los roedores.

Provocados los daños por las causas que acabamos de analizar era necesario adoptar medidas curativas, las menos, o preventivas, para evitar que las pérdidas se reprodujeran.

3. La preservación de los documentos

Evidentemente una adecuada instalación de la documentación, en un local seguro y limpio, podía facilitar su buena conservación. El control riguroso en su entrada y salida del archivo, y un uso apropiado, impediría que se produjeran las no deseadas pérdidas. A todo ello habría que unir las medidas adoptadas para impedir el progresivo deterioro de los soportes, en particular la encuadernación o cosido de los documentos, la realización de copias o traslados de los originales, y la reproducción a texto completo de muchos de ellos en los registros o libros copiadores.

3.1. La encuadernación

Hasta la Baja Edad Media la casi totalidad de los documentos conservados en los archivos municipales están redactados en pergamino, de medidas

variables, que por lo general se guardaban en el arca una vez plegados, protegiendo el sello pendiente dentro de sus dobleces. Estos documentos, emitidos por las cancillerías regias, nobiliarias o eclesiásticas, formaban por sí mismos una unidad documental. No daban lugar a expedientes, ni llevaban unidos otros documentos posteriores. A lo más disponían de alguna anotación de fecha posterior, en la que se resumía su contenido o se indicaba su copia en el libro de los privilegios, y siempre en su cara exterior.

En el siglo XV llegan a los archivos municipales algunos documentos procedentes de esas mismas instituciones redactados en vitela, formando cuadernillos, y por lo tanto cosidos. Durante el reinado de los Reyes Católicos se utiliza este sistema para las cartas de privilegio y confirmación, pero también para los cuadernos de Cortes, que se redactaban en papel.

La difusión del uso del papel como soporte escriturario, que irrumpe con fuerza al menos en el siglo XIV, y su fragilidad, motivará que muy pronto se adopten medidas tendentes a impedir su deterioro o pérdida por extravío. En los documentos más extensos elaborados sobre papel en esta época, caso de las sentencias arbitrales, de las cuentas, o de los libros de acuerdos se utilizan distintas soluciones. Las más primitivas consistieron en unir, mediante hilo, las hojas de un mismo documento por su parte inferior, para plegarlas posteriormente, antes de guardarlas en el archivo. Se imitaba así a los rollos realizados con otros soportes como el papiro o el propio pergamino, aunque el papel no permitía ser enrollado, pero sí podía ser plegado, y el cosido inferior impedía que se perdiera ninguna hoja a la vez que facilitaba su lectura. Aún así ofrecía serios inconvenientes para los documentos más extensos, y no permitía su protección con cubiertas duras. Algunas sentencias arbitrales, y otros documentos, siguen este sistema en la Baja Edad Media.

Bastante más cómodo podía resultar la unión de los diferentes pliegos de papel, utilizados para la redacción de un documento, mediante una sencilla cuerda que penetraba por un orificio realizado previamente en el mismo molino papero, o en la propia escribanía, a una cierta distancia del borde superior, para evitar su rotura. Esa cuerda se podía abrir o cerrar permitiendo la separación de alguno de los pliegos si se creía necesario. La existencia en el papel, antes de plasmar en él cualquier signo escriturario, del pequeño orificio, generalmente de unos 2 cm. de diámetro, por el que penetraría la cuerda, impedía que se pudiera perder información, dado que obviamente era un espacio inutilizado para la escritura. Nos referimos a los registros horadados que se utilizarán en bastantes poblaciones para plasmar sus cuentas de propios y arbitrios, al menos en el siglo XV y parte del siglo XVI. Los cuadernillos no están cosidos entre sí, sólo unidos por la cuerda, y generalmente carecen de cubierta protectora.

Mucha más aceptación va a tener a largo plazo el cosido de los distintos cuadernillos de un mismo documento entre sí, imitando las encuadernaciones

de los códices medievales y de los libros que desde mediados del siglo XV salen de las imprentas. Los documentos más extensos emitidos por las cancelías en papel o vitela suelen utilizar ese mismo sistema, del que también se sirven los escribanos en sus protocolos notariales.

Además, en la Baja Edad Media, se suelen utilizar cubiertas de pergamino para proteger los documentos en papel, sean breves o extensos, imitando en su forma las cubiertas de los códices. Estas cubiertas protectoras se utilizan casi exclusivamente para los documentos más importantes según los criterios de la época. A veces la cubierta ni siquiera llega a estar cosida al documento, simulando un sobre o cartera en la que se introduce el texto.

En los archivos municipales, a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, se conservan bastantes documentos en formato de libro, con cuadernos cosidos y con cubiertas más o menos duras. En el año 1360 ya está constatada la existencia en Cervera del libro copiador de privilegios, con tapas de madera recubiertas de cuero. Las mismas características, además de cierres metálicos, tenía el libro de la cadena de Jaca, confirmado por Martín el Humano, en 1398.

Por lo tanto, las ventajas de la encuadernación eran de sobra conocidas en la Edad Media en muchos ayuntamientos, dado que conservaban algunos documentos en formato de libro ya en esa época. Su uso casi estaba restringido a los registros y a algunos documentos muy solemnes ante la práctica inexistencia de expedientes. Nos referimos a los libros de acuerdos en Castilla, a los *«manuals de Consell»* y de insaculaciones en Aragón, a las ordenanzas, a los libros de cargo y data, etc. También los cuadernos se utilizaban para identificar las piezas en los largos procesos seguidos en esa época. En el registro del arca del concejo de Astorga, de 1447, se recoge la existencia de *«veynte e tres quadernos pequeños, todos cosidos e signados, en que está la pesquisa que se fizo sobre razón de términos...»* [Martín Fuertes, 1980, p. 18]. A ellos se unirían algunos documentos procedentes de diferentes cancelías.

La encuadernación, con el consiguiente cosido de los diferentes pliegos de tamaño folio o cuartilla, fuera acompañada o no de tapas duras como cubierta, era un procedimiento muy apto para conservar los documentos municipales, pero implicaba un gasto suplementario que no todos los ayuntamientos fueron capaces de afrontar. Aún así su utilización se verá favorecida por la extensión del uso de los registros, muy clara desde el reinado de los Reyes Católicos, y por la aparición de los expedientes administrativos en el sentido moderno del término.

La unión de todos los documentos relacionados con una misma petición o asunto, incluyendo la resolución, si bien era habitual en los procedimientos judiciales, al menos en la Baja Edad Media, no fue frecuente entre la documentación municipal hasta bien entrado el siglo XVI, y esto sólo en las

grandes ciudades. Los escribanos concejiles tenían el referente de los protocolos notariales en donde las escrituras iban cosidas, unas detrás de otras, siguiendo un criterio cronológico. Esto poco les alentaba a formar una unidad documental con la petición, los informes, y el acuerdo del órgano municipal, manteniendo por lo general, si se conservaban, cada documento separado de los demás. La influencia del procedimiento judicial, mucho más regulado al ser heredero del Derecho Romano, supondrá la traslación de la idea del proceso, como conjunto documental homogéneo, a la administración local. Surgirán así los primeros expedientes, que tal vez se puedan encontrar en las cuentas de propios y arbitrios del siglo XV, con su carga y data, con su balance, con los informes de los contadores o examinadores de cuentas, y con la aprobación del regimiento. Entendemos que la bondad del procedimiento, copiado de los órganos judiciales, se ensayaría con éxito en la administración de los recursos económicos municipales y de ahí se extendería a otros ámbitos de competencia local.

Se ha afirmado, siguiendo a R.H. Bautier, que la constitución de expedientes con documentos agrupados y cosidos se extenderá a lo largo del siglo XVI por la Europa central, septentrional y oriental, mientras que en la Europa occidental y meridional se mantendrán durante más tiempo los sistemas medievales, basados en agrupar los documentos por su tipología, cronología o materia [Planes i Albets, 1992, p. 16]. Ahora bien estamos convencidos de que en el siglo XVI, incluso antes, al menos en las grandes ciudades españolas, ya existen y se forman expedientes en la tramitación de los asuntos que les son propios.

El expediente contribuirá enormemente a la salvaguardia del patrimonio documental al mantener unidos todos los documentos relacionados con una misma petición o asunto. Y cuando decimos unidos, queremos decir cosidos. Ya no hablamos de pliegos de extensión homogénea que forman los cuadernos de un registro, sino de documentos sueltos, generalmente de diferente tamaño, incluso superior al folio o inferior a la cuartilla, que son cosidos con hilo, aprovechando el espacio en blanco de su borde izquierdo. Con el tiempo se les añadirá una portadilla protectora de papel que protege los documentos originales con los que se inicia y cierra el expediente. Esta portadilla servirá para describir brevemente su contenido, y será de gran utilidad a la hora de facilitar su consulta.

El cosido entre sí de todos los documentos que forman un expediente se irá extendiendo a lo largo de la Edad Moderna. Muy posiblemente, antes de realizar el cosido, tarea que solía llevarse a cabo una vez que el asunto estuviera resuelto, los documentos estarían unidos entre sí por pequeños alfileres metálicos que tenían la misma finalidad pero que sólo eran útiles para documentos poco voluminosos. Todavía se pueden encontrar algunos de estos alfileres, de

unos 3 cm. de largo, punta muy afilada y cabeza redondeada, en algunos archivos municipales. Otros documentos, por ejemplo las cartas plasmadas en una sola hoja, que no formaban parte de ningún expediente permanecerían sin unir y así nos han llegado hasta la actualidad. Aunque en algunas ocasiones se optó también por coser juntos un buen número de documentos, sin ninguna relación entre ellos, ni por el asunto, ni por el peticionario ni por el procedimiento, con el único objeto de garantizar su conservación y evitar su extravío.

Ya en el siglo XVIII, Juan Agustín de Názara y Castro organizó el archivo de Ribadavia. Una de sus tareas consistió en *«la reunión de los papeles sueltos que se hallaban en él, cosiéndolos en varios libros, al frente de los cuales puso sendos índices con el contenido de los mismos»*. Este trabajo ha sido considerado como *«extraordinariamente valioso, porque al coser los documentos permitió que llegaran hasta nosotros documentos que de hallarse sueltos, se hubieran perdido hace mucho tiempo»* [Gallego Domínguez, 1988, p. 33-34]. Algo parecido ocurrió en Oviedo en ese mismo siglo, ya que 149 documentos fueron encuadernados en cinco tomos. Si bien, *«algunos documentos, entre ellos el Fuero de Oviedo, por su tamaño, exceden del de la encuadernación, y para reducirlos al de ésta han sido doblados, lo que constituye un gran perjuicio en orden a su conservación, pero podríamos considerarlo como un mal menor, ya que de no haber sido encuadernados, dudamos que hubieran llegado hasta nuestros días, especialmente algunos documentos de tamaño minúsculo»* [Villa González-Río, 1978, p. XXIV].

Esta medida, no extraña a otros municipios, fue también trasladada a América en el siglo XVI. En algunas de sus ciudades *«se remacha la seguridad con el orden de encuadernar Cédulas y escrituras: aprisionadas entre las tapas de pergamino no se huyen»* [Bayle, 1950, p. 18].

En las actas de los diferentes ayuntamientos, de tarde en tarde, se registran acuerdos relativos a la encuadernación de la documentación. En Madrid, la actividad de dos regidores permitió que en 1613, consiguieran *«reunir las actas manuscritas que estaban dispersas y encuadernaron las hojas sueltas formando volúmenes que se iniciaban en 1464»* [Cayetano Martín, 1986, p. 552]. También el ayuntamiento de Oviedo *«sigue cuidando de la encuadernación de sus privilegios; el librero don Agustín de Celis, en el año 1659 había encuadernado cuatro libros <<de privilegios y papeles que están en el Archivo y además de su travaxo, puso taula, becerro y manillas y otras cosas>>»* [Villa González-Río, 1978, p. XIX]. El 11 de noviembre de 1695, el ayuntamiento de Talavera de la Reina aprobó el pago de 908 reales por el *«coste de encuadernar, coser y rotular 159 libros del archivo municipal, de los que 88 eran libros de acuerdos»* [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 94]. Por lo tanto el coste medio de cada uno, encuadernado con tapas de pergamino, rondaba en esta ciudad castellana a finales del siglo XVII los seis reales.

En Toledo no sólo se encuadernaron las actas municipales, sino que esta medida se aplicó también, como ocurrió en otros muchos municipios, a los registros de cartas (doce volúmenes), a los registros de escrituras (cuarenta y dos volúmenes), a los diferentes libros de contabilidad, a los libros de conocimientos, etc [Sierra Corella, 1931, p. 41-45]. Si los primeros estaban encuadernados con tapas de madera recubiertas de cuero y manillas metálicas, en los demás bastaba una cubierta de pergamino, a veces bellamente decorada. Muy posiblemente, de este trabajo se encargaban impresores o librerías de la ciudad, mientras que la encuadernación de los expedientes era una de las tareas de alguno de los oficiales del escribano mayor de su ayuntamiento. Los libros podían adquirirse previamente en blanco, como ocurre con los utilizados en la contabilidad, o bien se servían de cuadernos que luego, una vez finalizados, mandaban coser y poner cubierta. Así se explica la existencia o no de pliegos u hojas en blanco al final de estos libros.

Otras instituciones territoriales confiaron también en la encuadernación para salvaguardar los documentos originales. Los procuradores de la Junta del Reino de Galicia solicitaron, en 1633, con respecto a su documentación que se «*se pongan en cuaderno aparte los de cada año de por sí; y ansi encuadernados, hojeados y pautados se pongan en el Archivo*». Sin embargo, esta medida no se llegó a realizar hasta 1724, cuando se acordó pedir que el «*Reino mande pergaminar las Juntas para su perpetuidad*» [Artaza Montero, 1994, p. 13].

Lo normal era que las actas municipales de los últimos años no estuvieran encuadernadas formando libros, dado que era una decisión que se solía tomar de tarde en tarde, cuando el riesgo de deterioro o pérdida era evidente. Una visita al ayuntamiento de Sitges en 1765 puso de manifiesto que los libros de acuerdos no estaban encuadernados [Panyella, 1982, p. 91]. Otros ayuntamientos hicieron más hincapié en esta medida, acompañándola de otras que se enmarcan en el campo de la restauración. Los libros de actas de Orense « *fueron reconstruidos, ordenados y encuadernados en el año 1761. Para la encuadernación se utilizó el pergamino*» [Gallego Domínguez, 1985, p. 195]. En Tui, se acordó en 1776, ante el deterioro sufrido por el libro de actas de los años 1597 a 1616, «*reparar las hojas rompidas, ponerle pergamino y un índice al principio*» [López Gómez, 1985, p. 207]. El Señorío de Vizcaya aprobó, en 1744, que Manuel Ulibarri pusiera «*pergamino en todos los legajos y libros que, por antiguos, estén maltratados. Una vez arreglados, los colocará por su orden*» [Gómez Rodrigo, 1974, p. 72].

Estos ejemplos nos reflejan el interés de las autoridades locales durante el Antiguo Régimen por utilizar tratamientos curativos, no sólo preventivos, con respecto a la documentación conservada en sus archivos. Algunos documentos pudieron por lo tanto ser objeto de «*reconstrucción*», «*reparación*» o

«arreglo», es decir estuvieron sometidos a técnicas de restauración, muy sencillas y acordes con los tiempos. Todavía hoy pueden observarse las tiras de papel encoladas que se adherían en el reverso de los documentos tapando las roturas, formadas por los pliegues u otras causas. Claro está que esto sólo podía realizarse sobre documentos en papel escritos por una sola cara. La misma condición era precisa cuando se pegaba todo el documento sobre una hoja en blanco de mayor tamaño, ante la debilidad del soporte original. Los adhesivos naturales utilizados han demostrado la bondad de estas actuaciones, sin las cuales los documentos se habrían perdido irremediablemente.

En las encuadernaciones se va a producir también una evolución artística, desde las góticas, a las neoclásicas pasando por las renacentistas o barrocas. Si bien sus diferentes características son más constatables en los libros más importantes, principalmente en los registros de privilegios o de acuerdos. La casi totalidad de la documentación en papel, que se conserva cosida, en formato no librario suele utilizar una portadilla realizada con ese mismo soporte. Así ocurre con los expedientes. El pergamino sirve como cubierta para algunos documentos sueltos redactados en papel, en especial durante la Edad Media, y sobre todo para los libros a lo largo de todo el Antiguo Régimen. El uso del cartón, a veces forrado con tela, con este fin será bastante más minoritario. Pero las cubiertas más elaboradas y resistentes son las realizadas con tapas de madera, recubiertas de cuero, con manillas de hierro y otros adornos metálicos, que quedaban restringidas para los libros más solemnes, y que se utilizan ya en la Edad Media.

El papel, el cartón, el pergamino, el cuero y la madera son los materiales utilizados para las cubiertas de las distintas encuadernaciones a lo largo de toda la Edad Moderna. Los ejemplos de su uso son muy numerosos. Entre los documentos del archivo municipal de Badajoz se recoge la existencia en el siglo XVIII de un «*cuaderno como de medio folio... forrado en pasta y tafilete encarnado*» [Rodríguez Amaya, 1952, p. 483]. Los libros de acuerdos de Fuenterrabía, en total unos 130 tomos a finales del siglo XIX, estaban encuadernados en pergamino [Vignau Ballester, 1871, p. 258]. En las ordenanzas de San Sebastián de 1758 se obliga al archivero a agrupar juntas todas las cédulas y órdenes reales, y de tribunales recibidas cada año, y «*les pondrá cubierta de pergamino, y rótulo*» [SAN SEBASTIÁN, 1758]. En Villafranca del Penedés, a mediados de este siglo se conservaba el libro Verde y el libro de los Privilegios, encuadernados en piel y metal el primero, y en pergamino el segundo [Millares Carlo, 1952, p. 152].

Todavía en 1838, Facundo Porras Huidobro, archivero de Madrid, exponía la necesidad de modificar los voluminosos legajos de su archivo para hacerlos más manejables, «*poniéndoles sus cubiertas o forros de pergaminos en forma de libros; pero sin coser, para el más fácil uso de los papeles, con las*

rotulatas claras de letra moldeada» [Domingo Palacio, 1875, p. 56]. Es decir, ya muy avanzado el siglo XIX aún se mantiene el uso del pergamino para proteger la documentación. En este caso se pretende sustituir con él las duras tapas de cartón que protegían a los legajos, cambiando estas unidades de instalación por otras con formato de libro.

También será este archivero el que en esa fecha manifieste la necesidad de disponer de un sello de mano con la leyenda de «*Archivo de Madrid*» para marcar todos los expedientes del archivo. El sellado de los documentos es otra medida encaminada a preservar la documentación, fundamentalmente frente al hurto, y que no se utilizará hasta el siglo XIX.

El cosido de las hojas y el uso de las cubiertas protectoras es una medida dirigida a preservar los documentos originales, pero no será la única.

3.2. Las copias o traslados

La existencia de copias de documentos, autenticadas o no, en los archivos municipales está constatada ya en la Edad Media. Las autoridades locales en ese período aprobaron disposiciones para garantizar la conservación de los documentos originales, «*mediante su transcripción-duplicación y limitando su acceso*» [Alberch i Fugueras, 1994, p. 521]. No en vano, ya a finales del siglo XIV, los problemas causados por la consulta indiscriminada de los documentos del archivo de Barcelona fueron resueltos mediante la realización de copias de ellos y guardando con cuidado los originales [Vinyoles, 1994 -1995, p. 1.514].

Parece evidente que la decisión de realizar duplicados de los documentos va a tener repercusiones muy positivas en cuanto a la conservación del patrimonio documental municipal, toda vez que con el transcurso del tiempo las causas que ya hemos comentado terminarán mermando ese patrimonio y provocando la pérdida de muchos documentos originales, cuyo contenido conocemos merced a las copias. Hasta fechas muy recientes, en el archivo municipal de Zamora sólo se conservaba un documento original anterior al año 1411, mientras que las copias se iniciaban en el año 1175 [Ferrero Ferrero y González Matellán, 1983, p. 387]. En esta línea, se ha llegado a afirmar al referirse al archivo municipal de Cáceres que «*no falta ni un solo documento de cuantos integraron sus fondos en todos los tiempos, pues de todos ellos existen, ya los originales, ya las copias en forma simple, de traslados o incluidos, o bien referencias...*» [Florianio Cumbreño, 1934, p. 7].

De su importancia dan buena idea los diferentes instrumentos descriptivos elaborados durante el Antiguo Régimen. En su casi totalidad recogen descripciones relativas a traslados o copias que suplen o duplican a los documentos originales. Entre los veinte cajones en los que estaba instalada la

documentación de Córdoba, en 1616, había uno, el designado con la letra Q que únicamente tenía «*traslados simples de privilegios, títulos, ordenanzas y escrituras*», mientras que sus originales estaban en otros cajones [Nieto Cumplido, 1978, p. 3]. En el inventario realizado en 1740 del archivo de San Sebastián hay bastantes entradas encabezadas por el término traslado. Uno de ellos estaba roto y con algunas palabras en blanco [Banus Aguirre, 1986, p. 133]. En el Índice del año 1817 del archivo municipal de Talavera de la Reina «*abundan los traslados y copias simples realizadas para asegurar su conservación*» [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 100].

El uso continuo de determinados documentos originales, especialmente de los privilegios, que afectaban al común o a la mayor parte de los vecinos, motivó que desde muy pronto se tuviera constancia de la necesidad de realizar copias autenticadas de su contenido. Ya, en 1513, el procurador síndico de Talavera de la Reina solicitó al concejo la realización de un traslado de una carta de privilegio que necesitaba enviar a diferentes partes, por lo que temía que se pudiera «*perder, quemar o mojar o acaesçerle otro caso fortuito (sic) por donde el conçejo de la dicha villa podría perder su derecho*» [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 90]. Por lo tanto la realización de copias autenticadas era la mejor solución cuando se tenía que enviar un documento original fuera del archivo, y a veces de la ciudad. También se utilizaban para suplir el contenido de documentos perdidos por diferentes motivos. El primer documento recogido en el inventario de 1581, del archivo de San Sebastián, es un traslado, realizado en 1403, de un documento perdido en el incendio que sufrió la ciudad a finales del siglo XII o principios del siglo XIII. Se trataba del privilegio de la fundación de San Sebastián [Banus Aguirre, 1986, p. 25]. El libro de la cadena de Jaca, que se salvó del incendio que sufrió la ciudad en 1395, servía, en 1467, para realizar una copia de un decreto, a petición de sus jurados [Buesa Conde, 1986, p. 87]. En 1726, Juan Isidro Fajardo se lamentaba ante el ayuntamiento de Madrid de haber sacado hacía tiempo copias auténticas de doce privilegios existentes en el archivo de villa, cuyos originales había devuelto con recibo, pero que entonces no los había encontrado en su legajo a pesar de haberlos buscado [Gómez Iglesias, 1974, p. 34]. El concejo de El Ganso solicitó al ayuntamiento de Astorga, en 1751, la copia auténtica de algunos documentos de su archivo por haber perdido los suyos en un incendio [Martín Fuertes, 1980, p. 15].

Por lo tanto ante la pérdida de un documento original cabía la posibilidad de conservar un traslado en el propio archivo, y si no era así, había que acudir a la persona o institución que pudiera tener otro original o una copia autenticada. La solicitud de duplicados a las cancellerías fue una medida bastante habitual. A veces no significaba que el documento original se hubiera perdido, como ocurría con las ejecutorias de hidalguía miniadas.

Su validación por un oficial autorizado, generalmente escribano o notario, garantizaba su validez jurídica. Y estos oficiales conseguían con esta tarea unos importantes ingresos económicos.

Desde muy pronto se aprobaron disposiciones tendentes a regular el uso de los traslados o copias autenticadas, para preservar la conservación de los documentos originales. En las ordenanzas de Baeza, del año 1524, Carlos V estableció que siempre que se utilizara un documento original del archivo *«se saque traslado de la dicha escritura abtorizado que haga fee, e sacado el dicho traslado se torne la tal escritura original al archivo porque no se pueda perder»* [BAEZA, 1524]. Una Real Provisión de 10 de mayo de 1525 obligaba a los escribanos madrileños a sacar traslados de los documentos del archivo de la villa *«sin sacarlos fuera de él sin quedarse con ellas en su poder, como deseaban»*, dando tanta fe a las copias realizadas como a los originales [Gómez Iglesias, 1974, p. 31-32]. Así se hacía también en Castellón, por decisión de su consejo municipal de 29 de mayo de 1452. El escribano no podía nunca entregar a un particular el original, sino un traslado o copia. Un decreto, derivado de un auto del Consejo de Castilla, de 1796, volvía a recordar, que no se sacaran documentos originales del archivo de Valladolid, bastando la realización de un testimonio o copia, dado que hasta entonces la costumbre en esta ciudad castellana había sido entregar el original al particular y dejar un traslado en el archivo [Pino Rebolledo, 1991, p. 19 y 24].

Por lo tanto con cierta reiteración, desde la administración central se recuerda la necesidad de preservar los originales, no permitiendo su salida indiscriminada de los archivos, y autorizando su sustitución por copias autenticadas. A esta medida debemos unir su interés por potenciar la obtención de duplicados de documentos originales existentes en otros archivos, alentando a las autoridades locales a incrementar de esta forma su patrimonio documental.

En esta línea debemos contemplar la ley 31 del Libro II de la Recopilación de Leyes de Indias, en la que se resume el contenido de dos reales Cédulas de 1530 y 1548, por la que se especifica que *«no pudiéndose hallar en la Provincia algunas Provisiones, cédulas, ordenanzas o Instrucciones, las pidan a los Presidentes y Oidores de las Audiencias del distrito, los quales les envíen traslados de ellas autorizados, y los Cabildos nos avisen de las que conviene enviar originalmente»*. Por otra Cédula de Felipe II, de 1541, las Audiencias estaban obligadas a sacar copias autorizadas y signadas para entregarlas a las ciudades, villas y lugares de su distrito, de todas las cédulas y provisiones dadas por los virreyes y presidentes gobernadores y que afectaran al gobierno de todas las localidades [Bayle, 1950, p. 3-4]. Estos traslados debían ser guardados en sus archivos y transcritos en sus libros de cabildo.

Bastante tiempo antes, el consejo municipal de Castellón había dado muestras de su interés por mejorar y completar su patrimonio documental

cuando, en 1451, decidió que uno de sus vecinos acudiera a Barcelona para averiguar si en los archivos de esa ciudad había escrituras, privilegios o actas que pudieran ser de interés, para que obtuviera una copia auténtica de ellas, y así la villa podría disponer de esos documentos. De esta manera Castellón fue enriqueciendo sus fondos, logrando que *«infinidad de privilegios que fueron concedidos a la capital del reino y luego extendidos a las villas y ciudades reales del mismo, tienen su copia legalizada en los fondos castellonenses»* [Roca Travar, 1951, p. 208].

Las localidades podían pedir traslados de documentos, pagando los respectivos derechos, no sólo a las Audiencias o Chancillerías, a los Consejos u otros órganos de la administración central, sino también a otras poblaciones, caso de El Ganso con Astorga o Castellón con Barcelona. Incluso sin necesidad de salir de la misma ciudad podían requerir la realización de traslados a los escribanos del número. En las ordenanzas del principado de Asturias de 1659 se especifica que de oficio todos los escribanos estaban obligados a depositar en el archivo *«traslado o copia de todas escrituras o papeles que fueran de interés para la Ciudad y que hubiesen pasado ante ellos»* [Villa González-Río, 1978, p. XVIII].

De esta manera, y con este origen tan diverso, merced a los traslados o copias autenticadas, el patrimonio documental municipal podía incrementarse, y así lo hizo a lo largo de esos siglos. Ese patrimonio sirvió para que los escribanos concejiles realizaran numerosas copias o testimonios, tanto para las autoridades y los oficiales municipales como para los particulares y corporaciones. Junto con las peticiones puntuales y esporádicas de determinados documentos, se van a realizar copias masivas de éstos aprovechando, generalmente, algún intento organizativo. Estas duplicaciones masivas, que no obedecen a un interés particular y concreto, se van a producir por lo general desde finales del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII. La extensión de la letra humanística cursiva había provocado que no resultara ya fácil comprender el contenido de documentos redactados en letras encadenadas, procesales, cortesanas y sus antecedentes, por lo que la conveniencia de su transcripción estaba más que justificada. A ello se unía el deterioro de los soportes de los documentos más antiguos.

Entre 1683 y 1695 se realizaron en Talavera de la Reina multitud de traslados y copias de los documentos más importantes, a la par que se organizaba la documentación. El motivo argumentado fue que la mayoría de los documentos *«son muy antiguos y su letra es poco ynteligible conque cuesta mucho trabajo a los escribanos de esta cassa buscar qualquier papel»* [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 94]. Los traslados se cosieron con los documentos originales y se guardaron juntos dentro del archivo.

Entre 1741 y 1771, el escribano Luis Jacobo Velázquez realizó copias certificadas de documentos antiguos, de difícil lectura o mal estado de conservación, para el cabildo sevillano, a la vez que organizaba el archivo [Fernández Gómez, 1995 (b) p. 15-16]. Lo mismo realizó fray Vicente Velázquez de Figueroa, en 1753, con la documentación de Sepúlveda [Sáez Sánchez, 1956, p. XXIII].

En 1761, Castellón se dirigió al Consejo Real explicando que algunos de los privilegios de su archivo no se podían entender por lo maltratados que estaban, y que era conveniente que se tradujeran los pergaminos que pudieran interesar a la villa. Estos argumentos sirvieron para poder contratar en 1763 a José Mariano Ortiz [Roca Travar, 1951, p. 211]. En Santander, Lorenzo del Cueto y Zulueta fue encargado entre otros cometidos, de la *«traducción de las letras que se allen ilegibles por la antigüedad de sus caracteres»*. Esto ocurría en 1767 [Vaquerizo Gil, 1984, p. 7]. José Romero y Ayala a la par que organizaba el archivo municipal de Carmona en 1779 transcribió algunos documentos de especial interés [*Inventario*, 1987, p. 13]. Entre 1798 y 1802, el escribano Gregorio Moreno hizo la misma tarea en el archivo de Los Arcos [Pastor Abaigar, 1993, p. 203]. En el siglo XVIII se datan también las copias de un gran número de documentos del archivo de León [Martín Fuertes y Alvarez Alvarez, 1982, p. 20]

Muy posiblemente, buena parte de los procesos organizativos que se desarrollaron en los archivos municipales a lo largo del siglo XVIII llevaron consigo la realización sistemática de copias o traslados de documentos redactados con letras que ya en ese tiempo se consideraban de difícil lectura. Pocas ciudades como Madrid reflejan tan claramente ese interés. El punto octavo de la instrucción elaborada por Francisco Milla, comisario del archivo de Villa, el 29 de marzo de 1753, y que sería aprobada por el ayuntamiento de la capital en el mes siguiente, establecía que *«se pusieran en letra corriente los documentos antiguos, uniendo las traducciones a los originales»*. En el auto del Consejo Real, de 12 de marzo de 1774, se recoge que el *«Archivero debería dedicarse a poner en letra inteligible y corriente todos los Privilegios, Cédulas y documentos que por su antigüedad y estado pudieran peligrar, dejando unidas las versiones a los originales, para que en todo tiempo se las diera fe y crédito, tanto en juicio como fuera de él»* [Domingo Palacio, 1875, p. 35 y 44]. Así será recogido en el punto octavo de las obligaciones del archivero en el reglamento del año 1784. Y esta tarea fue una de las que más desarrollaron los archiveros que se fueron sucediendo al frente del archivo de Madrid entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX.

No obstante, no siempre se guardaron los traslados con los originales. En Valladolid, en el siglo XV, los documentos originales estaban en un arca

diferente del que contenía las copias. Mientras los primeros se guardaban en una iglesia, las segundas se encontraban en otro arca en la casa consistorial [Pino Rebolledo, 1991, p. 9]. Las ordenanzas de Tenerife de 1540 ya preveían que los originales estuvieran en el arca del concejo, «*e que fuera estén los traslados*» [Peraza de Ayala, 1976, p. 76]. Algo parecido ocurría en San Sebastián dado que los «*acuerdos habían de tomarse con las copias simples o autorizadas y no con los originales*» [Banus Aguirre, 1986, p. 7]. Estas referencias implican un uso continuo de copias o traslados en la gestión de los intereses municipales, en un intento de salvaguardar el patrimonio documental. En esta línea debemos mencionar también la impresión de algunos de esos documentos, en tiradas pequeñas, de unas decenas o cientos de ejemplares, que una vez autenticados por los escribanos sirvieron durante siglos con el mismo fin. Por ello es relativamente corriente encontrar en los archivos municipales traslados impresos de privilegios medievales, realizados durante la Edad Moderna.

Los escribanos percibían ingresos suplementarios por la realización de los duplicados, sobre todo si los peticionarios eran particulares o corporaciones ajenas a los ayuntamientos. Si los traslados eran solicitados por autoridades locales u otros oficiales municipales (caso de procuradores, regidores de pleitos, agentes o abogados) no solían recibir remuneración alguna. Al menos así se establece en las ordenanzas de San Sebastián de 1758. Los ingresos percibidos variaban desde una cantidad fija por cada traslado, tal y como se establece en las ordenanzas de Potes del año 1619, hasta regular el precio a pagar por cada hoja, con un número determinado de renglones, y con un tipo de letra diferente, tal y como aparece recogido en el arancel de Madrid del año 1781.

Las duplicaciones masivas de documentos de especial interés que se produjeron en el siglo XVIII no vienen sino a rememorar la tradición medieval, continuada durante la Edad Moderna, de elaborar libros copiadores, a los que ahora nos vamos a referir.

3.3. Los libros copiadores

En los grandes archivos, monásticos y palatinos, ya entre los siglos VIII y XII se produce un proceso de sustitución de los documentos originales por sus copias en cartularios, siempre que estén certificadas por un escribano o notario. Estos cartularios son más manejables y cómodos. Además presentan las ventajas de la homologación y normalización de los tamaños y las letras con respecto a los originales [Aguinagalde, 1988, p. 66].

Durante la Baja Edad Media, los ayuntamientos, como otras colectividades, imitarán este sistema seguido por las cancellerías regías y señoriales,

y ordenarán la copia en cartularios de los documentos recibidos más importantes, según sus criterios. La formación de estos libros copiadores lleva implícita una mejor conservación de los documentos originales dado que no era preciso sacarlos continuamente del arca, siendo sustituidos en la mayoría de las ocasiones por estas copias autenticadas dotadas de plena validez jurídica. A ello se une una mayor comodidad en el manejo dado su formato librario, frente a algunos documentos en pergamino de gran extensión y por ello plegados, de difícil uso y peor lectura. El tipo de escritura utilizada en estos libros, generalmente góticas librarias, y el tamaño de la letra facilitaban enormemente la comprensión del texto y por ende su utilización, sin necesidad de ser un experto caligráfico o un revisor de letras antiguas. La selección de los documentos recogidos en estos libros copiadores, generalmente privilegios y sentencias ejecutorias favorables, en un número que en algunos casos puede superar la centena, incrementa sus posibilidades de uso a lo largo de un amplio período histórico, de tal forma que muchos de ellos pudieron contener textos que tuvieron validez jurídica hasta el final del Antiguo Régimen. Además estos libros, cuando se han conservado, nos han permitido conocer el contenido de muchos documentos originales ya desaparecidos.

Los primeros libros copiadores existentes en los archivos municipales se remontan cuando menos al siglo XIII. De ese período es el Códice de los Fueros de Teruel, encuadernado en tabla forrada de piel con cinco clavos y cierres metálicos [Serrano González, 1995, p. 199]. El Libro Verde de Puigcerdá en donde están copiados los privilegios de la villa es un cartulario de los siglos XIII-XIV [Alberch i Fugueras, 1994, p. 524]. Lo mismo podemos afirmar del libro de los privilegios de Alcira [Chabas Llorens, 1889, p. 2]. Los privilegios de Solsona fueron compilados en el siglo XIV, en dos versiones, latina y catalana [Planes i Albets, 1993, p. 46]. Los dos libros borradores del libro de la cadena de Reus son también de los siglos XIV-XV.

El «*Llibre Verd*» de Barcelona, en pergamino, comenzó a ser utilizado en 1371 para transcribir los documentos más importantes, en su casi totalidad privilegios. En otro libro en papel se copiaban otros documentos menos solemnes pero que podrían ser útiles a la ciudad. En un tercero denominado «*Consueta*» se recogían las «*costums i protocols antics*», muchas veces recordadas solo por tradición oral [Vinyoles, 1994-1995, p. 1.512].

El «*Llibre dels Privilegis de Cervera*» fue realizado en el año 1360. Está encuadernado con tapas de madera recubiertas de cuero. Sus hojas en pergamino miden 44 x 31 cm. y contienen los textos de 120 documentos, incluyendo un privilegio de Pedro I, del año 1363, dando fuerza de autenticidad a las transcripciones documentales de este cartulario [Llobet i Portella, 1982, p. 40].

A finales del siglo XIV fueron escritos los tres «*Llibres de Privilegis*» de la villa de Tárrega [Gonzalvo i Bou, 1989, p. 176].

Los ejemplos recogidos de poblaciones de la Corona de Aragón, sobre todo catalanas, ponen de manifiesto la difusión del uso de estos libros copiadore, en la Baja Edad Media. En el siglo XV son más numerosas las poblaciones que encargan la redacción de estos cartularios, tanto en la Corona de Castilla como en la de Aragón.

En Gerona ya en el siglo XV se dispone de tres libros copiadores, denominados y diferenciados por el color de sus cubiertas. Nos referimos a los «*Llibre Verd, Llibre Vermell i Llibre Groc*». El primero data del siglo XIV, y de la existencia del segundo ya se da cuenta en el inventario de 1459. En el de 1484 estos libros son descritos como «*hun libre vert apellat ab postes de pergami lo quan ensi conten CCCCLXIII cartes entre scrites e no scrites en que son continuats diversos privilegis de la ciutat, item I altre llibre vermell bullat scrit en pergami continent CXXXX cartes entre scrites e no scrites en lo qual son continuats diversos privilegis de la ciutat*» [Batlle i Prats, 1951, p. 190]. También el libro de privilegios de La Bisbal fue escrito en ese siglo.

La transcripción de documentos en libros copiadores, con el fin de preservar los originales y facilitar la gestión municipal, es una medida que en las poblaciones más importantes afectó no sólo a los privilegios y sentencias ejecutorias. Fue bastante común recopilar en libros durante la Baja Edad Media los fueros y las ordenanzas. Y en algunas localidades se optó también por compilar en un libro o cuaderno todas las disposiciones que afectaban a las prerrogativas y obligaciones de una determinada autoridad municipal u oficial concejil. Castellón es un buen ejemplo de todo ello. En 1403 su consejo ordenó redactar el «*Llibre de mustaçafia*» para el almotacén. En 1420 acordó recopilar en un libro todas las ordenaciones; y ya en 1461 se tiene constancia de la existencia de un libro copiadore de privilegios [Roca Travar, 1951, p. 209]. El libro antiguo de ordenanzas municipales de Alcira es un manuscrito del siglo XV [Chabas Llorens, 1889, p. 2].

Sin abandonar la Corona de Aragón, en 1471, el jurado primero de Zaragoza, «*en vista de que parte de los documentos de la Ciudad estaba en poder de personas ajenas a la misma*» propuso que se copiaran los privilegios en un libro grande, para no tener que consultar los documentos originales. Este registro se conservaría en el propio archivo y su copia en la sede del concejo. Así surgía el primer tomo del «*Libro de Privilegios*». En 1549 se ordenó la redacción de los tomos tercero, cuarto y quinto [González Miranda, 1981, p. 81].

En la Corona de Castilla, la formación de libros copiadores de documentos fue una medida que no parece extenderse hasta el siglo XV. El patri-

monio documental conservado hasta entonces por los municipios castellanos era menor que el de los aragoneses, lo que tal vez podamos explicar por ser concejos cuyo nacimiento y desarrollo dependió del proceso de reconquista y repoblación, sufriendo sus avatares. Además su organización concejil no se asienta hasta los siglos XIII y XIV, sobre todo en las poblaciones del valle del Tajo y del Guadalquivir.

Lo cierto es que Toledo ordenó recopilar todas sus ordenanzas en un libro redactado entre 1390 y 1410. En el siglo XV fue elaborado también su libro copiator de privilegios, encuadernado en pergamino y decorado con bellas miniaturas. En 1433, la ciudad de Burgos ordenó a uno de sus regidores que elaborase un libro copiator de todas las cartas reales, privilegios y documentos que se encontrasen en el arca. En 1497 se completaría con otro segundo libro [Moratinos, 1985, p. 186].

Fue bastante común transcribir esos documentos en libros, formados con hojas de vitela. Su encuadernación era variada, y sus cubiertas podían ser de pergamino o de cuero, generalmente sobre madera. La presencia de miniaturas en estos libros suele ser bastante habitual. También fue frecuente realizar copias en papel de su contenido con encuadernaciones más pobres, debidamente autenticadas, y que solían entregarse a las autoridades u oficiales que las precisasen para la gestión de los intereses municipales. Algunas localidades se limitaban a disponer de cuadernos copiadotes, bien en pergamino o papel. En Astorga, en 1447, ya se describe la existencia dentro de su arca de un «*quaderno de pergamino grande, en que están ciertos traslados de privilegios e sentençias de la dicha çibdat*» [Martín Fuertes, 1980, p. 18-19]. En Orense, ya en 1451, se dispone de un cuaderno en el que están trasladados todos los privilegios del concejo [Gallego Domínguez, 1985, p. 187].

Al igual que ocurría en la Corona de Aragón, las recopilaciones de documentos no se limitaron a los privilegios y sentencias sino que abarcaron también los fueros y las ordenanzas municipales. En 1469 se data el «*libro de hordenanças antiguas*» de Ciudad Real, y de 1497 es el «*libro de fueros y hordenanças confirmadas por los señores oydores de la rreal chançillería*» de esta población manchega [Bernabeu Novalbos, 1952, p. 100].

El libro Becerro de San Sebastián fue elaborado en 1486 por el escribano Juan de Iguerola. En un inventario se le describe como «*libro grande escrito en pergamino en 218 hojas, encuadernado en becerro negro... en que al parecer están copiados los privilegios, cédulas, ejecutorias reales, sentencias y otros papeles que tenía esta ciudad hasta aquel tiempo*» [Banus Aguirre, 1986, p. 269]. En 1489 se ordenó además que se redactase un libro de las ordenanzas, privilegios, rentas, propios, derechos y bienes concejiles, y que este libro fuera guardado en el arca.

La ciudad de Valladolid ya disponía en 1499 de varios libros copiadores de privilegios, al menos eso da a entender el acuerdo de 4 de septiembre de ese año por el que se ordena que en uno de los senos del arca se metan los «*Libros de los Previllejos e Cartas e Cédulas de sus Altezas*» [Pino Rebolledo, 1991, p. 9].

Aunque fue sin duda la ciudad de Sevilla la que mejor refleja el impulso recopilador de documentos en libros copiadores a finales de la Edad Media, dentro de las poblaciones castellanas. En los años finales del siglo XV se redactó el «*Libro de Privilegios*», bello códice en pergamino de 91 folios en donde están transcritos setenta y dos documentos reales y de otras procedencias, fechados entre 1251 y 1475. Contiene orlas e iniciales miniadas realizadas en 1508 por Nicolás de Monguía. Además, por una Real Provisión de los Reyes Católicos, de 1492, se ordenó al escribano mayor que copiase todos los documentos enviados a la ciudad por la cancellería real. Fruto de esta disposición son los seis tomos en papel de marca mayor del llamado «*Tumbo de los Reyes Católicos*», en los que están transcritos todos los documentos reales, en total 2.700, remitidos a la ciudad entre 1474 y 1507, cuyos originales se han perdido en gran parte [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 13].

Los Reyes Católicos también ordenaron al ayuntamiento segoviano, por Real Carta de 15 de febrero de 1492, que hiciera una copia en un libro de sus privilegios, cartas, ordenanzas y cédulas. En su cumplimiento fueron elaborados, en 1494, dos libros encuadernados en tabla forrada de piel [Cantalejo San Frutos, 1994, p. 834].

En 1501, por la tantas veces citada pragmática de tres de septiembre, los Reyes Católicos obligan a los escribanos de los concejos a llevar un registro en papel de las cartas y ordenanzas enviadas por los reyes, y otro en pergamino de todos los privilegios y sentencias que la población hubiera recibido. Los ejemplos de Sevilla y Segovia están presentes en esta determinación, pero como ya hemos señalado en otras ocasiones los Reyes Católicos no vienen sino a normalizar y generalizar una situación que se venía dando en bastantes poblaciones tanto de Aragón como de Castilla desde la Baja Edad Media. Lo que es evidente es que con la aprobación de esta medida la realización de libros copiadores se extiende por las localidades de las dos Coronas, y así se contempla en algunas ordenanzas municipales.

Sin abandonar el ámbito castellano, en las ordenanzas municipales de Santo Domingo de Silos, aprobadas en 1536, se establece la compra de un «*libro encuadernado de papel en blanco de diez manos en la qual hagan asentar al escrivano del concejo por memoria todas las escripturas que en la dicha arca estuvieren*». Alguna de estas escrituras debían estar transcritas íntegramente y autenticadas en ese libro. En las de Tenerife, de 1540, entre los libros necesarios se especifica que «*aya un libro en el qual se saquen, e pon-*

gan todas las ordenanças, que nuevamente se hizieren con los pregones dellas». Las ordenanzas de Salamanca, publicadas en 1658, obligan a los comisarios del archivo a *«trasladar los papeles de la ciudad en un libro»*.

En 1504, el escribano de Oviedo propuso a su ayuntamiento la adquisición de un libro en pergamino para trasladar los privilegios y sentencias de la ciudad. Con este fin se ordenó al personero que comprase dos docenas de cabras [Villa González-Río, 1978, p. XVII]. El 25 de noviembre de 1510, la ciudad de Valladolid mandó copiar en un libro los privilegios y provisiones, autorizados debidamente. Pocos días después se acordó trasladar también las cédulas *«para que los originales quedaran en el Arca del Concejo y se usaran solamente las copias»*. Como vemos, y al igual que había ocurrido en Sevilla o Zaragoza, era necesario completar los libros copiadores ya existentes. En Burgos a lo largo del siglo XVI se solicitó en repetidas ocasiones la realización de libros copiadores de privilegios [Moratinos, 1985, p. 186]. No sabemos si se pretendía así completar las recopilaciones ya existentes o simplemente realizar otras nuevas por pérdida de las anteriores. Un ejemplo en este sentido nos lo ofrece la ciudad de Orense.

En 1555 fue remitido al Consejo Real, con motivo de un pleito, un libro en pergamino en el que iban transcritos diferentes documentos otorgados a la ciudad de Orense por Fernando IV. Ese libro al parecer no fue devuelto. Al año siguiente los regidores mandaron hacer *«un libro grande blanco en el qual se an de asentar todos los privilegios e provisiones y executorias e otras cosas tocantes a esta çuidad e su derecho e justicia»* [Gallego Domínguez, 1981, p. 180]. En el siglo XVI también fueron elaborados el *«Tumbo de las escrituras de la ciudad de Zamora»* y el *«Registro de los fueros de la ciudad de Zamora»* [Ferrero Ferrero, 1983, p. 390].

Con bastante asiduidad la realización de estos libros copiadores se llevó a cabo a la par que se producía alguno de los continuos intentos organizativos, formando parte del mismo proceso que incluía la formación del inventario y la reinstalación de la documentación en nuevos legajos con sus respectivas portadillas y en algunos casos con sus copias. En 1570 en la población navarra de Los Arcos se procedió a la organización de su archivo, y junto con el inventario el escribano transcribió los más importantes documentos formando un hermoso cartulario [Pastor Abaigar, 1993, p. 196].

Como es obvio, en las poblaciones que fueron surgiendo en la América hispana también se formaron estos libros. La ciudad de Lima acordó el 22 de febrero de 1549 que el escribano del cabildo adquiriese *«un libro blanco de caxa, bueno, en que se asienten e trasladen todas las dichas provisiones e çedulas, títulos y escrituras tocantes a esta çibdad, signados e firmados del escribano deste Cabildo, con sus títulos e abecedarios para que fácilmente se hallen»* [Bayle, 1950, p. 10-11].

Los libros copiadores ya no sólo incluían los privilegios y sentencias, sino que junto a estos documentos se transcribían todo tipo de disposiciones reales (cédulas y provisiones) o de otras autoridades, así como títulos y escrituras relacionadas con la ciudad y sus gobernantes. La vitela había sido sustituida por el papel, y la escritura utilizada era la gótica cursiva de la época o la humanística. Toledo a lo largo del siglo XVI se dotará de un buen número de registros copiadores, que serán continuados a lo largo de toda la Edad Moderna. Por su peculiaridad sobresalen los registros de cartas expedidas por la ciudad, iniciados en 1537, y que en doce volúmenes copian el contenido íntegro de las cartas emitidas desde esa fecha hasta el año 1796. También en el siglo XVI fue actualizado el «*Libro de los Juramentos*» en donde se transcriben distintos documentos y se recogen las fórmulas utilizadas por distintas autoridades y oficiales para jurar sus cargos. El «*Libro de los Aranceles*» es un libro copiador elaborado en Toledo en ese período.

Durante los siglos XVII y XVIII se mantuvo la tradición medieval de elaborar libros copiadores. En San Sebastián, en 1641, se redactó un libro encuadernado con las ordenanzas de la villa hasta ese año, autenticadas por un escribano [Banus Aguirre, 1986, p. 269]. También se conservaba en su archivo un libro «*que parece es resumen de pleitos y sentencias*». En Madrid, en el memorial de Juan Isidro Fajardo, de 1726, se expone que uno de los problemas del archivo era el hecho de que no se hubieran copiado a la letra en un libro los documentos de mayor importancia [Gómez Iglesias, 1974, p. 34]. Los escribanos de la villa de Vallecas, por el Real Despacho de 24 de diciembre de 1728, estaban obligados a llevar «*un libro de papel de marca mayor, en que se escriban todas las Cartas, Ordenanzas, Privilegios, Facultades y Sentencias que hubiere... por lo mucho que conviene tenerle y colocarle en el Archivo*» [Mateu Llopis, 1945, p. 88]. Entre 1740 y 1779 se transcribieron buena parte de los privilegios, escrituras y sentencias del archivo de Écija en dos libros encuadernados llamados «*Copias de Privilegios*» [Inventario, 1988, p. 18]. El «*Libro Becerro*» de Sepúlveda fue escrito en 1754, conteniendo anotaciones de años posteriores [Sáez Sánchez, 1956, p. XXVI-XXVII]. Y todavía en 1802, por orden del ayuntamiento de Los Arcos se realizaba una copia de su libro de los Privilegios [Pastor Abaigar, 1993, p. 202].

A los ejemplos citados podemos unir los dos tomos grandes a manera de tumbos o becerros que pudo contemplar V. Vignau en el archivo de Fuenterrabía hacia 1871 y en los que estaban copiados todas las franquezas, gracias y privilegios concedidos por los reyes a esta ciudad desde el año 1203 [Vignau Ballester, 1871, p. 259]. O el «*Libro Rojo*» de Gran Canaria, registro de provisiones y cédulas reales, salvado en el incendio de 1842 [Millares Carlo, 1952, p. 36]. Estos libros de cédulas y provisiones también existen en el archivo de villa de Madrid, y sus índices y extractos fueron publicados por A.

Millares Carlo. En la ciudad de Cáceres, entre sus libros copiadores destacan el «*Libro de los Fueros, el de las Ordenanzas... y el Libro Becerro*» [Florianio Cumbreño, 1934, p. 9].

Una situación similar se dio en la Corona de Aragón donde la elaboración de los libros copiadores tiene un origen más temprano. Durante toda la Edad Moderna se continuó e incrementó esta tradición, potenciada por la pragmática de 1501.

A lo largo del siglo XVI bastantes poblaciones catalanas se dotaron de estos libros. Basten ahora los ejemplos de Igualada, Tárrega, Reus y Olot. En la primera localidad su «*Llibre de Privilegis*» fue redactado durante el reinado de Felipe II. En él se transcribieron ciento veintiocho documentos, datados entre 1291 y 1628. Además de este cartulario esta ciudad dispone del «*Llibre de Reduccions de la Batllia; el Llibre d'Insaculacions; i el Llibre de la Mostaçateria*» [Llacuna i Ortinez, 1982, p. 69; Mercader Riba y Colomer Presas, 1951, p. 7]. En Tárrega, a los libros de Privilegios, elaborados en el siglo XIV, se unieron en el siglo XVI los dos «*Llibres d'Ordinacions i Crides*» y los dos «*Llibres de Capitulacions*» [Gonzalvo i Bou, 1989, p. 176]. En el archivo municipal de Reus existe un «*Llibre Verd*», copiator de privilegios, redactado sobre vitela en ese siglo [Vilaseca Borrás, 1947, p. 67]. Por el contrario no se conserva en la actualidad el «*Llibre Vert*» de Olot, citado ya en un inventario de 1579. A finales de ese siglo fue elaborado en esa misma ciudad el «*Libro de los Privilegios de la Villa*», que recoge documentos entre 1342 y 1702 [Mayans i Pluja, 1987 (a) p. 220].

El 5 de diciembre de 1605 el consejo municipal de Sabadell acordó que se copiaran los privilegios de la ciudad en un «*Llibre de Privilegi*» [Mateu Vidal, 1958, p. 231]. Lo redactará el notario Joan Marfà [Castells i Peig, 1983, p. 14]. En la segunda década del siglo XVII debió ser redactada por Pere Màrtir Andreu la nueva compilación de los privilegios de la villa de Solsona, conocida como «*Taula dels Privilegis...*» [Planes i Albets, 1993, p. 49-50].

El 11 de noviembre de 1672, el de Vich acordó que «*se procure persona o personas que pongan dichos privilegios, singularmente los que están en observancia, en un libro o libros, rubricados, para que en caso necesario se hallen fácilmente, colocando los originales en los cajones*» [Serra i Campdelacreu, 1879, p. 22]. El «*Libro Verde Mayor*» de Lérida recoge un buen número de los privilegios y cartas reales que formaban parte del archivo reservado de la ciudad, y fue redactado entre la segunda mitad del siglo XVII y el siglo XVIII [Gras de Esteva, 1897, p. IV]. A estos ejemplos podemos unir, sin salir del ámbito catalán, el «*llibre vert*» en donde estaban copiados todos los privilegios de la ciudad de Manresa y cuya existencia se constata a principios del siglo XVII [Gasol, 1990, p. 9]. En Selva del Camp también se cita un «*Llibre Verd*» o libro copiator de privilegios en el siglo XVIII [Soronellas i

Masdeu, 1993, p. 4]. En el archivo de Villafranca del Penedés se conservaba, según M.A. Guell, el «*Llibre Vert*» de la villa y el «*Llibre de Privilegis*» de la misma [Millares Carlo, 1952, p. 152].

En Balaguer también disponen del Libro Verde, del Libro de los Privilegios, y del Libro de los Juramentos [Millares Carlo, 1952, p. 37]. En el archivo histórico comarcal de Cervera, además del «*Llibre dels Privilegis*», ya mencionado existe otro titulado «*Thesaurus Privilegiorum Cervarie*», encuadernado en pergamino y con ciento veintidós folios, además del «*Llibre Verd del Racional*» [Llobet i Portella, 1982, p. 41]. En Llivia cuentan con el «*Llibre ferrat*» de privilegios y ordenaciones; en San Feliu de Guíxols existe un «*Llibre Vermell*», y en Blanes es denominado como «*Llibre de la universitat*».

En el resto de la Corona de Aragón la presencia de estos libros copiadores nos es menos conocida aunque no faltan poblaciones que ordenaran asentar sus privilegios en estos registros. Además de Castellón, Alcira o Zaragoza, que ya hemos mencionado al referirnos a la Baja Edad Media, podemos detenernos en la ciudad de Alicante. A principios del siglo XVII existía al menos un «*Libro de Provisiones y Privilegios*» [Paternina Bono, 1992, p. 52]. En el inventario del archivo de Alicante, realizado en 1692, aparece recogido el «*Llibre de Privilegis de la Ciutat de Alacant*», junto con otros cuatro libros copiadores de privilegios [Martínez Morella, 1955, p. 47]. El «*Libro Becerro del Ayuntamiento de Daroca*», redactado en los siglos XVI y XVII, era un manuscrito de 380 folios donde se reproducían estatutos y ordenaciones de esta ciudad [Jiménez Catalán, 1925, p. 305]. En el siglo XVIII, al describir el archivo de Alcañiz, se reseña dentro de su cajón noveno un libro en folio, con cubiertas negras y hojas de pergamino, intitulado «*Cartulario Magno*» donde estaban copiados todos los privilegios antiguos [Micolau Adell y Abos Castel, 1986, p. 108].

La mayoría de estos libros copiadores se conservaban dentro del archivo y sólo se sacaban de él cuando era precisa su consulta. Algunos de ellos, sobre todo los encuadernados con cuero sobre madera, estaban protegidos por bullones u otros adornos metálicos lo que denota un uso continuo, por lo que posiblemente estarían custodiados por los escribanos o notarios en sus mesas-escritorio o arcas. De todas formas hubo libros copiadores que desde su redacción se mantuvieron fuera del archivo, ya que fueron concebidos para ser utilizados asiduamente, consiguiendo evitar su extravío o sustracción gracias a disponer de una cadena de hierro que los unía con el mueble archivo o con una pared desde su lomo o cubierta. Tanto en la Corona de Castilla como en la de Aragón se utilizó este sistema para proteger unos libros que por ello fueron denominados como «*libros de la cadena*». Uno de los mejor conocidos es el conservado en el archivo municipal de Jaca.

El «*Libro de la Cadena*» de Jaca fue redactado en tres períodos, dado que contiene textos escritos en 1238, 1324 y 1336. Su encuadernación roja data de entre 1336 y 1395. Es decir en su estado actual podemos afirmar que ya existía a finales del siglo XIV. En él están transcritos 65 documentos. El rey Martín el Humano autenticó su contenido el 28 de enero de 1398. En ese documento se le describe como «*de pergamino con tapas de madera cubiertas de cuero rojo y cerrado con sellos redondos de hierro*». En ese siglo será conocido como «*el libro de los sellos redondos de hierro*». Hasta finales del siglo XVIII se le describirá como el «*libro de las cubiertas vermellas*», y posteriormente como el «*libro de la cadena*», dado que estaba fijado a un muro por una cadena de un metro de longitud. Posiblemente no se le pondría la cadena hasta el siglo XVI cuando fue construida la nueva casa consistorial de Jaca, y a principios del siglo XX debió ser definitivamente desclavado. Este magnífico códice ha sido objeto de diferentes ediciones facsimilares [Buesa Conde, 1986, p. 86-89].

Peor destino tuvo el libro de la cadena de Tortosa dado que desapareció fruto de los desmanes provocados en su archivo durante la revuelta del año 1854. Durante esos sucesos «*es va perdre el manuscrit de les Costums de Tortosa que es deia de <<la cadena>>*» [Massip i Fonollosa, 1987, p. 11]. Sin embargo, sin salir de Cataluña, el archivo municipal de Reus sí ha conservado su «*Llibre de la Cadena*» descrito como «*pergamino del siglo XV. Còdigo municipal. A dos tintas*» [Vilaseca Borrás, 1947, p. 67 y 71], en donde se reproducen diferentes ordenaciones. Y del que también existen diferentes borradores y copias. En Gerona, el sistema de la cadena se utilizaba a finales del siglo XV para custodiar un libro impreso en 1484, intitulado *Regiment de princeps e de comunitats*, y obra de fray Francisco Eiximenis, muy útil para el gobierno municipal. Este libro se encontraba en la sala mayor del consejo general, encadenado a un facistol.

En tierras de Castilla existieron libros de la cadena al menos en Burgos y en Talavera de la Reina. A finales del siglo XV ya existía en Burgos un libro copiador de privilegios, que ha sido descrito como «*de gran tamaño, encuadernado con tablas revestidas de grueso cuero vacuno, en la parte superior ostenta una fuerte cadena de hierro, la que empleaban para atarle y evitar así el que se perdiera o hurtaren*» [Díez Sanz, 1984, p. 14]. En Talavera de la Reina aparece citado como «*Libro de la Cadenilla*» a finales del siglo XVII, aunque seguramente fuera de origen bajomedieval. Poco sabemos de su contenido si bien todo indica que en él estaban transcritos buena parte de los privilegios y las ordenanzas de la ciudad. Constaba de más de 325 folios, y estaba unido por una cadena metálica al mueble-archivo. Posiblemente desapareció a principios del siglo XIX, tal vez durante el saqueo sufrido por el archivo en la Guerra de la Independencia [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 94-95].

Las principales poblaciones de la Corona de Castilla y de Aragón dispusieron de cuadernos o libros copiadores de documentos en sus archivos municipales elaborados a lo largo de todo el Antiguo Régimen. Fue una práctica de tradición medieval que tendrá una incidencia muy positiva en la conservación del patrimonio documental de los ayuntamientos. Estos libros fueron usados profusamente por las autoridades locales y por algunos oficiales concejiles, preservando de esta manera a los documentos originales. Como continuamente hemos puesto de manifiesto, en sus páginas se suelen reproducir textos de documentos perdidos, lo que da aún más valor si cabe a estos cartularios. Los más antiguos, redactados en la Baja Edad Media, podemos incluso considerarlos como auténticos instrumentos descriptivos, dado que recogían a texto completo la casi totalidad de la documentación conservada en el arca. Además estos libros son un precedente claro de los registros de entrada y salida de documentos que empiezan a elaborarse en el siglo XIX. Denominados por el color de su cubierta (Verde, Rojo), por su tipo de piel (Becerro), por su tamaño (Tumbo), por su función (Cartulario) o por su contenido (Privilegios, Fueros, Ordenaciones, etc.) constituyen algunos de los documentos más bellos e interesantes conservados en los archivos municipales, y han sido y son objeto de ediciones facsimilares. La ciudad de Sevilla y la dedicación de su archivero Marcos Fernández Gómez son un buen ejemplo de esta actividad en los últimos años.

Todas las medidas que se han intentado reflejar con anterioridad encaminadas a la conservación de la documentación municipal estaban condicionadas por su estado organizativo y descriptivo. A ello vamos a dedicar las siguientes páginas.

5. LA ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL

Los libros de acuerdos municipales recogen muchas referencias relativas al estado organizativo de su patrimonio documental. Las autoridades locales fueron conscientes de la necesidad de conservar los documentos con arreglo a un determinado método. Como se ha escrito para los archivos gerundenses, y que podemos extender a todos los archivos municipales españoles, su historia *«durant molts segles es caracteritza per l'alternança tàcita de la més absoluta descurança amb el neguit d'ordenar-los, en constatar-se els desavantages que es derivaven de la incúria dels locals i de la manca de classificació del fons»* [Alberch i Fugueras, 1994, p. 526].

Los sucesivos intentos organizativos de esa documentación fueron precedidos de etapas de abandono y desidia. No cabe duda de que la falta de profesionales al frente de ese patrimonio incidió en esta continua alternancia, agravada negativamente en muchas localidades durante los períodos convulsos, sobre todo por las guerras, en los que disminuían o desaparecían los sistemas de control que regulaban su acceso.

Cualquier proceso organizativo culminaba con la elaboración de un instrumento descriptivo, de tal forma que como tantas veces se ha escrito la organización y la descripción de los documentos eran, y son, las dos caras de una misma moneda [Aguinagalde, 1988, p. 76]. La existencia de inventarios implica ya de por sí un cierto método y por lo tanto la aplicación de unos determinados principios en la organización de esa documentación.

Unicamente cuando examinamos relaciones que describen documentos de una manera más o menos detallada, siguiendo casi siempre una ordenación numérica o cronológica, pero sin especificar ningún tipo de agrupación entre ellos, nos encontramos ante instrumentos que pudieron ser elaborados al margen de procesos organizativos. Por lo general estas relaciones registran poca documentación y han sido redactadas por personas con muy pobres conocimientos archivísticos.

Estos procesos parejos no fueron aplicados, al menos durante el Antiguo Régimen, a todo el patrimonio documental municipal, dado que sólo afectaron al archivo del común, de los privilegios o de la ciudad. No tenemos

constancia de que las autoridades locales acordaran medidas de este tipo que tuvieran incidencia en la documentación conservada por el escribano, el mayordomo o tesorero, los contadores, los administradores de determinados tributos, etc. De nuevo podemos generalizar una situación local, en este caso la de Sevilla. De ella se ha escrito que *«el archivo de privilegios, ... con todo fue el único de los archivos municipales que recibió alguna atención para su ordenación y conservación»* [Fernández Gómez, 1995 (c), p. 63].

Ya en la Baja Edad Media, las autoridades locales adoptaron medidas relacionadas con la organización y descripción de esa documentación. En el memorial elaborado por los consejeros de la ciudad de Barcelona en el año 1392 se señala que *«com los privilegis de la Ciutat, e altres provisions per les senyors reys a la Ciutat otorgades, sien difuses e confuses, en tatnt que no stan en certa regla ni titols [...] e sia fort necessari a la Ciutat que certa regla e titols en aquella o aquelles sien posades e posats»* [BARCELONA, 1392].

Esa necesidad de organizar la documentación bajo ciertas reglas, ya patente a finales del siglo XIV en Barcelona, va a extenderse a lo largo de toda la Edad Moderna por el resto de municipios españoles, al menos en los más importantes. Algunos incluso lo contemplarán en sus ordenanzas. En las de Valencia de Alcántara del año 1489 ya se recogía que la documentación se metiera en el arca *«por ynventario e memorial»*. En las de Salamanca, publicadas en 1658, se expresa que los documentos debían ser incluidos en el archivo *«con cuenta y razón»*. Y en las de Burgos, impresas en 1747, se establece que *«en dicho Archivo se observe la mayor prolixidad, para que los Papeles, y Legajos estén, y continúen en el orden, que al presente se hallan»*.

«Reglas» y «orden» llevan implícito que los acuerdos municipales se refieran a menudo al *«arreglo y ordenación de la documentación»*, lo que podemos identificar con la puesta en marcha de un proceso organizativo, y por ende descriptivo. A veces se utilizan también los términos *«coordinación»* o *«composición»*. La situación contraria podía expresarse de muy distintas maneras. En Ciudad Real, en 1595, simplemente se exponía que los documentos *«no estaban puestos por orden ni concierto»*. En Talavera de la Reina, en 1683, se decía que sus papeles *«están confundidos y trocados en los cajones»*. En Zaragoza, en 1711, su corregidor señalaba que *«estando sin conexión ningún papel de forma que no es probable encontrar, sino a costa de mucho trabajo»*. Y en Vallecas, en 1728, se daba cuenta de *«la confusión y menos orden y resguardo con que al presente se tienen»*. Lo mismo ocurría en Orense, en 1756, dado que *«resulta por su confusión nezesitarse el movimiento de todos para qualquier papel que se ofrezca buscar»*.

El incremento progresivo del patrimonio documental municipal a lo largo de estos siglos y la utilización de los armarios-archivo o las estanterías abiertas con cajones y/o legajos para su instalación, frente a las arcas, precisa-

ba la formación de agrupaciones documentales para hacerle accesible y manejable. De ello fueron conscientes las autoridades locales, pero realizar esta tarea no resultaba fácil.

Ni siquiera todos los escribanos municipales estaban preparados para afrontarla con éxito, si disponían de tiempo suficiente al margen de sus otras obligaciones, para llevarla a cabo. Al referirnos con anterioridad a los responsables de los archivos municipales pudimos expresar la participación en estos procesos de las diferentes autoridades locales y de los oficiales concejiles. Al menos en las grandes poblaciones fue común la formación de comisiones en las que participaran unos y otros con este objetivo. Sus distintos intereses podían favorecer la realización de instrumentos descriptivos útiles para todos ellos, en los que junto a criterios puramente documentales, se plasmaran otros más marcadamente jurídicos, sociales, económicos e incluso políticos. La confluencia de estos distintos intereses en un ámbito tan local y la distinta formación de sus integrantes favorecía la subjetividad, y la disparidad de resultados en la culminación de los procesos de organización y descripción emprendidos.

La puesta en marcha de estos procesos partía de decisiones municipales tomadas por los miembros de los ayuntamientos o consejos, promovidas o no por los delegados regios, fundamentalmente por los corregidores. Una vez acordado que se procediera al arreglo y ordenación del archivo era necesario encontrar la persona o personas adecuadas para su realización. En algunos casos se optó por comisiones de composición variada, tanto en la Corona de Castilla como en la de Aragón. El inventario del archivo municipal de Huesca del año 1594 fue responsabilidad del prior, de tres jurados y de tres notarios del número [Arco, 1911, p. 457]. El elaborado, en 1683, en la ciudad castellana de Talavera de la Reina es obra de uno de los escribanos del ayuntamiento, juntamente con el procurador de causas del número, bajo la inspección de cuatro regidores [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 94]. En esa misma localidad, pero en 1672, en la organización del archivo participaron algunos regidores y el teniente de corregidor.

Parece evidente que buena parte del trabajo recayera en los escribanos, como expertos en la documentación, pero es muy posible que determinadas agrupaciones documentales respondieran a los deseos o a las órdenes de estos comisionados con responsabilidades en el gobierno de los municipios. La influencia de unos y otros es muy difícil de calibrar y variará según las poblaciones y las épocas. Todavía en la instrucción elaborada en 1753 por el comisario del archivo de la villa de Madrid se especificará claramente que *«para la clasificación y colocación de documentos ... asistiesen, celando el acto, el Sr. Corregidor, el Decano, el Comisario y el Secretario del Ayuntamiento»* [Domingo Palacio, 1875, p. 35].

En algunas poblaciones de la Corona de Aragón, debido a la renovación anual de oficios, fue corriente que en la realización de los inventarios estuvieran presentes tanto los entrantes como los salientes. Así lo dispuso el consejo municipal de Castellón, en 1455, al acordar que este cometido fuera realizado por los jurados, síndico y escribano, entrantes y salientes [Roca Travar, 1951, p. 209]. El inventario de 1799 del archivo de la localidad menorquina de Alayor fue formado en presencia de los secretarios entrante y saliente y de cuatro jurados [Hernández Sanz, 1917, p. 227].

En Valladolid, y en general en todas las poblaciones con regidores archiveros, a ellos les competía dirigir los procesos organizativos y descriptivos, ejecutados generalmente por los escribanos. En Burgos, tanto en los procesos iniciados en 1513, 1555 y 1772 tomaron parte tres personas. De la primera fecha desconocemos su condición, pero en 1555 fueron comisionados dos regidores con la ayuda de un escribiente; y en 1772 se optó por contratar a dos expertos en letras antiguas y un amanuense. Esta tendencia hacia la profesionalización se acentuó en la segunda mitad del siglo XVIII en otras poblaciones, y de ello son prueba la creación en algunas ciudades del oficio de archivero municipal, unido o no al de contador, y la contratación de expertos archiveros traídos de otras localidades con ese cometido.

A los ejemplos ya apuntados de comisiones encargadas de organizar y describir archivos municipales podemos añadir el caso de Zaragoza, en 1711. Su comisión estuvo formada por el secretario, uno de sus oficiales y por el alguacil mayor [González Miranda, 1981, p. 82]. De nuevo se produce una implicación en este cometido de autoridades locales y oficiales concejiles, aunque en este caso el peso del trabajo recayera en el alguacil mayor, que con el tiempo sería nombrado archivero de Zaragoza. En Orense, en 1692, fueron encargados de componer su archivo los dos escribanos del ayuntamiento con la ayuda de un regidor [Gallego Domínguez, 1981, p. 192]. En Oviedo, en 1658, la comisión estuvo formada por el regidor clavero, un escribano del ayuntamiento y un cura párroco [Villa González-Río, 1978, p. XIX]. El inventario de Tolosa del año 1747 fue elaborado por dos regidores con la asistencia del escribano [Anguera, Juana y Orube, 1987, p. 350]. En Igualada también se nombraron tres personas para arreglar el archivo en 1753 [Llacuna i Ortinez, 1982, p. 62]. Y en Santander, en 1767, el escribano Lorenzo del Cueto y Zulueta contó con la asistencia de dos comisarios regidores para organizar y describir ese archivo [Vaquerizo Gil, 1984, p. 7].

En otros procesos participaron sólo dos personas designadas por los ayuntamientos o consejos municipales. En 1619, la ciudad de Vich nombró con ese cometido a dos notarios [Serra i Campdelacreu, 1879, p. 21]. En 1778, la de Cullera hizo lo propio con un escribano del ayuntamiento y un escribiente papelista [Villalmanzo Cameno y Giner Pereperez, 1978, p. 29-30]. En el

inventario del archivo municipal de San Sebastián, realizado en 1581, el jurado Luis Cruzat contó con la ayuda del licenciado Cristóbal de Zandategui [Banus Aguirre, 1986, p. 7]. El Índice de los documentos del archivo municipal de Talavera de la Reina, del año 1817, es obra de dos de los regidores comisarios [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 98].

Aún así lo más habitual fue encargar el arreglo y ordenación del archivo a una única persona, generalmente con la supervisión de alguna autoridad municipal, e incluso del conjunto del regimiento pues no en vano muchas veces el instrumento descriptivo resultante era presentado y aprobado por el ayuntamiento o consejo una vez culminada la tarea. Esa persona era casi siempre el escribano del ayuntamiento. Al referirnos anteriormente a estos oficiales concejiles ya dimos cuenta de su importante papel tanto en la conservación, como en la organización, descripción y difusión del patrimonio documental municipal. Muy pocos procesos organizativos se desarrollaron sin su participación directa, y en ello pudo incidir la obligación de realizar otros menesteres más urgentes, dado que estas tareas podían llevar mucho tiempo, desde unos meses a varios años, dependiendo de la cantidad de documentación y del método seguido. Entre los más completos instrumentos descriptivos elaborados durante el Antiguo Régimen se encuentran el inventario realizado por Andrés Tinajero, en 1732, del archivo de Valencia; el de Martín de Uribe, en 1740, del archivo de San Sebastián; el de Juan Antonio Criado Valera, en 1750, del archivo de Cáceres; el de Vicente Segura, en 1772, del archivo de Alicante; el de Pedro Antonio de la Escosura, en 1790, del archivo de Oviedo; o el atribuido a Mariá Lloses, a finales del siglo XVIII, del archivo de Tárrega. Con ellos podemos mencionar a Lorenzo del Cueto y Zulueta y a José Mariano Ortiz que trabajaron en ese mismo siglo en los fondos documentales de Santander y Castellón, respectivamente. Todos son escribanos o notarios.

A estos ejemplos podíamos unir otros muchos en los que los escribanos concejiles afrontaron por sí solos la realización de estos procesos, siempre con la autorización previa de las autoridades municipales, entre otros motivos porque suponían nuevos gastos. No obstante podemos encontrar instrumentos descriptivos elaborados tras procesos organizativos en los que no se detecta la presencia de ningún escribano. Al «*Índice general*» del archivo de Talavera, realizado por dos regidores comisarios en 1817, podemos añadir el que hizo Josep Batlle i Jover, también regidor, en 1801, del archivo de Selva del Camp, o el inventario del archivo de San Sebastián, obra del jurado Luis Cruzat en 1581. Menos usual es la participación de algún otro oficial concejil, que no fuera el escribano, en la ejecución de estas tareas, sin embargo el inventario del archivo municipal de Sevilla del año 1702 fue realizado por uno de sus contadores.

Como ya hemos señalado, a veces se acudió a escribanos ajenos al ayuntamiento para realizar esos procesos, residentes o no en esa localidad. No tenemos constancia de que tuvieran tal condición ni Pedro Borrull, visitador real, que organizó el archivo de Alicante en 1691, ni Juan Agustín de Názara y Castro, abogado de la Real Audiencia de Galicia y alcalde mayor, que hizo lo propio a mediados del siglo XVIII en Ribadavia. También algunos eclesiásticos participaron decisivamente en el *«arreglo y ordenación»* de los archivos municipales. Basten como ejemplos la actividad del presbítero Juan Ortiz y de fray Pedro Vidal en Ecija a principios del siglo XIX, o la desarrollada por fray Vicente Velázquez de Figueroa, en 1753, en el archivo de Sepúlveda.

Por último no debemos olvidar que en las pocas poblaciones que contaron con los servicios de un archivero como oficial municipal fueron éstos los que llevaron a cabo todas las tareas relacionadas con la organización y descripción de su documentación. El ejemplo de Madrid desde 1748 es el más evidente.

Sólo si tenemos en cuenta la participación de diferentes personas con distinta formación e intereses en esos procesos y la evolución del patrimonio documental municipal a lo largo de un período tan amplio podemos entender la disparidad de resultados. Y a ello vamos a dedicar las siguientes páginas.

1. El «arreglo y ordenación» de la documentación

Los procesos organizativos y descriptivos desarrollados durante el Antiguo Régimen afectaron casi exclusivamente a la documentación del archivo del común o de los privilegios. A lo largo de esos siglos los criterios que determinaban los documentos que debían formar parte de este archivo fueron variando, como ya vimos, e incrementándose progresivamente la cantidad de documentación conservada. Los ingresos de nuevos documentos, y por lo tanto su entrada en el archivo, fueron realizados bajo un cierto control. Todo ello influirá en su *«arreglo y ordenación»*.

1.1. El ingreso de los documentos: las remisiones

El afianzamiento de los reinos cristianos permitirá la consolidación de los municipios y con ellos la necesidad de conservar sus primeros documentos, casi siempre cartas puebla, fueros o libros de repartimientos, que serán guardados en las funcionales arcas ya usadas con este fin a principios del siglo XIV.

Algunos privilegios reales se refieren concretamente a la necesidad de su conservación. Así el dado a la ciudad de Toledo por Alfonso X, en Sevilla, el 7 de marzo de 1261, por el que establece el patrón de los pesos y medidas en

sus Reinos, especifica que *«esta carta... la tengan en Toledo»*. El fallecimiento de un monarca obligaba a solicitar a su sucesor la confirmación de los privilegios concedidos con anterioridad. Por lo tanto en los primeros años de cada reinado se producía el ingreso en el arca de nuevos documentos. En los siguientes las incorporaciones eran más esporádicas, siempre refiriéndonos a los últimos siglos bajomedievales.

La orden de ingreso, y por lo tanto la consideración de un documento como integrante del archivo del común o de los privilegios, podía responder a una decisión del monarca, de las principales autoridades locales, caso del corregidor en Castilla, y sobre todo del ayuntamiento o consejo municipal. Los libros de actas capitulares contienen acuerdos relativos a que determinados documentos se guarden en el archivo. Para la ciudad de Córdoba se ha señalado que las *«actas capitulares del siglo XVI abundan en noticias sobre la entrada y salida de documentos del archivo del concejo»* [Nieto Cumplido, 1978, p. 2]. Esta situación podemos generalizarla a la práctica totalidad de municipios y a todo el Antiguo Régimen. El referente del acuerdo era suficiente en muchas ocasiones para incorporar esos documentos, sin necesidad de ninguna anotación posterior o recibo, dado que esa circunstancia quedaba recogida en el registro municipal más solemne. De esta forma se fue constituyendo y ampliando el archivo de los privilegios.

No obstante hubo poblaciones que reflejaron estos ingresos en otros documentos mediante actas de entrada en el arca, o autos. El caso más representativo es sin duda la ciudad de Orense en el siglo XV. El 21 de diciembre de 1434 se levanta acta de la entrega y puesta en el arca del concejo, en presencia de diferentes autoridades, del notario y de varios testigos, de siete privilegios en pergamino con sus sellos pendientes, posiblemente confirmaciones dadas por Juan II en Valladolid. El 5 de enero de 1435 se repite la operación por el ingreso de otro privilegio en pergamino [Gallego Domínguez, 1985, p. 189-190]. Sin salir de Galicia, y ya en 1657, por un auto del procurador general *«consta aver entregado algunos papeles dentro de dicha arca»* [Gallego Domínguez, 1988, p. 31].

Al constituirse el ayuntamiento de San Fernando de Cádiz, en 1766, los escribanos realizaron veintitrés entregas de documentos, entre el 28 de junio y el 13 de agosto, que quedaron reflejados en otras tantas relaciones [López Garrido, 1989, p. 13].

Siempre que se ponía en marcha uno de los periódicos procesos organizativos y descriptivos se tomaban medidas tendentes a ingresar en el archivo los documentos sacados y no devueltos, y otros ya tramitados que permanecían en las dependencias municipales pero cuya conservación podía afectar al común de los vecinos. Por lo tanto eran fechas proclives a aumentar el patrimonio documental de una manera inusual. Los inventarios resultantes

se van a convertir en muchas poblaciones en instrumentos que recogerán los ingresos realizados con posterioridad. De esta manera vienen a complementar a los acuerdos municipales, y a las actas de entrada ya mencionados.

En el siglo XVI ya se elaboran inventarios preveyendo que en ellos se puedan registrar ingresos posteriores. En el libro-abecedario realizado al concluirse el arreglo del archivo de Sevilla, en 1519, se dejaron varios folios en blanco para anotar las nuevas entradas de documentos, producidas en 1525, 1531 y 1538 [Fernández Gómez, 1995 (c), p. 64]. Es decir durante casi veinte años sólo en tres de ellos ingresaron algunos documentos en el archivo.

Esta práctica fue común a los archivos municipales de ambas coronas. El inventario del archivo de Tortosa, elaborado entre 1545 y 1546, consta de 309 folios, de los que 89 están en blanco, para facilitar la inclusión en su cajón correspondiente de los documentos incorporados con posterioridad [Massip i Fonollosa, 1987, p. 19]. Lo mismo se hizo en Toledo. En el conocido como «*Becerro antiguo*», datado hacia 1560, también se dejaron varias hojas en blanco «*al final de cada sección o índice de cajón, para poder continuar escribiendo nuevas adquisiciones*» [Sierra Corella, 1931, p. 10]. Y en la localidad navarra de Los Arcos, en el inventario de su archivo, realizado hacia 1570, se continuó «*dando noticia de altas y bajas, entradas y salidas de documentación*» [Pastor Abaigar, 1993, p. 201].

En el inventario del archivo municipal de Sepúlveda, realizado en 1547, se optó por el mismo sistema. En 1553 se le añadieron las descripciones de dos documentos. Habían pasado seis años sin registrarse ingresos documentales, y cuando éstos se producen de manera esporádica son cuantitativamente poco significativos. Uno de los inventarios del archivo municipal de León data de 1561. La intención de la corporación municipal al ordenar su redacción fue la de establecer «*un registro de todos los papeles que fueran entrando en lo sucesivo en su poder*», pero «*no son muchos los folios escritos con anotaciones de distinta mano que siguen al primer asiento*» [Martín Fuertes, 1982, p. 21].

Esta situación se mantuvo en los siglos siguientes tanto en Castilla como en Aragón. En el «*Abecedario*» de los papeles conservados en el archivo de Zamora, del año 1630, figuran notas marginales posteriores de entrada y salida de documentos [Pescador del Hoyo, 1948, p. 6]. En las ordenanzas de 1758 de la ciudad de San Sebastián se establece que el archivero recogería el índice formado años antes «*y lo aumentará cada uno en su tiempo, según la ocurrencia de casos nuevos, Cédulas y órdenes reales*». El inventario realizado en 1772 por Vicente Segura de la documentación del archivo municipal de Alicante ocupa cinco volúmenes, utilizándose un sexto para los ingresos producidos entre ese año y 1811. El Índice elaborado en 1817 del archivo municipal de Talavera de la Reina fue completado en años sucesivos con las nuevas

incorporaciones. Entre esa fecha y 1853 se incluyeron nuevos documentos en el archivo, ocupando ocho legajos, los señalados con los números que van del 70 al 77.

La utilización de los inventarios como instrumentos de control de los ingresos documentales fue alentada por el propio Consejo Real. El contador-archivero de Santander, según una Orden de este Consejo de 17 de julio de 1797, debía llevar un libro inventario *«dejando algún hueco, o papel en blanco para aumentar y anotar los que subcesivamente fuesen entrando en el Archivo»* [Vaquerizo Gil, 1984, p. 8].

Estos ingresos son cuantitativamente poco importantes. A los ejemplos ya apuntados podemos unir nuevamente el caso de Sevilla. En el inventario de 1702 se describe el contenido de setenta y ocho legajos, frente a los cincuenta y nueve que formaban su archivo del común en 1626 [Fernández Gómez, 1995 (b), p 15]. El incremento producido en 76 años fue de diecinueve legajos, muy pocos si tenemos en cuenta el peso económico y demográfico de esa ciudad durante el siglo XVII.

Por lo tanto en los archivos municipales se fueron registrando ingresos de documentación de una manera más o menos periódica a lo largo de todo el Antiguo Régimen, quedando reflejados en los libros de acuerdos, en actas de entrada o en los propios inventarios. Son ingresos pequeños, de unos pocos documentos, que pasan a engrosar el archivo del común. Las fuentes nos recuerdan de tarde en tarde esta obligación de una manera no siempre precisa. El archivero de la comunidad de Daroca, por las ordenaciones publicadas en 1686, debía guardar los privilegios y otras escrituras de esa comunidad, *«assi las que de presente paran en dicho Archivo, como las que en lo venidero le entregarán»*. Entre las obligaciones del regidor archivero de Oviedo, establecidas en 1659, se encuentra la de controlar que entren en el archivo los documentos *«que se hiçieren de nuebo pertenecientes a la çiudad»*.

En pocas poblaciones llegaron a fijarse plazos concretos. Las ordenaciones de Jaca del año 1694 obligan al notario del Justicia a llevar a las casas de la ciudad, cada año el día del reconocimiento del archivo, todos los procesos fenecidos, los registros y otros documentos relativos a la actividad del Justicia para que allí fueran guardados. En la instrucción del conde de Torres Secas, del año 1730, se recogía que el archivero de Zaragoza tenía obligación de que *«los secretarios de la Ciudad pongan en el Archivo por el mes de Marzo de cada año continuado el registro mayor de el año antecedente, como es estilo»*.

En las ordenanzas de Cantillana del año 1550 se establece que todos los años se metiera en el arca *«el día que se acabare de tomar la quenta del mayordomo y el libro que el escrivano del conçejo obiere fecho de los cabildos»* [CANTILLANA, 1550].

Por lo tanto todo apunta a que siempre se llevó un control de los ingresos verificados en los archivos del común, y que conforme avanzaba el Antiguo Régimen las entradas de documentos empezaron a ser más importantes cuantitativamente y alcanzaron en algunas poblaciones, muy pocas, una cierta periodicidad. Ese control también lo llevaban otras instituciones territoriales. El señorío de Vizcaya, en la normativa aprobada para su archivo en 1744, ya regula que «*entreguen... Reales Despachos, procesos de pleitos fenecidos... más todo lo que proceda, mediante recibo*» [Gómez Rodrigo, 1974, p. 72].

A finales de este amplio período algunas poblaciones tomaran acuerdos tendentes a regularizar las remisiones. Santander y sobre todo la ciudad de Madrid son los ejemplos más significativos. El 14 de febrero de 1798, el ayuntamiento de Santander estableció la entrega anual de documentos al archivo por los distintos negociados [Vaquerizo Gil, 1984, p. 9].

En Madrid la formalización de las remisiones periódicas de documentos es el resultado de un largo proceso iniciado ya a principios del siglo XVIII. Por acuerdo de 16 de enero de 1716 se encarga a los caballeros comisarios del archivo que «*todos los instrumentos que fueren recogiendo, se vayan inventariando y poniendo en una papelería o cuarto aparte... hasta que llegue el día de entregarlos en el archivo*» [Domingo Palacio, 1875, p. 23-24]. En 1726, la ciudad nombró a tres escribanos del número para que examinasen los documentos «*a fin de recoger los que deban estar en el archivo*» [Gómez Iglesias, 1974, p. 33]. Por resolución del Consejo Real, de 16 de septiembre de 1773, se estableció que «*los papeles que se remitieran al Archivo fuesen recibidos con relación formal, dada por la oficina de que procedieran, con la firma de su jefe o del que correspondiese, poniendo recibo a su continuación el Archivero, que debería quedarse con otro ejemplar para su responsabilidad*» [Domingo Palacio, 1875, p. 41]. Por auto de ese mismo Consejo, de 12 de marzo de 1774, fue ordenado que «*ingresasen asimismo los [expedientes] de las dos Secretarías de Madrid que no fuesen precisos para su uso ordinario, y que se observase igual práctica en adelante con los expedientes finados...*» [Domingo Palacio, 1875, p. 43]. Entre las obligaciones del archivero, recogidas en el reglamento de 1784, aparece textualmente, como punto cuarto, el contenido mencionado de la resolución de 16 de septiembre de 1773. Y en él se añade además que debería tener «*libros formales para que sienten en ellos el recibo de todos estos papeles con referencia a las citadas relaciones*».

Como acabamos de ver, en el reglamento de 1784 del archivo de Madrid aparecen recogidas las hojas de remisión (relaciones formales) y los registros topográficos (libros formales). Estos dos instrumentos de control tan usuales hoy en cualquier archivo municipal surgen ya a finales del Antiguo Régimen como consecuencia de un proceso marcado por la utilización de los

libros de acuerdos, de las actas de entrada y de las anotaciones en los libros inventarios. Aún así ni siquiera en Madrid pudo lograrse la regularidad en los envíos por parte de las oficinas municipales. Su archivero Basilio Recacha, que tomó posesión en 1815, intentó conseguir que las secretarías municipales le enviasen la documentación concluida de más de diez años. Un acuerdo de 5 de septiembre de 1816 apoyó esta medida. Como consecuencia se elaboraron relaciones simples en las que se hacía constar el número de expedientes o documentos remitidos, los años que abarcaban y un resumen de su contenido. A pesar de las reticencias de algunas oficinas municipales llegaron a enviarse al archivo de villa unos 14.000 expedientes, salvándose así toda la documentación de los primeros quince años del siglo XIX [Cayetano Martín, 1986, p. 556-557].

A finales del Antiguo Régimen el ingreso de documentos en los archivos del común sigue constituyendo un hecho esporádico reflejado generalmente en los libros de acuerdos o en los inventarios. Pero los pocos ayuntamientos que disponen de archivero empiezan a servirse de las hojas de remisión o relaciones de entrega para controlar los envíos.

1.2. La clasificación y ordenación: las agrupaciones documentales

Como ya hemos advertido, periódicamente se ponían en marcha procesos organizativos y descriptivos, que implicaban además, casi siempre, la adopción de medidas tendentes a mejorar la instalación y conservación. El resultado final de esos procesos estaba condicionado por muchos factores. Un análisis pormenorizado de los instrumentos descriptivos elaborados en ese amplio período es indispensable para conocer los criterios organizativos seguidos. De entre los inventarios conservados, son pocos los que han sido objeto de publicación reciente.

La conservación de la documentación municipal bajo un cierto método preocupó no sólo a las autoridades locales sino también a algunos organismos de la administración central. El Consejo Real, al aprobar el reglamento del archivo de la villa de Madrid en 1784, determinó que entre las obligaciones del archivero estuviera la de recibir los documentos que le fueran entregando «*con la debida separación por clases y tiempos*». Más explícito fue este Consejo al establecer los cometidos del archivero-contador de Santander, en 1797, al señalar que debía recibir todos los documentos del archivo, «*reconocerlos, dividirlos por clases y encarpetarlos con sus correspondientes rótulos en legajos proporcionados, con sus números, poniendo en cada uno por principio un pliego en que se explique la clase de papeles que contiene*». Estas referencias tardías a la división de la docu-

mentación municipal por «clases», implican la formación de diferentes agrupaciones documentales, constatadas ya en la Baja Edad Media.

Los métodos seguidos a la hora de formar estas agrupaciones han sido analizados de manera distinta por los estudiosos de la archivística. Se ha señalado que los archivos municipales «*no aportan novedades técnicas ni formas a lo ya conocido y creado por las cancellerías o archivos clásicos en su funcionamiento. Estos desarrollarán una serie de sistemas nuevos que aquellos imitarán llegado el caso, con el paso de los siglos*» [Aguinagalde, 1988, p. 70]. Según J.L. Rodríguez de Diego mientras fue exclusivo el concepto jurídico y administrativo del archivo, la clasificación se basó en criterios orgánicos, pero con la incorporación, desde el siglo XVIII, del concepto de archivo como un bien cultural se fue introduciendo la clasificación por materias. En esta línea se manifiesta E. Lodolini al afirmar que entre la segunda mitad del setecientos y la primera del ochocientos se produce una difusión de la organización de los archivos por materias, es decir, sobre la base del contenido de los documentos. Desde mediados del siglo XIX irrumpe con fuerza el método de organizar los archivos según el principio de procedencia, o sea reconstruyendo el orden originario de los documentos [Lodolini, 1995, p. 41].

No obstante, la clasificación en los archivos municipales no obedece a criterios tan simplistas y uniformes. Para C. Pescador del Hoyo, durante la Edad Moderna y hasta fines del siglo XIX, y refiriéndose a los grandes archivos «*lo mismo agrupa sus fondos por procedencias, como por materias, como por años*» [Pescador del Hoyo, 1955, p. 15]. Durante el Antiguo Régimen, para M. Casademont, los sistemas y los métodos de la Archivística estaban faltos de regulación, de tal forma que los «*ordenaments i la disposició dels documents seguint criteris d'ordre cronològic, per matèries, alfabètics, de procedència geogràfica, per signataris i àdhuc per suports, escriptoris i grandàries, eren a bastament difosos*» [Casademont i Donay, 1991, p. 69].

Al examinar las agrupaciones documentales reflejadas en los diferentes instrumentos descriptivos conservados desde la Edad Media, podemos comprobar la evolución y superposición de diferentes criterios. La constitución de series documentales basadas exclusivamente en su tipología, sin tener en cuenta su contenido, será muy utilizada en la Baja Edad Media, e incluso en siglos posteriores. Era la solución más idónea para agrupar los documentos que por entonces formaban el archivo del común o de los privilegios.

Los pocos documentos conservados en las arcas eran fácilmente localizables e identificables para los escribanos municipales en los primeros siglos medievales. No era necesaria ninguna agrupación lógica. Sólo con el transcurrir del tiempo, el incremento del patrimonio documental y la evolución de la escritura empezaron a suponer demoras y dificultades en la búsqueda de la documentación custodiada, al menos en las principales poblaciones.

De ahí que sea en las grandes ciudades en donde primero se adoptan criterios para clasificar los documentos de sus archivos. Ya a finales del siglo XIV podemos comprender esta preocupación en las autoridades barcelonesas. En el memorial de los consejeros de Barcelona de 1392, que ya hemos citado con anterioridad, se señala que los privilegios y otras provisiones dadas a la ciudad por los Reyes estaban desordenadas, por lo que era necesario ponerlos bajo ciertas reglas, de tal forma que *«vises e reconegudes los dits privilegis e provisions, aquells e aquelles reglen en certa forma e manera, donant a cascun dels dits e dites privilegis e provisions, segon llur manera, cert entitolament e sots certes rubriques»* para que así pudieran ser fácilmente localizables [BARCELONA, 1392].

No conocemos cuáles serían esas reglas pero sin duda consistirían en formar agrupaciones con base tipológica. Así se estableció años después en Burgos. La documentación conservada en su arca fue dividida en tres partes, y colocada en otras tantas arcas más pequeñas dentro del arca mayor. Encima de cada una de ellas fue escrito el título de las escrituras contenidas, a saber:

BURGOS, 1434

- 1.- Mercedes, donaciones, compras y confirmaciones
- 2.- Regimiento, conveniencias, términos y portazgos
- 3.- Franquezas, libertades, quitamientos, fueros, ordenamientos y respuestas de peticiones

Fuente: Bonachía Hernando y Pardos Martínez, 1983, p. 13

La documentación contenida en el arca segunda no responde a criterios tipológicos, presentes en las otras dos, sino a criterios temáticos o de contenido. No hay que esperar por lo tanto al siglo XVIII. Pero esta situación no se produjo sólo en Burgos. Los documentos que formaban el archivo de Huesca en 1487 fueron agrupados en diez *«bolsas»*, que se corresponden con *«asuntos diferentes»* [Cerdá Díaz, 1997, p. 26, nota 10]. Otros ejemplos del siglo XVI también se sirven de estas agrupaciones.

En 1526 fue redactado el *«Sumario de los privilegios y escrituras de Toledo»*. La documentación del archivo de la ciudad se conservaba en cajones, o bolsas, denominados por la letra del alfabeto, desde la A a la V. Cada cajón contenía documentos identificados por vocablos o términos que empezaban por su letra. El contenido de algunos de estos cajones era el siguiente:

TOLEDO, 1526

A.- Ayuntamiento, alcaldías mayores, alguacilazgo mayor, aposentamiento, alcabalas, amojonamientos, alarifes, almojarifazgo, Almonacid, asientos de ayuntamiento...» *y otras cosas que comiençan en la A*»

B.- Cartas de sus altezas tocantes a bastimentos, Burujón, Blas Caballero *«y otras cosas que comiençan en la b»*

C.- Confirmaciones de privilegios, mercedes y franquezas, capítulos del perdón dado a Toledo, capítulos de Cortes, calahorra, carnicerías, Camarena, Cobeja, compras, censos, cambios, clérigos, colmenares, contrastes, calles, caños, caballos, Calatrava, corregidores, cartas de poder, carbón... *«y otras cosas que comiençan en la c»*

D.- Donaciones, diezmos, dehesas, derechos de los escribanos, derechos de las justicias, derechos del mesón del trigo, deán e cabildo de Toledo, doctor Julián, dotes de mujeres,...

...

R.- Regidores, reconocimientos, rentas de Toledo, revocación de las suertes de los Montes, Rielves...

...

V.- Vinos, vestidos, vasallos, veedor de los paños, varas de justicia, Villacarrillo, veedores de los menestrales, vega, venta de los cotos de la legua...

Fuente: A.M.T., Archivo Secreto, Alacena 2ª, Leg. 6, Núm 10

Por lo tanto los documentos habían sido agrupados siguiendo criterios meramente alfabéticos. El sumario permitía su fácil localización dado que además del índice general, incluía bajo cada letra una descripción del contenido de cada documento, incluyendo su signatura, con referencias del tipo *«en la bolsa de la c a cartas III»*. Dentro de cada agrupación alfabética se mezclan materias, tipos documentales y nombres propios de personas y de lugares.

El inventario de la documentación del archivo de Sevilla, elaborado en 1538, divide la documentación en los siguientes grupos:

SEVILLA, 1538

- 1.- Privilegios
- 2.- Provisiones
- 3.- Provisiones y ordenanzas relativas a la alhóndiga
- 4.- Títulos, sentencias y ejecutorias sobre términos
- 5.- Libros de sentencias sobre términos y pleitos

Fuente: Fernández Gomez, 1995(b), p. 14

Las agrupaciones tipológicas siguen siendo la base de esta clasificación aunque ya se perfilan claramente otras basadas en su contenido, caso de las referencias a la alhóndiga o los términos. De todas formas no debemos olvidar que ese archivo estaba constituido entonces por tan sólo 27 legajos.

Al ser organizado el archivo de la ciudad de Zamora, en 1553, la documentación fue agrupada en diferentes envoltorios, distinguidos por las letras del alfabeto, bajo los siguientes títulos:

ZAMORA, 1553

- 1.- Ventas y Fueros (A y B)
- 2.- Privilegios Reales (A y B)
- 3.- Procesos (A y B)
- 4.- Escrituras varias (A, B, C, D, E, F, G, H e I)
- 5.- Poderes
- 6.- Libros de acuerdos
- 7.- Gastos de pescadería y carnicería

Fuente: Ferrero Ferrero y González Matellán, 1983, p. 388
Pescador del Hoyo, 1948, p. 6

Salvo la última agrupación, evidentemente temática, todas las restantes son tipológicas, y muy poco estructuradas como es el caso de las escrituras. En Orense, en 1555, la organización del archivo consistió en la realización de un simple registro de escrituras, sin referencia alguna a su colocación en el arca [Gallego Domínguez, 1985, p. 193].

En Écija, según M. Martín Ojeda, su corporación municipal aprobó, en sesión de 5 de noviembre de 1571, el método que se debía seguir para organizar su archivo. La documentación debía agruparse de la forma siguiente:

ÉCIJA, 1571

- 1.- Privilegios
- 2.- Provisiones Reales
- 3.- Sentencias y Ejecutorias
- 4.- Escrituras de Ventas
- 5.- Escrituras de Censos
- 6.- Testamentos

Fuente: *Inventario*, 1988. p. 16

Las agrupaciones son exclusivamente tipológicas, y entre ellas nos llama la atención la existencia de testamentos.

En esta misma línea debemos mencionar la labor de Luis de Cruzat, en 1581, en el archivo de la ciudad de San Sebastián. Agrupó los 226 documentos que por entonces formaban su archivo, en diferentes clases designadas por las letras del alfabeto. A saber:

SAN SEBASTIÁN, 1581

- 1.- Privilegios (Cajón A)
- 2.- Ejecutorias (Cajones B,C,D Y E)
- 3.- Sentencias (Cajón F)
- 4.- Provisiones Reales (Cajón G)
- 5.- Cédulas Reales en lo militar (Cajón H)
- 6.- Cédulas y Cartas Reales (Cajón I)
- 7.- Contratos y Asientos (Cajón K)
- 8.- Ordenanzas (Cajón L)
- 9.- Obligaciones, conocimientos, compras y ventas y cartas de pago (Cajón M)
- 10.- Condenaciones, autos, contratos, informaciones en derecho, pareceres de letrados, amojonamientos, capítulos de corregidores, mandamientos (Cajón N)

Fuente: Banus Aguirre, 1986. p. 9-10

Dentro de cada cajón los documentos iban numerados, de tal manera que su signatura estaba formada por una letra y un número. Por lo tanto, el cajón primero que constaba de treinta y cuatro documentos, incluía desde el A/1 hasta el A/34, sin que en su ordenación se siguieran criterios cronológicos. En los siguientes cajones de nuevo se empezaba por el número uno.

Bien diferentes son los criterios seguidos en la organización de la documentación burgalesa realizada en 1589.

BURGOS, 1589

- 1.- Libertades
- 2.- Ordenamientos
- 3.- Gobernación
- 4.- Archivo
- 5.- Juzgado de Fieles
- 6.- Huelgas y Hospital del Rey
- 7.- Arcos y Castañares
- 8.- Miraflores
- 9.- Miranda de Ebro
- 10.- Pancorvo
- 11.- Lara y Barbadillo
- 12.- Muñó
- 13.- Mazuela
- 14.- Pampliega
- 15.- Ormaza
- 16.- Cortes y sus Capítulos
- 17.- Privilegios
- 18.- Hacienda
- 19.- Palazuelos
- 20.- Juarros y la Mata

Fuente: Porras Huidobro, 1830, p. 66

Las clases en que se dividieron los documentos del archivo municipal de Burgos obedecen en su denominación a la mezcla de funciones (Gobernación, Hacienda) con series tipológicas (Privilegios, Ordenamientos), instituciones (Juzgado de Fieles, Huelgas y Hospital del Rey), materias (Cortes y sus capítulos) y localidades (Pancorbo, Miranda de Ebro, etc.) [Fernández Hidalgo y García Ruipérez, 1989, p. 192]. En otras poblaciones no se consideró necesario llegar a agrupaciones tan concretas. Bastaba con registrar todos los documentos en un inventario, siguiendo un orden

cronológico. Así se había hecho en Orense en 1555 y así se hizo en Ciudad Real en el año 1595.

La ciudad de Toledo, en la segunda mitad del siglo XVI ya disponía de su mueble archivo formado por doce cajones y dos alacenas. La documentación contenida en los doce cajones se distribuía de la siguiente manera:

TOLEDO, 1560

- 1.- Ordenanzas de los oficios, medidas y monedas y de los veedores de ellos. Pragmáticas de Su Majestad. Ordenamientos del Arzobispo y sus jueces y cosas que tocan a los diezmos y primicias.
- 2.- Títulos de los lugares de la jurisdicción de esta ciudad y ejecutorias de ello. Lo que toca a nombramientos de los oficiales de los dichos lugares.
- 3.- Cédulas y provisiones reales sobre cosas que tocan en las justicias eclesiásticas y seglares, y Hermandad Vieja y Nueva y Mesta y Fiel del Juzgado...
- 4.- Títulos de la Hacienda que Toledo tiene en sus Montes. Provisiones y ordenanzas que la ciudad ha hecho acerca de ellos.
- 5.- Lo que toca a los oficios del Ayuntamiento, así Regidores como Jurados, fiel del juzgado, fieles ejecutores, escribanos del Ayuntamiento...
- 6.- Como Toledo es cabeza de España, donde se coronaban los emperadores... Llamamientos y capítulos de Cortes. Los juramentos que han hecho los Reyes de Castilla... Encabezamientos
- 7.- Privilegios para que los vecinos de Toledo no paguen portazgo ni pontazgo ni otro derecho... La franqueza del vino y del mercado.
- 8.- Amojonamientos de la tierra y jurisdicción y Montes, hechos con los lugares de la comarca y señores de dehesas y ejecutorias que sobre ello ha habido.
- 9.- Privilegios y provisiones de algunas cosas de la gobernación que tocan a la ciudad; sobre la saca del pan, provisiones generales de diversas cosas.
- 10.- Títulos de las compras que Toledo hizo para los cotos de la Legua y los amojonamientos de ella. Compras de partes de casas para ensanchar las calles... Lo que toca a la policía de las dichas calles y saledizos.
- 11.- Títulos de los propios y rentas que Toledo tiene en esta ciudad con las ejecutorias que en ello ha habido y los aranceles de ellas. Reconocimientos de tributos...
- 12.- Para que los vecinos de Toledo sean libres de todo pecho y servicio y moneda forera...

Fuente: Sierra Corella, 1931 p. 11-12

Frente al apego por la formación de series basadas casi exclusivamente en criterios tipológicos, bastante habitual en los siglos XV y XVI, la documentación del archivo secreto de Toledo fue clasificada teniendo en cuenta fundamentalmente el contenido de los documentos, y además estas agrupaciones estuvieron condicionadas por las características del mueble-archivo, en concreto por el tamaño de los cajones. Este método sería denominado por A. Sierra Corella, como «*topográfico y dentro de él por asuntos*». Y como tal está en la base de otras agrupaciones realizadas en la Edad Moderna, en otros tantos archivos municipales, es decir el tamaño de las unidades de instalación, en particular de los cajones, incidía sobremanera en la formación de estas agrupaciones y por ende en su denominación.

Con los ejemplos examinados podemos comprender los criterios seguidos a la hora de organizar la documentación a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. En pocas poblaciones, sólo en las más importantes, se iniciaron procesos dirigidos a clasificar, ordenar y describir sus archivos del común. Entre las que sí los llevaron a cabo están aquellas localidades que, con archivos pequeños, se limitaron a realizar una ordenación cronológica de los documentos conservados, recogidos en la correspondiente relación o inventario, no siendo preciso formar con ellos ningún tipo de agrupación. En otras se optó por unirlos con arreglo a su tipología documental sin descender a examinar su contenido. Y en las menos se formaron diferentes agrupaciones combinando criterios tipológicos con otros basados en el contenido de los documentos, en la institución o en el lugar al que hacían referencia. En este último sentido sobresalen los casos de Burgos y Toledo, dentro de la Corona de Castilla, pero es posible encontrar más ejemplos.

En la formación de estas agrupaciones debieron intervenir decisivamente las autoridades locales que pudieron formar parte de las comisiones encargadas de la ejecución de esos procesos organizativos. La intitolación del cajón sexto toledano deja pocas dudas. Mientras que las series tipológicas, mucho más asépticas, reflejan mucho mejor los criterios y la formación de los escribanos.

En el ámbito de la Corona de Aragón tiene bastantes paralelismos con el ejemplo burgalés el archivo de Tortosa, organizado en el año 1574. El archivo de la ciudad estaba ubicado dentro de un gran armario de cuatro puertas. En su interior la documentación se distribuía en más de cincuenta legajos de la siguiente manera:

TORTOSA, 1574

Privilegios
Coronaciones y Matrimonios
Procurador Real
Cortes
Huestes y Cavalgadas
General
Diversos
Gobernador
Bailía
Alcaldía y Veguer
Jueces
Consulado y Feria...
Impuestos
Requisas y Protestas
Común
Obispo y Cabildo
Amposta
Castellanía
...
Mallorca
Tamarit
Lérida
Gerona
...

Fuente: Massip i Fonollosa, 1987. p. 25-26

Evidentemente las voces, traducidas al castellano de su original en catalán, nos permiten contemplar la mezcla de distintos criterios a la hora de agrupar los documentos. *«No sembla pas que es tractés d'una classificació estrictament qualificable de <<temàtica>>, atès que presenta nombrosos grups que responen a criteris orgànics, a banda d'una inequívoca presència alhora, de criteris de caràcter geogràfic»* [Planes i Albets, 1992, p. 20-21]. Junto con entradas claramente temáticas, caso de Impuestos, Coronaciones o Huestes, se encuentran otras relacionadas con instituciones, como Cortes, Procurador Real, Gobernador, Bailía, Alcaldía o Consulado, o con poblaciones, caso de Gerona, Lérida o Barcelona. Los cajones de «*general*» o de «*diversorum*» nos recuerdan las dificultades que se manifiestan a la hora de

aplicar criterios basados fundamentalmente en el contenido, sea temático, geográfico o institucional. Mientras que los destinados a conservar los privilegios, en total cinco, responden a una agrupación tipológica, seguramente de origen medieval.

Sin duda el tamaño de los cajones del armario de Tortosa incidió en la formación de esas agrupaciones, de tal forma que si el mueble hubiera estado distribuido de otra manera, en más o menos cajones, podían haber surgido agrupaciones distintas. El archivo reservado de la ciudad de Lérida, que debió contener una documentación muy similar, estaba estructurado en tres secciones:

LÉRIDA, Edad Moderna

- 1.- Privilegios y cartas reales con sus copias...
- 2.- Bulas Pontificias
- 3.- Documentos varios

Fuente: Gras de Esteva, 1897, p. 17-38

La estructuración es aquí bastante menos compleja evidenciando una casi total ausencia de criterios clasificatorios.

Sin abandonar Cataluña y adentrándonos ya en la Edad Moderna, parece ser que en Balaguer se siguió un sistema parecido al de Tortosa. De principios del siglo XVII se conservan algunos sumarios que describen el contenido de varios cajones a saber:

BALAGUER, Principios S. XVII

- 1.- Insaculaciones
- ...
- 30.- Almotacén
- 31.- Vallfogona
- ...
- 70.- Murallas
- ...

Fuente: Farre i Viladrich, 1989, p. 12

En 1801 se produce la organización del archivo de la Selva del Camp por Josep Batlle i Jover. Los 987 documentos que lo integraban fueron nume-

rados siguiendo un orden correlativo alfabético según su «*natural*esa». Algunas de esas agrupaciones fueron las siguientes:

SELVA DE CAMP, 1801

Apocas
Autos
Apelaciones
Articulados
...
Censales
...
Privilegios
...
Ventas
Visuras

Fuente: Soronellas i Masdeu, 1993, p. 6

La denominación de estas agrupaciones nos remite a las series tipológicas de tradición medieval. Los documentos eran fácilmente localizables por su número de registro y por el del cajón y pliego al que pertenecían.

Poco sabemos de los criterios seguidos en los archivos municipales del reino de Valencia. En Castellón, los privilegios conservados en 1763 fueron agrupados en legajos por reinados, distinguiendo los documentos que formaban cada uno, con letras y números [Roca Travar, 1951, p. 212]. La documentación del archivo municipal de Alicante fue agrupada por Vicente Segura, en 1772, por «*materias afines*», siguiendo una ordenación alfabética. Al menos eso se desprende del Índice general que elaboró [Paternina Bono, 1992, p. 53]. La de Villamarchante, según su libro índice, redactado en 1769, estaba agrupada en llos de la forma siguiente:

VILLAMARCHANTE, 1769

Autos
Propios y arbitrios
Pósito del trigo
Pósito de arroz
Caza y pesca
Armas y desafíos
Monedas de oro y plata

Diputados y personeros

Seda y manifestos, lana y algodón, lino y cáñamo

...

Ordenes reales diversas

Capítulos de población y buen gobierno, aguas, deliberaciones, ternas, etc y tierras francas y lobos.

Libros de acuerdos

Equivalente

Equivalente y tierras francas

Equivalente y tienda

Cuentas y acuerdos

Fuente: Mateu Llopis, 1969, p. 66-98

Aunque todavía persisten algunas series tipológicas, las materias constituyen la base de estas agrupaciones. Los documentos van numerados dentro de cada lio, desde el núm. 1 hasta el último. Estos lios a la vez se sitúan dentro de alguno de los cuatro estantes del armario archivo.

Una estructura parecida en cuanto a la instalación era mantenida en el archivo municipal de Alcañiz en el siglo XVIII. Cada documento iba numerado, dentro de cada ligarza, y cada cajón contenía un número determinado de ligarzas. El primero de sus veinte cajones se destinaba a conservar los privilegios reales [Micolau Adell y Abos Castel, 1986, p. 107]. Lo mismo sucedía, sin salir del Reino de Aragón, en la ciudad de Jaca en ese siglo. El cajón primero contenía los privilegios mientras que el último, el cuarenta, se destinaba a contener algo tan poco preciso como las «*firmas modernas*» [Buesa Conde, 1986, p. 87].

Por lo que respecta a las poblaciones de la Corona de Castilla se han publicado estudios que describen las agrupaciones documentales utilizadas en algunas de ellas a lo largo de la Edad Moderna. Si en el siglo XVI nos deteníamos en los ejemplos de Sevilla, Zamora, Ecija, San Sebastián, Burgos y Toledo, en la centuria decimoséptima podemos examinar los criterios seguidos en otros tantos procesos organizativos puestos en marcha en diferente localidades. En Madrid, el 15 de febrero de 1613, se acordó «*poner en orden los papeles, ... según y en manera que están en el Archivo de Simancas*», aunque todo apunta a que este acuerdo fue incumplido [Gómez Iglesias, 1974, p. 33].

Más interesante nos resulta el caso de Córdoba. En 1619 la documentación de su archivo, en total 600 documentos, fue agrupada en veinte cajones, distinguidos por la letra del alfabeto, de la A a la X. Esos documentos fueron

numerados correlativamente del 1 al 600. El primer cajón, el A, comprendía del 1 al 81, el B abarcaba desde el 82 al 200, etc. Este sistema debió ser utilizado hasta bien entrado el siglo XIX. Además cada cajón, distinguido por una letra, contenía diferente documentación. A saber:

CÓRDOBA, 1619

- A.- Privilegios
- B.- Provisiones Reales
- C.- Títulos de posesiones, juros y censos, tierras y rentas, pre-eminencias, libros de cuentas de propios y otras haciendas
- D.- Pleitos ante jueces de términos...
- E.- Ejecutorias
- F.- Finiquitos de encabezamientos de rentas reales
- G.- Escrituras y pleitos
- H.- Cartas de pago de personas particulares
- I.- Ordenanzas de ciudad
- L.- Cartas reales y de señores y de otras personas, recibimientos y juramentos de reyes
- M.- Capítulos y pragmáticas de Cortes
- N.- Censos redimidos con sus redenciones
- O.- Acuerdos de ciudad y corregidores
- P.- Ordenanzas y otros recados tocantes a la defensa de la entrada de vino de fuera...
- Q.- Traslados simples de privilegios, títulos, ordenanzas y escrituras
- R.- Ejecutorias de Particulares
- S.- Propositiones y votos de caballeros veinticuatro
- T.- Cédulas Reales
- V.- Facultades Reales y súplicas para ellas
- X.- Libro de Cabildo, diputaciones y comisiones

Fuente: Nieto Cumplido, 1978, p. 3-4

Estas agrupaciones son básicamente series tipológicas con una estructura que nos recuerda a la utilizada en Ecija, en 1571, aunque en este caso está mucho más desarrollada. La documentación del archivo del cabildo de jurados de Córdoba, organizado presumiblemente entre 1598 y 1620, fue agrupada en cinco legajos, distinguidos con los números 0 al 4, sin más distinciones. Este archivo estaba compuesto entonces por unos trescientos documentos.

En Sevilla, su cabildo acordó organizar nuevamente su documentación, instalada en 59 legajos, en el año 1626. Para su clasificación estableció los siguientes grupos, o «*tablas*»:

SEVILLA, 1626

- 1.- Privilegios
- 2.- Provisiones y cédulas
- 3.- Escrituras de hacienda
- 4.- Ejecutorias y sentencias
- 5.- Términos
- 6.- Diferentes negocios
- 7.- Pleitos
- 8.- Padrones
- 9.- Encabezamientos de rentas

Fuente: Fernández Gómez, 1995 (b), p. 15

Este sistema con ligeras modificaciones pervivió hasta bien entrado el siglo XIX. Los documentos ingresados desde 1626 en el archivo fueron vinculados a su respectiva tabla, y sólo a mediados del siglo XVIII fue necesario añadir una más, la décima, para los hacimientos de rentas de propios. Como vemos, se basaba «*en la mayor o menor solemnidad diplomática de la documentación*» [Fernández Gómez, 1995 (c), p. 65]. Es decir se constituyeron series documentales con arreglo a criterios casi exclusivamente tipológicos, si bien a la hacienda municipal se dedicaron tres tablas (escrituras de hacienda, encabezamientos de rentas y hacimientos de rentas de propios), junto con otra específica a las escrituras y pleitos sobre términos. Más confuso debía ser el contenido de la denominada como «*diferentes negocios*».

Lo poco que conocemos del proceso organizador seguido en el archivo municipal de Talavera de la Reina en 1629 va en la misma dirección. Los documentos fueron instalados en cajones y talegones. Cada cajón contenía una documentación homogénea repartida en talegones numerados desde el 1, en el primer cajón, hasta el 149, que se conservaba en el último. No parece que esos cajones estuvieran distinguidos por una letra o un número. Al menos uno de ellos se dedicaba a conservar los privilegios, otro las concordias y capitulaciones, y un tercero lo que las fuentes denominan como «*extraordinarios*» [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 92].

En Zamora, en 1630, se procedió de nuevo a organizar su archivo compuesto por unos 1.300 documentos. Los legajos recibieron en este caso numeración romana, y además en algunos casos alfabética, distinguiendo dos

inventarios, denominados abecedarios. Las agrupaciones resultantes fueron las siguientes:

ZAMORA, 1630

Primer Abecedario

- I.- Provisiones
- II.- Provisiones
- III.- Provisiones
- IV.- Privilegios
- V.- Privilegios
- VI.- Escrituras públicas
- VII.- Cuentas A
- VIII.- Escrituras B
- IX.- Procesos entre la ciudad y particulares C
- X.- Cuentas de mayordomos, rentas y otras cosas D
- XI.- Escrituras e informes de hidalguías E
- XII.- Cuentas y rentas F
- XIII.- Traslados de provisiones y escrituras G
- XIV.- Varios H
- XV.- Varios I
- XVI.- Varios J

Segundo Abecedario

- XVII.- Varios A
- XVIII.- Varios B
- XIX.- Provisiones y escrituras D

Fuente: Pescador del Hoyo, 1948, p. 7

Esta clasificación de la documentación, en provisiones, privilegios, escrituras, cuentas y procesos, es demasiado simple e imprecisa. La existencia, entre los diecinueve legajos, de cinco para contener los documentos «*varios*», incide en este sentido. Nada tiene que ver, pues, con los ejemplos de las clasificaciones adoptadas en Toledo y Burgos en el siglo XVI, mostrando claras semejanzas con los casos de Sevilla y Ecija. De todas formas con los avatares sufridos por el paso del tiempo las agrupaciones documentales realizadas podían confundirse, y variar los criterios cuando se procedía a un nuevo proceso de organización y descripción. Esto parece que ocurrió en Burgos entre 1672 y 1675, dado que el archivo fue organizado en esos años por Juan Herrero de Velasco, de una manera muy personal, «*sin ajustarse a método concreto y convincente*» [Díez Sanz, 1984, p. 47]. Lo poco que conocemos del proceso

en igual sentido seguido en Orense, en 1692, fue la división de la documentación en un número indeterminado de mazos, del que el primero contenía los documentos más antiguos, de los siglos XV y XVI, y el mazo doce abarcaba los recudimientos de rentas reales e hidalguías [Gallego Domínguez, 1981, p. 193]. El Índice de los papeles del archivo de Vallecas elaborado en 1695 sigue una ordenación alfabética, distinguiendo entre otras las siguientes agrupaciones: Autos, Decretos, Instrucciones, Licencias, Libramientos, Ordenes, Obligaciones, Provisiones y Repartimientos [Mateu Llopis, 1945, p. 94].

En otras poblaciones no fue preciso agrupar los documentos ni siquiera por series tipológicas. Su pequeño número hacía innecesario cualquier tipo de clasificación, al menos eso ocurrió en Ribadavia en 1643. El inventario realizado en esa fecha no menciona ninguna agrupación documental ni tampoco tiene referencias a unidades de instalación, lo que prueba que la documentación estaría amontonada en el arca [Gallego Domínguez, 1988, p. 40-45]. Lo mismo debió suceder en Écija hacia 1671. Su archivo municipal estaba constituido entonces por veinticinco legajos. Su escribano fue encargado de «*componer*» sus papeles, limitándose a elaborar un breve registro de la documentación en ellos contenida, sin mencionar, que nosotros sepamos, la existencia de diferentes agrupaciones [*Inventario*, 1988, p. 17].

La casi totalidad de los ejemplos examinados, anteriores al siglo XVIII, tienen en común la prevalencia de las agrupaciones por series tipológicas. Son archivos pequeños, que difícilmente sobrepasan el millar de documentos instalados en varias decenas de legajos. La documentación que contienen es la propia de los archivos del común o de los privilegios, por lo que tampoco es preciso subdivisiones innecesarias, aunque en los archivos de las grandes ciudades como Burgos, Sevilla o Toledo éstas se manifestaron insuficientes. Lo mismo se desprende de los criterios seguidos en Tortosa y Balaguer ya comentados.

Con la llegada del siglo XVIII se acentuará la necesidad de clasificar los documentos por su contenido, sobre todo en aquellas poblaciones que poseían archivos cuantitativamente importantes. Como siempre el caso de Madrid es el más llamativo. Un acuerdo de su ayuntamiento de 16 de enero de 1716 ordenaba el inventario de los papeles de su archivo «*con separación de los que fueren Ejecutorias y Privilegios, con la nominación de su abecedario, y lo mismo y misma separación todos los demás instrumentos para que, cuando sean necesarios, se encuentren prontamente*» [Domingo Palacio, 1875, p. 24-25]. Entre las bases propuestas, en 1717, por uno de sus comisarios se encuentra la de que debía realizarse «*un inventario general formal por las clases de sus contestos, numerados con su índice*». Poco debió hacerse en cumplimiento del anterior acuerdo y propuesta cuando, en 1726, Juan Isidro Fajardo exponía que de nada podía servir el archivo «*respecto de no tener*

método los privilegios, cédulas y otros papeles de gran importancia» [Domingo Palacio, 1875, p. 30].

Lo cierto es que en la instrucción presentada al ayuntamiento de Madrid por Francisco de Milla, comisario del archivo, el 29 de marzo de 1753, se establece la presencia de diferentes autoridades y oficiales *«para la clasificación y colocación de documentos por orden de materias y fechas»* [Domingo Palacio, 1875, p. 35]. El auto del Consejo Real de 12 de marzo de 1774 especificó que los expedientes finalizados debían enlegajarse *«con determinación de los de mayor importancia y de su procedencia y de fechas respectivas»*. En su aplicación se elaboraron prontuarios de clases de papeles hasta bien entrado el siglo XIX. Esas clases *«están referidas por orden alfabético y su número asciende a cuatrocientas noventa, figurando por separado los antecedentes de cada una de las fincas rústicas y urbanas de la Villa»*. Timoteo Domingo Palacio al que seguimos en este comentario señala que tanto en el prontuario de 1776 como en los posteriores hasta 1836, se establece el conocimiento de materias o negociados por legajos y estantes, y en sus clasificaciones hay rotulatas anticuadas, *«y bastantes otras malamente sugeridas por el carácter y forma oficial de los documentos. Tales son las de Privilegios, Reales Cédulas, Provisiones del Consejo, Cartas de los Reyes a Madrid, etc.»* [Domingo Palacio, 1875, p. 48].

Con la seguridad de que Carmen Cayetano nos aclarará pronto estas cuestiones, parece por lo tanto que las entradas por las que se agrupó la documentación madrileña fueron numerosísimas, 490, encontrándose entre ellas la denominación de cada uno de los bienes inmuebles de los que era propietaria la ciudad, lo que ya de por sí explicaría ese elevado número. Aún así no faltaban clasificaciones por series tipológicas, patentes en los ejemplos expuestos por el propio Timoteo Domingo Palacio. Un poco de orden intentó poner en todo ello Facundo Porras Huidobro, en 1838, como más adelante veremos, pero ahora debemos detenernos en los criterios seguidos en el siglo XVIII en otras poblaciones castellanas.

El trabajo de Juan Gregorio García Ovalle en el archivo municipal de Astorga, entre 1722 y 1725, consistió en repartir *«los papeles por sus cajones en donde tocaban y a donde venían concernientes cada uno dispuestos en los legajos y anotación en cada un instrumento de lo que es y su número»* [Martín Fuertes, 1980, p. 14]. En el Real Despacho dado el 24 de diciembre de 1728 para el buen gobierno de la villa de Vallecas se especifica que el archivista realizaría el registro de todos sus documentos *«con distinción y curiosidad para hallarlos fácilmente»*. En concreto los criterios seguidos nos son en parte conocidos gracias a conservarse los viejos cartones que fueron utilizados para enlegajar los documentos, y tienen gran similitud con los recogidos en el índice de 1695. Algunas agrupaciones son las siguientes:

VALLECAS, 1728

Legajo 1º.- Autos que tiene este lugar

Legajo 2º.- De los acuerdos y aprobación de elecciones, y decretos y declaraciones y donativos y diligencias y depósitos y aranceles.

...

Legajo 7º.- De instrucciones y pragmáticas...

...

Legajo 10º.- De los privilegios y juros...

Legajo 11.- De provisiones...

Legajo 12.- De diferentes cartas de pago...

Legajo 13.- De testimonios que hay en este lugar

Legajo 14.- De repartimientos y ratificaciones, relaciones, razones, títulos y sentencias.

...

Legajo 17.- Libramientos de alcabalas...

Legajo 18.- De cartas de pago del trigo, cebada...

Legajo 19.- De cartas de pago del censo de Toledo...

...

Fuente: Mateu Llopis, 1945, p. 95-96

Los siguientes legajos, hasta el 28, eran también de cartas de pago. Como vemos la tipología ha condicionado la formación de las series, y éstas a su vez siguen una ordenación predominantemente alfabética, de autos a repartimientos.

El archivo de Béjar fue organizado en 1735 por Mateo Díez Oliva, en dieciséis «*clases*» y cada una de ellas en varios «*números*», con arreglo a la siguiente estructura:

BÉJAR, 1735

1ª.- De fueros y leyes

2ª.- De franquezas

3ª.- De fieles y sus derechos

4ª.- De portazgos

5ª.- Del servicio y montazgo

6ª.- De mestas

- 7^a.- De pechos
- 8^a.- De la sal
- 9^a.- De ejecutorias y pleitos
- 10^a.- De términos y pastos
- 11^a.- De vecindades
- 12^a.- De ordenanzas
- 13^a.- De dehesas, ejidos, baldíos
- 14^a.- Compras de hacienda
- 15^a.- De censos redimidos
- 16^a.- De patronatos

Fuente: Barrios García y Martín Expósito, 1986, p. 199-210

Claramente la documentación estaba agrupada por materias, con escasa presencia de las series tipológicas. Es uno de los ejemplos más tempranos en la utilización de este sistema en archivos municipales de poblaciones medianas o pequeñas, que contrasta además con el que por entonces se utilizó para agrupar la documentación del archivo de la casa de la tierra de Béjar, constituido en el siglo XVIII por tan solo ocho legajos. De nuevo aquí se prefirió la distinción por series tipológicas, así el legajo quinto contenía veredas y órdenes y el octavo repartimientos de débitos reales, por poner algún ejemplo [Barrios García y Martín Expósito, 1986, p. 245-250].

En 1735, Antonio Díaz Canseco terminaba también el trabajo de organización del archivo secreto de Toledo, siguiendo el mismo sistema utilizado en la segunda mitad del siglo XVI. La documentación se guardaba en doce cajones y dos alacenas, unos y otras estaban a su vez divididos en legajos, en un número variable que iba de dos a nueve. La clasificación efectuada en el siglo XVI condicionó la labor de Canseco que se apartó aún más de la formación de series e inició sus descripciones con «*trata de...*», «*papeles de...*», «*como los...*», «*sobre...*», «*de la...*», etc. De su trabajo escribió Luis Rodríguez Miguel, en 1877, que «*merecería el dictado de obra perfecta en su género, si en vez de esa división por legajos, iniciara además la de las materias, si bien es verdad, que algo se deja traslucir de esta idea cuando en la alacena primera todos los legajos contienen documentos relativos a privilegios e inmunidades*». Un examen de las entradas que permiten identificar el contenido de cada legajo nos pone de manifiesto cuán lejos se encontraba Toledo de las series tipológicas a la hora de agrupar los documentos de su archivo. En el cajón segundo, el legajo primero se destinaba a «*Papeles con la Hermandad Vieja de esta ciudad*», el segundo a los «*alcaldes mayores, de alzadas y ordinarios de Toledo*», el tercero a los «*señores fieles del Juzgado*», el cuarto al «*cabildo*

de señores jurados», el quinto a los «*fieles ejecutores*» y el sexto y último a «*diferentes facultades para tomar dinero a censo*». Algunos documentos contemplados en el inventario de la segunda mitad del siglo XVI no se recogen en éste de 1735 porque fueron sacados del archivo secreto y conservados en otras partes del archivo, dado que todavía actualmente se pueden examinar en ese centro, por contra, además de documentos especialmente relevantes recibidos o producidos por la ciudad en ese período, fueron incorporados al archivo otros procedentes de la escribanía mayor, como las ejecutorias de hidalguías, que ya se encontraban en el ayuntamiento en el siglo XVI.

En 1740 concluía Martín de Uribe el inventario del archivo municipal de San Sebastián. Estaba entonces constituido por 1.024 documentos guardados en 54 legajos, anotando además la existencia de otros 209 legajos y 576 libros que no describe. Ocupaban un total de cinco armarios, formados cada uno de ellos por varios cajones, distinguidos por la letra del alfabeto. Su contenido era el siguiente:

SAN SEBASTIAN, 1740

Armario Primero

- A.- Privilegios reales**
- B.- Varios papeles importantes**
- C.- Ejecutorias reales**
- D.- Ejecutorias reales**
- E.- Ejecutorias reales**
- F.- Ejecutorias reales**
- G.- Cédulas reales**
- H.- Provisiones reales**
- I.- Ordenanzas reales**
- J.- Sentencias y otros**
- K.- Diferentes papeles de alojamientos**
- L.- Amojonamientos, visitas y otras coas**
- M.- Escrituras y otros**
- N.- Informes en derecho**
- P.- Pleitos**
- Q.- Pareceres e inventarios. Libros de razones de acuerdos**
- R.- Pleitos viejos y papeles inútiles**
- S.- Pleitos viejos y papeles inútiles**
- T.- Pleitos viejos y papeles inútiles**
- V.- Pleitos viejos y papeles inútiles**
- X.- Pleitos viejos y papeles inútiles**

Armario Segundo

Libranzas, cartas y licencias

Armario Tercero

Registros de acuerdos, libros de cuentas y de copias de privilegios

Armario Cuarto

Registros de juntas de la provincia de Guipúzcoa, y libros de lonja y peso real

Armario Quinto

Libranzas, cartas y licencias

Fuente: Banus Aguirre, 1986, p. 11-12 y 129-269

Los legajos que formaban cada uno de estos cajones llevaban una ordenación numérica, al igual que los documentos que integraban cada legajo. De tal forma que, por ejemplo, el cajón G dedicado a conservar las cédulas reales estaba formado por dos legajos. El primero contenía 140 documentos y el segundo 115. La signatura de cualquiera de ellos se correspondía con una letra y dos números. El documento G/1/120, era el número 120 del legajo primero del cajón G.

Los criterios de clasificación seguidos por Martín de Uribe son bien distintos de los utilizados en Béjar o en Toledo por esos años, dado que son más propios de la Baja Edad Media que del siglo XVIII. Las series tipológicas, no siempre bien constituidas, eran las agrupaciones básicas del archivo de San Sebastián. En las ordenanzas de esta ciudad de 1758 se contemplan algunos capítulos relacionados con la organización de la documentación. En los números XXVIII y XXIX se establece que los registros de ciudad, libros que se formaban todos los años con los acuerdos, ordenes reales, cartas y otros documentos, debían llevar índices, poniendo además «*en las márgenes de las hojas un breve trassunto de lo que trata*». En el cap. XXXI se especifica que las cédulas, ordenes reales y de tribunales se separarían en adelante, poniendo en ellas al final de cada año una cubierta de pergamino, por lo tanto ya no irían incluidas en los registros.

En 1750 culminaba Juan Antonio Criado Valera el inventario del archivo municipal de Cáceres. En realidad sólo describió 504 del total de sus documentos, los que según su parecer eran de más interés para la villa. Los agrupó en 22 secciones «*con arreglo a su categoría diplomática*» [Floriano Cumbreño,

1934, p. 11]. Tres años después hacia lo propio fray Vicente Velázquez de Figueroa en el archivo municipal de Sepúlveda. Los documentos fueron instalados en seis cajones, los cuatro primeros y el último divididos en legajos. Entre otras tareas agrupó y cosió los que se referían «a un mismo asunto o materia». Esta labor todavía era de utilidad en 1857 [Sáez Sánchez, 1956, p. XXIII].

La composición de la documentación del archivo municipal de Orense efectuada en 1761 tendrá una vigencia aún mayor pues O. Gallego escribía en 1981 que «*en buena medida aún pervive*». En contra de los criterios seguidos en otros muchos ayuntamientos, el de Orense decidió no utilizar la «*tabla havezedario*» porque suponía mucho trabajo y gasto, y además «*para buscar los documentos era necesario leer toda su informe tabla*». Para resolver esta objeción bastaba con realizar índices. Aún así la tarea realizada consistió en reunir las actas medievales, en anotar en las hojas de guarda de los libros el contenido de sus disposiciones más importantes, aunque sin referencia a su folio, y en formar mazos de escrituras sueltas por años, con sus respectivos índices [Gallego Domínguez, 1981, p. 193]. Hubo por lo tanto ordenación, pero no clasificación.

El 1 de diciembre de 1766, aprobaba el Consejo Real el «*Método que se deberá practicar desde aquí en adelante en orden a los libros de Ayuntamientos, sus borradores, modos de enlegajar, custodia de ellos, así en el Archivo como en la Escribanía...*» de la ciudad de Burgos [BURGOS, 1766]. En este texto se especifica la forma de realizar los libros de acuerdos de su ayuntamiento y sus borradores, que debían conservarse en el archivo una vez terminados. Estos libros debían recoger en los márgenes de sus hojas el «*sustancial contenido en cada capítulo*», y no debía haber espacios en blanco entre cada sesión de ayuntamiento. Los memoriales, informes, cartas y declaraciones que se presentaran en él debían recoger lo acordado sobre ellos en su margen, con la fecha del acuerdo, formando con todos legajos anuales, que se podrían hallar fácilmente utilizando los propios libros de acuerdos como referencia. También debían llevarse libros copiadores de las cartas y representaciones remitidas por la ciudad y libros de acuerdos y deliberaciones del Juzgado de Fieles, incluyendo las posturas. Además se aclara el contenido de los expedientes de remates, de las cuentas de contribuciones, y se especifican otras atribuciones del escribano de la ciudad.

Este texto es muy interesante al regular pormenorizadamente las obligaciones del escribano municipal de Burgos con respecto a determinadas series documentales, y por establecer criterios de ordenación y de conservación.

La labor de organización del archivo municipal de Carmona, realizada en 1779 por José Romero y Ayala, consistió simplemente en «*enlegajar y etiquetar por separado los documentos útiles e inútiles, catalogando parte de*

los más antiguos». Nada se nos dice acerca de la formación de agrupaciones documentales. En esta línea debemos mencionar el trabajo desarrollado por Juan Agustín de Názara y Castro en el archivo de Ribadavia, a mediados del siglo XVIII, dado que se limitó a reunir los papeles sueltos que encontró en el archivo cosidiéndolos en varios libros, a los que dotó de índices. A veces respetó las series tipológicas, como en los libros de autos, pero en otras ocasiones se limitó a formar «series facticias, reuniendo en mazos documentos más o menos relacionados entre sí por su asunto, sin orden cronológico, siguiendo la tónica marcada por la organización del archivo del ayuntamiento de Orense en el año 1761» [Gallego Domínguez, 1988, p. 33].

En 1798 concluía el escribano Manuel Acha Patiño la «*coordinación, arreglo y formación del Archivo*» de La Coruña.

Durante las primeras décadas del siglo XIX se mantendrán criterios idénticos a los descritos anteriormente. El 16 de febrero de 1805 está firmado el «*Método que se presenta para el arreglo de los papeles de el Archivo de esta ciudad*» de León [Álvarez Álvarez y Martín Fuertes, 1986, p. 93]. El archivo de la localidad gaditana de San Fernando fue organizado en 1806. La documentación fue clasificada «*en parte por materias y en parte atendiendo a su tipología y, lo que nos parece de todo punto digno de reseñar, establece un orden cronológico*». Las agrupaciones que aparecen descritas en su inventario son las siguientes:

SAN FERNANDO, 1806

- 1.- Libros de acuerdos de Cabildo
- 2.- Expedientes de hidalguía y apéndice de papeles de hidalguía
- 3.- Reales órdenes
- 4.- Reales órdenes sobre vagos y expedientes de vagos
- 5.- Inventario de padrones
- 6.- Expedientes para exceptuarse de la quinta y expedientes de exenciones de quintas
- 7.- Ramos de hacimiento
- 8.- Carnicería
- 9.- Del Ramo de Menudo
- 10.- Aguardiente
- 11.- Nieve
- 12.- Ganado lanar
- 13.- Pozo de la villa
- 14.- Aceite
- 15.- Aduanilla y alhóndiga
- 16.- Panadería

- 17.- Tarimas y bancos de pescadería
- 18.- Cuentas de la fábrica de la iglesia
- 19.- Epidemias
- 20.- Cuentas de penas de cámara
- 21.- Gremio de cerrajeros
- 22.- Gremio de zapateros
- 23.- Papeles y expedientes relativos al Archivo
- 24.- Inventario de la escribanía

Fuente: López Garrido, 1989, p. 13-14

Examinadas estas agrupaciones se observa que junto a series tipológicas claras aparecen otras relacionadas por su denominación con determinados bienes de propios (Pozo de la villa, Carnicería, Panadería, Aduanilla), con ciertos abastos (Aceite, Nieve, Aguardiente), con materias (Epidemia) o con instituciones (Gremio de cerrajeros y gremio de zapateros). Estas últimas así como las cuentas de la fábrica de la iglesia podían ser realmente fondos extramunicipales.

El Índice de la documentación del archivo municipal de Talavera de la Reina, realizado en 1817, es propiamente un registro topográfico de los 69 legajos que entonces se conservaban en su archivo, procedentes de distintas instituciones de la ciudad, no sólo del ayuntamiento. Sus redactores agruparon previamente la documentación constituyendo en muchos casos series tipológicas. Cada legajo iba identificado por una cartela, y los documentos que lo formaban solían ir numerados para facilitar su localización. Entre las leyendas de esas cartelas encontramos las siguientes denominaciones: expedientes de hidalguía, expedientes de licencias de poblamiento, alistamientos, expedientes de deslindes de términos y dehesas, ordenanzas, pleitos y expedientes sobre el puente y venta del Alberche, privilegios y reales facultades, provisiones reales, provisiones y sentencias de los arzobispos de Toledo, capitulaciones con los arzobispos, escrituras, concordias, pleitos, ejecutorias, autos y expedientes sobre diversos asuntos, etc.

Bastante menos coherencia se refleja en el inventario realizado en 1820 de la documentación del archivo de Carmona, dado que en él aparecen recogidos «*libros y legajos ordenados sin ningún criterio específico*». En el proyecto de ordenanzas de la villa de Écija, del año 1820, se señala que la documentación debía estar organizada «*por materias y años*». En el «*Plan en que se proponen los medios de evitar las faltas experimentadas hasta el presente y servirse la escribanía de Ayuntamiento*» de Tolosa, elaborado en 1819, se concretan los libros, en total dieciséis, que debía llevar el escribano, y se deta-

llan sus características. A la vez se indica que con los documentos relacionados con sus acuerdos se formarían legajos mensuales *«con su correspondiente título y ponerlos en el archivo de la villa, rubricados por el escribano, cuya norma vemos en los registros de Juntas y Diputaciones de esta provincia»* [TOLOSA, 1819].

Entre la constitución acertada de las series tipológicas, caso de Talavera, o la formación de relaciones de documentos sin una estructura predeterminada, caso de Carmona, cabía la constitución de agrupaciones más generales basadas en conceptos funcionales o de materias. De nuevo la ciudad de Madrid nos refleja ya iniciado el régimen liberal decimonónico el camino que se debía seguir en este sentido. Facundo Porras Huidobro planteó a finales de 1838 la formación de ocho secciones básicas, que a su vez se dividirían en clases. Esas secciones nos recuerdan por su número a las tablas que se venían utilizando en Sevilla desde 1626. Sus denominaciones eran las que a continuación se recogen:

MADRID, 1838

- 1.- Policía
- 2.- Beneficencia
- 3.- Obras
- 4.- Milicias
- 5.- Espectáculos
- 6.- Hacienda
- 7.- Gobierno
- 8.- Acuerdos

Fuente: Domingo Palacio, 1875, p. 55-56

Ya en 1830, en su *Disertación sobre Archivos y reglas de su coordinación*, publicada en Madrid, en la imprenta de León Amarita, había escrito que *«el archivero de una oficina o secretaría deberá de clasificar en grande sus expedientes, es decir, en las menos divisiones posibles, según los puntos capitales que se versen en ella, haciendo otras tantas secciones... y en una se incorporarán y abrazarán las cosas estraordinarias o indiferentes, a que no pueda darse título conocido y seguro...»*. Su método lo define como cronológico-alfabético, en oposición al que por entonces defendía F. Troche y Zúñiga y que denominaba cronológico-topográfico [Fernández Hidalgo y García Ruipérez, 1989, p. 206-208].

Si tuviéramos que señalar las características más comunes de todos estos procesos organizativos destacaríamos que se centran casi exclusivamente en la documentación conservada en el archivo del común o de los privilegios, abarcando un número de legajos que raramente supera el centenar, y un número de documentos generalmente inferior al millar. Los instrumentos resultantes, es decir, los inventarios, tuvieron muy escasa difusión al permanecer inéditos la casi totalidad de ellos, como más adelante veremos. Esto y la composición de las comisiones encargadas de su realización favoreció la falta de uniformidad y los particularismos. Aún así los ejemplos aportados demuestran que junto con las agrupaciones tipológicas se fueron abriendo paso ya incluso en el siglo XV, y aún más en los siglos siguientes, otras agrupaciones más cercanas a lo que hoy entendemos por materias, e incluso por funciones, sobre todo en las poblaciones más importantes. En las pequeñas localidades, los pocos documentos conservados no fueron objeto de agrupaciones lógicas, dado que para su localización bastaba con formar simples relaciones del contenido de los legajos o cajones. Y a veces, ni eso. El estudio de otros instrumentos descriptivos conservados, y que permanecen inéditos, puede contribuir a apoyar esta reflexión o modificarla.

Formada una agrupación, los documentos que la constituían se distinguían por un número (arábigo, y a veces romano) o más raramente por una letra. En Ciudad Real, en 1595, los documentos fueron repartidos en los diferentes legajos *«poniendo en cada uno su número para que con más facilidad se halle cualquiera papel que se quisiese buscar»* [Bernabeu Novalbos, 1952, p. 9]. Lo mismo ocurrió en León, en 1561 [Martín Fuertes y Álvarez Álvarez, 1982, p. 21]. Incluso, en algunas ocasiones, podían ser identificados con las referencias concretas de su armario, estante, cajón, legajo y número, recogidas, como nota marginal, en alguna parte de la portadilla del documento. En Culla, en 1658, se prefirió adherir un pequeño papel con algunos de estos elementos, y así a *«cada document se li assigna una lletra o signe distintiu el que avui diríem la signatura, la qual encara es conserva en alguns casos mitjançant un paperet adherit a l'extrem del pergamí»* [Rabassa Vaquer, Barrera Aymerich y Pérez Lobo, 1990, p. 16].

La ordenación numérica, utilizada como criterio localizador, fue la más usual durante el Antiguo Régimen. La numeración de los documentos seguía diferentes criterios. En algunos archivos se numeraron correlativamente todos los documentos que lo formaban, con independencia de la agrupación física o lógica en la que estaban integrados. Es decir si tenía 600 documentos, se empezaba por el número 1 en el primer legajo y se terminaba con el número 600 en el último legajo, como ocurrió en Córdoba, en 1619. En otros casos se optó por numerar los documentos dentro de cada legajo desde el número 1 hasta el último, caso de Villamarchante, en 1769. Esto parece ser que fue lo más habi-

tual. En la mayoría de las ocasiones, la data de los documentos no se tuvo muy en cuenta a la hora de ordenar los que integraban cada serie documental. No obstante hay excepciones. El inventario del archivo municipal de Ciudad Real de 1595 recoge todos los documentos ordenados cronológicamente, desde 1254 hasta 1594.

2. La descripción: los inventarios y sus características

Los trabajos descritos culminaban con la redacción del correspondiente instrumento descriptivo. Como bien ha señalado B. Aguinalgalde, la aparición de los inventarios de documentos, en los siglos XIV y XV, obedece a un doble proceso, ya que por un lado son el resultado de la individualización del documento como elemento diferenciado en los inventarios generales de bienes habituales hasta entonces, y por otro responden a la necesidad de fijar por escrito la organización de los documentos, fruto de una mayor complejidad burocrática. Esos inventarios, según este autor, se caracterizan porque son el reflejo secuencial de la organización de los documentos; obligan a la creación de las firmas; preceden a una selección con arreglo a diferentes criterios; y se redactan en formato de libro o codex [Aguinalgalde, 1988, p. 78-80].

Para R. Planes los primeros inventarios de archivos municipales podemos encontrarlos ya en el siglo XIII. Muy a menudo los inventarios medievales son simples listas de documentos sin un orden aparente. *«A partir del segle XVI els inventaris són molt més abundants i guanyen en la seva factura, que tendeix a ésser més laboriosa. Es probablement al segle XVIII, emperò, quan els instruments de descripció assoleixen un major grau de perfecció i detall»* [Planes i Albets, 1992, p. 18].

Entre los redactores de estos inventarios, elaborados a lo largo del Antiguo Régimen, podemos encontrar *«verdaderos pioneros de la archivística»* española [Burón Castro, 1993, p. 9]. El examen pormenorizado de estos instrumentos descriptivos ayudará a calibrar en su verdadera dimensión las aportaciones realizadas desde el mundo local a esta ciencia.

Ya hemos llamado la atención sobre el hecho de que la obligación de elaborar inventarios no apareciera recogida en las pragmáticas de 1500 y 1501. Por contra si se establecerá esta necesidad en diferentes ordenanzas municipales. Un ejemplo temprano lo encontramos en las del concejo de Valencia de Alcántara del año 1489. Según ellas, la documentación debía conservarse en el arca *«por inventario e memorial»*. En las ordenanzas del señorío de Aguilar, aprobadas en 1519, se especifica que dentro de su arca debía haber inventario *«de todos los bienes... y de todas las escripturas, sentençias, merçedes e privilegios...»* [Señorío de AGUILAR, 1519]. Lo mismo se establece en las normas de buen gobierno dictadas por un juez de residencia para Gata, en el

año de 1525. En concreto se señala que tengan «*en el dicho arca un ynventario de todas las escrituras que oviere dentro en su arca para que sepan las escrituras que ay*» [GATA, 1525]. Las de Santo Domingo de Silos van más allá al recoger las características físicas de ese inventario dado que obligan a «*comprar y compren un libro encuadernado de papel en blanco de diez manos en la qual hagan asentar al escrivano del concejo por memoria todas las escripturas que en la dicha arca estuvieren...*» [SANTO DOMINGO DE SILOS, 1536].

Con estos precedentes no nos debe extrañar que J. Castillo de Bovadilla recogiera en su *Política para Corregidores...*, aparecida en 1597, que estos oficiales debían cuidar de que existiera de las escrituras y privilegios de cada pueblo, un «*libro registro dellas por su abecedario, y con distinción y curiosidad, para hallarlas fácilmente*».

En las ordenanzas de Valladolid del año 1549 se obliga a elaborar a cada uno de los escribanos mayores de su ayuntamiento, en un plazo no superior a seis meses, «*un Inventario de las Escrituras, y Títulos, que esta Villa tiene de los bienes de sus propios*». Lo mismo se determina con respecto al mayordomo y al contador [VALLADOLID, 1549]. En las de la localidad extremeña de Villalba aprobadas ese mismo año se señala escuetamente al referirse a los libros y escrituras que «*aya ynventario dellas*» [VILLALBA, 1549].

En las ordenanzas de algunas poblaciones cántabras se recoge la necesidad de disponer de inventarios de los documentos de sus archivos. Las de Lon y Brez, del año 1594, establecen que las escrituras estuvieran en buena custodia «*en guarda inventariada ante el escribano, para que haya cuenta y razón cada y cuando*» [LON Y BREZ, 1594]. En las de Framá, del año 1617, se dedica un capítulo, en concreto el número 14, al inventario. Por él se obliga a los regidores a que «*hagan hacer inventario de todas las escrituras y papeles del concejo que estén en la dicha arca...*» [FRAMA, 1617]. Sin salir de Cantabria, en la localidad de Baro se reguló por sus ordenanzas del año 1620 que «*se haga inventario de los dichos papeles*» [BARO, 1620]. En las de Valderredible, del año 1646, se especificó que las actas de entrega de los papeles del archivo debía asentarlas el escribano «*haciendo inventario de ello de nuevo en el libro foliado que ha de estar en dicho archivo para dicho efecto*» [VALDERREDIBLE, 1646]. En el capítulo 54 de las ordenanzas de Enterrías, Vada y Dobarganes, aprobadas ya en 1744, se estableció que «*de dichos papeles se ha de hacer inventario*» [ENTERRÍAS, 1744]. Y en las de Armaño, de 1751, se menciona la existencia del inventario de los papeles de su archivo [ARMAÑO, 1751].

Saliendo ya de Cantabria, pero sin abandonar el siglo XVIII, podemos recoger otros ejemplos de normativa municipal referida a la necesidad de elaborar estos instrumentos descriptivos de los documentos de sus archivos. En el Real Despacho aprobado en 1728 para la villa de Vallecas se señala expre-

samente que el archivista debía hacer «registro de todos ellos por Abecedario o Índice, con distinción y curiosidad para hallarlos fácilmente» [VALLECAS, 1728]. En las ordenanzas de San Sebastián de 1758 se especifica que el archivista se haría cargo de la documentación por inventario, aumentando progresivamente el índice realizado años atrás por José de Beroiz y Cubiarre, y los vecinos matriculados elaborarían el inventario de los acuerdos y resoluciones contemplados en los registros, que llamaban «de ciudad» [SAN SEBASTIÁN, 1758].

Más interesante es la orden del Consejo Real por la que se regulan las obligaciones del archivero-contador de Santander dado que establece que este oficial, tras recibir la documentación por inventario, y tras proceder a su clasificación, e instalación, pondría al principio de cada legajo «un pliego en que se explique la clase de papeles que contiene para que pueda fácilmente encontrarse el que se necesite, [además]... formará si no lo hubiera, un libro en papel de marquilla, en que se sienten y anoten los que comprenda cada uno, con espresión de los asuntos de que tratan, y el número del legajo en que se hallasen colocados,...» [SANTANDER, 1797]. El Consejo plantea aquí un programa descriptivo más amplio dado que junto con el inventario, del que explica cuál debe ser su contenido, establece que en cada legajo haya una relación o índice recogiendo los documentos que lo forman. Inventarios realizados en el siglo XVIII siguen este esquema.

Todos los ejemplos apuntados hasta ahora se corresponden con municipios de la Corona de Castilla. En la de Aragón algunas ordenaciones hacen referencia a estos instrumentos descriptivos. En las del Valle de Arán, del año 1616, se señala la necesidad de realizar inventarios de las escrituras siempre que falleciese el rector de la parroquia, dado que era en los templos parroquiales donde se conservaba el archivo o arca con las escrituras públicas [VALLE DE ARÁN, 1616]. En las de Tarazona del año 1685 se obliga a los justicias, jurados y lugarteniente a hacer «Inventario, y Rúbrica de las escrituras, y papeles» [TARAZONA, 1685]. Y en las de Jaca de 1694, al referirse a las escrituras realizadas ante el Justicia, que debían guardarse todos los años en las casas de la ciudad, se señala que «aquellas mediante inventario sean puestas en el dicho lugar, y Archivo» [JACA, 1694].

La ciudad de Madrid adoptó diversas resoluciones a lo largo del siglo XVIII en relación con la descripción de su documentación por inventario. Un acuerdo de 16 de enero de 1716 estableció que todos los documentos que se fueran recogiendo para ingresarlos en el archivo «se vayan inventariando», y que además «en un libro, que se ha de formar, foliado y con su abecedario, se inventarien todos los papeles que se hallaren en él». Todavía, en 1717, entre las bases propuestas por uno de sus comisarios figura que con todos los documentos conservados en el archivo se debía realizar «un inventario general

formal por las clases de sus contestos, numerados con su índice, y con las demás circunstancias que parecieren convenientes a la mayor claridad». Años después, en la instrucción presentada ante el ayuntamiento de Madrid, en 1753, por Francisco Milla, se recoge la conveniencia de formar «*cuadernos con distinción de clases, legajos, instrumentos, números y fechas ... abriéndose por último dos libros maestros por orden alfabético con referencias a los cuadernos, y de éstos al legajo y estante donde se hallaren los expedientes*» [Domingo Palacio, 1875, p. 24-25 y 35]. Siguiendo esta línea el Consejo Real aprobó el 16 de septiembre de 1773 que «*se establecieran libros autorizados para los asientos de estos papeles...*». Aún más explícito será el reglamento de 1784. Por él el archivero debía continuar la «*formación del inventario general de todos los papeles, que existan y deban existir, y aumentando a él, el de todos los que se vayan entregando*». Seguiría con la formación del «*índice alfabético de todos los papeles*», y llevaría además «*libros formales para que sienten en ellos el recibo de todos estos papeles*» enviados por las oficinas mediante las correspondientes relaciones [MADRID, 1784].

Por lo señalado hasta ahora está claro que aunque las pragmáticas de los Reyes Católicos, de los años 1500 y 1501, no se refirieran a la necesidad de formar instrumentos descriptivos, la realización de inventarios sí se contempla en un buen número de ordenanzas municipales y en otras disposiciones aprobadas durante el Antiguo Régimen.

Es evidente que los procesos organizativos que llegaron a completarse quedaron reflejados en los inventarios, con independencia de que así se contemplara o no en alguna normativa. Estas relaciones de documentos, elaboradas con diferentes criterios, constituyen casi el único medio para valorar el trabajo realizado en los sucesivos intentos de «*arreglar y ordenar el archivo*». Algunos de ellos se remontan a la Edad Media. Los libros copiadores de privilegios medievales serían un precedente a tener en cuenta, si bien en ellos se recoge el texto completo.

Al parecer, y referido a Barcelona, se ha señalado que «*els documents que hi havia a la caixa estaven ja inventariats l'any 1371*» [Vinyoles, 1994-1995, p. 1.513]. En 1392, los consejeros de la ciudad acordaron encargar una nueva organización a varias personas, que debían realizar también el correspondiente inventario, al menos esto parece deducirse cuando en su memorial especifican que tenían que dar a «*cascun dels dits e dites privilegis e provisions, segon llur manera, cert entitolament e sots certes rubriques*» [BARCELONA, 1392]. Según A. Durán y Sanpere el archivo municipal de Cervera fue inventariado en el año 1406 [Planes i Albets, 1992, p. 20]. En Gerona se conservan dos inventarios del siglo XV, en concreto de 1459 y de 1484, realizados con motivo de los cambios de veguer o macero en la ciudad. Son propiamente inventarios de bienes muebles municipales, en los que junto con mate-

riales de obras, armas y otros muebles se describe someramente la documentación conservada en el archivo [Batlle i Prats, 1951, p. 180]. Las descripciones recogidas son del tipo «*item una altra gran caxa ab una clau plena de llibres de comptes de clavaris i altres*».

En Solsona, entre el primer cuarto del siglo XV y mediados del siglo XVI, fue redactado por varias manos el «*Capbreu abreyat e intitulat de totes cartes, privilegis e ordinations feytes e atorgades a la Universitat de la vil·la de Solsona...*». En total aparecen descritos 129 documentos, los primeros cincuenta y dos lo fueron antes del año 1422, numerados con cifras romanas, sin seguir una ordenación cronológica ni ningún otro criterio. Las descripciones son variadas, extensas o muy breves, siendo bastante frecuente que no se recoja la data de los documentos [Planes i Albets, 1993, p. 47 y 49]. Ejemplo de ellas serían las siguientes.

SOLSONA, 1412-1422

...

IIlum

Ítem, altra carta de sentència que com algun hom habitant en la vil·la de Solsona mor abintestat e ha alguns béns en alguns castells vehïnals, no deu pagar terz, la qual sentència donà en Ramon Canalda a XV del mes de gener any M.CCC.LXXXVIII, closa e subsignada per lo dit en Ramon de Canalda, jutge e comisari.

Item, per lo discret en Ramon de Ventayol·la, notari

\ IIIlum

Ítem, una altra carta de confirmatió de tots priviletgiis que la vil·la de Solsona ha feyta per lo senyor n'Uch, per la gràcia de Déu, vezcomte de Cardona.

E fon feyta a VIII del mes de agost any mill CCC.LVII e closa per lo discret en Guillem Martí, notari públich de Solsona

Vum

Ítem, una altra carta de la qüestió dels forns, que no·s poden venre sinó cascú a son depart.

E fon feyta la dita carta a XX del mes de noembre any M.CCC.LVI e closa per auctoritat del discret en Guim Martí, notari públich de la vil·la de Solsona.

...

Fuente: Planes i Albets, 1993, p. 125

En el Reino de Aragón los archivos municipales de Huesca y Teruel fueron descritos en el siglo XV. El inventario más antiguo del archivo de Huesca empezó a elaborarse hacia 1473 [Arco, 1911, p. 457]. Todavía actualmente se conserva en el archivo municipal de Teruel un inventario de sus escrituras datado también en ese siglo [Serrano González, 1995, p. 197].

En Castellón, por disposición de su consejo municipal, los jurados y síndico, entrantes y salientes, debían elaborar el inventario de los privilegios y provisiones de su archivo, ya al menos desde 1455 [Roca Travar, 1951, p. 209].

Por lo tanto, parece evidente que en algunas de las principales ciudades de la Corona de Aragón se realizaron descripciones de la documentación conservada en sus archivos en el siglo XV. Sin duda eran relaciones muy someras.

En la Corona de Castilla, otras ciudades tuvieron esa misma necesidad en ese siglo. Hasta ahora conocemos instrumentos descriptivos elaborados en Murcia, Burgos, Astorga o Madrid. En la primera ciudad se conservan inventarios del contenido del arca de los privilegios del siglo XIV [Martínez Carrillo, 1991, p. 17]. El más completo está incorporado en el primer libro de actas capitulares, datado en 1364-1365. Las descripciones que aparecen en él son del tipo:

MURCIA, 1364-1365

Diez privilegios rodados y sellados con sello de plomo, nueve de Alfonso X y uno de Fernando IV.

...

Seis cartas de Alfonso XI, con sello en la espalda, de diferentes tutores

...

Fuente: Martínez Carrillo, 1991, p. 18

Estos inventarios se elaboraban todos los años con motivo de la renovación del ayuntamiento, y se realizaron al menos hasta 1399.

Todavía más interés tiene el «*Índice de cartas y capítulos concedidos por los reyes a la ciudad de Murcia*», libro manuscrito cuyo documento más moderno reseñado es del año 1380, y que debió cumplimentarse entre esa fecha y 1428. Un examen de su contenido refleja que en su casi totalidad se limita a transcribir los índices de ocho libros copiadore de documentación conservados en el archivo de Murcia, empezando por el libro de privilegios de

cubiertas bermejas de Alfonso X, siguiendo por el libro de cartas de cubiertas verdes de Alfonso XI, hasta llegar al libro registro de los usos de Sevilla. Pero también describe documentos sueltos. Los que se conservaban en el arca de los pendones o de los privilegios, todos escritos sobre pergamino y sellados con sellos de plomo o cera, según este índice, son descritos de la siguiente manera:

MURCIA, 1380-1428

Item, previllejos de la feria

...

Item, carta a los castellers que non tomasen retoua

...

Item, carta del rey don Alfonso, padre del rey nuestro sennor, en razón que ningund mercader de Murçia que non pague portadgo en todos sus Reynos

...

Item, carta que los notarios públicos fagan las cartas por si

...

Item, carta de los casamientos que se hazen en otras tierras

...

Fuente: Martínez Carrillo, 1991, p. 66-68

Más adelante al describir los documentos del reinado de Enrique II, recoge asientos del tipo «*Carta de perdón de Ferrán Porçel, aguazil. A XXVIII cartas; ... Quaderno de las cortes de Toro;... Si robaren los merinos. A XLVI cartas;... En razón de los çensales. A XLVIII cartas;... Ordenamiento del Rey en razón de las monedas. A CI cartas...*» [Martínez Carrillo, 1991, p. 77-80].

Pocos años después, en 1433, debió elaborarse el «*libro de remembrança de todas las dichas cartas e privilegios e otras escripturas*» que se conservaban en el arca de la ciudad de Burgos, con la pretensión de que por ese libro «*se pudiesen saber las escrituras que en la dicha arca estavan, y el efecto dellas...*». Este registro también ha sido descrito como «*Sumario de los prebillejos y escrituras que están en el arca del concejo*» [Moratinos, 1985, p. 186]. Como ya sabemos, todos los documentos de ese arca fueron distribuidos en tres arcas más pequeñas según su tipología y contenido. En el proemio del libro becerro de Burgos se establece que cuando fuera necesario algún documento el interesado debía primero buscarlo en ese libro de remembranza «*e fallada, cate el mes, e el año en que se fizo, que está en el comienço de cada capítulo, e cate en el arca deste título las datas de las escripturas que están*

puestas en las espaldas de cada una dellas, e desta manera, la fallará luego syn trabajo, e syn rebolver, nin aun avrir otra escriptura, e sy por aventura non açertare en el título en que se avia de catar, que podría ser por el buscador no lo conjeturar bien, o por el ordenador non lo apropiar, que podría mas ser, busque el otro o otros títulos e cáte los por la manera sobredicha...» [Bonachía Hernando y Pardos Martínez, 1983, p. 13].

En 1447 se data el registro del arca del concejo de Astorga, realizado con motivo de su instalación en la iglesia de San Bartolomé. Entre las descripciones que se recogen en él se encuentran algunas como:

ASTORGA, 1447

Primeramente, un previllegio de los portajes, escripto en pergamino e sellado con un sello de plomo pendiente.

Iten ...

Iten otro quaderno de pergamino grande, en que están çiertos traslados de previllegios e sentençias de la dicha çibdat

Iten veynte e tres quadernos pequeños, todos cosidos e signados, en que está la pesquisa que se fizo sobre razón de términos por ... de Valladolid, bachiller.

Iten un enboltorio de estimación de cubas

Un enboltorio de escripturas de los judíos

...

Otras escripturas que pasaron entre el obispo don Sancho e el chantre Fernando García e el concejo, atadas en un enboltorio.

Una carta del rey para los lugares de la eglesia sobre los términos.

Fuente: Martín Fuertes, 1980, p. 18-19

Todavía en el año 1875, según manifestaba T. Domingo Palacio, se conservaba en el archivo de la villa de Madrid el inventario mandado realizar, en 1481, por el corregidor Rodrigo de Mercado [Domingo Palacio, 1875, p. 21]. En él se describen 94 documentos, desde el Fuero hasta varios privilegios de Enrique IV. Van ordenados cronológicamente, y en cada asiento descriptivo se recoge la fecha, la descripción material (papel, pergamino, sellos) y el resumen del contenido (productor, asunto y receptor). En 1514 se volvió a inventariar el contenido del arca de los privilegios de Madrid [Cayetano Martín, 1990 (c), p. 29].

A pesar de que los ejemplos apuntados son escasos, dado que son muy pocos los inventarios medievales publicados, podemos afirmar que la necesidad de elaborar relaciones de los documentos conservados en el arca del concejo empezó a manifestarse en la segunda mitad del siglo XIV en las principales ciudades de ambas Coronas. Las primeras descripciones, aparecidas en inventarios generales o específicos, son muy someras, limitándose a reseñar brevemente el contenido de los documentos con muy pocas palabras, y a veces su tipología, bien jurídica o diplomática. En ocasiones también se recoge el autor. El destinatario no era una información relevante dado que éste siempre sería el concejo o ayuntamiento. No se incluye casi nunca, al menos de forma completa, la data tópica y crónica. Ni hay referencias explícitas de localización.

En el inventario de Burgos la data es un elemento fundamental en la descripción, y como sistema de búsqueda, pero, entendemos, es un ejemplo interesante aunque poco común. Más general sería la situación descrita en el inventario de Astorga de 1447, dado que conforme avanza el siglo XV comienza a recogerse también la tradición documental (traslados, testimonios), el formato (cuaderno) o la materia escritoria (pergamino) pero nunca de una manera sistemática en todos los asientos descriptivos. Esta falta de uniformidad en la descripción será una constante en todos los instrumentos descriptivos elaborados en los archivos municipales durante el Antiguo Régimen. Como acabamos de ver en Astorga un asiento se utiliza indistintamente para describir una carta o veintitrés cuadernos. Evidentemente ya se producía una valoración de esa documentación, lo que se manifiesta en ese diferente tratamiento descriptivo.

A lo largo del siglo XVI muchos archivos municipales españoles van a disponer de inventarios de su documentación. En la Corona de Aragón conocemos los ejemplos de Cervera y Tortosa. La primera ciudad dispuso de un «*inventari dels privilegis*» ya en el año 1550 [Planes i Albets, 1992, p. 20]. El del archivo de Tortosa, redactado en 1574, es un libro de 309 folios, de los cuales 220 están escritos y el resto en blanco, para permitir nuevas inscripciones. Su texto con las descripciones va distribuido por cajones, en total 49, con arreglo a los criterios de clasificación ya comentados. Dentro de cada cajón la numeración de los documentos reseñados es correlativa, destacada al margen formando columna. En el dorso de los documentos se ha anotado también ese número para facilitar su búsqueda. Los asientos de este instrumento descriptivo, dentro de cada cajón, no siguen un orden cronológico. Comienzan con el número de orden, seguido de la tipología diplomática cuando no del formato, la tradición documental, si no es original, la materia escritoria, si es pergamino y no siempre, el autor, el asunto y por último la fecha, aunque esto puede variar. El destinatario por su obviaidad se refleja raramente. Veamos algunos ejemplos:

TORTOSA, 1574

Calaix de Host y Cavalcada Primo

1. *Un quern en paper ab una cuberta de pregami que és convocaçons de host y cavalcada per los reys de Aragó a diversses çitats de Catalunya y senyaladament a Tortosa y diversse respostes y qüestions de aquelles.*

2. *Un trellat en full de paper ben vell y arnat, lo qual conté una bella articulassió sobre la deffensió de la çitutat de Tortosa sobre la immunitat y exempció que té de host y cavalcada la çitutat de Tortosa, die jovis XV januarii MCCCLXVIII presentada al rey en Barçelona.*

3. *Un proçes fet en Vilafranca que és de testimonis rebuts sobre la qüestió de host y cavalcada, en lo any MCCCLXXXVI.*

4. *Carta en pregami que és trellat autèntich de una lletra e provisió del rey en Martí dirigida al veguer y sotsveguer de Tortosa manant a aquells que, fins...*

Fuente: Massip i Fonollosa, 1987, p. 70

De la Corona de Castilla conocemos más ejemplos de inventarios realizados en el siglo XVI. En Valladolid, en 1510, se manda hacer un «*Libro e Memoryal de los Previllejos e Alvalaes e Çedulas y otras escrituras que están en el Arca de Sant Miguel e en las del Consistorio desta villa*» [Pino Rebolledo, 1991, p. 18-19]. En 1513 se ordenó hacer lo propio en Burgos [Díez Sanz, 1984, p. 19]. En 1519 le tocó el turno al archivo municipal de Sevilla con la redacción del libro-abecedario que hoy se conserva en la Biblioteca Colombina [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 14]. En 1520 se data la «*Razón de papeles*» relativa al archivo de la villa de Madrid [Domingo Palacio, 1875, p. 21]. El Inventario de los fueros, privilegios y provisiones del archivo municipal de Oviedo fue elaborado en 1536 por el escribano San Juan de Ortiz [Villa González-Río, 1978, p. XVII].

El inventario sevillano de 1519 fue actualizado en 1538 por Gonzalo de Baeza. El instrumento resultante ha sido descrito como una «*mera relación topográfica de documentos —pues ni siquiera suele indicar las fechas en la mayoría de sus asientos—*» [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 14], si bien la documentación ya aparece dividida en cajones y legajos. Con su elaboración la corporación municipal sevillana pretendía que «*cada que quierán ver algún prebilegio o otra escriptura en el libro [=inventario] hallarán dónde e cómo está, para que sin abrir otro cajón ni acudir a otra parte vayan derechos*

adonde está puesto, conforme a la horden y quenta del libro» [Fernández Gómez, 1995 (c), p. 78, nota 91].

Todavía en 1871 se conservaba en Fuenterrabía el índice en que se reseñaban todos los documentos que formaban parte de su archivo en 1539 [Vignau Ballester, 1871, p. 258]. El primer inventario del que se tiene noticia realizado en Sepúlveda está datado en 1547. La descripción de los documentos reflejados en él no es muy extensa, aunque casi siempre se indica, además de su contenido, la fecha, la materia escritoria o la existencia de sellos [Sáez Sánchez, 1956, p. XXII]. Al parecer en Logroño también hay índices de documentos desde el año 1548. Un año después se realizó el inventario del archivo municipal de Jaén, constituido entonces por 399 documentos, al menos ese es el número de asientos que recoge, distribuidos en once talegones. Entre las descripciones aportadas, que en bastantes ocasiones recogen la data completa, podemos ver:

JAÉN, 1549

En el talegón primero

Un privilegio del rey don Enrique de los ofiçios de alcaldías e alguaziladgo e juraderías e personería del conçejo e excrivanías públicas del número e otras libertades siguientes. Es su fecha a treze de henero de mil e quatroçientos e treze años, que se contienen las merçedes siguientes:...

Un privilegio de confirmación del señor rey don Enrique en que su alteza confirma el dicho privilegio de los dichos oficios e merçedes suso dichas. Fecha a veinte de abril de mil e trezientos e noventa y un años.

Un privilegio del señor rey don Enrique de quando en tiempo del rey don Pedro fue destruyda esta çiudad de Jaén por los moros, y el rey don Enrique la hizo franca de alcavales y de todos derechos por que se poblase. Es fecha a veinte de abril de mil y trezientos y noventa y un años.

...

Fuente: Rodríguez Molina, 1982, p. 47-48

En la segunda mitad del siglo XVI se realizaron inventarios en los archivos municipales de Zamora, Orense, Toledo, León, Los Arcos, San Sebastián, Burgos, Valladolid, Ciudad Real y Cáceres, entre otras poblaciones. Los 667 documentos que formaban el archivo municipal de Zamora en 1553 están descritos en la «*Relación y memoria de las escrituras y procesos*

que se pusieron en los Archivos de la ciudad de Zamora, que están en las Casas del Consistorio de ella...» [Pescador del Hoyo, 1948, p. 6]. Dos años después, en 1555, el concejo de Orense ordenó poner los documentos en un arca «por recuento ynbentario para que en todo tienpo aya dellos cuenta e recado». Debió ser un simple registro de escrituras, con una descripción sumaria, sin referencia alguna a su colocación [Gallego Domínguez, 1981, p. 191-192].

Bien distinto es el plan descriptivo trazado hacia 1560 en Toledo. El inventario, conocido como «*Becerro antiguo*» consta de 435 páginas, algunas de ellas en blanco al final de cada cajón. Su título es el de «*Memorial de los privilegios y scripturas que esta muy noble y muy leal ciudad de Toledo tiene en los sus Archivos*» [Sierra Corella, 1931, p. 10]. Se inicia con un breve índice del contenido de cada cajón y alacena, para a continuación recoger los documentos que los integran con descripciones como:

TOLEDO, 1560

5. *Carta del Rey don Enrique, fecha en Madrid año de MCCCCLXIII, para que Sancho de Padilla no haga una torre que començó en el lugar de Maxcaraque ni passe adelante en la obra.*

6. *Una provissión de los Reyes Católicos, fecha en el año de MCCCCLXXVII, que es commisión a Gómez Manrrique, corregidor de Toledo, para que no consienta que se labre la dicha fortaleza de Maxcaraque.*

7. *Otra cédula de los Reyes Católicos, fecha el dicho año, para que Gómez Manrrique, corregidor de Toledo, haga derribar la dicha torre que el clavero de Calatrava y los hijos de Sancho de Padilla hazien en Maxcaraque.*

...

11. *Una provissión del Consejo para que Toledo enbie ensequimiento de una appellaçión que Hernán dalvarez interpuso a cierta sentencia que el juez de términos dio contra él sobre la jurisdicción de Mançaneque.*

Fuente: AMT, Archivo Secreto, *Libro Becerro*, pág. 58-59

Como vemos además del número de orden dentro de cada cajón (signatura) se recoge la tipología diplomática, el autor, la data (año, y a veces también el lugar) y el contenido.

El archivo municipal de León fue inventariado en 1561. El libro resultante, en folio mayor y encuadernado en piel, lleva por título el de *«Inbentario e memoria de las escrituras desta çidad. Començado a façer por el muy mag-nífico señor don Juan Çapata de Cárdenas, corregidor desta çidad, e Bernaldo Ramírez, regidor della»*. Se inicia con el acuerdo para su redacción, y continúa con una breve descripción del contenido de los documentos, generalmente sin fecha, asignando a cada uno su respectivo número de orden, utilizando la numeración romana. Este número se recogió también en los diferentes documentos descritos para facilitar su localización e identificación [Martín Fuertes y Álvarez Álvarez, 1982, p. 21]. En ese siglo XVI se realizaron además relaciones parciales de documentos de este archivo [Álvarez Álvarez y Martín Fuertes, 1986, p. 92].

En la localidad navarra de Los Arcos el primer inventario conocido está datado en el año 1570. Sirvió para reflejar el contenido de 53 documentos [Pastor Abaigar, 1993, p. 197-198].

Todavía hoy se conserva el minucioso inventario realizado por Luis Cruzat de los 226 documentos que formaban en 1581 el archivo municipal de San Sebastián. Fue titulado como *«Inventario de los papeles que la ciudad de San Sebastián tiene en su Archivo, formado por Luis de Cruzat»*. Lo primero que en él se recoge es la explicación dada por el propio autor sobre en qué había consistido su trabajo, continúa con la tabla o índice por cajones, para pasar ya a describir los documentos que forman cada uno de ellos, sin seguir un orden cronológico. Las descripciones varían notablemente en su extensión, desde más de una página hasta cuatro líneas. De casi todos se recoge la fecha, el tipo y tradición documental, el autor, el destinatario, el contenido y a veces algún carácter externo (sello) [Banus Aguirre, 1986, p. 21-25].

Entre 1586 y 1592 fue organizado e inventariado el archivo municipal de Burgos por Andrés de Larrea [Díez Sanz, 1984, p. 27-28]. En 1588 debió ser realizado un índice de los papeles del archivo de Valladolid [Pino Rebolledo, 1991, p. 28]. El inventario del archivo municipal de Ciudad Real fue elaborado en el año 1595. Su corregidor había ordenado que se utilizara un libro grande *«con abecedario de las dichas escrituras para que con facilidad se hagan y en él se asienten las que más obieren»* [Bernabeu Novalbos, 1952, p. 10]. Los documentos reflejados están ordenados cronológicamente, desde 1254 a 1597, sin recoger referencias relativas a cajones o legajos.

Hacia 1580 fue redactado el *«Memorial de todos los libros del Ayuntamiento donde se escriben los Cabildos y de los demás que se hallaron en el arca grande donde estaban los papeles desta çidad rreal»* [Bernabeu Novalbos, 1952, p. 95]. En él aparecen descritos 73 libros, constituyendo un ejemplo de inventario parcial, de los que ya hemos mencionado precedentes.

A finales del siglo XVI o principios del siglo XVII pueden datarse tanto el «*Memorial de las Provisiones, Previlégios, Cédulas Reales y scripturas de la villa de Cáceres que estén en su archivo*», como el «*Catálogo de Privilegios, Provisiones, compras y títulos que la villa de Cáceres tiene en su Archivo*». El primero es un cuaderno de veinte hojas en el que los documentos descritos carecen de fecha; y el segundo es otro cuaderno de once folios con idéntica estructura en el que se refleja el contenido de 353 documentos [Floriano Cumbreño, 1934, p. 11].

A la vista de los ejemplos apuntados podemos señalar que algunas de las principales ciudades españolas pudieron ya disponer en el siglo XVI de importantes instrumentos descriptivos en los que se reflejaba el contenido de un número variable, aunque reducido, de documentos, que por entonces formaban el archivo del común o de los privilegios. Estos inventarios se plasman en libros de gran tamaño, que suelen tener al principio un índice o tabla de su contenido, si existe previamente algún criterio organizador. Después recogen los asientos descriptivos, generalmente documento a documento. De su examen se desprende que no existe uniformidad en su extensión, ni sistematización en su contenido, faltando a veces elementos claves como la data o la signatura. No obstante, estamos convencidos de que los datos aportados en estos inventarios eran suficientes para localizar los documentos por las autoridades municipales y por los escribanos, es decir respondían a las necesidades de los posibles y tal vez únicos usuarios directos.

Esta situación se mantuvo a lo largo del siglo XVII. En el ámbito catalán conocemos los inventarios realizados en ese período en Manresa, Tarragona, Cervera y Solsona. En 1611, el consejo municipal de Manresa ordenó «*fer un llibre del contengut en dit archiu per ordre alfabetich*». El instrumento resultante es descrito años después como «*Repertori de tot lo contengut en los calaixos... que serveix de sumari de ditas escripturas y de rúbrica per servir-se de ellas*» [Gasol, 1990, p. 9]. En 1683 se elaborará un «*Repertori...*» del archivo municipal de Tarragona, y también en el siglo XVII debió redactarse una «*rúbrica*» de la escribanía de Cervera [Planes i Albets, 1992, p. 20].

La construcción de una nueva casa de la ciudad en Solsona, con el consiguiente traslado del archivo, motivó la realización entre 1685 y 1687 del «*Index dels papers són en lo Arxiu de la Ciutat de Solsona*». Muy posiblemente fue realizado por tres notarios de la localidad. En ese índice la documentación está distribuida en quince grupos, cada uno de los cuales se identifica con una letra mayúscula (A, B, C...), que a su vez se corresponden con un cajón o con un estante del armario. Dentro de cada grupo, los documentos tienen asignado un número arábigo correlativo, por lo que su signatura de localización es alfanumérica, formada por la combinación de una letra y un número. En total aparecen descritos 136 documentos, constatando, «*que*

no hi hagué un criteri general clar a l'hora de classificar i descriure el fons», prevaleciendo criterios diversos combinados arbitrariamente [Planes i Albets, 1993, p. 62]. Ejemplos de estas descripciones serían las siguientes:

SOLSONA, 1685-1687

[Calaix] A

Número 1:

Llibre de resolucions de Consell començat en lo any 1546 y acabat en lo any 1569.

Número 2:

Llibre de comptes de la administració de l'hospital de pobres començat en lo any 1554 y acabat en lo any 1571.

...

[Calaix] G

Número 3:

200 lliures. Solans.

A 21 de janer 1530, ab àpoca rebuda en poder de Miquel Jutglar, notari, dita Universitat quità un censal de preu 200 lliures que havie creat a Joan Solans, mercader de la vila de Oliana, ab acte rebut per lo notari públich y comú de la vila de Solsona als 3 de setembre de 1529.

...

[Calaix] H

Número 3:

Testament de Guillem Morages, ab lo qual disposà que fossen donats 5 sous quiscun any, en lo dia de divendres sant, a la almoyna del drap dels pobres, assignats sobre los molins del riu de Cardoner, en lo terme del castella de Olius; en poder de Berenguer de Vilar, tertio kalendas juny 1281.

...

[Calaix] O

Llibres y comptes de la taula de l'any 1682, 1683 y 1684

Fuente: Planes i Albets, 1993, p. 155, 157, 172 y 199

En el Reino de Aragón, y sin abandonar el siglo XVII, debemos mencionar los instrumentos descriptivos realizados en Tarazona, Huesca y Almudevar. El de Tarazona es un libro de 197 folios en pergamino que lleva por título el de «*Libro y sumario de los derechos y escripturas que la ciudad de Tarazona tiene en los lugares circunvecinos y de los privilegios y escripturas*

que en el Archivo se hallaron en 1618» [Jiménez Catalán, 1925, p. 558]. El de Huesca ofrece la particularidad de que fue uno de los pocos inventarios publicados en la época, y lo hizo bajo la denominación de «*Indice o cabreo de todas las escrituras y papeles que la ciudad de Huesca tiene en su archivo*», apareciendo editado en 1648, por la imprenta oscense de Juan Nogués [Arco, 1911, p. 457]. Más pintoresco es el título que recibió el inventario del archivo municipal de Almudévar, realizado por el licenciado Jaime de la Fuente, en 1677. En su portada figura como «*Calendario moral donde contiene las declaraciones de todos los papeles y pergaminos tiene (sic) la villa de Almudévar*» [Rivas Palá, 1986, p. 63].

En el Reino de Valencia tenemos constancia de la realización de inventarios en el siglo XVII de los archivos municipales de Alcira, Culla y Alicante. Pedro Tamarit es el autor del índice del archivo de Alcira datado en 1618 [Chabas Llorens, 1889, p. III]. En 1658 se elaboró el «*Libre memorial en lo qual se contenen y están los calandaris de tots los privilegis, compres, concòrdies y demés actes que estas en lo Archiu de la vila de Culla en favor de les viles y lochs de la Tinensa de Culla*» [Rabassa Vaquer, Barrera Aymerich y Pérez Lobo, 1990, p. 16]. El primer inventario conocido del archivo municipal de Alicante es obra de Pedro Borrull, y se data en 1692. En este instrumento se recogen 288 asientos descriptivos, numerados correlativamente, sin remitir a legajos o cajones y con descripciones como:

ALICANTE, 1692

2. *Llibre de Privilegis de la Ciutat de Alacant.*

...

64. *Item altre llibre en quart intitulat llibre y memoria de les ventures dels fils de aigua pera lo any 1646 en 1647.*

65. *Item un lio ab diferentes manifests de aigua.*

...

Fuente: Martínez Morella, 1955, p. 47 y 49

Algunas poblaciones de la Corona de Castilla también organizaron y describieron sus archivos municipales en el siglo XVII. En 1605 se redactó uno de los inventarios del archivo municipal de Jerez de la Frontera [Orellana González, 1992, p. 92]. Miguel de Aristiguieta, nombrado archivero de San Sebastián en 1617, realizó tres inventarios de sus documentos [Banus Aguirre, 1986, p. 8]. La ciudad de Córdoba, al igual que haría poco después Huesca y más tarde Lorca, mandó publicar hacia 1616 su «*Indice y catálogo de todos los papeles del Archivo de la Ciudad de Córdoba*». En 1620 saldría también de una imprenta cordobesa el «*Inventario de los privilegios, executorias, cé-*

dulas, provisiones, testimonios y otras escrituras que los señores jurados de Córdoba tienen en su archivo de San Francisco» [Nieto Cumplido, 1978, p. 1].

En 1626 fue la ciudad de Sevilla la que dispuso de un nuevo inventario de su archivo, constituido entonces por 59 legajos [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 15]. En 1629 hizo lo propio la ciudad de Talavera de la Reina [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 91]. Y en 1630 se hizo un nuevo «*Abecedario*» del archivo municipal de Zamora, en el que se describieron unos 1.300 documentos [Pescador del Hoyo, 1948, p. 6]. Del inventario realizado en 1633 en Sepúlveda sólo conocemos que sus descripciones son muy esquemáticas [Sáez Sánchez, 1956, p. XXIII]. Todavía antes de terminar la primera mitad del siglo XVII se elaboró el inventario del archivo municipal de Ribadavia, que permanece inconcluso dado que sólo ocupa cuatro folios [Gallego Domínguez, 1988, p. 30].

Antonio de la Villa, clavero del archivo de Oviedo, fue encargado, en 1658, de realizar su inventario. En esta tarea debió ocuparse durante bastantes años, aunque el instrumento descriptivo resultante no se ha conservado [Villa González-Río, 1978, p. XIX]. En 1659, el escribano Francisco de Urbistondo redactó en un libro el inventario del archivo de Tolosa [Anguera, Juana y Orube, 1987, p. 350].

En esa segunda mitad del siglo XVII, también, se describió el archivo de Vallecas. F. Mateu Llopis pudo consultar, en 1945, los índices de 1676 y 1695. El primero lleva por título «*Abecedario de los papeles que tiene el lugar de Vallecas, con advertencia que donde estubiere esta K quiere decir cajón y donde estubiere esta L quiere decir legaxo y donde estubiere esta f quiere decir folio y donde estubiere esta n quiere dezir número fecha en Ballecas en el año 1676*». El de 1695 se intitula como «*Tabla por el orden del Alfabeto de los papeles que hay en el Archivo desde Lugar de Vallecas, fecha en el año de 1695*». Tabla también es la denominación utilizada al describir en 1692 los diferentes mazos en los que estaba agrupada la documentación de Orense [Gallego Domínguez, 1981, p. 192]. En 1695 se concluía un nuevo inventario del archivo municipal de Talavera de la Reina [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 94].

A lo largo del siglo XVIII bastantes más poblaciones tendrán necesidad de organizar e inventariar su documentación, debido al crecimiento de su patrimonio documental. Y este proceso afectará no sólo a las grandes ciudades sino también a localidades de tamaño medio.

En Cataluña, en ese siglo, fueron reorganizados e inventariados los archivos de Tárrega, Cervera, Palafrugell, Manresa, Lérida y Sabadell, entre otros [Planes i Albets, 1992, p. 21]. A ellos debemos unir Olot, Valle de Arán y Castellón de Ampurias. El inventario de Olot, recuperado recientemente,

está datado en el año 1704 [Mayans i Pluja, 1987 (b), p. 160]. Entre 1708 y 1847 fueron registrados documentos en el «*Index... o Memorial y Rúbrica de tots los Privilegis y demás actes y Escripturas que se tròban en lo Archiu de la Vall de Arán*» publicado por Manuel Abizanda Broto en 1944 [Planes i Albets, 1993, p. 49, nota 89].

En 1740, el ayuntamiento de Tárrega ordenó la realización de un inventario de los documentos guardados en la casa de la villa con resultados desconocidos [Gonzalvo i Bou, 1989, p. 164]. El de «*Castelló d'Empuries*», estudiado por A. Compte, es del año 1765 [Alberch i Fugueras, 1994, p. 529]. Y ya a finales del siglo XVIII se confeccionó el definitivo «*Libro índice general que contiene la numeración, fechas de día, mes y año, Señores Reyes y Autoridades concedentes, y una breve clara explicación de los Privilegios antiguos que tiene y debe gozar... el Común y la Universidad de la presente Illustre y Real Villa de Tárrega, y se hallan auténticos en el archivo comunal...*» [Gonzalvo i Bou, 1989, p. 164]. Por su título se deduce que los documentos van numerados y completamente datados, además de recoger la autoría y su contenido.

En el reino de Aragón fueron inventariados al menos los archivos de Zaragoza, Jaca, Alcañiz y Daroca. Pedro Bosque y Dorre es el autor del «*Índice 1º hecho y arreglado por Don ..., archivero de la Ilma. Ciudad de Zaragoza, siendo oficial de dicho Archivo D. Martín de Ocampo. Año 1772*». Este libro, encuadernado en piel con correas de cuero, consta de 309 folios, y se conserva todavía en el archivo de la ciudad de Zaragoza [González Miranda, 1981, p. 83]. No ocurre lo mismo con el índice de los documentos del archivo de Jaca, redactado en el siglo XVIII, que D.J. Buesa Conde no pudo localizar en 1986. También en aquel siglo se data el «*Índice de los documentos del Archivo Municipal de Alcañiz*», elaborado por Francisco López [Micolau Adell y Abos Castel, 1986, p. 107]. Y el «*Libro Cabreo donde están cabreados todos los privilegios y Scripturas pertenecientes a la Comunidad de Daroca. Van reglados por Almarios y caxones*» [Jiménez Catalán, 1925, p. 304].

En el Reino de Valencia describieron sus archivos en el siglo de las Luces tanto Alicante como Alcira, Castellón y Valencia, además de poblaciones más pequeñas como Segorbe o Villamarchante.

En Alicante se realizó un primer inventario en el año 1710, otro en 1749, y un tercero y más completo en 1772. Este último, obra de Vicente Segura, está dividido en cinco tomos, y se denomina «*Índice General*», completándose con un índice de remisiones para facilitar la búsqueda de la documentación, dado que los «*criterios por los que se guió Segura no fueron muy rigurosos*» [Paternina Bono, 1992, p. 53]. Los tres inventarios del siglo XVIII se conservan actualmente en el archivo municipal de Alicante. Del programa descriptivo realizado por Andrés Tinajero en el archivo de Valencia, entre

1729 y 1732, se conservan dos libros; el primero se denomina «*Índice de los Manuals de Consells y establiments*», y el segundo «*Catálogo de los restantes libros del Archivo, Clavería comuna, censals, Taula, etc*», que han merecido el calificativo de ser ambos «*algo deficientes*» [Mateu Llopis, 1953, p. 12].

En 1752, Miguel Fuertes y Jaime José Niñerola concluyeron el Índice del archivo municipal de Alcira. Uno de ellos era el escribano del ayuntamiento [Lairon Pla, 1995, p. 512].

El inventario del archivo municipal de Castellón es obra de José Mariano Ortiz, y fue redactado en 1763. Su título completo es el de «*Índice General de los Privilegios concedidos a esta villa de Castellón de la Plana desde su primitiva fundación o traslación hecha por el señor Rey don Jaime el Primero, llamado el Conquistador, assi de los de este monarca, como de todos los demás reyes sus sucesores que existen en este Archivo, arreglados según el orden cronológico de su concesión, separados en legajos a sus respectivos reinados y distinguidos con letras iniciales y números correspondientes*». Consta de 245 hojas, de las que sólo las 147 primeras están escritas [Roca Travar, 1951, p. 212].

Pocos años después le tocó el turno a la baronía de Villamarchante, localidad situada muy cerca de Cheste y Liria en Valencia. El resultado sería el «*Libro índice de todos los papeles de este Archivo de la varonía de Villamarchante mandado hacer y arreglar al Dr. Juan Sanchis, médico y fiel de fechos de la misma, por orden del Real y Supremo Consejo en este año de mil setecientos sesenta y nueve*» [Mateu Llopis, 1969, p. 66]. En los asientos descriptivos suele recogerse primero la tipología, luego el autor, el asunto y por último el año. El índice antiguo de los documentos del archivo municipal de Segorbe está incluido en el «*Libro de Memorias de la ciudad de Segorbe y original del Manual*», manuscrito datado también en el siglo XVIII [Andreu Valls, 1965, p. 33].

Al menos dos localidades de las Islas Baleares describieron sus archivos en el siglo XVIII. Nos referimos a Campanet y Alayor. En los libros de acuerdos de los años 1769 y 1778 de la población de Campanet se conservan sendos inventarios de su archivo municipal, con descripciones como:

CAMPANET, 1769

Primo deset llibres de catastres, ço es, deu sens plagamí, y set en plagamí, fins lo any Mil setcents y trenta, que es la ultima estimació se ha fete, y perço es el corrent.

Item, quinse llibres en plagamí de consells, y en alguns se troben inclusos alguns comptes, fins lo any Mil setcents y deset inclusive...

...

Item, dotse actes en plagamí, de differents coses, en un fardo.

...

Item, differents fardos de papers volants, com son alberans, cartes, ordes, lletres, cartes de pago, et alias, com es de veurer en dits fardos.

Item, un fardo de visindaris...

Fuente: Segura Salado, 1985, p. 446-447

Frente a descripciones exhaustivas, documento a documento, el inventario de Campanet se asemeja, salvando todas las distancias, a los instrumentos que actualmente describen series documentales. Lo interesante de este ejemplo, que no es el primero, se debe al hecho de constatar que ya en esa época se podía optar por una descripción más somera, sin que fuera necesario reseñar, uno por uno, todos los documentos.

El inventario del archivo municipal de Alayor fue concluido en el año 1799. Su título es el de «*Inventari de tots los Llibres, papers et alias que se encontrén arxivats en lo Arxiu de la Univd. de Alayor ... comensat als 6 Maig de 1799*». Algunas de las descripciones que en él aparecen son las siguientes:

ALAYOR, 1799

Item un Llibre vell mitx enquadernat, part arnat y illegible ahont se veuen algunas Sentencias

Item un Llibre de Receptors de blat, comensat en 1647 finit als 2 Abril 1658.

...

Item. 46 cédulas reynals de España

...

Item. Una partida de bandos de Governadors y Intendents del temps de España, y algunas Ordenances reynals.

...

Item. Dins lo armari gran, la divisió de baix es plena de fexets de polissas de entrada y ixida de totas las claverias.

...

Item. Dins un calaix del armari gran, duas copias de Privilegis de España y molts altres papers y actes en plegamí.

Item. Altre calaix en dit armari ahont se encontrén differents papers volants de importancia.

Fuente: Hernández Sanz, 1917, p. 227-231

Por lo tanto junto a asientos que describen un único documento (como ocurre con los libros), otros se utilizan para agrupaciones tipológicas (cédulas reales, bandos), o para agrupaciones físicas (cajones, partes de un armario) con descripciones mucho más someras e imprecisas. No hay referencias a signaturas; los documentos no van numerados y sólo a veces se recogen sus fechas, y su estado de conservación.

En las poblaciones de la Corona de Castilla podemos encontrar casos parecidos. En Sevilla, Astorga, Madrid, Béjar, Toledo, San Sebastián, Cáceres, Sepúlveda, Orense, Oviedo, Burgos y Estella, entre otras poblaciones, se realizaron inventarios de los documentos de sus archivos. En Sevilla se elaboraron dos generales, uno en 1702 y otro en 1756. En el primero, que describe 78 legajos, los asientos suelen omitir las fechas de los documentos, aunque en su margen recogen una palabra clave relacionada con las materias que pudieran interesar en la búsqueda de antecedentes [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 15].

El «*Sumario de los privilegios, honras, y exempciones, que goza, y tiene en su Archivo, la muy Noble y muy Leal Ciudad de Lorca*», fue publicado con las ordenanzas de esta ciudad en el año 1713. En él se describen cerca de 250 documentos, datados entre 1322 y 1712, con descripciones como la siguiente: «*Una carta original de Privilegio, dada por el señor Don Alonso, en 23 de Octubre de 1322 años, en que haze merced a esta Ciudad, del Alquería de Don Guillén Pérez, en Zamora*». Como vemos ya se recoge la data completa (fecha y lugar de redacción), la tipología documental, el autor, el destinatario y el contenido.

El «*Libro becerro y relación de los pribilexios, Escripturas y Papeles tocantes a las Preheminencias, Iurisdicciones, Derechos, Propios y Rentas del Ayuntamiento... de Segovia...*» fue redactado en 1718. Este libro está dividido en 237 «*quadernos*», debidamente numerados. Cada uno de estos cuadernos describe un legajo, encuadernado en pergamino, con contenido no siempre uniforme. De cada documento se hace un breve resumen. El libro tiene además un índice general con la denominación de cada cuaderno y el folio en el que comienza la descripción de los documentos que lo forman [Cantalejo San Frutos, 1994, p. 839].

En 1725, Juan Gregorio García Ovalle terminaba el «*Libro Manual del Ymbentario de los papeles del archivo desta Ziudad...*» de Astorga. Consta, puesto que ya no se conserva, de 387 folios, de los que sólo los 212 primeros estaban escritos. Junto con un extracto de cada uno de los documentos, recogía también en su margen una pequeña nota de su contenido [Martín Fuertes, 1980, p. 14].

Diez años después culminó Mateo Díez Oliva su trabajo de organización y descripción del archivo de Béjar. Para ello redactó el «*Ynventario de*

papeles de esta novilísima villa de Béjar», ordenados por clases y números. Entre las descripciones que realiza podemos leer:

BÉJAR, 1735

Clase primera: de fueros y leyes. Letra S

1. Un libro encuadernado en tablas, de los fueros, para gobierno de esta villa y su tierra, conzedidos por el señor rey don Alfonso en junio de 1249, año del señor de 1211.

2. Un privilegio del señor rey don Alfonso, dado en Sevilla a 5 de septiembre, era de 1298 años, en que pone la forma y orden con que y como han de jurar ante la justizia los christianos, judios y moros; y otro del mismo rey sobre yqual assumpto, dado en Almazán a 22 de abril, era de 1298 referida.

...

7. Legajo con los ordenamientos fechos por los señores reyes de Castilla para el gobierno de sus reynos; del señor rey don Fernando, dado en las cortes de Balladolid a primero de febrero de 1336; de el señor rey don Alonso, en cortes de Balladolid...

Fuente: Barrios García y Martín Expósito, 1986, p. 199-200

De nuevo se vuelven a combinar descripciones de documentos muy completas, incluyendo toda la data, con otras en las que se opta por incluir en un mismo asiento varios documentos de una misma tipología diplomática. La signatura estaría señalada por la combinación de clase y número de documento. Y a veces se recoge también la tradición documental si no es original.

Todavía aún más interesante será el inventario elaborado, también en 1735, en la ciudad de Toledo. La descripción fue realizada en un libro de grandes dimensiones, 415 mms x 285 mms., de 428 folios de grueso papel, con los ocho últimos en blanco. Se inicia con la transcripción del acuerdo municipal que ordenaba su cumplimentación, seguido de una tabla o índice general, y de los índices parciales correspondientes al contenido de cada cajón o alacena. En esto últimos se recogen extensamente los datos que permiten identificar cada documento, mediante lo que el propio texto denomina como manifiestos. En concreto, el inventario del año 1735 explica sus características de la siguiente manera «*De los ynstrumentos que yncluye, cada un caxón y alazena, les ban formados un yndice y un manifiesto. Y en los yndices se dice de lo que trata cada legaxo, y se adicciona a mui por maior lo que en aquel assumpto contiene cada uno de sus ynstrumentos, y en todos ellos ba*

puesto en los márgenes, el número y folio que cada uno tiene en el manifiesto; para que pasando a él por su cita, se bea lo sustancial que contiene, sin que haia la molestia de sacarle de adonde está colocado; y si esto fuere preciso, ber el caxón, legaxo y número que tiene, y busquesele por él, en el Archivo, pues todos tienen uniformemente, las glosas, que en este Becerro, de caxón, legaxo, y número; y en la tabla general que se sigue a esta oja, se berán los folios que tiene los yndices y manifiestos y de lo que trata, cada legaxo para que el maior trabaxo quede reducido a pasar la bista por dicha tabla, y después por el tratado (en el Índice) de aquel legaxo, en que se supone estará el papel que se busca» [Sierra Corella, 1931, p. 14-15].

TOLEDO, 1735

[Estructura del libro becerro]

Acuerdo

Tabla general de los índices, manifiestos y legajos de que trata este libro becerro

Índice del cajón 1°. Folio 1°

Manifiesto del cajón 1°. Folio 14

Legajo 1°

...

Índice del cajón 2°. Folio 45

Manifiesto del cajón 2°. Folio 54

...

Fuente: Sierra Corella, 1931, p. 16-20

En el mueble del archivo secreto, y en el primer legajo de cada cajón o alacena, se añadió una copia completa del índice y manifiesto correspondiente, realizada a través del libro becerro, para facilitar aún más la búsqueda y localización. Tanto los índices parciales incluidos en los cajones como el libro inventario de 1735 se conservan en la actualidad.

Algunos años después terminaba de redactar Martín de Uribe el «Ymbentario de papeles y documentos que el año pasado de 1740 existían en el archivo de la M.N. y M.L. Ciudad de San Sebastián». En él aparecían recogidos 1.026 documentos agrupados en 54 legajos, anotando además la existencia de 209 legajos cuyo contenido no especifica, y 576 libros. La descripción difiere según el contenido de los documentos, desde muy exhaustivas hasta otras más imprecisas. Como prueba valgan las que figuran a continuación:

SAN SEBASTIÁN, 1740

1682, mayo, 24

A/1/1

Una caja de hojadelata y en ella una cartera forrada en terciopelo verde con dos escudos de plata... y dentro de esta cartera una certificación ... y una copia de diferentes informaciones y autos... sobre el uso del privilegio...»

...

S.f

A/2/2

Un pergamino de letra muy gastada e ilegible, con su sello de plomo pendiente, que según el rótulo de un papel que le sirve de cubierta explca que los de esta ciudad no paguen portazgo sino en Sevilla, Toledo y Mucia»

S.f.

B/1/1

Diez y seis acciones que esta ciudad tiene en la Real Compañía de Caracas, y se hallan dentro un pergamino con su rótulo»

S.f.

B/2

Un legajo con diferentes papeles en razón de entradas de sidras en esta ciudad»

...

S.f.

B/4/1

Tres libros y diferentes papeles de licencias y libranzas dadas por esta ciudad.»

Fuente: Banus Aguirre, 1986, p. 131-137

Por lo general los documentos están descritos individualmente sean originales, copias o traslados, y sólo en contadas ocasiones se utiliza un mismo asiento para describir un conjunto de documentos generalmente de contenido similar o de una misma tipología. En este último sentido podemos referirnos a la descripción que realiza de los memoriales, pareceres de abogados, alojamientos, libranzas, cartas, licencias, «*pleitos viejos*», etc. De los documentos simples descritos individualmente se recoge su data completa cuando es conocida (año, mes día), su signatura topográfica (Letra/Número/Número), tipología, tradición documental, autor y contenido, además de algún carácter externo (soporte, etc.).

El «*Inventario de Privilegios, preheminencias y papeles de la villa de Cáceres*» fue formado en el año 1750 por Juan Antonio Criado Valera. En él se

describen 504 documentos de una manera tan extensa «*que en muchos casos puede suplir al propio documento*» [Florian Cumbreño, 1934, p. 11].

Los ejemplos mencionados de San Sebastián y Cáceres ponen de manifiesto cómo los criterios de descripción se amoldaban al interés que ofrecían los documentos para los distintos ayuntamientos. Determinados documentos, los más solemnes, los de un mayor valor jurídico, eran descritos pormenorizadamente, dando cuenta por extenso de su contenido, elaborando por lo tanto verdaderos resúmenes que casi llegan a suplir al documento original, como queda expuesto para el caso cacereño, mientras que otros documentos, conservados sólo por su valor informativo, son descritos de manera conjunta, agrupados en legajos, de forma muy somera, tal y como se hacía con los relativos a los alojamientos o las libranzas en San Sebastián. De todas formas en muchas poblaciones éstos últimos ni siquiera aparecieron reflejados en los inventarios, limitándose a recoger los que constituían por entonces el archivo del común o de los privilegios.

En 1753, el padre fray Vicente Velázquez de Figueroa, encargado de organizar el archivo de Sepúlveda, terminaba de elaborar su «*Abecedario de los privilegios, provisiones y executorias y demás instrumentos pertenecientes a la real villa de Sepúlveda*», en el que recoge por orden alfabético de lugares y de conceptos la mayor parte de los documentos existentes por entonces en ese archivo, incluyendo su signatura. Ese abecedario se completaba con índices de cada uno de los cajones; al menos se sabe que existía del cajón 5º en donde se conservaban los privilegios. Además redactó, ya en 1754, un libro becerro, hoy perdido, en el que bajo epígrafes relativos a lugares y conceptos, recogió un centón de noticias de índole diversa, y extractos y copias de muchos documentos [Sáez Sánchez, 1956, p. XXIV-XXVII].

Pocos años después, Luis Jacobo Velázquez concluía su inventario analítico del archivo de privilegios de Sevilla. En él cada documento es descrito minuciosamente, con las indicaciones completas de su fecha encabezando cada asiento [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 16]. En Orense, en 1761, se siguió un criterio bien diferente al utilizado en Sepúlveda. Simplemente se realizaron índices a los mazos de escrituras formados por años [Gallego Domínguez, 1981, p. 193]. En Burgos, en 1772, fue redactado por Jacinto Álvarez y Gregorio Leal un índice cronológico de la documentación existente en el archivo [Moratinos, 1985, p. 187]. Además se encargaron de unir a cada documento un breve extracto en papel de su contenido, incluyendo la fecha y otros datos [Bonachía Hernando y Pardos Martínez, 1983, p. 18].

En Jerez de la Frontera, si bien hay otros instrumentos descriptivos realizados en el siglo XVIII, destaca sobre todo su «*Ynventario de todos los Privilegios, Ejecutorias, Reales Cédulas, Despachos, Ordenes, Autos, y demás*

papeles que esta Nobilísima Ciudad de Jerez de la Frontera custodia en su nuevo Archivo construido en virtud de acuerdo de ésta, de 4 de mayo de 1787, concluido en el de 1788, y compuesto de 24 cajones numerados» [Orellana González, 1992, p. 93]. Como complemento, ese mismo año se realizó también un «*Abecedario de todos los papeles del Archivo...*».

Por lo tanto frente a inventarios que responden a la estructura de clasificación adoptada, caso de Toledo por ejemplo, pudieron elaborarse otros instrumentos que respondían a criterios alfabéticos (Sepúlveda) o cronológicos (Burgos), que más propiamente podemos considerar como índices. Si se optaba por la primera solución, ésta se solía complementar con la elaboración de índices parciales de cada unidad de instalación, bien a nivel de legajo o de cajón. Además, en la casi totalidad de las ocasiones, la descripción recogida en el inventario se plasmaba también en la portadilla en papel que solía unirse, mediante cosido, al documento reseñado.

En Madrid, el índice fue formado por el archivero Diego Díaz Manso, en 1775, utilizando un libro grande de a folio, en papel marquilla [Gómez Iglesias, 1974, p. 38]. En la ciudad de Oviedo, aunque ya en 1770 se había acordado la realización de un inventario de su archivo, parece ser que esta tarea no llegó a ejecutarse hasta 1790, y por Pedro Antonio de la Escosura. Su trabajo se concretó en tres tomos, a saber, el «*Libro maestro de fueros, ordenanzas, honores, oficios y regalías*», el «*Libro maestro de rentas*», y el «*Libro maestro de pragmáticas, reales órdenes y provisiones*» [Villa González-Río, 1978, p. XXIII-XXIV].

En el siglo XVIII, y dentro del ámbito territorial de la Corona de Castilla, también fueron objeto de descripción otros archivos municipales. El de Estella contó en ese siglo con un «*Libro en que están los privilegios, ordenanças, sentencias y escripturas de la ciudad de Estella ...*» publicado entre 1912 y 1913 por P. E. Zorrilla Echevarría [Millares Carlo, 1952, p. 41].

Además de estos inventarios del archivo del común o de los privilegios pudieron realizarse y no exclusivamente en este siglo, sino también en los anteriores, inventarios parciales de la documentación, respondiendo a criterios concretos de una necesidad puntual. En Sevilla fue bastante normal realizar inventarios de los documentos que tenían en su poder sus procuradores o agentes en la Corte o en las Chancillerías. Han sido publicados los relativos al cambio de procuradores en Valladolid en 1602 y 1604 [Rojo Vega, 1995, p. 163-178]; y se conserva otro de 1746, esta vez del agente de la ciudad en Madrid [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 15]. En San Sebastián se confeccionó en el siglo XVIII otro inventario parcial con el título de «*Papeles que hablan en razón de cosas correspondientes al comercio*», en el que se describen 71 documentos [Banus Aguirre, 1986, p. 13]. Aunque sin duda hay más ejemplos.

En las primeras décadas del siglo XIX fueron pocas las poblaciones que culminaron procesos de organización y descripción de sus archivos. En 1803 fue inventariado el archivo de Zamora [Pescador del Hoyo, 1948, p. 8]. En 1806-1807 se hizo lo propio en la localidad gaditana de San Fernando [López Garrido, 1989, p. 14]. En 1817 fue elaborado el «*Índice general de los papeles del Ilustre Ayuntamiento de Talavera*», que por su estructura podemos considerar como un registro topográfico. Los documentos, incluidos en 69 legajos, van descritos bien individualmente o de forma colectiva, según la agrupación documental en la que están clasificados, con criterios bastante coherentes. Además, la mayoría de ellos recibieron un número de orden dentro de cada legajo, recogido en su portadilla y en el índice, lo que facilita su localización [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 99-101]. En la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira se realizó otro inventario, con descripciones muy imprecisas, en el año 1820. También en Santander, en esas primeras décadas del siglo XIX, se elaboraron inventarios, que no pasan de ser someras relaciones topográficas, más o menos detalladas [Vaquerizo Gil, 1984, p. 9].

En Teruel, a principios del siglo XIX, fue redactado su Alcorán o Libro Verde en el que se recogen acontecimientos y noticias curiosas de la ciudad, y en el que se dedican sus últimas cincuenta páginas a describir la riqueza documental de su archivo municipal [Serrano González, 1995, p. 197].

Y en Madrid, Facundo Porras Huidobro presentó, en 1822, su programa descriptivo al ayuntamiento de la capital. Pretendía culminar el Inventario alfabético-cronológico por materias del archivo, iniciado por Diego Díaz Manso, en 1775, y formar índices particulares, para terminar elaborando lo que denomina como «*índice general alfabético*». Pero su proyecto sólo pudo empezar a ejecutarlo a partir de 1836 [Gómez Iglesias, 1974, p. 44].

A la vista de lo expuesto podemos señalar que desde la Baja Edad Media se elaboraron instrumentos descriptivos de la documentación conservada en el archivo del común o de los privilegios en bastantes poblaciones españolas. Sus características estarán condicionadas por los criterios de clasificación adoptados y por la profesionalidad de sus redactores, existiendo notables diferencias entre los inventarios formados en las principales ciudades, mucho más elaborados y exhaustivos, y los existentes en las medianas y pequeñas localidades, por lo general más someros e imprecisos. En su casi totalidad constituyen la culminación de los procesos organizativos que periódicamente se realizaban con desiguales resultados. Estos inventarios fueron el principal sistema de localización y acceso del patrimonio documental municipal.

En muchas pequeñas localidades, sobre todo en las aldeas y lugares, nunca se pusieron en marcha procesos de este tipo por lo que no dispusieron de inventarios de su documentación durante el Antiguo Régimen.

En estos instrumentos se describe un número relativamente pequeño de documentos, por lo general apenas unos centenares, que forman parte siempre del archivo del común. Prevalece la descripción individual, documento a documento, aunque ya desde la Baja Edad Media cabe referirnos a ejemplos de descripciones conjuntas de agrupaciones documentales.

El incremento del patrimonio documental permitió el ingreso en esos archivos de documentos de menor valor jurídico, o simplemente informativo, que fueron reflejados en los inventarios de manera conjunta, sin detenerse en cada uno de ellos, reservando este criterio para los más solemnes. Incluso entre éstos podían darse descripciones que prácticamente por su extensión podían sustituir al original, frente a otras más concisas. Por lo tanto, en la mayor parte de estos instrumentos la descripción de los documentos está condicionada por la valoración que recibían de sus redactores, lo que se evidencia en esta falta de uniformidad.

Ya en el siglo XVI, en algunos inventarios aparecen documentos reflejados con todos los elementos necesarios para una adecuada descripción: data completa, autor, destinatario, contenido y signatura. No faltando caracteres externos como la materia escritoria, la lengua, o la presencia de elementos validativos. Sin duda son la data y la signatura de localización los elementos que más tarde y de manera general se incorporarán a los inventarios. Por contra el autor y el contenido no suelen faltar en las descripciones más antiguas.

Estos instrumentos recibieron distintas denominaciones. El termino «*Inventario*» será el más utilizado en las poblaciones castellanas. También en esa Corona recibieron entre otras las siguientes intituciones: «*Índice*», «*Memorial*», «*Relación*», «*Catálogo*», «*Abecedario*» y «*Sumario*». En la Corona de Aragón el término más usual fue el de «*Índice*», no faltando instrumentos descriptivos encabezados como «*Inventario*», «*Cabreo*», «*Repertorio*», «*Sumario*», «*Memorial*», «*Rúbrica*» o «*Catálogo*».

Muy pocos fueron publicados durante el Antiguo Régimen, y todavía hoy en su casi totalidad permanecen inéditos. Su examen constituye casi el único elemento para conocer realmente los criterios organizativos y descriptivos seguidos en los archivos municipales durante tan amplio período. A través de ellos podremos valorar en su justa medida la contribución desde el ámbito local a la evolución de la archivística española.

3. El control

Como hemos podido comprobar periódicamente en muchos archivos municipales se iniciaron procesos de organización y descripción de su documentación. Durante el amplio período que abarca desde la Baja Edad Media

hasta entrado el siglo XIX es probable que sólo las localidades más pequeñas no intentaran alguna vez «arreglar y coordinar» sus archivos.

Por contra pocas poblaciones establecieron mecanismos para controlar la situación organizativa y descriptiva de su patrimonio documental. Y por ello la validez temporal de estos procesos se reducirá notablemente. Los municipios que sí lo harán se servirán fundamentalmente de las actas de entrega de documentación con la renovación anual de oficios, de las visitas al archivo, y, en muy pocos casos, del examen de la memoria anual elaborada por su responsable.

3.1. Las actas de entrega

Tanto en algunos municipios de la Corona de Castilla como en la de Aragón fue relativamente frecuente que con la renovación anual de oficios se elaboraran actas de entrega de la documentación. Ello implicaba al menos la realización de un somero instrumento descriptivo, si no existía ya un inventario previo.

Esta costumbre estuvo más arraigada en localidades castellanas de la submeseta norte. Los ejemplos que conocemos pertenecen en su casi totalidad a la cornisa cantábrica. En las ordenanzas de Santo Domingo de Silos del año 1536 se especifica que «*los ofiçiales de un anno den cuenta de las dichas escripturas a los ofiçiales del anno syguiente e se asyente en el dicho libro por ante el dicho escrivano del concejo de cómo los resçiben e se dan por entregados*». En las de Hernani del año 1542 se establece que los dos regidores «*al principio de su año resçiban por ynventario todo lo suso dicho [entre ello el arca con las escrituras], y pasado su año, lo entreguen a los regidores que de ellos subçedieren*». En las de Itero de la Vega del año 1573 se recoge expresamente que los alcaldes y regidores «*sean obligados a azer y agan en cada un año, inventario por ante la dicha justicia y el escrivano del dicho concejo de todos los privilegios y cartas... y de todas las otras escripturas que el dicho concejo tiene*».

Una situación similar se producía todos los años, al menos durante el siglo XVI, en la localidad riojana de Aldeanueva de Ebro. Con la renovación anual de regidores «*los entrantes recibían de los salientes las escrituras del concejo, acompañadas del inventario de las mismas, levantando el notario o escribano del lugar, acta de lo acontecido*». Esas actas de entrega servirán para conocer quiénes son los regidores encargados de custodiar la documentación ese año [Prado Martínez, 1995, p. 307-308]. En Fuenterrabía, también, todos los años el ayuntamiento saliente, teniendo en cuenta el inventario de 1539, hacía entrega al nuevamente elegido de todos los documentos que en él se describían, haciendo constar los ingresados con poste-

rioridad y los que habían sido remitidos a otras instituciones [Vignau Ballester, 1871, p. 258]

En el siglo XVII algunas localidades castellanas mantuvieron la obligación de controlar el estado organizativo y descriptivo de sus archivos siempre que procedían a la renovación anual de oficios concejiles. En Baro, por sus ordenanzas del año 1620, se acuerda que los regidores «*vayan entregando los papeles a sus sucesores por el dicho inventario y tomando recibo de ellos*». En las ordenanzas del Principado de Asturias del año 1659 se establece que el caballero regidor archivero de Oviedo «*reçiva por inventario los papeles y los entregue por él al suçesor y haga obligación en toda forma con fianças de dar quenta dellos*». La duración normal en ese cargo era de tres años.

Todavía en el siglo XVIII algunas ordenanzas municipales siguen recordando esta obligación en municipios que todos los años renovaban sus oficios concejiles. En Armaño, otra localidad cántabra, se ordena, en 1751, que «*los Regidores presentes, y que fueren en adelante, tengan obligación de darse cuenta unos a otros de todos los papeles, correspondientes al Concejo, con anotación y expresión de cada uno, cumpliéndolo cada año, para que de este modo estén seguros y no se menoscaben*». Como ya sabemos, con la aprobación de las ordenanzas de San Sebastián del año 1758 se establece el nombramiento anual del archivero o archivista. Este debía hacerse cargo por inventario de todos los documentos, dando «*su resguardo*» a su predecesor.

Ya en el siglo XIX, en el Plan propuesto para la escribanía de Tolosa en el año 1819, se recuerda que los custodios de las llaves del archivo debían al final de cada año hacer «*entrega formal a los nuevos capitulares*» de todos los documentos que lo constituían.

Una situación similar debió darse en algunas poblaciones de la corona aragonesa. En Castellón, en 1455, su consejo municipal acuerda que los jurados, síndico y escribano nuevamente elegidos «*sien tenguts ensemps ab lo dit scriva pasat fer inventari present lo scriva novell de tots los privilegis e provisions que la Vila te*» [Roca Travar, 1951, p. 209, nota 2]. En las ordenaciones aprobadas el año 1551 para la ciudad de Huesca se obliga a los jurados entrantes a tomar juramento a los salientes sobre si sacaron escrituras del archivo y no las habían restituido, dándoles el plazo de un mes para su devolución. En las de Barbastro, del año 1657, se señala que todos los años «*dentro de tres días después de la extracción general*» de oficios se realizaría el inventario, «*y las escrituras, y cosas inventariadas se buelvan a la arca para ello dedicada*».

En Indias fue habitual que durante buena parte del siglo XVI la documentación fuera guardada por el escribano del concejo, que al cesar en su oficio la entregaba a su sucesor por inventario [Bayle, 1950, p. 19].

Por lo tanto, podemos afirmar que algunas localidades, que mantuvieron la renovación periódica de oficios concejiles durante el Antiguo Régimen, controlaron el estado de su documentación mediante la realización anual de inventarios someros, actas de entrega, recibos y resguardos, o tomas de juramento. Como la propia documentación señala, la obligación que tenían las autoridades locales salientes de dar cuenta a las entrantes del contenido del archivo, y de las incidencias que se hubieran producido a lo largo de su mandato, contribuía a aumentar la seguridad en la conservación del patrimonio documental municipal. Sin duda los procesos organizativos y descriptivos mencionados se vieron apoyados por estas medidas de control. A lo que se unió la posibilidad de castigar las negligencias y pérdidas con multas y otras sanciones, recogida en algunas ordenanzas y ordenaciones.

3.2. Las visitas

El control en la entrega de la documentación durante la renovación de cargos y oficios municipales llevaba consigo, si se hacía correctamente, el examen visual de todos los documentos del archivo. Algunas de esas personas, como más adelante detallaremos, intervenían a lo largo del año en las aperturas del archivo, si era preciso consultar algún determinado documento.

Por lo tanto, la documentación era inspeccionada con carácter general, a la par que se producía la renovación de oficios, y de forma particular, cuando se necesitaba algún documento. Lo primero sólo tenía lugar en algunos municipios, mientras que las aperturas por motivos particulares eran corrientes en todas las localidades. La periodicidad en estas inspecciones variará según cada municipio y según el contenido del arca-archivo. En Toledo a mediados del siglo XVI se abría su archivo secreto unas diez veces al año. Eran otras tantas ocasiones para comprobar el estado de la documentación.

La realización de visitas de inspección, generalmente una vez al año, se suele contemplar en las localidades que renuevan con esa periodicidad sus cargos y oficios municipales, aunque es una medida que se contempla también en otras poblaciones que no siguen ese sistema en la renovación del regimiento. Suponen además un control no sólo del estado organizativo y descriptivo de la documentación sino también de sus condiciones de conservación, instalación y seguridad. Y en ellas participan los claveros del archivo y otras personas vinculadas al municipio.

Junto con las visitas periódicas, establecidas y reguladas por las ordenanzas y ordenaciones, podían producirse visitas esporádicas, ordenadas por alguna autoridad, generalmente el corregidor. Unas y otras no responden a la necesidad de consultar un determinado documento sino a la obligación que

tenían las autoridades municipales de conservar su patrimonio documental en las condiciones descritas en la normativa general.

A lo largo del siglo XVI en más de una ocasión las ciudades con voto en Cortes reclamaron que los corregidores visitaran los archivos municipales. Así se hizo, por ejemplo, en las Cortes de Madrid del año 1551 [González Alonso, 1970, p. 217]. Y muchos corregidores, en cumplimiento de las pragmáticas de los Reyes Católicos, así lo harán. En otras ocasiones serán los propios ayuntamientos los que acordarán visitar sus archivos. Son visitas esporádicas y generalmente motivadas por un asunto específico. Entre ellas estarían las visitas de escribanos. En las instituciones eclesiásticas, sobre todo en las parroquias y conventos, era habitual describir la situación de sus archivos en los libros de visitas [Burón Castro, 1993, p. 17].

En la Corona de Castilla la realización de una visita anual al archivo municipal ya se contempla en las ordenanzas del señorío de Aguilar del año 1519. En concreto en ellas se señala que *«en cada un año se bean las dichas escripturas porque sienpre se tenga memoria dellas y todo quede a buen recaudo»*. En las de Potes, del año 1619, se especifica que *«cada uno en su tiempo en cada un año una vez para siempre jamás visiten el dicho archivo y escripturas según ha sido costumbre y con puntualidad»*. De ese mismo año son las ordenanzas municipales de Villanueva de Cameros. En ellas se establece que su alcalde ordinario, al día siguiente de ser nombrado, *«vea el archivo de la villa con su escribano, y Justicia, y vea si están todas las executorias»*.

En la instrucción aprobada, en 1753, para el archivo de la villa de Madrid, se establece que *«en principios de cada año se hiciera una visita al Archivo por los señores Claveros con asistencia del Comisario, Procurador General y Secretario, para poder apreciar sus progresos y remediar los inconvenientes que ocurriesen»* [Domingo Palacio, 1875, p. 36-37]. En 1820 se aprobaron nuevas disposiciones para el archivo madrileño. Por ellas *«en lo restante del mes de enero, se hará todos los años, visita del Archivo, por el Alcalde, un Procurador y el Regidor que fuera el Comisario del propio Archivo, también estará el Secretario del Ayuntamiento»* [Gómez Iglesias, 1974, p. 39].

En la América hispana algunas ciudades mantuvieron este sistema. El virrey Toledo se lamentaba ante los regidores limeños, en 1576, de que el archivo no tuviera *«quien lo vissite en principio de cada un año, como se acostumbra hazer y haze en las demás çiudades de su magestad de los rreinos de España»* [Bayle, 1950, p. 17]. Esa visita, según C. Bayle, se reducía en Lima a *«repasar el índice, escrito o no, de las Çedulas recibidas, y confrontarla con el legajo que las conservaba»*.

En el Reino de Aragón, algunas ordenaciones municipales recogen también la obligación de realizar visitas anuales. En las de Huesca, del año 1551,

se especifica que «*en cada un año, el día Expectatione virginis Mariae, ..., juntos todos los Jurados nuevos, y viejos, y el Iusticia, o su Lugarteniente, suban al archiu, y reconozcan el dicho libro y rúbrica de las escripturas y vean si todas las escripturas quel año antes se han sacado de los dichos caxones, se han restituydo a aquellos*». Años después se acordó un cambio de fecha en la visita, pasando a efectuarse el día de Expectatione partus «*para que con más sossiego, y tiempo, se haga dicha visita por ser de mucha importancia a la ciudad*».

En las ordenaciones de Barbastro del año 1657 también se establece esta obligación. En concreto por ellas se ordena que «*al otro día de San Juhan los quatro Jurados, seis Consejeros de las bolsas preheminentes primera, y segunda, con assistencia del Secretario, ayan de visitar el Archivo de la Ciudad, y se les dé de salario sendos sueldos, y a los Ministros seis dineros*». Y por las de Jaca, de 1694, se somete también a este control al archivo del Justicia, ya que «*en cada un año, el Notario del dicho Iusticia, el día del reconocimiento de los encartamientos, processos, libros y escrituras de la dicha Ciudad, sea tenido y obligado a traer todos los processos...*».

Sin duda en otras poblaciones de la Corona de Aragón mantuvieron la necesidad de realizar visitas periódicas como las descritas. En concreto, parece que en Barcelona, en el siglo XV, los consejeros «*hi anaven una vegada l'any per inspeccionar les escriptures*» conservadas en el convento de San Francisco [Arxiu, 1995, p. 26].

3.3. Las memorias

La obligación de realizar informes o relaciones anuales sobre el estado de la documentación está unida a la existencia de archiveros municipales en algunas ciudades. En concreto se debieron elaborar en Madrid, y tal vez en Santander, bien entrado el siglo XVIII.

Ya en la instrucción aprobada en 1753 para el archivo de la villa de Madrid se establece que el archivero debía dar cuenta mensual de los documentos que en él hubieran entrado y salido [Domingo Palacio, 1875, p. 36]. En el auto del Consejo Real de 12 de marzo de 1774 se señala que «*en fin de cada año se pasase al Consejo certificación de lo adelantado en los trabajos, para acordar en su vista las ayudas de costa merecidas, y lo conveniente a la terminación del arreglo*» del archivo [Domingo Palacio, 1875, p. 44]. En el reglamento de este archivo, de 31 de mayo de 1784, se recoge, entre las obligaciones del archivero, que al fin de cada año «*formará Certificación de lo que hubiese trabajado, assi en el arreglo de Libros, papeles y legajos como en la copia de los documentos antiguos, y despacho de los negocios diarios de oficio y partes; la cual presentará al Ayuntamiento para que haciéndola exa-*

minar de los Capitulares Comisarios del Archivo, a quienes debe constar la certeza, se le debuelva precedida esta circunstancia con el Acuerdo correspondiente para que luego la ponga en el Consejo por mano del Contador general de Proprios, y Arvitrios del Reyno»

En 1820, se renueva este compromiso, al recordar al archivero de Madrid que *«presentará en los ocho primeros días de cada año, relación de los trabajos hechos durante el anterior en su oficina»* [Gómez Iglesias, 1974, p. 39].

En Santander, por orden del Consejo Real de 1797, el archivero debía dar cuenta a la ciudad, al final de cada año, de todos los documentos que se hubieran extraído por su mandado o el de la Junta de Propios, *«para que en el caso de haverse verificado los fines para que se sacaron disponga se debuelvan a él»*. Por las ordenaciones de Tarazona, del año 1685, el jurado preeminente tenía este mismo cometido.

Estos informes, aún inusuales, constituyen un instrumento de control del estado del archivo y de la documentación, y del trabajo realizado por el archivero, ya presentes a finales del Antiguo Régimen.

6. LA CONSULTA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MUNICIPAL

Obviamente los esfuerzos realizados por las corporaciones locales, a lo largo de tan amplio período, en relación con su documentación tenían como finalidad asegurarse su pronta utilización en cualquier asunto o litigio que lo requiriese. Como antecedente o prueba podía ser utilizada por la propia administración local, por otras instituciones o por particulares.

Es decir, las medidas adoptadas para conservar, organizar y describir la documentación municipal tenían como fin último el de facilitar su pronta y segura utilización. Ya a finales del siglo XVI Castillo de Bovadilla se refería a la conveniencia de que estuviera a mucho recaudo y guarda (conservación), debidamente registrada por su abecedario con distinción y curiosidad (organizada y descrita) para que pudiera dar fe y prueba en muchas cosas (utilización).

Si bien en algunos textos, como en la propia obra de ese letrado o en las ordenanzas de San Sebastián del año 1758, se recoge expresamente que los documentos debían hallarse con facilidad, esto no debe hacernos olvidar que durante el Antiguo Régimen existió siempre un interés legítimo por parte de todas las autoridades locales de controlar directamente el uso que se hacía de su patrimonio documental, instituyendo un procedimiento riguroso aunque no siempre efectivo.

De nuevo debemos indicar las diferencias existentes entre la documentación conservada en el archivo secreto, matriz, de los privilegios, o de la ciudad, y la que custodiaba directamente el escribano del concejo, el mayor-domo, los arrendadores u otros administradores. Y también debemos tener en cuenta la evolución del patrimonio documental municipal, ya expuesta, a lo largo de un período tan amplio. El control en el uso se ceñirá casi exclusivamente a la documentación custodiada por las autoridades locales, es decir a la que constituía el archivo de la ciudad.

Se ha venido escribiendo que los archivos eran sólo accesibles al iniciado, por la confidencialidad de su contenido [Aguinagalde, 1988, p. 82]. Y que sólo hasta el siglo XIX pierden su carácter secreto al abrirse a la investigación [Gallego Domínguez, 1981, p. 178]. No obstante no faltan posturas que mati-

zan esa realidad. En Barcelona, a finales del siglo XIV, la conservación de los documentos se ve dificultada por la «*consulta indiscriminada que els deteriora i desordena*» [Vinyoles, 1994-1995, p. 1.514].

Es evidente que durante el Antiguo Régimen las corporaciones municipales controlaron el uso de la documentación que formaba su archivo. Y lo hicieron sometiendo a su aprobación previa cualquier apertura del arca-archivo, y sancionando cualquier irregularidad en este sentido. Además algunos de sus miembros, por su condición de claveros, estuvieron presentes siempre que se sacaba algún documento, prefiriendo la salida de copias o traslados a la de originales. Incluso en más de una ocasión tomaron medidas para garantizar la confidencialidad en la difusión de la información obtenida de sus documentos.

En 1579 se acordaba por el consejo municipal de Tortosa que sus archiveros «*tindran segret tot lo que faran e convendrà als drets de dita ciutat tenir segret*» [Massip i Fonollosa, 1987, p. 10]. En las ordenaciones de Alcañiz del año 1658 se obliga al notario a que no pueda mostrar las escrituras del archivo sin licencia de los jurados y consejo [ALCAÑIZ, 1658]. En las de Albaida, de 1685, se señala únicamente que el escribano de los jurados no pueda dejar copiar ni ver ningún papel si no es en su presencia [Ortiz García-Bustelo, 1992, p. 26]. En las de la Comunidad de Daroca, del año 1686, se establece que el archivero «*no pueda dar, sacar, tomar, ni ministrar cosa alguna de las que estarán en dicho Archivo, y les serán encomendadas, sino con licencia, y por mandamiento del Asistente*» [Comunidad de DAROCA, 1686]. En la instrucción del Conde de Torres Secas, del año 1730, y para el gobierno del archivo de Zaragoza, se señala que el archivero para dar «*noticia de papel, o escritura ha de preceder primero decreto de la Ciudad*», y antes de entregarla debe informar si de ella se pudiera derivar algún perjuicio para la ciudad [ZARAGOZA, 1730].

Ni siquiera Madrid, que en 1781 convirtió su archivo municipal en oficina pública, algo que pretendió por esas mismas fechas Sevilla, exoneró de esas obligaciones a su archivero. En su reglamento de 1784 se le prohíbe a él y a sus oficiales «*dar noticias, o copias de algunas, que soliciten a qualquiera persona que lo pida, sea del carácter que fuere*» sin preceder acuerdo del ayuntamiento o providencia del corregidor y sus tenientes.

El posible uso por cualquier interesado de la documentación que formaba el archivo del común o de la ciudad estaba condicionado por varios factores. Un requisito, pocas veces salvable si se actuaba dentro de la legalidad, era la aprobación previa por la corporación municipal, sin la cual el acceso era prácticamente imposible. El contenido del archivo, conocido a través de los instrumentos descriptivos que pudieran existir, fue variando a lo largo de tan amplio período de tiempo, pero sabemos que hasta bien entrado el siglo XIX raramente superaba unos centenares de legajos, y eso en las ciudades

más importantes, permaneciendo, por lo general, fuera del sistema de protección y control potenciado por los Reyes Católicos los libros de acuerdos, las cuentas, los padrones de población y fiscales, etc. No en vano el grueso de ese archivo lo constituían los privilegios y otros documentos expedidos por las cancillerías reales y nobiliarias, los pleitos y sentencias, exps. de deslindes de términos y otros de esta índole que atañían al común de los vecinos y a los intereses de la oligarquía que dominaba esas corporaciones. El uso de esta documentación, escrita en diferentes tipos de letra y lenguas, requería unos conocimientos específicos por parte del posible usuario que estaban al alcance de muy pocas personas en el Antiguo Régimen. Además la apertura del archivo, y la transcripción o copia de documentos, suponían gastos que no todos podían afrontar.

Si tenemos en cuenta éstas y otras limitaciones podremos comprender el uso limitado que se hizo de la documentación municipal durante el Antiguo Régimen, al menos por los particulares, no así por la propia administración local. Como siempre, C. Cayetano con serena rotundidad nos apuntaba alguna de estas claves al referirse a la situación del archivo de la villa de Madrid a finales de la Edad Media, «*pocos documentos, poco servicio*» [Cayetano Martín, 1992, p. 27].

1. Los usuarios de los documentos

La documentación conservada en los archivos municipales durante el Antiguo Régimen fue utilizada por las autoridades locales, por algunos oficiales concejiles, por otras instituciones y por los particulares. La apertura del archivo no tenía por qué suponer la salida del documento de las casas consistoriales, dado que su consulta podía realizarse en alguna dependencia municipal. Pero esto no siempre fue posible. Las corporaciones locales pretendieron generalmente que el examen del documento requerido por los particulares fuera realizado sin abandonar el ayuntamiento y en presencia de miembros del regimiento. Menos rigor exigía cuando el receptor era el corregidor, algún regidor u otra autoridad local. Y lo mismo ocurría si quien necesitaba la documentación era un oficial concejil para la gestión de intereses municipales. Pocas veces se ponían impedimentos para sacar documentos, incluso originales, destinados a los tribunales de justicia y a los Consejos.

1.1. Las autoridades municipales y los oficiales concejiles

Casi siempre que se abría el archivo del común, bajo el procedimiento que enseguida veremos, y se sacaba de él algún documento su destinatario final era alguna autoridad municipal, sobre todo los regidores comisionados

de pleitos, o algún oficial concejil, generalmente el escribano del concejo. A veces también podían terminar en manos del mayordomo, del procurador, del letrado o del agente de negocios. Unos y otros podían recibir documentos del archivo siempre que así fuese autorizado por la corporación municipal. Basta un vaciado de los libros de conocimientos conservados para asegurar esta afirmación. Además los expedientes realizados para recuperar documentos sacados de los archivos, implicaran o no la solicitud de paulinas o censuras eclesiásticas, también inciden en este sentido.

En San Sebastián, según sus ordenanzas del año 1489, sólo los jurados podían tener en su poder documentos sacados del archivo, «*sin fiar de persona alguna, no estando ellos presentes*» [Banus Aguirre, 1986, p. 7]. Aunque esta medida no fue muy habitual.

La ciudad de Plasencia denunció, en 1494, que documentos del archivo estaban en manos de algunos regidores, escribanos, oficiales concejiles y otras personas [Santos Canalejo, 1988, p. 13].

En Orense, hacia 1743, en las declaraciones efectuadas, con el fin de recuperar documentos sacados de su archivo, se puso de manifiesto que estaban en poder de «*regidores, herederos de escribanos fallecidos y personas desconocidas*» [Gallego Domínguez, 1981, p. 181]

Como éstas podríamos recoger otras muchas referencias que inciden en esta obviedad: los regidores y los escribanos son los principales usuarios de la documentación municipal durante el Antiguo Régimen. En los archivos tienen a su disposición una incipiente biblioteca auxiliar, formada por códigos legislativos, historias locales y tratados jurídicos y médicos, principalmente. Estas publicaciones han sido adquiridas en cumplimiento de órdenes superiores, o por decisión de las propias corporaciones, sin olvidarnos de posibles donaciones de personas vinculadas a la localidad. Un ejemplo temprano lo representa la ciudad de Gerona. En el inventario de 1498 se describe la existencia, en la sala mayor del consejo general, del libro *Regiment de princeps e de comunitats*, obra de fray Francisco Eiximenis, publicada en Valencia, en 1484, y de gran utilidad para el gobierno local.

Los Reyes Católicos, con su pragmática de 9 de junio de 1500, obligaron a conservar en el arca un ejemplar de las Partidas y de las Leyes del Fuero [Cayetano Martín, 1989, p. 6]. Los principales ayuntamientos cumplieron esta disposición. El de Oviedo decidió adquirir un ejemplar de las Siete Partidas, de los Ordenamientos Reales y del Fuero Real [Villa González-Río, 1978, p. XVII]. En el Real Despacho dado a la villa de Vallecas, en 1728, se recuerda que las Leyes del Reino debían estar guardadas en el arca. La *Nueva Recopilación*, y ya a principios del siglo XIX, la *Novísima Recopilación*, pudo solventar esta obligación en muchas poblaciones, recordada por el capítulo 67 de la instrucción de corregidores de 15 de mayo de 1788.

En bastantes municipios castellanos, sobre todo en el siglo XVIII, no sería extraño encontrar un ejemplar de la obra de J. Castillo de Bovadilla. En Orense, en 1757, se sacaron del archivo para que fueran custodiados por el escribano, y así facilitar su consulta, la historia de Galicia escrita por Huerta, la colección de Autos Acordados, y dos libros sobre la cura de la peste, todos ellos impresos [Gallego Domínguez, 1981, p. 183].

El Consejo Real potenció, a partir del año 1774, la creación de una verdadera biblioteca auxiliar del archivo de la villa de Madrid en donde «*radicasen cuantos libros y papeles históricos tuvieran verdadera importancia municipal*» [Domingo Palacio, 1875, p. 45].

1.2. Otras instituciones

A veces algunas instituciones de la administración central y sobre todo los tribunales superiores, chancillerías y audiencias, podían enviar directamente comisionados a los archivos municipales para el examen de determinados documentos, o requerir el envío de éstos a sus sedes. En 1616, la ciudad de Burgos autorizó la consulta del archivo por parte de dos comisionados del Consejo de Castilla. La corporación burgalesa decidió que los documentos por los que estaban interesados les fueran mostrados «*a la pieza del Ayuntamiento donde los bean, y vistos y sacados dellos lo que conbenga, se buelban a su lugar, y este estilo se guarde para adelante*» [Díez Sanz, 1984, p. 43].

En 1672, el ayuntamiento de Talavera de la Reina permitió que varios caballeros de la Orden de Santiago pudieran consultar diferentes libros de acuerdos para informar sobre una persona que pretendía ingresar en esa orden militar. En todo momento estuvieron acompañados por dos comisionados, designados por la corporación municipal [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 93]

Si bien lo más habitual fue remitir originales o traslados de los documentos requeridos a la sede de los propios tribunales, casi siempre sirviéndose del agente de negocios, procurador o apoderado que pudiera residir temporalmente en ellas. Las principales ciudades castellanas solían tener un representante ante esas instituciones, tanto en Valladolid o Granada, como en Madrid. Estos, como hemos visto para el caso de Sevilla [Rojo Vega, 1995, p. 163-178], llegaron a tener en su poder una buena cantidad de documentos procedentes de sus respectivos archivos municipales. Muchos de esos documentos, incluso originales, jamás volverán a su lugar de origen, permaneciendo como pruebas documentales en determinados procesos, y siguiendo la misma suerte en cuanto a su conservación que el resto de pleitos civiles y causas criminales tramitados por esas instituciones judiciales.

A lo largo del siglo XVIII, y mediante las reales provisiones de emplazamiento y compulsoria, estos tribunales solicitaron directamente gran cantidad de documentación a los ayuntamientos. Pero frente a los traslados o copias compulsadas que garantizaban la conservación en el archivo del documento original, muchas veces, sobre todo en los siglos XVI y XVII, se remitieron los documentos originales, máxime si éstos eran voluminosos, pues la realización del traslado por el escribano o notario significaba pérdida de tiempo y cuantiosos gastos. Por ello no nos debe extrañar que llegaran a enviarse a estos tribunales incluso los libros de acuerdos municipales. Un ejemplo nos lo ofrece la ciudad de Talavera de la Reina. En la sesión celebrada por su ayuntamiento el 20 de julio de 1670 se da cuenta de haberse recibido varios libros de acuerdos y un padrón de vecinos que habían sido enviados a la Chancillería de Valladolid para una prueba de hidalguía [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 92-93].

En las ordenanzas de la ciudad de San Sebastián del año 1758 se incluyó un capítulo, el XXIV, para regular el envío de documentación a estas instituciones judiciales. Por él se señala que siempre *«que en los Tribunales se necessite, para la decisión de algún recurso, o para observancia de reales resoluciones, deberá entregar el documento original, remitirlo con persona segura, y cuydar de su recobro, ...»* [SAN SEBASTIÁN, 1758].

También algunas instituciones religiosas pudieron solicitar la consulta de determinados documentos conservados en los archivos municipales, así como gremios, cofradías, hospitales, la Mesta, etc. Un ejemplo lo representa el cabildo de la colegiata de Talavera de la Reina. El ayuntamiento de esta ciudad había tomado el acuerdo de que *«siempre que el cavildo de la Santa Yglesia Collegial desta Villa solicite y sea nezesario abrir el Archibo deste Aiuntamiento para algún Documento que pida no se perziba Ynterés alguno por la asistencia que para ello haga el cavallero comisiario deste Aiuntamiento»* [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 96-97].

1.3. Los particulares

Los archivos municipales en el Antiguo Régimen pudieron ser utilizados y consultados por los particulares que recibiesen autorización de los respectivos ayuntamientos. La limitación en el uso de su documentación se explica más por las propias deficiencias formativas de los supuestos interesados que por las trabas impuestas por la administración local.

Como bien sabemos el porcentaje de personas sobre el total de la población que sabían leer y escribir en el Antiguo Régimen era muy exiguo. De entre ellas muy pocas podían afrontar con éxito la lectura por sí mismas de documentos antiguos, con diferentes tipos de letra y lenguas. Además la aper-

tura del archivo, una vez lograda la autorización, significaba un buen desembolso de dinero dado que, por lo general, era necesario pagar a los claveros del archivo por su asistencia.

El control riguroso del que más adelante hablaremos se ceñía casi exclusivamente al archivo de los privilegios o del común, constituido por una documentación en la que muchas veces se echan en falta los libros de acuerdos, los padrones de población, las cartas de vecindad, los repartimientos, y las cuentas, conservados en otras dependencias y bajo la responsabilidad directa, y muchas veces única, del escribano del concejo o del contador. Por ello los posibles interesados preferían solicitar a éstos una copia, un traslado o simplemente un testimonio de su contenido. El escribano municipal por su condición de fedatario expedía el documento solicitado y cobraba los correspondientes derechos según el arancel en vigor. Por lo tanto los documentos más demandados por los vecinos se encontrarían fuera del archivo del común, y a su disposición a través del escribano del concejo, que obviamente no tenía ningún interés en que esa documentación ingresara en el archivo de la ciudad. La existencia en todos los archivos de esas copias, certificados o traslados expedidos por escribanos municipales a petición de diferentes interesados refrendan esta aseveración.

Cuando el documento requerido se encontraba custodiado en el archivo del común era un requisito preciso la autorización previa de alguna autoridad local o del propio ayuntamiento reunido en cabildo. Y así figura en los libros de acuerdos municipales. En muy pocas ocasiones las corporaciones locales negaron la consulta de sus fondos documentales. A lo más pudieron poner algún tipo de impedimento que obstaculizara temporalmente su cumplimiento. Si el solicitante mantenía algún proceso abierto contra el ayuntamiento, tarde o temprano lograría alguna resolución de los tribunales obligando a éste a abrir sus archivos. El secretismo o inaccesibilidad con el que J.L. Rodríguez de Diego caracteriza al archivo de Simancas durante el reinado de Felipe II, y el control férreo que ejerce el rey sobre la consulta de su documentación por los particulares, no es trasladable desde nuestro punto de vista a la esfera local [Rodríguez de Diego, 1998 (b), p. 32, nota 6].

El principal obstáculo que ofrecía la consulta de los archivos municipales durante el Antiguo Régimen dependía más de su situación organizativa y descriptiva y de las deficiencias formativas de los posibles interesados que del secretismo que pudieran defender las autoridades locales.

De nuevo sólo un examen exhaustivo de los libros de conocimientos nos permitiría tener claro el perfil del particular interesado en consultar directamente la documentación del archivo de los privilegios o del común durante el Antiguo Régimen. Y esto todavía no se ha realizado. Intuimos que representan a la oligarquía local, vinculados de alguna manera con el ayuntamiento, y

que necesitan examinar por sí mismos o con ayuda de escribanos, los documentos que pueden ayudarles a justificar su nobleza, su ingreso en las ordenes militares, o la obtención de cualquier otra prebenda. También habrá algunos, muy pocos, que se acerquen a los archivos municipales para realizar la historia de la localidad, o algún otro estudio de carácter histórico, sin que sea preciso esperar al siglo XVIII para detectar su paso por estos archivos. Pero veamos que nos dicen las fuentes.

A finales del siglo XIV la documentación que por entonces formaba el archivo de Barcelona, custodiada dentro de la Casa de la Ciudad, era muy utilizada por los vecinos, no así la que se guardaba en la «*caixa a Fra Menors*». Se ha llegado a escribir que «*qualsevol dia y qualsevol hora els hi semblava bé als nostres ciutadans medievals per consultar la documentació municipal*» [Vinyoles, 1994-1995, p. 1.512].

En las ordenanzas del concejo de Écija de 1564 se establece que no se pueda sacar ninguna escritura del archivo «*si por alguna persona fuere pedido*» sin autorización de la ciudad [ÉCIJA, 1564]. En las de Itero de la Vega, del año 1573, aparecen los vecinos, junto con los alcaldes y regidores, como posibles usuarios del inventario del archivo. También los vecinos y moradores de Ciudad Real, según su corregidor, en 1595, podían aprovecharse de los documentos de su archivo. En Albaida, en 1598, su escribano fue procesado por haber prestado varias actas de cabrevación (matrices de registros impositivos) a ciertos particulares que las habían perdido [Ortiz García-Bustelo, 1992, p. 24]. En 1607, un vecino de Astorga solicitó a su corregidor que se le dieran traslados de ciertas escrituras [Martín Fuertes, 1980, p. 13].

Las solicitudes de los particulares solían ser resueltas por las corporaciones locales con acuerdos del tipo «*se junten las llaves y se abra el archivo, se saque lo que se pide en esta petición sin sacar los libros de la casa*». Así aparece en el libro de actas del ayuntamiento de Talavera de la Reina en su sesión de 2 de mayo de 1628 [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 91]. Los interesados se servían muchas veces de los escribanos o de otras personas preparadas para consultar los documentos. También en Talavera, en 1630, según su libro de recibos, se sacó del archivo un documento que fue entregado «*al capitán Diego López para sacar un traslado por orden del sr. D. Lope de Arévalo cavallero del ávito de Santiago*».

Las ordenaciones de la ciudad de Daroca del año 1647, en lo relativo a la «*forma de sacar escrituras del Archivo*», se refieren expresamente a las «*personas que sacaran escrituras*», sin especificar su posible vinculación o no con el gobierno municipal [DAROCA, 1647]. Lo mismo ocurre en las ordenaciones de Jaca del año 1694. Por ellas se exigía a varias autoridades locales a «*intimar a la persona, o personas, que huvieren sacado de dicho*

archivo algún privilegio, o otra escritura de la dicha Arca, [...] a restituirlas dentro de ocho días» [JACA, 1694].

En la instrucción elaborada por el conde Torres Secas para el gobierno del archivo de Zaragoza, en 1730, se establece que, tras la autorización de la consulta por medio de decreto de la ciudad, debía el archivero dar *«testimonio, de papel, escritura, o noticia que se le conceda a la parte, llebando los derechos arreglados...»*. Si el solicitante prefería llevar su propio notario *«para testimoniar la noticia que saque será este gasto a más de los derechos que le pertenezzen, y quedan señalados al Archivero»* [ZARAGOZA, 1730].

La mayoría de los particulares que acudían a los archivos municipales, pretendían, como señalaba el ayuntamiento de Madrid en 1746, documentar *«pruebas de hábito y nobleza»* [Domingo Palacio, 1875, p. 32]. Otros intentaban buscar pruebas documentales que les pudieran ayudar en algún proceso. En este sentido pocos textos hay tan claros como las ordenanzas municipales de Enterriás, Vada y Dobarganes, del año 1744, cuando recogen que si *«algún vecino necesitare para su defensa contra el forastero alguna escriptura, los regidores se la hayan de dar»* [ENTERRÍAS, VADA, BOGARBANES, 1744]. En Jerez de la Frontera, en el siglo XVIII, son *«considerables por su número e importancia los memoriales presentados por particulares en que solicitan, entre otras cosas, antecedentes de apellidos y pruebas de noble linaje»* [Orellana González, 1992, p. 96].

En el archivo de Villamarchante se conservaba, según el libro índice de los papeles de su archivo del año 1769, una Real Orden, expedida en 1756, sobre que los archiveros no se negaran a buscar papeles para los que pretendieran algún hábito de Santiago, etc. [Mateu Llopis, 1969, p. 89].

Por las ordenanzas de San Sebastián del año 1758 se establece que el archivero debía cuidar de que no se sacara del archivo ningún documento, bajo ningún pretexto, salvo por orden de la ciudad. No debía llevar ningún derecho por las copias o compulsas que ésta requiriese, pero *«si algún Particular los pidiesse, y mandasse dar el Tribunal, o la Ciudad, cobrará quince reales de vellón por cada día de los que se ocupare en el Archivo en buscar el documento, que se desea, y en tenerle de manifesto a el Escribano, que acudiere con la orden, mientras sacare la Compulsa»* [SAN SEBASTIÁN, 1758].

Un auto del Consejo Real de 16 de septiembre de 1773, refrendado en este mismo sentido por otro de 12 de marzo de 1774, obligó al archivero de Madrid a no entregar ningún documento original a particulares, dado que sólo podían salir, si convenía a Madrid y sus Propios, y tras recibo de algún capitular, del diputado o personero. Ahora bien los particulares sí podían solicitar certificaciones del contenido de documentos originales. Hasta entonces, según exponía el ayuntamiento de la capital, nunca el archivero había cobrado

derechos ni emolumentos extraordinarios *«salvo cuando se informaba sobre pruebas de hábitos, en cuyos casos los interesados hacían varios regalos»* [Domingo Palacio, 1875, p. 43].

El 6 de febrero de 1781, por Real Provisión de Carlos III, se aprobaba el *«Arancel de los derechos que ha de llevar el Archivero de Madrid a todas las personas que pidieren se busquen documentos, cotejos, revisiones y certificaciones de los existentes en el Archivo»*. Junto con los derechos percibidos, este arancel nos informa de las características de los demandantes y de sus peticiones. En concreto se refiere a las certificaciones dadas por el archivero de *«goce de Nobles»*, a las certificaciones de *«haber sido regidores de Madrid qualesquiera sugetos»*, a los *«informes de partes»*, a la búsqueda de noticias o documentos a instancia de parte, al cotejo de firmas, y a las certificaciones de pruebas para hábitos [MADRID, 1781].

El reglamento del archivo de Madrid del año 1784 nos recuerda estas obligaciones y nos insiste en el servicio dado a los interesados cuando recoge que cuidará *«el Archivero de que en la Oficina se guarde el respeto, y decoro, que se merece, así entre los dependientes de Madrid, como entre los interesados que acudan a tratar o solicitar el despacho de sus negocios particulares»* [MADRID, 1784].

Sobre el uso de los archivos municipales por los particulares durante el Antiguo Régimen, y una de sus principales limitaciones, nos da cuenta también un regidor de Ecija, en el año 1817, al quejarse ante su ayuntamiento de los excesivos derechos que se cobraban por la apertura del archivo *«treinta reales a los forasteros y quince a los vecinos»* [Inventario, 1988, p. 20].

La consulta de documentos de los archivos municipales para elaborar estudios con finalidades históricas, hagiográficas o religiosas, y con pretensiones divulgativas, fue muy esporádica. No faltan historias de localidades, de vidas de santos, de órdenes religiosas, etc, que se conservan, generalmente manuscritas, y que fueron realizadas a lo largo del Antiguo Régimen, no sólo en el siglo XVIII. Muchas veces sus autores tuvieron que acudir a estos archivos para datar determinados acontecimientos, o aumentar la información de que disponían, antes de plasmarlos en sus escritos, con más o menos subjetividad. En Toledo, por poner un ejemplo, se publicó la primera historia de la ciudad, obra de Pedro de Alcocer, en el año 1554. En 1605, aparecía editada la *Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo* de Francisco de Pisa. Muy posiblemente los dos autores consultaron el archivo municipal.

Hacia 1616 Juan López Osorio escribió una historia de Medina de Campo con la ayuda de la documentación municipal [Álvarez García, 1980, p. 37].

Ya las Juntas Generales de Guipúzcoa, en la reunión celebrada en Hernani, en noviembre de 1623, acordaron que el licenciado Arteaga ordenara los archivos de sus pueblos y recogiera todos los documentos dispersos que

podieran ser útiles e interesantes para su historia [Anguera, Juana y Orube, 1987, p. 349].

No es el objetivo de este estudio centrarnos en el origen de la historiografía en España ni en la posible utilización por los primeros cronistas de los archivos municipales. Sin duda los tuvieron a su disposición y pudieron hacer uso de sus documentos. No obstante, está claro, como reflejan los libros de conocimientos, que de tarde en tarde se abrieron estos archivos para que miembros de la élite cultural obtuvieran de ellos la información que necesitaban para documentar sus obras. Y no fue extraño que se les permitiera incluso llevarse la documentación a sus propias casas, con los perjuicios que de ello pudieran derivarse. Conviene recordar que ciertos historiadores sevillanos, en el siglo XVII, «registraron y revolvieron el archivo, llevándose en confianza muchos papeles que jamás fueron devueltos» [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 11]. O que un buen número de documentos municipales jerezanos fueron recuperados a la muerte de los historiadores José Angelo Dávila y Antonio Dávila [Orellana González, 1992, p. 91].

Otros acudieron a los archivos municipales comisionados por la Corona para buscar documentos que avalaran determinadas pretensiones. Los problemas que se mantenían con la Santa Sede suscitaron en el reinado de Fernando VI la visita de muchos archivos, entre los que se encontraban varios municipales. Ascensio Morales acudió entre otros al de la ciudad de Badajoz en 1753 [Rodríguez Amaya, 1952, p. 482-492]. Por esos años el padre Andrés Marcos Burriel estaba en Toledo copiando muchos documentos de sus archivos con la misma finalidad [Galende Díaz, 1994, p. 241-268]. Pero no fueron los únicos [Simón Díaz, 1950, p. 131-170].

A finales del siglo XVIII, Carlos IV comisionó a Manuel Abella para que formara una colección diplomática de España, visitando determinados archivos [Millares Carlo, 1925, p. 515-530], y de lo que el propio autor dio noticia en una publicación aparecida en el año 1795. Varios archivos guipuzcoanos fueron visitados a principios del siglo XIX por José Vargas Ponce, amparado en una Real Orden de 10 de agosto de 1800, con el objetivo de conocer datos para el pleito que mantenían esas localidades sobre el puerto de Pasajes [Garmendia Estomba, 1989, s/p.].

Antonio Capmany y de Monpalau, y otros autores utilizaron también los archivos de Cataluña por esa época [Planes i Albets, 1993, p. 23, notas 28 y 29]. Ignacio de Asso se sirvió de la documentación del archivo municipal de Zaragoza para escribir su *Historia de la Economía Política de Aragón*. El archivero de esta ciudad fue expedientado en 1796 por permitir al economista que consultara la documentación en horario fuera del normal del ayuntamiento [González Miranda, 1981, p. 67].

Joaquín Traggia inició en 1792 un viaje por diferentes archivos aragoneses recopilando datos, en un buen número de volúmenes, para las obras que quería escribir. Poco después ingresaría en la Real Academia de la Historia, de la que llegaría a ser anticuario y bibliotecario, antes de su muerte en 1802.

No cabe duda de que el despotismo ilustrado y las corrientes culturales que lo apoyaron facilitaron la utilización de los archivos durante el siglo de la Razón, y abrieron el camino hacia el positivismo histórico del siglo XIX, pero los archivos, también los municipales, venían utilizándose para conocer el pasado desde bastante tiempo antes. Además, no debemos olvidar que la casi totalidad de los particulares que acudieron a los archivos municipales durante el Antiguo Régimen lo hicieron para resolver problemas personales, y, por lo tanto, muy pocos se acercaron a ellos motivados por su curiosidad científica.

Los archivos municipales no se abren a la investigación en el siglo XIX, como tantas veces se ha escrito. Todos aquellos eruditos que necesitaran consultar documentos de estos centros pudieron hacerlo a lo largo del Antiguo Régimen, con las limitaciones ya señaladas, y siguiendo un procedimiento regulado al que ahora nos vamos a referir.

2. Las aperturas del archivo

La conservación del patrimonio documental municipal fue posible gracias, entre otras medidas, a un estricto control en la salida de los documentos de sus archivos, al que estaban supeditados todos los posibles usuarios, fueran comisionados de las instituciones monárquicas o simples vecinos. Este control, refiriéndonos al archivo de la ciudad, del común o de los privilegios, se utilizó siempre que se abría el archivo, tanto si el documento se examinaba y copiaba in situ, o en cualquier otra dependencia municipal, como si era sacado para ser enviado a la Corte o a alguna Chancillería o Audiencia. Todos los solicitantes debían ser autorizados previamente por alguna autoridad municipal.

2.1. La autorización previa

La autorización de la apertura del archivo era una competencia prácticamente exclusiva del ayuntamiento o consejo municipal. Cualquier interesado que quisiera hacer uso de la documentación conservada en el archivo de los privilegios o de la ciudad debía formular una petición estableciendo los motivos de su consulta y los documentos que quería examinar. Este requisito se solía cumplir también por las autoridades locales y oficiales concejiles, exponiendo bien verbalmente en cabildo, o por escrito, su interés por el examen de determinados documentos, necesarios para resolver problemas o litigios que

atañían al común. Las autoridades locales reunidas en ayuntamiento, tras examinar la petición, acordaban la apertura del archivo, y por lo tanto la reunión de los claveros o custodios de sus llaves.

La existencia de instrumentos descriptivos y el parecer del escribano del concejo y de los regidores archivistas permitiría conocer con antelación si la documentación solicitada se encontraba en el archivo de la ciudad, o en alguna otra dependencia municipal. Al menos esto ocurriría en las grandes poblaciones.

Los libros de acuerdos de ayuntamientos o consejos municipales recogen, por lo tanto, las autorizaciones concedidas para consultar la documentación del archivo del común. Si bien las referencias que aparecen en ellos son escuetas, limitándose a recoger el nombre del peticionario, el motivo que fundamenta su solicitud, y la decisión municipal de que se abra el archivo. Muy pocas veces, a la vista de los estudios publicados, se ponen impedimentos.

Este requisito de autorización previa aparece ya documentado en la Baja Edad Media y se mantendrá casi sin cambios durante todo el Antiguo Régimen, tanto en la Corona de Castilla como en la de Aragón.

En Castilla, ya en el año 1327 un mandamiento del concejo de Córdoba dirigido al prior y frailes del monasterio de San Pablo, en donde se conservaba su arca, autoriza la extracción de varios privilegios [Nieto Cumplido, 1978, p. 1]. El 21 de diciembre de 1497, en el libro de acuerdos del ayuntamiento de Madrid figura lo siguiente: «*Que se abra el arca del Concejo de Escrituras, la que está en Sant Salvador...*» [Gómez Iglesias, 1974, p. 30]. En la sesión de 11 de mayo de 1502 los regidores de Talavera de la Reina autorizaron al procurador de la villa a buscar en el arca varios documentos que necesitaban para tomar una decisión [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 90].

La pragmática de los Reyes Católicos de 9 de junio de 1500 determinó que siempre que fuera necesario algún documento, lo «*saque la Justicia y Regidores*».

Algunas ordenanzas municipales castellanas del siglo XVI se detienen en este requisito. En las de Baeza del año 1524 se señala que el mandamiento por el que se ordena la apertura del archivo «*vaya firmado de la justiçia con çinco regidores por lo menos de los que a la sazón estuvieren o residieren en la dicha çibdad*» [BAEZA, 1524]. Es decir que además del acuerdo capitular, reflejado en el correspondiente libro, en Baeza se necesitaba un mandamiento dirigido al escribano y a los otros custodios de llaves, ordenando la apertura.

Por las ordenanzas de Cantillana del año 1550, la salida de un documento del archivo por más de dos horas requería licencia del arzobispo de Sevilla, a cuyo señorío pertenecía la localidad, o de su provisor o su gobernador [CANTILLANA, 1550].

En Écija, por sus ordenanzas de 1564, se establece el requisito previo para la consulta de cualquier documento de *«proviçión de la çibdad estando ayuntados en el dicho cabildo justiçia e regimiento, e que esto venga dispuesto e mandado así en la dicha provisión»* [ÉCIJA, 1564].

El 9 de enero de 1571, los dos alcaldes mayores de Burgos, que eran custodios de las llaves de su archivo, prometieron que *«nadie sacaría documento alguno sin licencia de la ciudad o al menos que se tomase conocimiento»* de los solicitantes [Díez Sanz, 1984, p. 26]. Era posible, por lo tanto, que los llaveros en casos especiales tomaran la resolución por sí mismos de abrir el archivo, pero sin quedar exonerados de dejar constancia de ello en el libro de conocimientos, al menos en Burgos y en ese período. Esto no fue lo habitual.

Tampoco lo sería que el corregidor sin contar antes con el acuerdo del regimiento, que, no olvidemos, él presidía, decidiera reunir a los llaveros y abrir el archivo. Así parece que ocurrió en Astorga en 1607 [Martín Fuertes, 1980, p. 13].

Sin duda estamos ante situaciones especiales que se escapan de la norma en todos estos siglos: para abrir el archivo del común se necesitaba el acuerdo o la licencia del ayuntamiento. En Sevilla, y no sólo en el siglo XVII, el archivo se abría *«por la orden, tras el preceptivo acuerdo del Cabildo»* [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 15].

En las ordenanzas municipales de Burgos del año 1747 se establece que *«no se pueda sacar papel alguno, sin especial acuerdo de la ciudad»* [BURGOS, 1747]. En Orense, en 1757, se señalaba que nadie podía consultar los documentos del archivo *«sin que preceda facultad de la ciudad para que concurran los tres señores claveros del archivo»* [Gallego Domínguez, 1981, p. 183]. Por las ordenanzas de San Sebastián del año 1758 se precisa *«orden de la Ciudad»* para entregar cualquier documento [SAN SEBASTIÁN, 1758]. En Oviedo, el 17 de agosto de 1770, se dispone que el procurador general y personero informen a la ciudad *«de los préstamos que el Ayuntamiento hubiese hecho de su documentación»* [Villa González-Río, 1978, p. XX].

Como éstos podríamos recoger otros muchos ejemplos. Los ayuntamientos controlan directamente la consulta de su documentación, como también hacen otras instituciones territoriales. La Diputación General del Señorío de Vizcaya estableció el 30 de julio de 1744 que de sus dos archivos no se pudiera sacar ningún documento *«sin orden escrita de los Señores de la Diputación»* [Gómez Rodrigo, 1974, p. 72].

Pocas modificaciones se introducirán en la segunda mitad del siglo XVIII. Las Juntas de Propios y Arbitrios, creadas por esos años, podrán autorizar en algunas poblaciones la consulta de los archivos del común. Como bien sabemos, por su composición, todos sus miembros estaban vinculados

con el ayuntamiento. No dejaba de ser un nuevo órgano colegiado de gobierno municipal con atribuciones más específicas, también presidido por el corregidor. Esta autoridad, de nombramiento real, podía mediante auto ordenar la reunión de los claveros para abrir el archivo. Así se recoge a finales del siglo XVIII en Madrid o Valladolid.

En el reglamento del archivo de la villa de Madrid de 1784 se ordena al archivero que no permita sacar ningún documento «*sin que preceda Acuerdo del Ayuntamiento, o providencia del Sr. Corregidor, y sus Tenientes*» [MADRID, 1784]. El ayuntamiento de Valladolid, en 1797, estableció que sólo se podía consultar documentos «*precediendo acuerdo del Ayuntamiento y Auto Judicial o de V.I. como Corregidor*» [Pino Rebolledo, 1991, p. 24].

El Consejo Real, por el auto de 1797 en el que establecía las obligaciones del contador-archivero de Santander, quiso que siempre «*que se necesite sacar alguno del Archivo, precederá orden de la Ciudad o Junta comunicada al Archivero*» [Vaquerizo Gil, 1984, p. 8]. En Madrid, en 1816, se indica a las oficinas municipales que cuando necesiten algún documento deberán especificar en el oficio que dirijan al archivero «*la fecha del acuerdo del Ayuntamiento o de su Junta de Propios en que se haya determinado semejante pedido*» [Cayetano Martín, 1986, p. 558].

De ahí que en la Corona de Castilla y durante todo el Antiguo Régimen la apertura del archivo del común estuviera supeditada al acuerdo del ayuntamiento en la práctica totalidad de los municipios. Esta competencia fue atribuida también en determinadas poblaciones a las Juntas de Propios y Arbitrios creadas en la segunda mitad del siglo XVIII. A veces los corregidores pudieron además, mediante autos o providencias, reunir a los claveros para abrir el archivo.

Dado que los custodios de las llaves pertenecían al ayuntamiento, o al menos tenían conocimiento directo de sus decisiones, caso del escribano del concejo, bastaba con el acuerdo municipal para convocarlos. No obstante hemos visto que en determinadas localidades estos acuerdos se vieron complementados con mandamientos específicos trasladándolos la resolución de este órgano colegiado.

En la Corona de Aragón la situación debió ser muy parecida tras la aprobación de los Decretos de Nueva Planta a principios del siglo XVIII. En Zaragoza, el conde de Torres Secas señalaba en su instrucción que antes de entregar el archivero cualquier documento «*ha de preceder primero decreto de la Ciudad*» [ZARAGOZA, 1730]. Con anterioridad a esas disposiciones centralizadoras borbónicas, la salida de documentos de los archivos municipales en esa Corona debió responder a decisiones colectivas de los principales órganos de gobierno locales. En Tortosa, en 1579, se aprobó que no se permitiría la extracción de ningún documento original del archivo «*sinó que sia*

delliberat per lo magnífich consell general o de vintena o altre consell que tinga plen poder de aquells», ni tampoco se permitiría dar copia sin preceder la deliberación de alguno de esos consejos [TORTOSA, 1579].

Muy posiblemente en el ámbito catalán la apertura de sus archivos municipales dependió de las decisiones de sus consejos municipales, al igual que ocurría en Castilla con los ayuntamientos. Una situación similar se produjo en el Reino de Aragón. Por las ordenaciones de la ciudad de Daroca del año 1647 se establece que para sacar cualquier escritura del archivo era necesario que precediera *«primero de todo lo sobredicho licencia del Iusticia, Oficiales, y Consejo, o de la mayor parte de ellos»* [DAROCA, 1647]. En las de Alcañiz, del año 1658, se recuerda al notario que no puede mostrar ninguna escritura del archivo *«sin licencia, y voluntad de los Iurados, y Consejo, y si estuviere advertido por los Iurados que no los muestre, no los pueda mostrar contra la voluntad de los dichos Iurados y Consejo, sino sea con manifestación, compulsa, o mandamiento de Iuez»* [ALCAÑIZ, 1658]. Al igual que ocurría en Castilla cualquier negativa en la consulta podía ser levantada si así lo estimaba un juez al que se acudiera en apelación.

En otras instituciones territoriales aragonesas también recayó fundamentalmente en sus consejos la prerrogativa de decidir la apertura de sus archivos. El archivero de la comunidad de Daroca, por sus ordenaciones del año 1686, no podía dar ningún documento sin *«licencia, y por mandamiento del Asistente,... y aunque el Asistente y Consejo le mandaren sacar alguna escritura...»* [Comunidad de DAROCA, 1686].

2.2. La entrega de los documentos

Realizada la solicitud por cualquier interesado, vista y aprobada por el ayuntamiento o consejo municipal, y comunicada la decisión acordada a los custodios de las llaves, el siguiente paso era determinar la fecha y hora para abrir el archivo, convocando para ello a todos los custodios de las llaves, al interesado o persona que lo representara, y al escribano de la ciudad, si no era uno de los llaveros. Una vez reunidos todos se procedería a abrir el archivo, a buscar la documentación requerida, y a hacer una copia, o entregar el original, al solicitante, no sin antes tomar las garantías suficientes que asegurasen su devolución.

Todo este proceso ha sido recogido en algunas ordenanzas municipales. En las de Valencia de Alcántara del año 1489 se establece que *«sy acaesçiere que la dicha villa oviere menester alguna de las dichas provisiones, previlegios y escripturas, se junten los dichos alcaldes, regidores y procurador y escrivano y vaya a casa de la persona, en cuyo poder estoviere el arca, y la abran públicamente e saquen las escripturas, que ovieren menester, y lo asyente asy el*

escrivano todo por testimonio, declarando las escripturas que llevan e lo dé a la persona que toviere el arca en poder. E, de otra manera, no consientan sacar las dichas escripturas y, desde que se ovieren aprovechado dellas, las buelvan y metan en el arca y se junten dentro y, asy metidas, el guardador buelva la fe y testimonio que thenia de como se las avían llevado, el qual se ronpa luego» [VALENCIA DE ALCÁNTARA, 1489].

Otro ejemplo ilustrativo es el producido en Astorga en el año 1607. Allí el corregidor *«mandó se junten los archivistas regidores desta çibdad y, juntos con su merçed e yo el escrivano abran el dicho archivo, y en él busque los papeles que refiere, ... luego yncontinenti el dicho corregidor, por ante mi el escrivano, fue a la sala donde se alla el registro y está el dicho archivo y con la llabe del dicho Francisco de Alisen y la que tienen su merçed y la de mi el presente escrivano se abrió el dicho archivo»* [Martín Fuertes, 1980, p. 13].

A) REUNIÓN DE LOS CUSTODIOS DE LAS LLAVES

Para la apertura del archivo era preciso que al menos todos los custodios de las llaves estuvieran presentes, lo cual no era nada sencillo teniendo en cuenta sus otras muchas ocupaciones, como más adelante veremos. La convocatoria con la fecha y hora precisa podía producirse por auto del corregidor o justicia, o por cédula de convite del propio ayuntamiento, o simplemente por comunicación verbal a todos los interesados. Era preciso que obviamente no fuera día festivo, y que la reunión se produjera dentro del horario normal del propio ayuntamiento.

En estas aperturas además de los custodios de las llaves participaban los solicitantes fueran autoridades locales, oficiales concejiles, representantes de instituciones o particulares, ayudados a veces por escribanos u otras personas que supieran leer los documentos. Fuera claverero o no, siempre estaba presente el escribano del ayuntamiento o notario del consejo municipal.

En algunas ocasiones, en la apertura del archivo podían tomar parte otras personas. En Valencia de Alcántara, aunque las tres llaves estaban en manos de uno de los regidores, del procurador general, y de la persona en cuya casa se guardaba el arca, en las aperturas participaban, según sus ordenanzas del año 1489, como acabamos de ver, los alcaldes, los regidores, el procurador y el escribano, además del vecino claverero. En Astorga, en 1576, aunque los custodios de las llaves eran el corregidor, uno de los regidores y el escribano, el archivo fue abierto en presencia del corregidor, varios regidores y del procurador general [Martín Fuertes, 1980, p. 12]. En Toledo, por las ordenanzas de las llaves del archivo, modificadas en 1545, quedó establecido que *«no se pueda abrir ni cerrar, para meter ni sacar ninguna escritura del dicho archivo, sin estar presentes por lo menos la justicia y tres Regidores, y el escrivano*

mayor o su lugarteniente» [TOLEDO, 1528]. Uno o dos jurados participaban también en estas aperturas desde principios del siglo XVI, y todavía, entendemos, que no estaba construido el armario-archivo de seis llaves.

Lo mismo ocurrió a veces en la Corona de Aragón. En las ordenaciones de Huesca del año 1551 se reguló que no se pudieran abrir los cajones de su archivo «*ni escripturas algunas de aquellos sacar, sino con intervención del lusticia, o su Lugarteniente, y de los Prior, y Jurados de la ciudad, todos, o mayor parte dellos, y de quatro ciudadanos de los insaculados en officios del regimiento de la ciudad, y del notario del regimiento, y dos testigos*» [HUESCA, 1551]. También en las ordenaciones de Jaca, del año 1694, quedó establecido que el arca de los privilegios y escrituras de la ciudad «*no se pueda abrir, ni de ella escriptura alguna sacar, sino con intervención de los dichos Oficiales respective, del Notario del Regimiento, y de dos testigos*» [JACA, 1694].

Estos ejemplos ponen de manifiesto que no siempre en las aperturas del archivo participaron solamente los custodios de las llaves y el escribano del concejo.

B) RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS: LOS RECIBOS

Una vez localizados los documentos solicitados con la ayuda de los instrumentos descriptivos existentes y siempre que fuera preciso sacarlos del archivo por cualquier necesidad, la persona que los recibía debía dejar constancia de su recepción, mediante un documento generalmente redactado por el escribano del concejo. Por él se obligaba a su devolución en un plazo no siempre determinado y ofrecía a veces ciertas garantías. Tras la devolución de los documentos se solía romper ese recibo.

En las ordenanzas municipales de Valencia de Alcántara, del año 1489, se señala que una vez entregada la documentación, debía registrarla todo el escribano «*por testimonio, declarando las escripturas que llevan*». Ese testimonio quedaba en poder del custodio del arca, hasta que una vez devueltas «*el guardador buelva la fe y testimonio que thenia de como se las avian llevado, el qual se ronpa luego*» [VALENCIA DE ALCÁNTARA, 1489].

La pragmática de 9 de junio de 1500 ya establecía que cuando se sacara alguna escritura del archivo, «*aquel a quien la entregaren se obligue de tornarla dentro de cierto término*». Esta obligación pudo tener distintos reflejos documentales.

En las ordenanzas de Baeza del año 1524 se obliga al escribano a asentar «*por auto qué escriptura es la que se saca e por cuyo mandado e para qué efecto*» [BAEZA, 1524]. En Gata, en 1525, debe asentar la fecha en que se saca, el nombre de la persona que lo recibe «*el qual dexe en la dicha arca conosçimiento para la volver*» [GATA, 1525]. En Ciudad Real, en 1595, ese

recibo o testimonio se denomina como «*cédula*» [Bernabeu Novalbos, 1952, p. 10]. Y en San Sebastián se identifica con el término «*conocimiento*». Así en el inventario de su archivo realizado por Luis de Cruzat, en 1581, se describe el documento M/9 como «*Conocimiento que Luis de Alçega otorgó, en que confiesa haber recibido de Miguel de Achega el privilegio de la fundación de la villa con otros privilegios...*» [Banus Aguirre, 1986, p. 123].

En Burgos se recordaba, en 1613, que en lo sucesivo no se sacara documentación sin que quedara constancia de quien lo recibía [Díez Sanz, 1984, p. 24]. En las ordenanzas de Frama, del año 1617, también se recoge que las personas «*a quien se entregaren dejen recibo de la tal escritura con número de hojas para que por él se pueda tornar a pedir y cobrar la tal escritura de modo que no haya lugar de perderse*» [FRAMA, 1617]. En las del principado de Asturias del año 1659 y en lo referente a los papeles de su archivo se regula que «*no salga ninguno sin reçivo*» [Principado de ASTURIAS, 1659].

Estos recibos podían ser sustituidos en algunos casos por una escritura pública, con todas sus solemnidades, sobre todo cuando eran sacados del archivo bastantes documentos, o se consideraban de especial importancia, buscando la corporación municipal con ello las máximas seguridades. Así ocurrió en Talavera de la Reina. En la sesión de 20 de julio de 1670 se dio cuenta de que «*para dichas pruebas se sacaron otros quatro libros de acuerdos de diferentes años de que se hiço escriptura ante el presente escribano de volberlos a dicho archibo dentro de zierto término*» [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 92-93]. En algunas ocasiones llegaron a elaborarse verdaderos inventarios y autos con motivo de la entrega de documentos. El 28 de mayo de 1660, en Orense, su alcalde mayor daba cuenta de que al abrir el arca para buscar determinados documentos halló «*un ynventario de papeles de los que se an entregado a Francisco Puga, Procurador general que a sido de dicha villa, y otro reuento y auto ... por donde consta aver entregado algunos papeles*» [Gallego Domínguez, 1988, p. 31].

Los agentes de negocios de Sevilla en Valladolid también formalizaron por escritura ante notario la recepción de documentos, en 1602 y 1604.

En el siglo XVIII no habrá cambios en esta situación. Al menos en teoría siempre que se entregaba un documento del archivo, el interesado firmaba el correspondiente recibo. En 1726, Juan Isidro Fajardo, a la sazón uno de los comisarios del archivo de Madrid, sacó doce privilegios originales para ser copiados y autorizados. Hecho esto, los devolvió al archivo no sin antes recoger «*el recibo que di de ellos*» [Gómez Iglesias, 1974, p. 34]. Por lo tanto, como ya vimos en las ordenanzas de Valencia de Alcántara, era habitual que el recibo fuera destruido una vez devuelta la documentación o al menos entregado al solicitante, con alguna anotación que reflejara su devolución.

El propio Consejo Real, en el Despacho aprobado para la villa de Vallecas, en 1728, estableció que la persona que recibiere documentos de ese archivo estaba obligada a dejar *«recibo o conocimiento»* [Mateu Llopis, 1945, p. 87]. Lo mismo se establece en las ordenanzas municipales de Enterriás, Vada y Dobarganes, del año 1744. O en las de Burgos del año 1747. En ellas se especifica que cuando se saque un documento por orden de la ciudad *«sea con recibo, que dexe el que le llevare, en el Libro que hay para este fin»* [BURGOS, 1747].

Dado que en estos recibos aparecían datos suficientes para identificar al solicitante, y la documentación extraída, constituían el elemento básico para recuperar los documentos no devueltos. Así lo entendía también Francisco Milla, comisario del archivo de Madrid, que en la instrucción elaborada en 1753 contemplaba como punto tercero que *«se hiciere conocer a Madrid todos los recibos de papeles a fin de poderlos reclamar a las personas que los hubieren sacado»* [Domingo Palacio, 1875, p. 35].

Es muy posible que esta medida afectara también a los documentos municipales que se encontraban fuera del archivo del común o de los privilegios, al menos en algunas poblaciones. En Orense, en 1757, se sacaron del archivo varias obras impresas que quedaron bajo la custodia del escribano, en su propio cajón, para que *«con recibo los entregue a los médicos y más señores capitulares para que los lean y usen»* [Gallego Domínguez, 1981, p. 183]. En Santander, en 1797, también se permite a los interesados sacar documentos del archivo *«dexando recibo que recogerá luego que se debuelvan»* [Vaquerizo Gil, 1984, p. 8]. El uso de los recibos también se recoge en el Plan de la escribanía de Tolosa del año 1819.

En Madrid, en 1816, se recordaba a cada uno de los responsables de las oficinas municipales que cuando necesitara algún documento del archivo *«lo haga por medio de formal oficio, que dirigirá al archivero que ahora es y en adelante sea, expresando la fecha del acuerdo del Ayuntamiento o de su Junta de Propios, sin cuyo requisito, no deberá hacer la entrega, el mencionado archivero»* [Cayetano Martín, 1986, p. 558].

Todos estos ejemplos de la Corona de Castilla pueden corresponderse con otros del Reino de Aragón. Las escrituras o actas de entrega, los inventarios parciales, los testimonios y autos, y sobre todo los recibos, en donde quedaba constancia de la salida de documentos de los archivos municipales castellanos, tienen su paralelismo en Aragón con las escrituras públicas, los albaranes o las ápoas.

Ya en las ordenaciones de Huesca del año 1551 se establece que siempre que se sacara documentos de su archivo *«se haya de hazer acto por el dicho notario»* [HUESCA, 1551]. Y lo mismo se recoge en las de Tarazona del año 1685. En ellas se dice que *«queremos, que de las escrituras, o escritu-*

ras, y qualesquiere otros papeles que se sacaren de dicho Archivo, se aya de hazer acto público por el Secretario, poniendo en él las calidades, y noticias de las escrituras, o papeles que se sacaren» [TARAZONA, 1685]. En las de Jaca del año 1694 se ordena que «*assi al tiempo de sacarlas, como de restituir las, se aya de entregar con apoca, como al que las recibiere, y entregare*» [JACA, 1694]. En la comunidad de Daroca, por las ordenaciones del año 1686, también se exigía a los que pretendían sacar documentos de su archivo que dieran «*albarán suyo del recibo de ella*» [Comunidad de DAROCA, 1686]. Recibo es el término utilizado por el conde de Torres Secas, en su instrucción del año 1730 para el archivo de Zaragoza.

Poco sabemos de las características de estos recibos. Lo normal es que en ellos figurase la fecha completa de la entrega, el acuerdo del ayuntamiento o consejo permitiendo su salida, el nombre del peticionario, o receptor que lo representara, una breve descripción del documento o documentos requeridos, y el compromiso de su devolución refrendado por la firma del interesado. A ello se podía añadir el motivo por el que era preciso sacar el documento del archivo y su signature de localización. En ellos no siempre se establecía un plazo para su devolución.

En las ordenanzas de Valencia de Alcántara del año 1489 simplemente se establece que las escrituras fueran devueltas cuando «*se ovieren aprovechado dellas*». En otros casos pueden tenerlas en su poder hasta que el ayuntamiento se las requiera. Esto parece deducirse de algunos ejemplos. En Valladolid, en 1517, se indica a la persona que retira un documento original que debe devolverlo «*cada e quando por ellos les fuese pedido*» [Pino Rebolledo, 1991, p. 19]. En Gata, en 1525, se establece que el solicitante debía comprometerse «*para la volver el día que le fuere señalado*» [GATA, 1525].

En las fuentes que mencionan los plazos en los préstamos de documentos suele figurar más reiteradamente la expresión «*por tiempo limitado*», sin especificar cuáles serían esos límites temporales. En las ordenaciones de Jaca del año 1694 se regula que las personas que recibieren documentos del archivo debían obligarse a «*restituir la dentro de tiempo limitado*» [JACA, 1694]. Como vimos en Talavera de la Reina, en 1670, también se señaló en la escritura de entrega un plazo para su devolución. En el Real Despacho para la villa de Vallecas, de 1728, se señala que «*a quien se entregare se obligue de volver dentro de cierto término competente para el efecto que se ofreciere*» [Mateu Llopis, 1945, p. 87]. En Zaragoza, en 1730, según el conde de Torres Secas, debía figurar en los recibos «*el tiempo que consideren ser preciso tenerlo en su poder*», pasado el cual el archivero velaría por su recuperación.

El reglamento del archivo de Madrid de 1784 es más explícito. Siempre que se sacaran documentos «*solo deben estar fuera del Archivo treinta días y*

pasados los han de devolver o han de obtener nuevo permiso» [MADRID, 1784]. Más claras fueron aún las ordenanzas de Cantillana del año 1550, puesto que en ellas se regula *«que ninguna escritura se pueda sacar de la dicha arca sin aver necesidad e sin que aya de bolver dentro de dos oras si no fuere con liçencia nuestra o de nuestro provvisor o del governador»* [CANTILLANA, 1550].

En los recibos no siempre se recogen las penas en las que podían incurrir los que solicitaran algún documento y no lo devolvieran, que sí suele reflejarse a veces en las ordenanzas. En las de Huesca del año 1551 la no restitución estaba castigada según la importancia del documento. En concreto en ellas se recoge: *«so la pena que alli parecerá a dichos Officiales y ciudadanos, y según la importancia de la escriptura que se sacara, deverse poner»* [HUESCA, 1551].

Para sacar algún documento del archivo de la Comunidad de Daroca, según las ordenaciones del año 1686, era necesario entregar *«una prenda de oro, o plata, que sea de valor de cien sueldos»* [Comunidad de DAROCA, 1686]. En las de la ciudad de Daroca, del año 1647, se señala que quien quisiera llevarse un documento, además de cumplir todo lo ya señalado, debía dejar *«una prenda de plata de valor de diez escudos, y de ahí arriba de la cantidad que parecerá a dichos Clavarios, según la calidad de la escritura»* [DAROCA, 1647].

C) REGISTRO DE SALIDAS: LOS LIBROS DE CONOCIMIENTO

Junto con los recibos de préstamos de documentos, en algunos municipios se llevaron además registros en donde se asentaba toda la documentación que se sacaba del archivo con arreglo al procedimiento establecido. Hubo localidades en las que estos registros sustituyeron a los propios recibos, mientras que en otras la cumplimentación de los recibos no exoneraba al escribano de asentar cualquier salida en el libro de conocimientos. Estos controles se produjeron tanto en poblaciones de la Corona de Castilla como en la de Aragón. La existencia de estos libros está constatada en la mayoría de las instituciones del Antiguo Régimen, tanto de la administración central como territorial, y también se llevaron en los archivos eclesiásticos.

La pragmática del año 1500 establecía que la persona a quien se entregare documentos del archivo debía dar *«conoscimiento dello»*. Este término bien pudo servir para denominar estos registros.

Ahora bien, en las localidades pequeñas se prefirió anotar las salidas de documentos en los propios libros inventarios. Las pocas veces que se abrían sus archivos hacía innecesario llevar un libro para anotar exclusivamente las

salidas y entradas de documentos. No ocurría así en las grandes poblaciones. Y de todo ello tenemos ejemplos ya en el siglo XVI en la Corona de Castilla.

En Gata, a partir del año 1525, según las normas de buen gobierno dadas por el juez de residencia, siempre que se sacara algún documento de su archivo, el escribano debía asentar «*el día, mes e año que se saca e quien la lleva*» [GATA, 1525]. Por las ordenanzas de Santo Domingo de Silos, de 1536, en el libro inventario de su archivo, el escribano tenía que asentar «*a quién se da e para qué negocio e se obligue de la bolber*». En la villa navarra de Los Arcos, su inventario de 1570, sirvió también para registrar las salidas y entradas de documentos desde ese año hasta 1677 [Pastor Abaigar, 1993, p. 198].

Algunas de las grandes ciudades castellanas ya utilizaban los libros de conocimientos en el siglo XVI. Toledo fue una de ellas. En el inventario de su archivo datado en torno a 1560 se recoge la existencia de un «*Libro de conocimientos de las escrituras que se sacan del Archivo, provisiones, cédulas y cartas misivas de Su Magestad*» que seguramente debió usarse hasta el año 1607. Un segundo recogería las salidas entre 1607 y 1677, y un tercero, desde ese último año hasta 1809 [Sierra Corella, 1931, p. 13, 41, 46 y 48]. Lo que da idea de la continuidad de los registros y del control mantenido en esta ciudad castellana durante toda la Edad Moderna. A lo que no será ajeno tampoco Talavera de la Reina. En 1563 se inició un «*Libro de recibos de los papeles que entran y salen del archivo*», en el que se recogerán anotaciones hasta el año 1804 [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 90].

Las ordenanzas de Cantillana del año 1550 ya contemplan «*que el que lo sacare o llevare dexe conocimiento de cómo la resçibe en un libro de conocimientos, el qual esté dentro en la dicha arca y archibo en que diga quien lo lleva y a qué efecto se saca*» [CANTILLANA, 1550].

En Salamanca, en 1583, se aprobó que «*en un libro de recivo, y saca de papeles, que ha de estar dentro, se asiente quién las lleva*». Fuera del archivo existiría otro libro con la misma finalidad «*en que también se asiente lo que saca dél, en una plana, y en otra, quando se buelve, y cada Consistorio postrero de mes, se lea en él, para que se sepa lo que se saca, y como se buelve*» [SALAMANCA, 1583].

En Valladolid, hasta la sesión de su ayuntamiento de 5 de febrero de 1601, no se acordó la adquisición de un «*libro en blanco con cubierta de veçerro para açer los conocimientos y memorias de lo que se sacare de los dichos archivos*» [Pino Rebolledo, 1991, p. 20].

En León, a finales del siglo XVI, se llevó también un registro de entrada y salida de documentos, que fue poco utilizado [Álvarez Álvarez y Martín Fuertes, 1986, p. 92].

Menos usual es la existencia de estos libros en poblaciones pequeñas. En el capítulo quince de las ordenanzas de la localidad cántabra de Frama, del

año 1617, se establece que *«tengan en la dicha arca un libro donde se escriban las escrituras que del se sacaren y para qué efecto»* [FRAMA, 1617].

El *«Libro de conocimientos de los papeles del Archivo de Sevilla»*, conservado en la actualidad, contiene asientos datados entre 1728 y 1836. En él se recogen los recibos de la salida de documentos del archivo de privilegios, indicándose con todo detalle la fecha en que se abrió el archivo y los testigos presentes, la descripción del documento, la explicación del uso que se pretendía hacer con él y la firma del responsable [Fernández Gómez, 1989, p. 428, nota 52].

En el inventario del archivo municipal de San Sebastián realizado por Martín de Uribe en 1740 también se describe la existencia de un *«libro de reconocimientos»* [Banus Aguirre, 1986, p. 8]. Esta denominación que se utiliza también en otros archivos, como es el caso de Jerez de la Frontera [Orellana González, 1992, p. 89], para referirse a los libros registro de salida de documentos, no aparece como tal en las ordenanzas de la ciudad del año 1758. Si bien en ellas sí se recoge la necesidad de que el archivero registre *«en un libro, que se formará, y tendrá en el Archivo, expresando el día, hora, y persona, a quien lo entrega; y restituído, pondrá la nota correspondiente»* [SAN SEBASTIÁN, 1758].

Tampoco recibe un nombre específico en las ordenanzas de Burgos del año 1747. Simplemente se señala que el recibo de los documentos extraídos del archivo se refleje en *«el Libro que hay para este fin, y en él haga obligación de volverle, poniéndose la nota con expresión del Legajo, y número donde estaba colocado, narrativa de su contenido, y del fin para que se saca»* [BURGOS, 1747]. Por su contenido, este libro hacía innecesario que el solicitante cumplimentara además algún recibo.

En Oviedo, un acuerdo de su ayuntamiento de 17 de agosto de 1770, ordena a los procuradores que informen a la ciudad *«previo examen de los libros de recibos»* de los préstamos que se hubieran efectuado de su documentación [Villa González-Río, 1978, p. XX]. Ello prueba que también en esta ciudad se venía utilizando este instrumento de control. Lo mismo ocurría en León en ese siglo. En 1780 se abrió un *«registro de documentos y libros sacados del archivo del común»*, que contiene anotaciones hasta 1796 [Álvarez Álvarez y Martín Fuertes, 1986, p. 92].

En Madrid, aunque es muy posible que existieran con anterioridad, lo cierto es que Fernando VI, por su Real Decreto de 22 de septiembre de 1746, ya solicitaba información sobre sí en el archivo de villa había *«libro de asiento de los instrumentos originales que se sacan, con nota de quién los saca, y para qué fines y con qué orden»*. En el auto del Consejo Real de 12 de marzo de 1774 se previno que fueran devueltos los documentos que por *«los libros de conocimientos resultase que habian salido»* [Domingo

Palacio, 1875, p. 31-32 y 43]. A todo ello no será ajeno el reglamento del archivo de Madrid de 1784, que recoge entre las obligaciones de su archivero la de que siempre que entregara un documento, la persona que lo recibiere debía firmar en «*el Libro, o Libros de conocimientos, que deve aver*» [MADRID, 1784].

Lo mismo se establece en Santander en 1797. El contador-archivero debía anotar en un «*libro separado los que se sacasen de él con espresión de la persona a quien se entregaren, y del objeto para que se sacan*» [Vaquerizo Gil, 1984, p. 8].

Además de estas grandes ciudades, otros municipios más pequeños pudieron servirse de estos libros con el mismo fin. En Écija también se llevaron registros de este tipo en la segunda mitad del siglo XVIII. Incluso hubo localidades que se sirvieron de ellos no sólo para el archivo del común.

En Toledo se conserva un «*Libro de conocimientos y recibo de los pleitos*» con asientos entre 1695 y 1771, que como bien sabemos nunca se conservaron en el archivo secreto. El ayuntamiento de Talavera de la Reina, el 2 de marzo de 1800, acordó «*la formación de un libro para anotar todos los documentos que se entregaban por la secretaría municipal a los presidentes de las distintas comisiones municipales*», que dejarían constancia de su recibí con su firma. Este libro era distinto del que se usaba para anotar las salidas de documentos del archivo del común. El propio acuerdo nos manifiesta uno de los sistemas utilizados para reflejar la devolución. Cada uno de ellos debería encargarse, si querían cubrir su responsabilidad, «*de cruzar o testar sus firmas en el indicado libro al tiempo de devolver los documentos, con cuya medida se evitará también el que al dejar de ser concejales sufran qualquier extravío lo que en tal concepto hubieran recibido*» [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 98].

Como vimos, en otras poblaciones, caso de Salamanca, se prefería anotar en una plana la salida y en otra contigua la devolución. En Toledo, junto con el sistema del tachado, visualmente muy efectivo, se optó por asentar, siguiendo un orden cronológico, las distintas aperturas, ya fueran para sacar documentos o para proceder a su devolución. Esto ofrecía ventajas si sólo se devolvían al archivo parte de los documentos sacados, en cuyo caso no era posible tachar el asiento. En otras localidades se optó simplemente por añadir al margen el término «*volviose*» u otro similar.

Un ejemplo de asiento de un libro de conocimientos, con una redacción extensa, puede ser el siguiente:

TOLEDO, 1631

«En la ciudad de Toledo a tres de agosto de mill y seiscientos y treinta y un años estando presentes el señor Juan de Herrera de Aguilar, alcalde hordinario desta ciudad, los señores Jerónimo Hurtado, Juan de Palma y don Fernando Hurtado rregidores comisarios llaveros del archibo con las llaves del y en presencia de mi el escribano mayor le abrieron y del sacaron los papeles siguientes:

Una Real Provisión de el señor don Enrrique dada en Segovia diez de junio de 1470 años en que hizo merced ael Conde de Fuensalida para que acrecentase en Toledo algunos jurados y escrivanos públicos para pacificación de la ciudad refrendada de Juan de Oviedo.

Otra Provisión...

El prebillejo...

Confirmación a la ciudad...

Los quales dichos prebillejos y probisiones quedaron en poder de mi el escrivano mayor, los que toca a escrivanos, para compulsarlos en el pleyto que trata con el señor fiscal sobre los diez escrivanos. Y los dos prebillejos para dar copias dellos a Alonso García vecino de Toledo a quien an enpadronado en Mascaraque. Todo lo qual pasó en presencia del dicho alcalde y de los señores llaberos y de mi el escrivano siendo testigos... vecinos de Toledo, y los dichos señores llaberos se llevaron las llaves y todos lo firmaron.

*Joan de Herrera Jerónimo Hurtado Juan de Palma
Fernando Hurtado*

Ante mí Joan de Soria escribano mayor»

Fuente: A.M.T., Libro de conocimientos de 1608-1636

En esa misma ciudad se conservan ejemplos de redacciones mucho más concisas, realizadas por el escribano, sin que lleven ninguna firma. Un ejemplo sería:

TOLEDO, 1762

«En 19 de noviembre de 1762 se sacó del cajón 9 el libro en que están copiados todos los privilegios para dar un testimonio pedido por la señora condesa de Lemos»

[El asiento está tachado, lo que evidencia su devolución]

Fuente: A.M.T., Libro de reconocimientos de 1677-1809

La utilización de estos libros de conocimientos fue efectiva también en otras instituciones territoriales, caso del señorío de Vizcaya. Por un acuerdo de su Diputación General, de 12 de julio de 1737, quedó establecido que tanto *«en Guernica como en Bilbao habrá el Libro de Conocimientos, en donde deberá constar la entrega de cualquier instrumento de los Señores del Gobierno dejando, a su vez, recibo, la parte que los sacare»* [Gómez Rodrigo, 1974, p. 70]. Los hubo también en instituciones eclesiásticas, incluso en conventos y monasterios. Una visita al monasterio de Eslonza, en el año 1699, dio pie a que se formara un libro en *«donde se ponga el recibo de papel que se sacase»* [Burón Castro, 1993, p. 17]. Y se han encontrado en los archivos de algunas cofradías, como la de San Miguel en Toledo [Sierra Corella, 1931, p. 48].

En las poblaciones de la Corona de Aragón también se llevaron libros de estas características, aunque no se denominen como libros de conocimientos o libros registro de salida de documentos. Seguramente su difusión y tradición en el uso fue menor que en el ámbito castellano, dado que sólo está constatada su existencia, por ahora, en algunas de las grandes poblaciones. Si bien, a veces, se prefirió anotar las salidas en los propios libros inventario. En Barcelona, a finales del siglo XIV, *«cada vegada que es treu un document de dins de la caixa se n'ha de deixar constància per escrit a les rúbriques, és a dir als index que són dins la caixa; de la mateixa manera quan s'hi posa un nou document s'ha d'afegir a les rúbriques»* [Vinyoles, 1994-1995, p. 1.513].

En algunas poblaciones aragonesas se utiliza el mismo sistema. En las ordenaciones de Huesca, del año 1551, se establece que *«no se puedan sacar del dicho archiu, privilegios, ni escripturas algunas, sino que conste en el Libro de la rúbrica, que está dentro del dicho archiu, cómo se saca, y quién lo lleva, y cómo se offrece aquel restituyr, y aquel oblige»* [HUESCA, 1551]. El archivero de la Comunidad de Daroca, por sus ordenaciones del año 1686,

también se servía del libro inventario, toda vez que «*en el Libro del Cabreo conste quién la lleva*» [Comunidad de DAROCA, 1686].

Junto con los inventarios pudieron utilizarse los propios libros de acuerdos municipales. Al menos esto parece deducirse de las ordenaciones de Jaca del año 1694, dado que por ellas se obliga al notario del regimiento a reflejar en el «*Libro de la Ciudad*», cualquier salida de documentos [JACA, 1694].

La existencia de libros específicos con este fin quedó regulada en al menos Daroca, Tarazona y Zaragoza. En la primera población, y por sus ordenaciones del año 1647, fue aprobado que «*aya de aver, y aya un libro en blanco, para que siempre que se sacare algún privilegio, o escritura, qualquiera que sea, del dicho Archivo, la persona que la sacara aya de assentar en dicho libro como lo lleve, el día, mes, y año que la saca, para que conste quien la ha sacado; y assi mismo quando la bolverá, asiente el Secretario en el mismo libro como la bolvió*» [DAROCA, 1647]. En las de Tarazona, del año 1685, también se especifica que siempre que se sacasen documentos, se debía «*dexar minuta de dicho acto en el libro que para ello ay en el Archivo*». Por último, en la instrucción del conde de Torres Secas, elaborada en 1730, para el archivo de Zaragoza, se recuerda al archivero que debía encargarse de la devolución de los documentos sacados «*para cuyo fin tendrá libro destinado*» [ZARAGOZA, 1730].

En la localidad de Alcira, en el reino de Valencia, hasta la reunión de su ayuntamiento de 30 de diciembre de 1784 no parece que se llevaran libros específicos para controlar la salida de documentos. Por acuerdo de esa fecha se encargó a su escribano que «*tenga indispensablemente un cuaderno en debida forma en que se anoten y dejen formal recibo de los papeles y demás documentos que en caso de necesidad y no de otro modo se extraigan de él*» [Lairon Pla, 1995, p. 514].

Por lo tanto, en los archivos municipales de las principales ciudades castellanas, y en algunos de la Corona de Aragón, se llevaron registros independientes para asentar los documentos sacados de sus archivos durante el Antiguo Régimen. Fueron un claro instrumento de control que con diferentes denominaciones han mantenido su continuidad hasta los actuales libros registro de préstamos y consultas.

3. El descontrol: la recuperación de los documentos

Las aperturas del archivo, con arreglo al procedimiento mencionado, garantizaban en buen grado el control de la información, el uso adecuado de la documentación, y la devolución posterior de los documentos utilizados. Ahora bien, todo este sistema podía simplificarse enormemente en las pequeñas y

medianas localidades, y ni siquiera las grandes ciudades estuvieron libres de períodos convulsos, en los que la negligencia de unos y otros provocó pérdidas, a veces irre recuperables. Todo ello sin mencionar las guerras, incendios, traslados precipitados o revueltas que ocasionaron graves daños en el patrimonio documental de determinadas poblaciones, como ya hemos visto.

El uso de los documentos del archivo del común o de los privilegios descansaba en la autorización previa concedida por las autoridades locales, y en la reunión de los diferentes custodios de las llaves para abrir el archivo. El incumplimiento de estas medidas contempladas en las ordenanzas y en los acuerdos municipales, en aplicación de la pragmática del año 1500, se produjo con cierta frecuencia, especialmente si las llaves del arca o armario-archivo estaban en manos de una única persona.

Las medidas aprobadas para impedir que se produjeran pérdidas documentales seguirán fundamentalmente una triple dirección. Las autoridades intentarán que no se produzcan irregularidades en la custodia de las llaves, adoptando decisiones que pongan freno a posibles excesos de los custodios. Por otro lado penalizarán las aperturas fraudulentas. Y cuando los documentos sacados del archivo no sean devueltos procederán por todos los medios a su alcance a conseguir su recuperación.

3.1.- La custodia de las llaves y sus irregularidades

La efectividad de estas medidas es difícil de calibrar. Las personas en cuyo poder recaían las llaves del archivo del común o de los privilegios representaban al ayuntamiento o consejo municipal. Una de ellas solía estar en manos del corregidor que era la máxima autoridad local, ciñéndonos al ámbito castellano. Cualquier negligencia en la custodia podía implicar responsabilidades a algunos de los miembros más notables de la corporación municipal, y al escribano del concejo, si era uno de los claveros. De ahí que no siempre se actúe con rigor ante posibles fraudes.

El sistema establecido, basado en el repartimiento de varias llaves entre otras tantas personas, no dejaba de tener serios inconvenientes. La rigurosidad en las aperturas del archivo no facilitaba su limpieza y aireación. Además cuando se abría, *«los titulares de las llaves delegaban su responsabilidad en otras personas»*, lo que facilitaba las sustracciones [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 15]. Y si no era así, sin abandonar el ejemplo sevillano, estaba claro que los custodios de las llaves *«eran difíciles de juntar, tardos para abrir y veloces para cerrar, porque teniendo muchas atribuciones a que atender deseaban acabar con una que no podían evaquer por sí»* [Fernández Gómez, 1995 (c), p. 63]. Lo mismo se manifestaba en Orense, hacia 1757, ya que no era fácil conseguir la concurrencia de los tres claveros del archivo, pues *«aún*

para las mayores urgencias suele conseguirse con mucha dificultad» [Gallego Domínguez, 1981, p. 183].

A pesar de todo, los municipios castellanos, y aún más los aragoneses, pretendieron evitar los posibles perjuicios que se pudieran ocasionar a su patrimonio documental por un uso inadecuado de las llaves del archivo. La reunión efectiva de los claveros, cada uno con su llave, no siempre era factible debido a ausencias por viajes, a enfermedades o a dilaciones más o menos intencionadas. A ello se podía unir la pérdida de alguna de las llaves que imposibilitaba cualquier apertura, aunque estuvieran todos presentes. Estas situaciones dificultaban la salida de documentos; por contra la entrega de las llaves a terceras personas, sin el control o conocimiento de la corporación municipal, favorecía las extracciones fraudulentas. A todo ello intentaron poner freno los ayuntamientos o consejos municipales.

En Toledo, el 27 de enero de 1528, se tomó el acuerdo de que los custodios de las llaves del arca de las escrituras no se las darían a ninguna persona, y por lo tanto acudirían prestos a las aperturas, siempre que fueren requeridos, sin delegar en un tercero, y sin abandonar el lugar hasta que el arca estuviera de nuevo cerrada, y la llave en su poder. Ningún regidor podría tener más de dos, y sólo durante un año, de marzo a marzo. Y si tuviera que ausentarse de la ciudad, debía entregarla antes de su marcha al ayuntamiento para que éste designara a quién debía suplirle en su ausencia. Si la marcha era muy precipitada podía entregar la llave al corregidor. En 1538 fueron autorizados los regidores a entregar sus llaves a otro regidor para que éste la hiciera llegar al ayuntamiento, si tenían que ausentarse de Toledo. En 1545, se relaja aún más la primitiva disposición al permitir a los regidores archivistas, que por enfermedad u otra causa no pudieran estar presentes en las aperturas, el envío de las llaves al corregidor o a algún otro regidor, aunque más tarde les serían devueltas, hasta que cumplieran su año [TOLEDO, 1528].

En esta ciudad castellana el sistema de control funcionó sin especiales quebrantos. A lo más alguna vez fue necesario realizar una nueva cerradura al haberse perdido alguna de las llaves. Lo cual fue bastante habitual. En Orense, en 1555, fue necesario poner dos nuevas cerraduras en su arca por la pérdida de sus llaves [Gallego Domínguez, 1985, p. 192]. En Talavera de la Reina se tomó una medida similar el 11 de octubre de 1758 [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 96, nota 29]. El olvidadizo clavero debió abonar todos los gastos.

De todas formas lo que más preocupó a las corporaciones locales era la posibilidad de que las llaves de su archivo estuvieran fuera de su control. En las ordenanzas municipales de Santo Domingo de Silos del año 1536 se establece *«que el que tubiere la dicha llabe no la pueda confiar a otro»* [SANTO DOMINGO DE SILOS, 1536]. Pero esto no siempre era fácil de cumplir. En

Oviedo, un acuerdo de su ayuntamiento de 24 de diciembre de 1720, recuerda a sus regidores archiveros que cuando fuera necesario abrir el archivo «*no entreguen las llaves a los Porteros ni a otras personas*». Sin embargo, un regidor ovetense manifestaba en su sesión de 24 de diciembre de 1800, que la documentación se extraía del archivo «*con la mayor facilidad y sin la solemnidad correspondiente*» [Villa González-Río, 1978, p. XVIII y XXIV].

Lo mismo sucedía en Burgos a mediados del siglo XVIII. El archivo estaba en la torre de Santa María. Sin embargo, su llave se solía dejar en una arquita pequeña, situada encima de la mesa de la sala capitular. Este emplazamiento no era nada idóneo dado que «*puede subceder que baliénsose desta ocasión algunos se hagan dueños de dicha llave y, por consiguiente, de el archivo, con riesgo de sus papeles y de los Caudales*» [Díez Sanz, 1984, p. 49]. Por ello, en 1743, se acordó que la llave se sacara de dicha arqueta y fuera guardada por alguno de los regidores archiveros. Esta situación quedó reflejada en las ordenanzas de la ciudad, aprobadas en 1747, al determinar que «*dichos Archivistas tenga cada uno una llave de dicho Archivo, con prohibición expressa de dexarlas en la Arquilla de la Torre, sino que precisamente la guarden en su casa con la mayor custodia, para evitar el riesgo, que puede tener la omisión en el mayor cuidado*» [BURGOS, 1747].

También en las ordenanzas de San Sebastián del año 1758 se recuerda a los claveros que deben acudir a abrir y cerrar el archivo «*sin dar las llaves en confianza, ni unirlas en uno, a menos que ausencia precisa o enfermedad lo impida, ... para evitar por este medio substracción, o pérdida de Cédulas, órdenes Reales y papeles importantes*» [SAN SEBASTIÁN, 1758].

En el reino de Aragón, algunas ordenaciones se detuvieron muy pormenorizadamente en toda la problemática que podía derivarse de un uso inadecuado de las llaves del archivo. En las de Huesca, del año 1551, los llaveros se comprometían a «*no usar dellas, sino en los casos, y orden sobredichos*», a entregarlas a sus sucesores en los dos días siguientes después de que éstos hubieran jurado sus cargos, y si no era así, a abonar los gastos por realizar unas nuevas; y a no diferir u obstaculizar cualquier apertura.

Las ordenaciones de Calatayud del año 1611 establecen que los custodios de las llaves debían prestar juramento de que «*por sí, ni por otra persona, públicamente, ni oculta, no abrirán, ni abrir harán, ni consentir que sean abiertos, la dicha Arca y Archiu*», salvo en los casos establecidos por ellas. Se comprometían a llevar las llaves cuando fuera necesario «*sin dificultad, ni dilación alguna*», sin poner ningún tipo de impedimento, y en caso de ausencia, enfermedad u otra legítima causa se obligaban a entregarlas a sus sustitutos, determinados también por esta normativa [CALATAYUD, 1611]. En similares términos se refieren a los custodios de las llaves las ordenaciones de Daroca del año 1647 y las de Tarazona del año 1685.

En el ámbito catalán, el acuerdo del consejo de Tortosa, de 12 de junio de 1579, determinó que sus archiveros debían jurar, entre otras cosas, que *«les claus los seran acomanades guardaran ab tota fidelitat y aquelles no acomanaran a persona alguno sinó en cas de absència o indisposició en lo qual cas les puguén acomanar quisqun de dits archivers respectíve a altra persona de son grau y condició, que sia del consell general aprobadora per los molt magnífichs senyors procuradors la qual en tal cas haja de jurar per lo semblant com havia jurat aquell per qui portarà la clau»* [Massip i Fonollosa, 1987, p. 10, nota 2].

3.2. La penalización de las aperturas fraudulentas

Además de regular el uso adecuado de las llaves, algunas corporaciones locales pretendieron sancionar cualquier apertura del archivo realizada sin seguir el procedimiento normalizado. El establecimiento de penas y multas para castigar toda irregularidad tenía como fin evitar que se produjera una cierta relajación en sus obligaciones por parte de los custodios.

En la Corona de Castilla, los mecanismos habituales de control de las actuaciones de sus autoridades locales (visitas, juicios de residencia) podían hacer innecesarias la adopción de medidas especiales para castigar cualquier infracción cometida por los custodios de las llaves de sus archivos. Por ello en muy pocas normas se contemplan sanciones específicas por esta causa.

En las ordenanzas de Santo Domingo de Silos del año 1536 se establece que el custodio de la llave no podía entregarla a otra persona, bajo pena de 2.000 maravedíes [SANTO DOMINGO DE SILOS, 1536]. En las de Écija, del año 1564, simplemente se establece que recaerían en *«graves penas si lo contrario se hiziere»* [ÉCIJA, 1564]. En el Real Despacho dado a la villa de Vallecas, en 1728, el Consejo Real, tras determinar la forma de sacar los documentos del archivo, manifestó que si lo incumplían recaería en ellos *«pena de la mayor severidad»* [Mateu Llopis, 1945, p. 87].

Algo más concretas son las ordenanzas de algunas poblaciones cántabras, publicadas por R. Pérez Bustamante y J. Baro Pazos, que muestran en su contenido un desarrollo similar, por lo que también tienen coincidencias en el aspecto sancionador. En las de Lon y Brez, aprobadas en 1594, se determina una pena de 600 maravedíes a los custodios de las llaves si cometían irregularidades. En las de Frama, de 1617, se castiga con mil maravedíes a cada regidor llavero si no controlaban las salidas tal y cómo prescribían esas ordenanzas. Las de Potes, de 1619, son menos precisas, limitándose a recoger que los documentos debían ser devueltos *«porque de lo contrario se seguiría mucho daño o obscuridad y pleitos, lo cual deban pagar y satisfacer la persona a quien se entregare, o la justicia y regimiento en cuyo tiempo se sacaren si así*

no lo hicieren cumplir». En las ordenanzas municipales de Baro, de 1620, se multa a los regidores con doscientos maravedíes si no tomaban recibo de los documentos sacados *«por cada vez..., además de los daños que por no lo hacer se causaren»*. Esa misma cantidad es la establecida en las ordenanzas de Enterrías, Vada y Dobarganes del año 1744, mientras que en las de Armaño se rebaja la cifra a cien maravedíes.

En el Reino de Aragón, el procedimiento sancionador quedó regulado de una manera extensa y muy precisa en algunas ordenaciones municipales, demostrando una gran severidad con los infractores. En las de Huesca del año 1551 se determina que *«los Oficiales que de otra manera abrirán dichos caxones, o sacaran dellos escripturas algunas, caygan en pena de dozientos ducados de oro, para el acusador y bolsa común, ygualmente, y ultra la dicha pena, sean obligados a satisfacer a la bolsa común de la dicha ciudad todo el daño que dello resultara a la dicha ciudad»* [HUESCA, 1551].

Aún más rigor queda patente en las ordenaciones de Calatayud del año 1611. En ellas se determina que los clavaros del archivo que lo contrario hicieren *«se pueda proceder contra ellos, como quebrantadores de juramento, y homenaje, en la forma que por fuero, y en otra manera proceder se puede»* [CALATAYUD, 1611]. Años después, en las de Daroca de 1647, se llega a recoger que se actúe contra ellos como si fueren *«quebrantadores de sacramento, y omenaje, y hasta imposición de pena capital por turbadores del regimiento, y estado público, y privados de todos los Oficios de la Ciudad perpetuamente, y otras penas, como Oficiales delinquentes»* [DAROCA, 1647]. En muy similares términos se manifiestan las ordenaciones de Tarazona del año 1685.

Menos severidad se desprende del examen de las ordenaciones de la Comunidad de Daroca del año 1686. El archivero de ella que incumpliera estas normas, en lo relativo a la salida de documentos, sería castigado con pena de quinientos sueldos, y privación de oficio de por vida [Comunidad de DAROCA, 1686]. Y en las de la ciudad de Jaca, de 1694, fue aprobado, siguiendo el ejemplo oscense, que *«los Oficiales sobredichos, que de otra manera abriran la dicha Arca, o sacaran de ella escritura alguna, incurran en pena de cien ducados de oro, pagaderos al acusador, y bolsa común de la dicha Ciudad igualmente, por cada uno de los dichos Oficiales, que lo contrario hizieren; y a más de esto sean obligados a satisfacer a la bolsa común de la dicha Ciudad todo el daño que de ello resultare»* [JACA, 1694].

Algunas ordenanzas valencianas también contemplaron la penalización de las infracciones en la consulta de la documentación. En las de Albaida del año 1685 el escribano si incumplía lo ordenado podía ser sancionado con el pago de veinticinco libras [Ortiz García-Bustelo, 1992, p. 26].

Es muy difícil determinar el grado de cumplimiento de estas disposiciones. Está constatado que llegaron a iniciarse procesos judiciales tanto en Albaida, como en Zaragoza o Sevilla, por aperturas fraudulentas durante el Antiguo Régimen.

3.3. La recuperación de documentos

A lo largo de tan amplio período, las corporaciones locales tomaron diferentes iniciativas para recuperar los documentos sacados de sus archivos de forma legal o no, y que por determinadas circunstancias no habían sido reingresados.

La pragmática del año 1500 determinó que fuera el escribano del concejo el encargado de solicitar la devolución de los documentos sacados del archivo. Pero esto no fue siempre así, máxime cuando a veces fueron estos oficiales los que debían ser apercibidos para que devolvieran documentos, como ocurrió repetidamente en Burgos [Moratinos, 1985, p. 186] o en Sevilla [Fernández Gómez, 1995 (b), p. 16]. A veces este cometido fue atribuido al procurador general. El ayuntamiento de Talavera así lo acordó en 1756 [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 95]. Y lo mismo hizo el de Torrelavega. En su sesión de 5 de junio de 1763 encargaron a su procurador general que *«solicite el descubrimiento de mucos (sic) papeles que faltan y estarán dispersos sin duda entre barios particulares, que no los deben tener,... gane censuras generales del Tribunal eclesiástico, que se publiquen y notifiquen en las iglesias y parttes donde convenga hasta lograr entero descubrimiento de dichos papeles y que se archiben como corresponde»* [Gutiérrez Alonso, 1995, p. 17].

Los pocos ayuntamientos que tuvieron archiveros municipales hicieron recaer en ellos esta competencia. Ya aparece en las ordenanzas de San Sebastián del año 1758 al establecer que pondrá *«el Archivero especial cuydado en recoger todas las Cédulas, y gracias Reales, que faltassen, o que anduviessen originales en Autos, retenida copia»* [SAN SEBASTIÁN, 1758].

El Consejo Real, por resolución de 16 de septiembre de 1773, señaló al archivero de Madrid, entre otras cosas, que *«debería procurar la devolución de documentos sacados en toda forma de su oficina»*. Por otro auto de 12 de marzo de 1774 recomendó, además, al mayordomo de propios que *«no omitiese diligencia alguna para recobrar los documentos perdidos»* [Domingo Palacio, 1875, p. 44]. En 1820 se recordó de nuevo al archivero madrileño que *«debe buscar los papeles que se encuentren fuera del archivo»* [Gómez Iglesias, 1974, p. 38].

Los regidores archiveros también se encargarán de recuperar documentos no devueltos. Así parece que ocurrió en Talavera de la Reina en 1672 [García Ruipérez y Gómez Díaz, 1995, p. 94]. En las ordenanzas del Principa-

do de Asturias del año 1659, y en lo relativo a la ciudad de Oviedo, quedó regulado que el caballero regidor designado como archivero *«por su cuydado esté el recobrar los que salieren del dicho archivo»* [Principado de ASTURIAS, 1659]. Lo mismo ocurre en las ordenanzas de la localidad cántabra de Armaño del año 1751. Según su inventario faltaban algunos documentos, por lo que en aquellas se establece que sus regidores *«tengan obligación a buscarlos a costa del común, y ponerlos en el archivo del Concejo»* [ARMAÑO, 1751].

Por lo tanto en la búsqueda y recuperación de documentos pudieron intervenir tanto autoridades locales como algunos oficiales concejiles. Sin duda los recibos y los libros de conocimientos, o las anotaciones marginales en los inventarios, podían ayudarles a identificar a la persona que se llevó el documento y por qué motivo. Si estas referencias escritas faltaban por la inexistencia de algún tipo de control la recuperación era una tarea aún más difícil. Y si las pérdidas se habían producido durante periodos convulsos, la posibilidad de éxito disminuía. No olvidemos que el archivo de Alicante, según se reflejaba en un acuerdo de su cabildo de 10 de marzo de 1727, había sufrido varios saqueos y expolios, por lo que costó un gran esfuerzo recuperar los documentos que estaban en poder de particulares [Paternina Bono, 1992, p. 52]. O que muchos documentos del archivo de Zaragoza, terminada la Guerra de la Independencia, fueron buscados por su archivero, ya en 1816, *«en algunas librerías, droguerías y otras tiendas de la ciudad»* [González Miranda, 1981, p. 83]. En 1763, documentos de las escribanías de Jerez se vendían en varias boticas [Orellana González, 1992, p. 90].

Cuando la simple reclamación no surtía efecto o bien se desconocía el paradero de los documentos extraídos y el nombre de las personas que los tenían en su poder, era necesario adoptar medidas que garantizaran su recuperación. Las reclamaciones generales realizadas mediante bandos públicos raramente dieron resultados positivos. Agotada esta vía nada mejor que conseguir alguna disposición de tribunal eclesiástico en la que se castigase con excomunión a todo aquel que no devolviera los documentos municipales. Pero esta solución con ser la más generalizada no fue la única.

En Madrid, en 1454, un juez pesquisidor mandó por sentencia que *«todas las personas que hubiesen tomado, sacado e llevado del arca del Concejo privilegios, ordenanzas, fueros e escrituras, las volviesen dentro de los diez días siguientes, pena de perdimiento e confiscación de todos sus bienes»* [Gómez Iglesias, 1974, p. 30-31].

Es muy posible que la amenaza de pérdidas materiales no diera el resultado deseado, y muy pronto se optó por buscar el apoyo de la Iglesia en la recuperación del patrimonio documental municipal. En un periodo en el que la religión lo impregna todo, la amenaza de excomunión podía garantizar un mayor éxito que la confiscación de bienes o la imposición de multas.

En Burgos, en 1554, se publicaron censuras generales dadas por los provisores de su arzobispado, a petición del escribano del concejo, amenazando con la excomunión a los que tuvieran en su poder dos libros de acuerdos de los años 1548 y 1549 [Díez Sanz, 1984, p. 23]. En Ciudad Real, en 1595, se consiguieron cartas de excomunión para conseguir la restitución de los documentos extraídos y no devueltos [Bernabeu Novalbos, 1952, p. 10].

Lo mismo se hizo en Indias. Ya en 1579, en Santiago de Chile, su procurador general logró cartas de excomunión con el mismo fin. La solicitud de censuras contra las personas que poseían documentos municipales se repitió en Lima, Quito, Cartago o Buenos Aires, dado que como señala C. Bayle *«podía más la coacción de conciencia que la vigilancia de la policía y el apremio de las multas»* [Bayle, 1950, 13].

Y así se seguirá haciendo a lo largo de todo el Antiguo Régimen. En Sanlúcar de Barrameda, en 1623, acordó su cabildo *«sacar una excomunión contra los que tuviesen ocultos, a fin de que los restituyesen»* [Fernández Gómez, 1995 (c), p. 78, nota 82]. Sobre esto mismo debatió el ayuntamiento sevillano en 1635. Los capitulares decidieron encargar al procurador que consiguiese *«cartas generales y censuras, declarando todas las cosas que faltan del archibo»*, y si era necesario *«cartas paulinas del nuncio»*.

En Ribadavia, en 1643, la recuperación de los documentos no devueltos se intentó conseguir amenazando a las personas encargadas de la guarda del arca con *«apercibimiento de prisión y que corriesen de su cuenta y riesgo los daños que causaren»* [Gallego Domínguez, 1988, p. 31]. Si esta vez no se optó por la intervención de las autoridades eclesiásticas se debe, sin duda, a que eran conocidos los infractores. Lo normal, en toda la Edad Moderna, al menos en Castilla y cuando no se conocía su paradero, era utilizar las censuras eclesiásticas. Cartas de excomunión fueron solicitadas por el ayuntamiento de Valladolid en 1663 [Pino Rebollo, 1991, p. 22]. Un acuerdo del ayuntamiento de Oviedo, de 18 de agosto de 1688, mandó que fuera despachada *«una paulina para que las personas que retenían padrones, filiaciones y otros documentos y libros del Ayuntamiento, los restituyesen a su Archivo, como tenían obligación»* [Villa González-Río, 1978, p. XVIII].

Nada cambiará en el siglo XVIII. El ayuntamiento de Madrid, por acuerdo de 16 de enero de 1716, ordenó a su procurador general que solicitara *«la excomunión o excomuniones que le parecieren»*, para conseguir la devolución de *«algunos papeles ocultos»* [Domingo Palacio, 1875, p. 25]. En 1733, el ayuntamiento de Jerez acordó solicitar al nuncio *«letras de censuras para los que tenían documentos del archivo»* [Orellana González, 1992, p. 90]. En Orense se consiguieron paulinas con el mismo cometido en 1743 y 1754 [Gallego Domínguez, 1981, p. 181]. El ayuntamiento de Torrelavega, también encargó, en 1763, a su procurador general que consiguiera *«censuras genera-*

les del Tribunal eclesiástico, que se publiquen y notifiquen en las Iglesias y parttes donde convenga hasta lograr entero descubrimiento de dichos papeles» [Gutiérrez Alonso, 1995, p. 17]. Jerez de la Frontera volverá de nuevo a solicitar penas de excomunión, ya en 1789, para todos los que seguían reteniendo en su poder documentos municipales.

Es más que probable que en los municipios de la Corona de Aragón se utilizara el mismo sistema para conseguir la recuperación de los documentos no devueltos. No obstante en algunas ordenaciones se optó por sancionar económicamente a los infractores, mediante fuertes multas y pago de daños. Esto era factible siempre que aquellos fueran conocidos a través de cualquiera de los mecanismos de control ya comentados. Las ordenaciones de Huesca del año 1551 recogen claramente que, una vez requerida la devolución al infractor *«cara a cara»*, si no restituía los documentos *«pague de pena quinientos sueldos, aplicaderos al acusador y bolsa común, ... y ultra desto pague, y satisfaga a la dicha ciudad, todo el dano que se le avra seguido, assi por bolver a sacar de nuevo dichas escripturas, como por aquellas no hallarse»* [HUESCA, 1551]. Este punto será incluido, casi de forma literal, en las ordenaciones de Jaca del año 1694.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

AGUINAGALDE, B.: «Elementos para una historia de los Archivos y la Archivística desde una perspectiva interdisciplinar», *Irargi. Revista de Archivística*, I (1988) p. 63-109.

AGUIRRE GONZÁLEZ, F.J.: «Los Archivos Municipales de la Provincia de Teruel», en *El Patrimonio Documental Aragonés y la Historia*, Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1986, p. 93-97.

ALBERCH I FUGUERAS, R.: «Arxiu Històric de la ciutat de Girona», en *Guia dels Arxius Històrics de Catalunya*. 2, Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1987, p. 225-250.

ALBERCH I FUGUERAS, R.: «Arxius i Arxivística a les comarques gironines», *Annals de l'Institut d'Estudis Gironins*, XXXIV (1994) p. 521-601.

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C., MARTÍN FUERTES, J.A.: *Archivo histórico municipal de León. Inventario General*, León: Ayuntamiento, 1986, 271 p.

ÁLVAREZ GARCÍA, C.: «Archivo Municipal de Medina del Campo», *Cuadernos de Investigación Histórica*, 4 (1980) p.31-44.

ÁLVAREZ GARCÍA, J.: «Cuatro siglos de descripción documental en el Archivo Municipal de Tafalla, 1586-1986», en *I Congreso General de Historia de Navarra*, Pamplona: Institución Príncipe de Viana, 1987, p. 7-16.

ANDREU VALLS, G.: *Archivos de la provincia de Castellón inventariados por D. Luis Revest Corzo en 1925*, Castellón de la Plana: Sociedad Castellonense de Cultura, 1965, 47 p.

ANGUERA, M.A., JUANA, M., ORUBE, M.M.: «Breve historia de la organización de fondos del Archivo Municipal de Tolosa 1659-1984», en *Décimo Congreso de Estudios Vascos. Archivos, Bibliotecas y Museos*, Pamplona: Sociedad de Estudios Vascos, 1987, p. 349-351.

ARCO, R.: «Los Archivos parroquiales y el Municipal de Huesca», *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, XXV (1911) p. 453-462.

ARTAZA MONTERO, M.M.: «El Archivo Histórico Municipal de La Coruña y el Archivo de la Junta del Reino de Galicia», *Boletín de la ANABAD*, XLIV:3 (1994) p. 9-19.

ARXIU Històric de la Ciutat de Barcelona. *Guia*, Barcelona: Ajuntament, 1995, 167 p.

BALAGUER, F.: «El Archivo Municipal de Huesca», en *El Patrimonio Documental Aragonés y la Historia*, Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1986, p. 69-73.

BANUSY AGUIRRE, J.L.: *El Archivo Quemado: Inventarios antiguos del acervo documental de la M.N. y M.L. Ciudad de San Sebastián antes de la destrucción de 1813*, San Sebastián: Grupo Doctor Camino, 1986, 294 p.

BARRIOS GARCÍA, A., MARTÍN EXPÓSITO, A.: *Documentación medieval de los archivos municipales de Bejar y Candelario*, Salamanca: Diputación Provincial, 1986, 253 p.

BASAS, M.: «Archivo Municipal de Bilbao», en *I Congreso Italo-Español de Historia Municipal*, Madrid: Instituto Luis Salazar y Castro, 1958, p. 63-64.

BATLLE I PRATS, L.: «Inventarios municipales gerundenses del siglo XV», *Anales del Instituto de Estudios Gerundenses*, VI (1951) p. 179-192.

BATLLE I PRATS, L.: «La Casa del Concell de Gerona en 1498», *Anales del Instituto de Estudios Gerundenses*, XVII (1964-1965) p. 373- 381.

BAUTIER, R.H.: «La phase cruciale de l'histoire des archives: la constitution des dépôts d'archives et la naissance de l'archivistique (XVIème début du XIXème siècle)», *Archivum*, XVIII (1968) p. 139-149.

BAYLE, C.: «El Archivo capitular de los Cabildos de Indias», *Revista de Estudios de la Vida Local*, 49 (1950) p. 3-26.

BERNABEU Y NOVALBOS, E.: *Inventario del Archivo del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real hecho el año 1595*, Ciudad Real: Instituto de Estudios Manchegos, 1952, 107 p.

BONACHIA HERNANDO, J.A., PARDOS MARTÍNEZ, J.A.: *Catálogo documental del Archivo Municipal de Burgos: Sección Histórica (931-1515)*, Tomo I, Burgos: Junta de Castilla y León, 1983, 260 p.

BUESA CONDE, D.J.: «El Archivo Municipal de Jaca», en *El Patrimonio Documental Aragonés y la Historia*, Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1986, p. 83-92.

BURÓN CASTRO, T.: «Archivología: una mirada hacia atrás», *Boletín de la ANABAD*, XLIII:1 (1993) p. 7-30.

BURÓN CASTRO, T.: «¿Archiveros o Archivistas?», *Boletín de la ANABAD*, XLIV:3 (1994) p. 21-27.

CAMPILLO, T.: «El Archivo de la Comunidad de Daroca», *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, I (1871) p. 35-38.

CANTALEJO SAN FRUTOS, R.: «El Archivo Municipal de Segovia. Apuntes para su historia», *Estudios Segovianos*, XXXV:91 (1994) p. 831-857.

CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, J.: *Índice de los pergaminos, y documentos insertos en ellos, existentes en el archivo de la Ciudad de Teruel*, Madrid: Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1950, 310 p.

CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, J.: *Catálogo del Archivo de la Ciudad de Albarracín*, Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 1955, 169 p.

CASADEMONT I DONAY, M.: «Unde veniunt ac quo vadunt archiva», *Lligall*, 4 (1991) p. 57-93.

CASTELLS I PEIG, A.: «Formació i evolució de l'Arxiu Històric de Sabadell», en *Arxiu Històric de Sabadell. Inauguració de la nova seu, Sabadell: Ajuntament*, 1983, p. 9-24.

CASTILLO GÓMEZ, A.: «Noticias medievales sobre el Archivo Municipal de Alcalá de Henares», en *Actas del III Encuentro de Historiadores del Valle del Henares*, Guadalajara: Aache, 1992, p. 103-114.

CAYETANO MARTÍN, C.: «El archivero de Villa. 1719-1983», *Boletín de la ANABAD*, XXXV:2-3 (1985) p. 235-239.

CAYETANO MARTÍN, C.: «El siglo XIX en el Archivo de Villa», en *Madrid en la sociedad del siglo XIX*, Vol. II, Madrid: Comunidad de Madrid, 1986, p. 549-569.

CAYETANO MARTÍN, C.: «El Archivo de Villa de Madrid, 1800-1858. Crecimiento y consolidación», en *Homenaje a Justo García Morales. Miscelánea de estudios con motivo de su jubilación*, Madrid, ANABAD, 1987, p. 563-584.

CAYETANO MARTÍN, C.: «Archivos municipales en América y España (S. XV-XVIII)», *Boletín de la ANABAD*, XXXIX:1 (1989) p. 3-14.

CAYETANO MARTÍN, C. (a): «El Ayuntamiento de Madrid y los orígenes del Archivo de Protocolos (1765-1868)», *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, XXVIII (1990) p. 617-627.

CAYETANO MARTÍN, C. (b): *Ensayo de bibliografía sobre Archivos Municipales Españoles*, Madrid: Comunidad Autónoma, 1990, 158 p.

CAYETANO MARTÍN, C. (c): «Fuentes para la historia del Madrid medieval en el Archivo de Villa», en *El Madrid Medieval. Sus Tierras y sus Hombres*, Madrid: Asociación Cultural Al-Mudayna, 1990, p. 23-36.

CAYETANO MARTÍN, C.: «El Reglamento del Archivo de Villa», en *El Reglamento del Archivo Municipal. IX Jornadas de Archivos Municipales*, Arganda: Ayuntamiento, 1992, p. 27-34.

CHABAS LLORENS, R.: *Índice y catálogo del Archivo Municipal de la Ciudad de Alcira*, Alicante: Establecimiento tipográfico de Antonio Reus, 1889, VIII + 40 p.

CERDÁ DÍAZ, J.: *Los archivos municipales en la España contemporánea*, Gijón: Ediciones Trea S.L., 1997, 436 p.

CERDÁ DÍAZ, J.: *Archivos municipales españoles. Guía bibliográfica*, Gijón: Ediciones Trea, 1999, 230 p.

COLOMER, A.: «Aproximació a la història i als fons de l'Arxiu Municipal de Salt», *Quaderns d'Historia de Salt*, 4 (1992) p. 3-6.

COMPTE, A.: «Un inventari de l'arxiu de Castelló d'Empúries de mitjans del segle XVIII», *Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos*, 20 (1987) p. 173-228.

CONDE Y DELGADO DE MOLINA, R.: *Las primeras ordenanzas del*

Archivo Real de Barcelona: 1384, Madrid: Ministerio de Cultura, 1993, 44 p.

CONDE Y DELGADO DE MOLINA, R.: «La creación del Archivo Real de Valencia», *Estudis Castellonencs*, 6 (1994-1995) p. 371-381.

CONTEL, C.: «Los archivos municipales y su estructuración con los restantes archivos nacionales», en *I Congreso Nacional de Archiveros y Bibliotecarios de Administración Local*, Valencia: Generalitat, 1988, p. 73-88.

COSTA I FERNÁNDEZ, L.: *Arxius i recerca històrica: l'Arxiu Municipal de Begur*, Begur: Ajuntament, 1994, 207 p.

DÍAZ DE NORIEGA, J.A.: «Archivo Municipal de Málaga», *Hidalguía*, XVIII:99 (1970) p. 179-192.

DÍEZ SANZ, G.: *Historia del Archivo Municipal de Burgos*, Burgos: Ayuntamiento, 1984, 82 p.

DOMINGO PALACIO, T.: *Manual del empleado en el Archivo General de Madrid, con una reseña histórica del Municipio*, Madrid, 1875, VIII + 608 p.

«ESTE es el Archibo desta...». *Ayuntamiento de Logroño. 1095-1995. Noveno Centenario del Fuero*, Logroño: Ayuntamiento, 1995, tríptico.

FARRE I VILADRICH, J.: «Arxiu Històric Comarcal de Balaguer», en *Guia dels Arxius Històrics de Catalunya*. 3, Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1989, p. 117-157.

FERNÁNDEZ GÓMEZ, M.: «El Archivo Municipal de Sevilla en el siglo XIX. José Velázquez y Sánchez (1859-1864)», *Boletín de la ANABAD*, XXXIX:3-4 (1989) p. 417-465.

FERNÁNDEZ GÓMEZ, M. (a): «El Archivo Municipal de Sevilla, siete siglos en la memoria de una ciudad», *Hidalguía*, 249 (1995) p. 247-272.

FERNÁNDEZ GÓMEZ, M. (b): «El Archivo Municipal de Sevilla: pasado y presente», *Boletín de la ANABAD*, XLV:2 (1995) p. 7-27.

FERNÁNDEZ GÓMEZ, M. (c): «Concejo y Privilegios Rodados de la Ciudad de Sevilla», en *Sevilla, Ciudad de Privilegios. Escritura y poder a través del Privilegio Rodado*, Sevilla: Ayuntamiento, Universidad, Fundación El Monte, 1995, p. 49-82.

FERNÁNDEZ HIDALGO, M.C, GARCÍA RUIPÉREZ, M.: «La clasificación en los archivos municipales españoles: evolución histórica y situación actual», *Irargi. Revista de Archivística*, II (1989) p. 133-349.

FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F.: «Publicaciones recientes sobre archivos: guías, inventarios, catálogos, colecciones documentales y mecanización», *Hispania*, XLV:161 (1985) p. 643-660.

FERRERO FERRERO, F., GONZÁLEZ MATELLAN, J.M., RAMOS DE CASTRO, G.: «Trayectoria histórica de los fondos del Archivo Municipal de Zamora. Nuevo hallazgo y catalogación», en *El pasado histórico de Castilla y León. I. Edad Media*, Burgos: Junta de Castilla y León, 1983, p. 387-400.

FLORIANO CUMBREÑO, A.: *Documentación histórica del Archivo Municipal de Cáceres. Catálogo comentado y anotado*, Tomo I, Cáceres: Talleres Tipográficos de El Noticiero, 1934, 279 p.

GALENDE DÍAZ, J.C.: «Repertorio bibliográfico de la Biblioteca del padre Burriel», *Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV. Historia Moderna*, 8 (1994) p. 241-268.

GALENDE DÍAZ, J.C.: «Historia de la Paleografía en España. Los Revisores de Letras Antiguas», *Cuadernos de Investigación Histórica*, 16 (1995) p. 167-197.

GALLEGO DOMÍNGUEZ, O.: «El Archivo del Concejo de la ciudad de Orense», *Boletín Auriense*, XI (1981) p. 177-194.

GALLEGO DOMÍNGUEZ, O.: «El Archivo del Concejo de la ciudad de Orense y sus fondos hasta el año 1600», en *La Ciudad Hispánica durante los siglos XIII al XVI*, Tomo I, Madrid: Universidad Complutense, 1985, p. 183-206.

GALLEGO DOMÍNGUEZ, O.: «El ayuntamiento de Ribadavia. Un caso de destrucción de archivo municipal», en *I Congreso de Archiveros y Bibliotecarios de la Administración Local*, Valencia: Generalitat, 1988, p. 21-46.

GARCÍA RUIPÉREZ, M., GÓMEZ DÍAZ, R.: «Historia del Archivo Municipal de Talavera de la Reina», *Cuaderna. Revista de estudios humanísticos de Talavera y su antigua tierra*, 2 (1995) p. 89-114.

GARGALLO MOYA, A.: «El Archivo Municipal de Teruel», en *El Patrimonio Documental Aragonés y la Historia*, Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1986, p. 99-104.

GARMENDIA ESTOMBA, R.M.: *Algunos datos históricos del Archivo Municipal de Irún*, Irún: Ayuntamiento, 1989, [42] p.

GASOL, J.M.: *Arxius i arxivers manresans*, Manresa: CEB, 1990, 30 p.

GÓMEZ IGLESIAS, A.: «Origen, evolución e incidencias acerca del Archivo de Villa de Madrid», *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, X (1974) p. 29-46.

GÓMEZ RODRIGO, C.: «Apuntes sobre archivos y archiveros del Señorío en el siglo XVIII», *Estudios Vizcaínos*, 9-10 (1974) p. 63-96.

GONZÁLEZ ALONSO, B.: *El Corregidor Castellano (1348-1808)*, Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1970, 442 p.

GONZÁLEZ MIRANDA, M.: «Archivo Municipal de Zaragoza», en *Estado actual de los archivos con fondos aragoneses*, Madrid: Ministerio de Cultura, 1981, 81-87 p.

GONZALVO I BOU, G.: «Arxiu Històric Comarcal de Tàrraga», en *Guia dels Arxius Històrics de Catalunya*, 3, Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1989, p. 159-189.

GRAS DE ESTEVA, R.: *Catálogo de los privilegios y documentos ori-*

ginales que se conservan en el Archivo reservado de la ciudad de Lérida, Lérida: Imprenta, Librería y Encuadernación de José Plá, 1897, 75 p.

GUTIÉRREZALONSO, M.C.: *Fuentes documentales para la historia de Torrelavega. El Archivo Municipal de Torrelavega. Inventario de la documentación histórica*, Santander: Fundación Marcelino Botín, 1995, 302 p.

HERNÁNDEZ SANZ, F.: *El Archivo Municipal de Alayor. Clasificado, ordenado y catalogado por...*, Siglos XIV-XIX, Mahón: Imprenta de Francisco Truyol, 1917, XII + 278 p.

HISTORIA de los archivos y de la Archivística en España / coordinadores, J. J. Generelo y A. Moreno López, Valladolid: Universidad de Valladolid, 1998, 272 p.

IBARRA I OLLE, R.: «Referències històriques de l'Arxiu Municipal de Valls (segles XVIII-XX)», *Lligall*, 8 (1994) p. 37-51.

INVENTARIO de los Archivos de Alcalá de Guadaira, Pruna y Estepa, bajo la dirección de Antonia Heredia Herrera, Sevilla: Diputación Provincial, 1987, 331 p.

INVENTARIO del Archivo Municipal de Carmona, bajo la dirección de Antonia Heredia Herrera, Sevilla: Diputación Provincial, 1987, 217 p.

INVENTARIO del Archivo Municipal de Ecija, redactado por Marina Martín Ojeda, bajo la dirección de Antonia Heredia Herrera, Sevilla: Diputación Provincial, 1988, 396 p.

INVENTARIO del Archivo Municipal de Espinosa de los Monteros (Burgos), dirección, organización y clasificación por Floriano Ballesteros Caballero, Burgos; Madrid: Mancomunidad de Promoción del Norte de la Provincia de Burgos; Ministerio de Cultura, 1987, 413 p.

JIMÉNEZ CATALAN, M.: «Por los Archivos regionales de Aragón», *Universidad* (Zaragoza), 2 (1925) p. 285-315, 3 (1925) p. 555-578, y 4 (1925) p. 751-784.

LAIRO PLA, A.J.: «El Archivo Municipal de Alzira en el siglo XVIII», en *Homenaje a Pilar Faus y a Amparo Pérez*, Valencia: Consellería de Cultura, Educació y Ciencia, 1995, p. 511-516.

LODOLINI, E.: «El Archivo del ayer al mañana (La Archivística entre tradición e innovación)», *Boletín de la ANABAD*, XLV:1 (1995) p. 39-50.

LÓPEZ GARRIDO, J.L.: *Inventario de fondos del Archivo Municipal de San Fernando (1677-1984)*, San Fernando: Fundación Municipal de Cultura, 1989, 236 p.

LÓPEZ GÓMEZ, P.: «Tui y su archivo en el siglo XVI según el Libro antiguo de la ciudad», en *La Ciudad Hispánica durante los siglos XIII al XVI*, Tomo I, Madrid: Universidad Complutense, 1985, p. 207-229.

LLACUNA I ORTINEZ, P.: «Arxiu Històric Municipal d'Igualada», en *Guia dels Arxius Històrics de Catalunya*. 1, Barcelona: Departament de Cul-

tura de la Generalitat de Catalunya, 1982, p. 51-77.

MARTÍNEZ CARRILLO, M. LL.: *Los orígenes medievales del Archivo municipal de Murcia. El índice documental de 1266-1380/1428*, Madrid: Fundación Ramón Areces, 1991, 125 p.

LLOBET I PORTELLA, J.M.: «Arxiu Històric Comarcal de Cervera», en *Guia dels Arxius Històrics de Catalunya*. 1, Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1982, p. 35-49.

MARTÍN FUERTES, J.A.: *Fondo histórico del Archivo Municipal de Astorga. Catálogo*, León: Colegio Universitario de León, 1980, 289 p.

MARTÍN FUERTES, J.A., ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C.: *Archivo histórico municipal de León. Catálogo de los documentos*, León: Ayuntamiento, 1982, 501 p.

MARTÍN LAZARO, A.: *Colección diplomática municipal de la ciudad de Béjar*, Madrid: Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1921, 36 p.

MARTÍNEZ FERRANDO, E.: *Arxiu Municipal. Notes del carnet d'un visitant*, Valencia: Editorial Valenciana S.A., 1919, 48 p.

MARTÍNEZ MORELLA, V.: «Inventario del Archivo Municipal de Alicante en 1692», *Galatea*, 3-4 (1955) p. 43-63.

MASSIP I FONOLLOSA, J.: *El Catàleg de l'Arxiu Territorial de Tortosa de 1574*, Tarragona: Diputació Provincial, 1987, 311 p.

MASSIP I FONOLLOSA, J.: «Arxiu Històric Comarcal de Tortosa», en *Guia dels Arxius Històrics de Catalunya*. 3, Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1989, p. 233-272.

MATEU Y LLOPIS, F.: «El antiguo Archivo de Vallecas y el régimen de su Concejo», *Hispania*, XVIII (1945) p. 72-130.

MATEU Y LLOPIS, F.: «Libro índice de todos los papeles del archivo, año 1769. Documentos de la baronía de Villa Marchante. Publicación, notas e índice», *Anales del Centro de Cultura Valenciana*, 2ª época (1969) p. 59-98.

MATEU Y LLOPIS, F.: «Archivos Valencianos (24). Notas sobre los del Maestre Racional, Real Audiencia y Justicias», *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, LIX:1-3 (1953) p. 7-37.

MATEU VIDAL, E.: «Sumario histórico y contenido del Archivo de Sabadell», en *I Congreso Italo-Español de Historia Municipal*, Madrid: Instituto Luis Salazar y Castro, 1958, p. 231-234.

MAYANS I PLUJA, A. (a): *Els arxius parroquials, municipals i notariais de la Garrotxa. Una aproximació*, Girona: Diputació, 1987, 318 p.

MAYANS I PLUJA, A.(b): «Arxiu Històric Comarcal d'Olot», en *Guia dels Arxius Històrics de Catalunya*. 2, Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1987, p. 153-187.

MENDO CARMONA, C.: «Los Archivos y la Archivística: Evolución

histórica y actualidad», en *Manual de Archivística*, Madrid: Ed. Síntesis, 1995, p. 19-38.

MERCADER RIBA, J., COLOMER PRESAS, I. M^a: *Los Archivos de Igualada. Recensión histórica y descriptiva*, Igualada: Centro de Estudios Comarcales de Igualada, 1951, 31 p.

MICOLAU ADELL, M.P., ABOS CASTEL, M.P.: «El Archivo Histórico Municipal de Alcañiz», en *El Patrimonio Documental Aragonés y la Historia*, Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1986, p. 105-114.

MILLARES CARLO, A.: «El siglo XVIII español y los intentos de formación de un corpus diplomático», *Revista del Archivo, Biblioteca y Museo del Ayuntamiento de Madrid*, II (1925) p. 515-530.

MILLARES CARLO, A.: *Notas bibliográficas acerca de Archivos Municipales, ediciones de Libros de Acuerdo, y colecciones de documentos concejiles*, Madrid: Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1952, 172 p.

MILLARES CARLO, A.: «Notas bibliográficas acerca de Archivos Municipales, ediciones de acuerdos, y colecciones de documentos concejiles. Nuevas adiciones y rectificaciones», *Revista de Historia de América*, 44 (1957) p. 393-428.

MORATINOS, M.: «Guía del Archivo Municipal de Burgos», en *La Ciudad de Burgos. Actas del Congreso de Historia de Burgos*, Valladolid: Junta de Castilla y León, 1985, p. 185-200.

NIETO CUMPLIDO, M.: *Antiguos inventarios del Archivo Municipal de Córdoba*, Córdoba: Real Academia de Córdoba, 1978, 150 p.

ORDUÑA REBOLLO, E. (a): «Aspectos histórico-administrativos de los archivos locales», en *Homenaje a Federico Navarro. Miscelánea de estudios dedicados a su memoria*, Madrid: ANABA, 1973, p. 331-341.

ORDUÑA REBOLLO, E. (b): «Los Archivos locales», *Revista de Estudios de la Vida Local*, 178 (1973) p. 307-327.

ORELLANA GONZÁLEZ, C.: «Historia del Archivo Municipal en el siglo XVIII», en *Actas de las IV Jornadas de Historia de Jerez*, Jerez de la Frontera: Ayuntamiento, 1992, p. 85-101.

ORTIZ GARCÍA-BUSTELO, L.: «Archivo Municipal de Albaida: Una regulación histórica», en *El Reglamento del Archivo Municipal. IX Jornadas de Archivos Municipales*, Arganda: Ayuntamiento, 1992, p. 23-26.

PANYELLA, V.: «Arxiu Històric Municipal de Sitges», en *Guia dels Arxius Històrics de Catalunya*. 1, Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1982, p. 79-124.

PASTOR ABAIGAR, V.: «Archivo Municipal de Los Arcos: historia y organización actual», *Príncipe de Viana*, 198 (1993) p. 195-220.

PATERNINA BONO, M.J.: «El Archivo Municipal de Alicante», en *El Archivo Municipal de Alicante: historia de una rehabilitación en el Alicante*

contemporáneo, Alicante: Ayuntamiento, 1992, p. 51-57.

PÉREZ CONSTANTÍ, P.: «El incendio del archivo municipal de Santiago en 1559», *Notas viejas galicianas* de Vigo, (1925) p. 301-307.

PESCADOR DEL HOYO, C.: «Los otros Archivos», *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, LXV (1958) p. 39-47.

PESCADOR DEL HOYO, C.: «La historia grande de los archivos pequeños», en *Homenaje a Don Agustín Millares Carlo*, Tomo I, Gran Canaria: Caja Insular de Ahorros, 1975, p. 503-516.

PESCADOR DEL HOYO, C.: *Archivo Municipal de Zamora. Documentos Históricos*, Zamora: Heraldo de Zamora, 1948, 784 p. + láms.

PESCADOR DEL HOYO, C.: *Biografía del concepto de Archivo*, Madrid: Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1955, 22 p.

PINO REBOLLEDO, F.: *Historia del Archivo Municipal*, Valladolid: Ayuntamiento, 1991, 47 p.

PLANES I ALBETS, R.: «Mètode arxivístic i història dels arxius: els arxius municipals de Catalunya», *Lligall*, 5 (1992) p. 11-39.

PLANES I ALBETS, R.: *La descripció dels arxius municipals catalans fins a la fi del segle XIX: l'Arxiu de la Ciutat de Solsona*, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1993, 438 p.

PLANES I ALBETS, R.: «L'inventari de l'arxiu de la vila de Ponts de l'any 1.764», *urtx. Revista cultural de l'Urgell*, 12 (1999) p. 165-177.

PORRAS HUIDOBRO, F.: *Disertación sobre Archivos, y reglas de su coordinación...*, Madrid: Imprenta de León Amarita, 1830, 140 p.

PORTA I BALANYA, J.M.: «Arxiu Històric Comarcal de Montblanc», en *Guia dels Arxius Històrics de Catalunya*. 2, Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1987, p. 97-152.

PRADO MARTÍNEZ, M.A.: «El fondo documental del Archivo Municipal de Aldeanueva de Ebro (La Rioja): un caso de dispersión documental», en *Actas de las V Jornadas de Archivos Aragoneses*, Zaragoza: Departamento de Educación y Cultura, 1995, p. 305-309.

PUIG I USTRELL, P., SANLLEHI I UBACH, J.: «Arxiu Històric de Terrasse», en *Guia dels Arxius Històrics de Catalunya*. 1, Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1982, p. 125-170.

RABASSA I VAQUER, C.A., BARRERA AYMERICH, M., PÉREZ LOBO, L.M.: *Catàleg de l'Arxiu Municipal de Culla*, Valencia: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1990, 356 p.

RIERA, S., ROVIRA, M.: «Institut Municipal d'Historia de Barcelona», en *Guia dels Arxius Històrics de Catalunya*. 3, Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1989, p. 7-58.

RIVAS PALA, M.: «Los archivos municipales de la provincia de Huesca», en *El patrimonio documental aragonés y la historia*, Zaragoza:

Diputación General de Aragón, 1986, p. 59-68.

ROCA TRAVAR, F.A.: «El Archivo Municipal de Castellón», *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, XXVII:III (1951) p. 205-216.

RODRÍGUEZ AMAYA, E.: «Inventario general de los Archivos de la S. I. Catedral y Ciudad de Badajoz, formado por D. Ascensio Morales en 1753-54», *Revista de Estudios Extremeños*, VIII:I-IV (1952) p. 389-492.

RODRÍGUEZ DE DIEGO, J.L. (a): *Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas (Año 1588)*, Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 1998, 115 p.

RODRÍGUEZ DE DIEGO, J.L. (b): «Archivos del Poder, archivos de la Administración, archivos de la Historia», en *Historia de los Archivos y de la Archivística en España*, Valladolid: Universidad, 1998, p. 29-42.

RODRÍGUEZ MOLINA, J.: *La ciudad de Jaén. Inventarios de sus documentos (1549 y 1727)*, Jaén: Instituto de Estudios Giennenses, 1982, 154 p.

ROJO VEGA, A.: «El Archivo ambulante de pleitos y negocios de la ciudad de Sevilla. Relación de asuntos entre 1565 y 1604», *Archivo Hispalense*, 238 (1995) p. 163-178.

ROMERO TALLAFIGO, M.: *Archivística y archivos. Soportes, edificios y organización*, Carmona: S & C Editores, 1994, 414 p.

SAEZ SÁNCHEZ, E.: «El Archivo Municipal de Sepúlveda. Historia y organización», en la introducción a la *Colección Diplomática de Sepúlveda*. I, Segovia: Diputación Provincial, 1956, p. XXI-XXXII.

SALAS AUSENS, J.M.: «El Archivo Municipal de Barbastro», en *El Patrimonio Documental Aragonés y la Historia*, Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1986, p. 75-81.

SÁNCHEZ BELDA, L.: «Los archivos de Agreda», *Celtiberia*, II:3 (1952) p. 55-79.

SANTOS CANALEJO, E.C.: «El Archivo Municipal de Piedrahita: Tipología documental bajomedieval en una villa del Duque de Alba y cabeza de una Comunidad de Villa y Tierra», *Anuario de Estudios Medievales*, 18 (1988) p. 11-21.

SARRABLOAGUARELES, E.: «Los Archiveros Españoles hasta mediados del siglo XIX», *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, LXV (1958) p. 19-37.

SECO CAMPOS, I.: *El Archivo Municipal*, Getafe: Ayuntamiento, 1998, 181 p.

SEGURA I SALADO, J.: «El primer inventario de un archivo municipal mallorquín: Campanet, 1769», *Boletín de la ANABAD*, XXXV:4 (1985) p. 443-447.

SERRA I CAMPDELACREU, J.: *El Archivo Municipal de Vich. Su historia, su contenido y su restauración*, Vich: Tip. de Ramón Anglada y Pujals, 1879, XIII + 208 p.

SERRA Y VILARO, J.: «Missió històrica a l'Arxiu de Bagà», *Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans*, (1908) p. 575-579.

SERRANO GONZALEZ, R.: «Fondos municipales depositados en el Archivo Histórico Provincial de Teruel», en *Actas de las V Jornadas de Archivos Aragoneses*, Zaragoza: Departamento de Educación y Cultura, 1995, p. 195-203.

SIERRA CORELLA, A.: «El Archivo Municipal de Toledo. Estudio y relación de sus fondos», *Boletín de la Real Academia de la Historia*, 98 (1931) p. 665-769.

SIMÓN DÍAZ, J.: «El reconocimiento de los Archivos Españoles en 1750-1754», *Revista Bibliográfica y Documental*, IV (1950) p. 131-170.

SORONELLAS I MASDEU, M.: *Catàleg de l'Arxiu Històric de la Selva del Camp. Fons municipal i fons de la Comuna del Camp*, Tarragona: Diputació, 1993, 810 p.

TROCHE Y ZUÑIGA, F.: *El Archivo Cronológico - Topográfico. Arte de Archiveros...*, Coruña: Imprenta de Iguereta, 1835, 235 p. Existe reedición aparecida en 1996, en Sevilla, por Padilla con un estudio introductorio de Rodrigo Fernández Carrión y Antonio Sánchez González.

VAQUERIZO GIL, M.: «Fondos de la Administración Local en los Archivos Históricos Provinciales», *Boletín de la ANABAD*, XXXII:1-2 (1982) p. 51-63.

VAQUERIZO GIL, M.: *Documentos reales del Archivo del Ayuntamiento de Santander (siglos XIII - XVI)*, Santander: Ayuntamiento, 1984, 73 p.

VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, J.: *El Archivo Municipal de Sevilla. Historia, estado y primeras faenas de su arreglo, situación actual y proyecto de ordenación definitiva*, Sevilla, 1864, 298 p.

VIGNAU BALLESTER, V.: «Archivo Municipal de Fuenterrabía», *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, I (1871) p. 257-259.

VILASECA BORRAS, L.: «Notas sobre el Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Reus», *Biblioteconomía*, IV:14 (1947) p. 66-71.

VILLA GONZÁLEZ-RÍO, M. P.: «Archivo del Ayuntamiento de Oviedo: Trazos de su historia», capítulo del *Catálogo - Inventario del Archivo Municipal de la Ciudad de Oviedo*, Oviedo: Biblioteca Popular Asturiana, 1978, p. XIII-XXVIII.

VILLALMANZO CAMENO, J., GINER PEREPÉREZ, F.: *El Archivo Histórico de la ciudad de Cullera. Guía-inventario de sus fondos*, Valencia: Institución Alfonso el Magnánimo, 1978, 292 p.

VINYOLES, M.T.: «Conservació i preservació dels documents als arxius medievals. Unes notes sobre l'Arxiu Municipal de Barcelona», *Estudis Castellonencs*, 6 (1994-1995) p. 1.507-1.519.

FUENTES CITADAS EN EL TEXTO

Señorío de AGUILAR, 1519:

PINO GARCÍA, J.L.: «La ordenación económica e institucional del estado de Aguilar en los albores de la Edad Moderna», *Anuario de Estudios Medievales*, 23 (1993), p. 501, nota 14.

ALBAIDA, 1685:

ORTIZ GARCÍA-BUSTELO, L.: «Archivo Municipal de Albaida: Una regulación histórica», en *El Reglamento del Archivo Municipal. IX Jornadas de Archivos Municipales*, Arganda: Ayuntamiento, Grupo de Archiveros Municipales de Madrid, 1992, p. 25-26.

ALBARRACÍN, 1630:

ORDINACIONES Reales, hechas por ... Don Juan Fernández de Heredia... Governador del Reyno de Aragón, y Comissario Real para la insaculación que se hizo en los Officios, de la Ciudad de Calatayud, en el año 1611..., Zaragoza: Imp. de Pedro Verges, 1625. Con el ejemplar que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, con la signatura 2 / 20.067, se hayan encuadradas las Ordenaciones de Albarracín y sus aldeas, dadas por D. Matías de Bayetola y Cavanillas, miembro del Consejo de Aragón, por orden de Felipe IV, en 1630.

ALCAÑIZ, 1658:

ORDINACIONES reales de la ciudad de Alcañiz..., S.l., s.n., [1658], p. 170.

ARMAÑO, 1751:

PÍREZ BUSTAMANTE, R.; BARO PAZOS, J.: *El Gobierno y la Administración de los pueblos de Cantabria. I. Liébana*, Santander: Diputación Regional de Cantabria, 1988, p. 395-396.

ARMELLADA, 1548:

FERNÁNDEZ DEL POZO, J.M.: *Economía y vida popular en los concejos leoneses. Ordenanzas municipales de la Ribera del Orbigo. Tres textos inéditos del s. XVI*, León: Ediciones Leonesas, 1988, p. 127.

Principado de ASTURIAS, 1659:

ORDENANZAS Generales del Principado de Asturias, edic. de Francisco Tuero Bertrand, Lueca: Bibliófilos Asturianos, 1974, p. 78-80.

BAEZA, 1524:

ARGENTE DEL CASTILLO, C. y RODRÍGUEZ MOLINA, J.: «Reglamentación de la vida de una ciudad en la Edad Media. Las ordenanzas de Baeza», *Cuadernos de Estudios Medievales*, VIII-IX (1980-81) p. 28-29.

BARBASTRO, 1657:

ORDINACIONES Reales de la ciudad de Barbastro, hechas por el Ilustre Señor Don Pedro Cabero, del Consejo de su Magestad en lo Civil de Aragón. En el año 1657, Zaragoza: Imp. de Herederos de Pedro Vergés, 1657, p. 163-164.

BARCELONA, 1392:

VINYOLES, M.T.: «Conservació i preservació dels documents als arxius medievals. Unes notes sobre l'Arxiu Municipal de Barcelona», *Estudis Castellonencs*, 6 (1994-1995) p. 1.517-1.518.

BARO, 1620:

PÉREZ BUSTAMANTE, R.; BARO PAZOS, J.: *El Gobierno y la Administración de los pueblos de Cantabria. I. Liébana*, Santander: Diputación Regional de Cantabria, 1988, p. 106-107.

BURGOS, 1497:

DÍEZ SANZ, G.: *Historia del Archivo Municipal de Burgos*, Burgos: Ayuntamiento, 1984, p. 13-14.

BURGOS, 1747:

ORDENANZAS de la muy noble y muy leal ciudad de Burgos..., Madrid: Imp. de Manuel Fernández, 1747, p. 16-17.

BURGOS, 1766:

Archivo Histórico Nacional, Sección de Consejos, Leg. 2.218, Exp. 1, fols. 20-34.

CALATAYUD, 1611:

ORDINACIONES Reales, hechas por... Don Juan Fernández de Heredia... Gobernador del Reyno de Aragón, y Comissario Real para la insaculación que se hizo en los Officios, de la Ciudad de Calatayud, en el año 1611..., Zaragoza: Imp. de Pedro Verges, 1625, p. 8-9.

CANTILLANA, 1550:

ORDENANZAS municipales de la villa de Cantillana (1550), edición y

estudio de María Antonia Carmona Ruiz, Cantillana: Ayuntamiento, 1996, p. 36 y 79.

CASTELLÓN, 1455:

ROCA TRAVAR, F.A.: «El Archivo Municipal de Castellón», *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, XXVII:III (1951) p. 209, nota 2.

CÓRDOBA, 1491:

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: «Los municipios andaluces a fines de la Edad Media: El caso de Córdoba», en *Andalucía y América en el siglo XVI. Actas de las II Jornadas de Andalucía y América*, Tomo I, Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1983, p. 48-49.

DAROCA, 1647:

ORDINACIONES Reales de la ciudad de Daroca, Zaragoza: Imp. de Pedro Lanaja, 1647, p. 32-33 y 144-145.

Comunidad de DAROCA, 1686:

ORDINACIONES Reales de la Comunidad de Daroca, hechas y ordenadas por el muy ilustre señor D. Martín de Altarriba y Torrellas, del Consejo de Su Magestad..., Zaragoza: Imprenta de Herederos de Diego Dormer, 1686, p. 27, 29 y 51-52.

ÉCIJA, 1564:

MARTÍN OJEDA, M.: *Ordenanzas del concejo de Écija (1465-1600*, Ecija: Ayuntamiento, 1990, p. 247.

ENTERRÍAS, VADA Y DOBARGANES, 1744:

PEÉREZ BUSTAMANTE, R.; BARO PAZOS, J.: *El Gobierno y la Administración de los pueblos de Cantabria. I. Liébana*, Santander: Diputación Regional de Cantabria, 1988, p. 274.

FATARELLA, 1705:

FONT RIUS, J.M.: «Ordenanzas de reforma orgánica en municipios rurales catalanes (Siglos XVI-XVIII)», *Anuario de Historia del Derecho Español*, XXXI (1961) p. 605.

FRAMA, 1614:

PÉREZ BUSTAMANTE, R.; BARO PAZOS, J.: *El Gobierno y la Administración de los pueblos de Cantabria. I. Liébana*, Santander: Diputación Regional de Cantabria, 1988, p. 608.

FRAMA, 1617:

PÉREZ BUSTAMANTE, R.; BARO PAZOS, J.: *El Gobierno y la Administración de los pueblos de Cantabria. I. Liébana*, Santander: Diputación Regional de Cantabria, 1988, p. 622.

GATA, 1525:

MARTÍN, J.L. y GARCÍA, A.: *Cuentas municipales de Gata (1520-1524)*, Salamanca: Universidad, 1972, p. 112-113.

HERNANI, 1542:

AYERBE IRIBAR, R.: «Ordenanzas municipales de Hernani (1542). Estudio y transcripción», *Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País*, XXXVIII (1982) p. 301.

HUESCA, 1551:

ORDINACIONES del regimiento de la muy illustre y antiquísima ciudad de Huesca impresas por mandado del Concejo, y Consejo, Huesca: Imp. de Juan Pérez de Valdivielso, 1587, p. 76-78.

ITERO DE LA VEGA, 1573:

LUZÁN GONZÁLEZ, P.: «Ordenanzas de Itero de la Vega (1573)», *Publicaciones de la Institución Tello Téllez Meneses*, 61 (1990) p. 162-163.

JACA, 1694:

ORDINACIONES Reales de la Ciudad de Jaca, dirigidas a la protección, y amparo de la Virgen Santísima de la Vitoria..., Zaragoza: Imp. de Pascual Bueno, 1695, p. 90-92 y 100.

LA TORRE DE ESTEBAN HAMBRÁN, 1590:

PORRAS ARBOLEDAS, P.A.: «Las Ordenanzas de La Torre de Esteban Hambrán (1590-1614)», *Anales Toledanos*, 21 (1985) p. 139.

LON y BREZ, 1594:

PÉREZ BUSTAMANTE, R.; BARO PAZOS, J.: *El Gobierno y la Administración de los pueblos de Cantabria. I. Liébana*, Santander: Diputación Regional de Cantabria, 1988, p. 173-174.

LOS ARCOS, 1355:

PASTOR ABAIGAR, V.: «Archivo Municipal de Los Arcos: historia y organización actual», *Príncipe de Viana*, 198 (1993) p. 197.

PASTOR ABAIGAR, V.: «Tres ordenanzas medievales de Los Arcos», *Príncipe de Viana*, LVII: 209 (1996) p. 554-555.

MADRID, 1781:

Archivo Histórico Nacional, Sección de Diversos, Real Provisión, núm. 550. Ejemplar impreso.

MADRID, 1784:

Archivo Histórico Nacional, Sección de Consejos, Leg. 2.353, Exp. 20, fols. 43-51.

POTES, 1619:

PÉREZ BUSTAMANTE, R.; BARO PAZOS, J.: *El Gobierno y la Administración de los pueblos de Cantabria. I. Liébana*, Santander: Diputación Regional de Cantabria, 1988, p. 52 y 75.

SALAMANCA, 1583:

ORDENANZAS desta ciudad de Salamanca, que por su mandado se recopilaron de las viejas..., Salamanca, s/imp., 1658, p. 16.

SAN SEBASTIÁN, 1758:

ORDENANZAS de gobierno, método de distribuir Propios, y Arbitrios de la M.N. y M.L. Ciudad de San Sebastián y reglamento real de derechos..., Pamplona: Imp. de D.M.A. Domenech, 1760, p. 53-54 y 161-168.

SANTANDER, 1797:

VAQUERIZO GIL, M.: *Documentos reales del Archivo del Ayuntamiento de Santander (siglos XIII-XVI)*, Santander: Ayuntamiento, 1984, p. 8-9.

SANTO DOMINGO DE SILOS, 1536:

FRANCO SILVA, A.: «Santo Domingo de Silos a fines de la Edad Media. Una villa burgalesa y sus ordenanzas municipales», *Anuario de Estudios Medievales*, 22 (1992) p. 265.

TARAZONA, 1685:

ORDINACIONES Reales de la Ciudad de Tarazona, hechas por el ilustre señor doctor Don Joseph Ozcariz y Vélez, del Consejo de su Magestad..., Zaragoza: Imp. de Manuel Román, [1685], p. 56-58.

TENERIFE, 1540:

PERAZA DE AYALA, J.: *Las ordenanzas de Tenerife y otros estudios*

para la historia municipal de Canarias, 2ª edic., Santa Cruz de Tenerife: Aula de Cultura de Tenerife, 1976, p. 76-77.

TOLEDO, 1528, 1545:

MARTÍN GAMERO, A.: *Ordenanzas para el buen régimen y gobierno de la muy noble, muy leal e imperial Ciudad de Toledo*, Toledo: Imp. de José de Cea, 1858, p. 136-137.

TOLOSA, 1819:

Archivo Histórico Nacional, Sección de Consejos, Leg. 3.494, Exp. 22, fols. 1v - 4v.

TORTOSA, 1579:

MASSIPI FONOLLOSA, J.: *El Catàleg de l'Arxiu Territorial de Tortosa de 1574*, Tarragona: Diputación Provincial, 1987, p. 9-10, nota 2.

VALDERREDIBLE, 1646:

PÉREZ BUSTAMANTE, R.; BARO PAZOS, J.: *El Gobierno y la Administración de los pueblos de Cantabria. II. Valle de Valderredible*, Santander: Diputación Regional de Cantabria, 1988, p. 558.

VALENCIA DE ALCÁNTARA, 1489:

BOHORQUEZ JIMENEZ, D.: *Ordenanzas del concejo de Valencia de Alcántara*, Cáceres: Diputación Provincial, 1982, p. 246-247.

VALLADOLID, 1549:

ORDENANZAS con que se rige, y gobierna la República de la Muy Noble, e Leal Ciudad de Valladolid..., Valladolid: Imprenta de Alonso de Riego, 1737, h. 36.

VALLECAS, 1728:

MATEU LLOPIS, F.: «El antiguo Archivo de Vallecas y el régimen de su Concejo», *Hispania*, XVIII (1945) p. 86-87.

VALLE DE ARÁN, 1616:

ORDINACIONES, Pragmáticas y Edictos Reales del Valle de Arán hechos en el año de mil seiscientos diez y seis..., reimpressas a instancia de su Governador el Brigadier Don Pedro de Santamaria, Barcelona: Imp. de Francisco Suriá, 1752, p. 145-147 y 171.

VICH, 1450:

SERRA I CAMPDELACREU, J.: *El Archivo Municipal de Vich. Su historia, su contenido y su restauración*, Vich: Tip. de Ramón Anglada y Pujals, 1879, p. 83.

VILLALBA, 1549:

PÉREZ GONZÁLEZ, I.M.: «Ordenanzas de Villalba», *Revista de Estudios Extremeños*, XXXV (1979) p. 247.

ZARAGOZA, 1730:

Archivo Municipal de Zaragoza, Serie facticia

Los Archivos Municipales en España durante el Antiguo Régimen

Los ayuntamientos españoles conservan en sus archivos un patrimonio documental de excepcional valor. La historia de los archivos en España se ha venido realizando sin tener en cuenta la evolución de los archivos municipales desde su creación, que en muchos casos se remonta a la Edad Media. En las últimas décadas se han publicado estudios sobre archivos concretos pero faltaba una visión de conjunto que analizara las normas que los han regulado y los criterios mantenidos en cuanto a la conservación, clasificación, descripción y difusión de su documentación. Con el libro **Los Archivos Municipales en España durante el Antiguo Régimen**, la Universidad de Castilla-La Mancha, dentro de su nueva colección "Biblos", pretende llenar este vacío con un estudio centrado en la historia de estos archivos desde la Baja Edad Media hasta entrado el siglo XIX.

ISBN 84-89958-98-X

9 788489 958982